ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

Señor
JUEZ CATORCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI
E.S.D.

Asunto:	CONTESTACIÓN DE DEMANDA
Medio de Control:	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante:	VIVIANA VIVEROS Y OTROS
Demandado:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS
Radicado:	2018-00259

ANGELICA MARÍA VINASCO AGUDELO, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 31.323.039 de Cali, abogada titulada con la tarjeta profesional N° 300084 del C.S.J en calidad de apoderada del demandado **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**, conforme al poder especial conferido por el Dr. **NAYIB YABER ENCISO** en su condición de Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali, debidamente facultado por el Dr. **NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID** como representante legal y Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, le solicito respetuosamente señor Juez me reconozca personería para actuar dentro del proceso de la referencia de conformidad con las facultades otorgadas en el poder que adjunto con sus respectivos anexos.

Estando dentro del término legal a continuación procedo a contestar la demanda en los siguientes términos:

i. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

El demandante a través de su apoderado judicial solicita al señor juez "...-*Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la parte demandada, por los daños y perjuicios tanto materiales como inmateriales ocasionados a los demandantes por los hechos ocurridos el día **21 de abril de 2018** en los cuales resultó lesionada la señora **VIVIANA VIVEROS** y el menor de edad **DIEGO ALBERTO VIVEROS** al recibir ambos una descarga de energía eléctrica, derivada del riesgo excepcional generado por **EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**",* y como consecuencia se le reconozcan a título de indemnización ciertos valores detallados en el libelo con ocasión de perjuicios morales, daño inmaterial por afectación relevante a bienes y derechos convencionales y constitucionalmente amparados, daño a la salud, perjuicio estético, perjuicios materiales (daño emergente- lucro cesante pasado o consolidado y futuro), además del valor de una prueba técnica pericial de un experto profesional en el área de ingeniería eléctrica y topografía contratado por la víctima.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

Frente a lo expuesto le manifiesto señor juez que **ME OPONGO** a todas las pretensiones esbozadas por el demandante, en especial a declarar patrimonialmente responsable al Municipio de Santiago de Cali y ordenar el pago de perjuicios materiales e inmateriales supuestamente causados a la víctima y a sus familiares. Lo anterior con fundamento en que no existe nexo de causalidad entre el daño y la presunta acción u omisión de parte de la entidad demandada que represento, además de un acervo probatorio contundente que logre probar o mínimamente evidenciar la presunta falla en el servicio de mi defendida.

Así las cosas, y con referencia a los perjuicios enunciados en el libelo, no es posible establecer la magnitud del daño por lesiones y en consecuencia estimar los supuestos perjuicios conexos, siendo que no fue aportada con la demanda la historia clínica de la víctima o el informe pericial de la Junta Regional de Invalidez del Valle con el fin de establecer los porcentajes reales para la estimación de dichos perjuicios conforme con el criterio unificado para la reparación de perjuicios inmateriales del H. Consejo de Estado[1], observándose una desproporción abismal entre lo pretendido, las lesiones que se mencionan, las lesiones registradas por medio de fotografías y el estado de las víctimas en esta etapa del proceso. Le solicito respetuosamente señor Juez, desestimar las pretensiones indemnizatorias referentes a los supuestos perjuicios estimados por el demandante o en su defecto ceñirse a lo dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado para la reparación de perjuicios inmateriales.

ii. FRENTE A LOS HECHOS Y RIESGO INMINENTE

HECHO 3.1.- No me consta. Deberá probarse en el transcurso del proceso ya que el demandante solo aporta dos fotografías en donde no se percibe claramente la posición descrita por la demandante de postes de energía o el estado de su estructura que demuestre que los postes se encuentren en una posición irregular que afecte el trazado horizontal de las cuerdas de alta tensión y por lo tanto se generen las condiciones necesarias para un alto riesgo o peligro inminente.

HECHO 3.2.- Se presume cierto por ser la manifestación propia del demandante sobre los hechos en cuanto a modo, tiempo, lugar y las actividades que se encontraba realizando en ese momento.

HECHO 3.3.- No es cierto que existiere un riesgo creado atribuible a mi defendida, siendo que los demandantes se encontraban realizando una actividad violatoria al deber de autocuidado, debido a que, como se puede observar en las fotografías que aporta, los piso 2° y 3° de la vivienda se encuentran construidos por fuera de la línea de paramento reglamentaria, las víctimas se encontraban transportando una varilla de un material

[1] Acta del 28 de agosto de 2014, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

idóneo para la conducción de energía, sobre una escalera al parecer en material metálico en forma de caracol, por fuera de la estructura de la edificación, violando aún más el reglamento para construcción del P.O.T del Municipio de Santiago de Cali, en particular el numeral 5° del art. 138 del Acuerdo 069 del 2000 "*No se permiten escaleras en los antejardines. En los casos en que sea necesario el manejo de escaleras, éstas deberán desarrollarse a partir de la línea de paramento, hacia el interior del inmueble.*", estructura y construcción que seguramente no cuenta con los permisos de curaduría para su realización.

El mismo RETIE en su art. 13 establece las distancias de seguridad y reza:

"... *Para efectos del presente reglamento y teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico la técnica más efectiva de prevención, siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, en este apartado se fijan las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de su trazado (carreteras, edificaciones, piso del terreno destinado a sembrados, pastos o bosques, etc) con el objeto de evitar contactos accidentales...*"; "*...Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación del orden territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos de construcción, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE.*"; "*...El propietario de una instalación que al modificar la construcción viole las distancias mínimas de seguridad, será objeto de la investigación administrativa correspondiente por parte de las entidades de control y vigilancia de poner en alto riesgo de electrocución no sólo a los moradores de la construcción objeto de la violación, sino a terceras personas y en riesgo de incendio o explosión a las edificaciones contiguas.*"

Así las cosas, se sobre entiende que se hubiera podido evitar cualquier riesgo o peligro inminente para los habitantes de la vivienda en donde ocurren los hechos, si la estructura se hubiera construido dentro de los límites de la línea de paramento.

Se debe prestar atención al hecho de que al construir por fuera de los límites reglamentados por el POT, los usuarios crean riesgos inminentes atribuibles única y exclusivamente a ellos mismos, dejando por fuera la posibilidad de endilgar culpabilidad alguna a la entidad que represento siendo que la instalación y prestación del servicio de energía, acueducto y alcantarillado no hace parte de sus actividades o servicios; No es función del ente territorial aquí demandado pues su objeto no es suministrar servicios públicos, los cuales por disposición legal –Ley 142 de 1994- le corresponde en forma exclusiva a las Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP la encargada de la instalación y mantenimiento de dicho servicios, en su condición de Empresa Industrial y

Comercial del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Como corolario de lo anterior, es manifiesta la falta al deber objetivo de cuidado por parte de la víctima al realizar trabajos en alturas sin tener la capacitación necesaria para ese oficio y sin la observancia de los requerimientos y elementos mínimos de seguridad para el desarrollo de estos, tal cómo se encuentran regulados en la Resolución N° 1409 del 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, siendo una caída también un peligro inminente, riesgo generado y atribuible única y exclusivamente al titular de la acción, es decir, la víctima; Y es de tal importancia lo enunciado que en dicha resolución en su art. 1° obliga a su aplicación en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m. o más sobre un nivel inferior. También en su art. 21 enuncia las medidas de protección contra caídas que deben cumplir con ciertas características entre algunas:

"*...3. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza, amortiguar la fuerza de impacto, elongación, resistencia de los componentes a tensión, corrosión* ***o ser aislantes eléctricos o antiestáticos cuando se requieran***" y "*...4. Los equipos de protección individual para detección y restricción de caídas se seleccionarán tomando en cuenta los riesgos valorados por el coordinador de trabajo en alturas o una persona calificada que sean propios de la labor y sus características, tales como condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios confinados, posibilidad de incendios o explosiones,* ***contactos eléctricos****, superficies calientes o abrasivas...*" (subraya y negrita fuera del texto).

En cuanto al riesgo generado por la víctima al realizar un trabajo en altura cerca de las cuerdas conductoras de energía que al conocimiento común de cualquier ciudadano sin importar su calidades académicas, oficio o profesión, se percibe como un riesgo de electrocución por ser conductoras de altas cargas eléctricas, se desconoce la razón por la cual las víctimas no utilizaron algún elemento de seguridad ya sea en prevención de una caída o un siniestro por electrocución tales como: arnés de seguridad, cuerdas, anclajes, baranda de seguridad entre otros, con el agravante de que las señora VIVIANA puso en riesgo a su menor hijo al vincularlo en la realización de una actividad de alta peligrosidad. Por tal razón, no es posible atribuirle responsabilidad alguna a mi defendida siendo que la decisión de exponerse a tal riesgo fue exclusiva de la víctima apartándose tal situación de la esfera de control atribuible a la entidad demandada. Lo anterior configura la causal exonerativa de responsabilidad denominada CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA y HECHO DE UN TERCERO.

HECHO 3.4.- Se presume cierto por ser la manifestación propia del demandante sobre los hechos en cuanto a modo, tiempo, lugar y las actividades que se encontraba

realizando en ese momento.

HECHO 3.5.- Se presume cierto conforme con lo manifestado por los demandantes y los documentos presentados con el libelo.

HECHO 3.6.- Se presume cierto conforme con lo manifestado por los demandantes y los documentos presentados con el libelo.

HECHO 3.7.- .- No es cierto que existiere un riesgo creado atribuible a mi defendida, por lo contrario, se observa una evidente violación a las normas urbanísticas y del P.O.T. del Municipio de Santiago de Cali, siendo que los demandantes se encontraban realizando una actividad violatoria al deber de autocuidado, debido a que, como se puede observar en las fotografías que aporta, los piso 2° y 3° de la vivienda se encuentran construidos por fuera de la línea de paramento reglamentaria, las víctimas se encontraban transportando una varilla de un material idóneo para la conducción de energía, sobre una escalera al parecer en material metálico en forma de caracol, por fuera de la estructura de la edificación, violando aún más el reglamento para construcción del P.O.T del Municipio de Santiago de Cali, estructura y construcción que seguramente no cuenta con los permisos de curaduría para su realización.

HECHO 3.8.- Por ser un dictamen pericial, todo lo manifestado con referencia al mismo está sujeto a debate dentro del proceso. Sin embargo, del mismo informe pericial presentado como prueba por la parte demandante se infiere que la fachada de la vivienda se encuentra a 2,15 metros con referencia al cable conductor más próximo, lo que reafirma que dicha estructura no fue construida teniendo en cuenta las reglas urbanísticas y mucho menos algún permiso de curaduría, además de inferir que la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo se encontraban transportando una varilla metálica mientras descendían por una escalera metálica en forma de caracol exterior, escalera que tampoco cumple con las reglas urbanísticas y que además se encuentra por fuera del paramento. Es decir, las mimas víctimas se encontraban realizando una actividad peligrosa y alto riesgo, creando ellas mimas una alto espectro de accidentalidad al conjugar un sucesión de actos peligrosos, a saber: Construcción de una estructura por fuera de los lineamientos urbanísticos, excediendo el paramento, descendiendo por una escalera metalica en forma de caracol por fuera de la vivienda y ubicada a una distancia corta de las líneas conductoras de electricidad, y transportando una varilla metálica de gran conducción de energía.

HECHO 3.9.- No me consta. Se trata de una apreciación subjetiva del demandante.

HECHO 3.10.- No me consta. No se cuenta con soportes que indiquen si la demandante percibía ingresos para el momento en que se presentó el accidente.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

HECHO 3.11.- No me consta.

HECHO 3.12.- No me consta.

HECHO 3.13.- No me consta.

HECHO 3.14.- No me consta. Deberá probarse en el transcurso del proceso.

HECHO 3.15.- No es un hecho. Son apreciaciones de la parte actora que deberán probarse en el transcurso del proceso.

HECHO 3.16.- No me consta. Deberá probarse en el transcurso del proceso.

HECHO 3.17.- No es cierto. No existe nexo de causalidad entre el daño y la presunta acción u omisión de parte de la entidad demandada, además de un acervo probatorio contundente que logre probar o mínimamente evidenciar la presunta falla en el servicio de mi defendida. No es función del ente territorial aquí demandado suministrar servicios públicos, los cuales por disposición legal –Ley 142 de 1994- le corresponde en forma exclusiva a las Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP la encargada de la instalación y mantenimiento de dicho servicios, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Con referencia a la afirmación de que las víctimas fueron sometidas a un peligro inminente, le manifiesto señor juez, que no se vislumbra en el libelo o en sus anexos que la señora VIVIANA VIVEROS, trabaje con adecuaciones o reparaciones de construcción o eléctricas o se encuentre capacitada para la realización de trabajos en alturas por lo cual asumió un riesgo latente al iniciar una labor que requiere de cierta pericia y conocimientos sobre electricidad, siendo que, al observar las fotografías aportadas por la parte actora es evidente la irregularidad de la construcción, la altura riesgosa en la cual se encontraba realizando estas labores y peor aún la cercanía de la escalera metálica en forma de caracol instalada por fuera del paramento con las cuerdas conductoras de energía. Por tal razón es evidente la transgresión voluntaria al deber objetivo de cuidado y autoprotección, luego entonces en la misma víctima la que genera un riesgo inminente con su actuar temerario y a su vez a su menor hijo, al involucrarlo en una actividad DE ALTA PELIGROSIDAD Y RIESGO.

iii. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

Para establecer los fundamentos de defensa en el medio de control de la referencia, se cita el marco normativo y jurisprudencial que soporta la oposición a todas y cada una de las pretensiones, así:

1. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La Constitución Política de Colombia, prevé en su artículo 90:

"ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido:

"De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, para que el Estado sea declarado responsable patrimonialmente, ***es necesaria la acreditación de un daño antijurídico que le sea imputable****. De donde, la ocurrencia del daño, desprovista de razones jurídicas para atribuírselo al Estado o de actuaciones que no lesionan patrimonialmente, es insuficiente para imponer la obligación de reparar"*[2]. (Subraya y negrilla fuera del texto).

Así las cosas, se hace imperioso estudiar la existencia del daño, el nexo causal y la legitimación del Municipio de Santiago de Cali como parte dentro del proceso, elementos sine qua non para determinar si el presunto daño sufrido por las víctimas, es atribuible a mi defendida.

2. DE LA IMPUTABILIDAD

La parte actora pretende que el Municipio de Santiago de Cali, sea declarado **RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE** del presunto accidente ocurrido el día 21 de abril de 2018, cuando sufrió una descarga eléctrica al transportar una varilla metálica por una escalera irregular metálica en forma de caracol adherida a una construcción que viola las normas urbanisticas, por lo cual se hace imperioso, citar al Consejo de Estado, así:

"(...) todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia 22 de abril de 2015, radicación 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146) M.P. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

cargarla al Estado cuando haya el ***sustento fáctico y la atribución jurídica****".* (Subraya y negrilla fuera del texto).

"*En este orden de ideas, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que "parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones". Siendo esto sí, la imputación objetiva implica la "atribución", lo que denota en lenguaje filosófico – jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de "cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta*"[3]

3. DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Frente a este particular, considero pertinente traer a colación lo señalado por el Dr. José N. Duque Gómez en su obra "EL DAÑO", compilación y extractos:

"*La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable*".

"*...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia*".

Este criterio, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma general del Régimen Probatorio, según el cual, "**Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen**".

Mediante sentencia del 4 de mayo de 1992, el Consejo de Estado se pronunció al respecto de la carga de la prueba en cabeza al demandante, en los siguientes términos:

"*Las afirmaciones o hechos fundamentales y las pruebas aportadas al proceso regular y oportunamente constituyen el único fundamento de la sentencia. En derecho no basta afirmar o relatar unos hechos sin que exista seguidamente la prueba de todos y cada uno de ellos; las pruebas son las herramientas que le permiten al juzgador establecer la*

[3] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 01 de junio de 2015, radicación 68001231500019990150 5 (31412) M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

verdad y ante la ausencia de ellas, ya sea porque no se emplearon oportunamente y en debida forma los medios que la ciencia y la técnica del derecho ofrecen a las partes, no queda distinto remedio que absolver, dando aplicación al conocido principio onusprobandi o carga de la prueba " (subraya y negrilla fuera del texto).

Como bien se puede determinar en el caso que centra nuestra atención, los perjuicios en relación con los cuales se pretende obtener indemnización, son los relacionados con las lesiones sufridas por el demandante de los cuales se desprenden, en esencia, todas las pretensiones de la demanda.

Así pues, las pruebas documentales aportadas al plenario no permiten determinar con suficiencia y/o certeza que efectivamente existió falla en el servicio atribuible a defendida.

EXCEPCIÓN MIXTA Y/O PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Su señoría, EMCALI E.I.C.E E.S.P. es una empresa que cuenta con **PERSONERÍA JURÍDICA, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**, como se encuentra estipulado en el Acuerdo N° 34 de 1999, el cual dispone:

ACUERDO N° 34 DE 1999
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO ORGANICO PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CALI, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. SE MODIFICA EL ACUERDO 014 DE 1996, SE DAN UNAS AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

"*ARTÍCULO PRIMERO: Naturaleza Jurídica. Las Empresas Municipales de Cali transformadas mediante el Artículo Cuarto del Acuerdo 014 de 1996, seguirá siendo una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal,* ***prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa*** *y de objeto social múltiple*". (Subraya y Negrillas fuera del texto).

"*ARTÍCULO CUARTO: Objeto Social. Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI .I.C.E. E.S.P., tienen como* ***objeto social la prestación de servicios públicos domiciliarios*** *contemplados en las Leyes 142 y 143 de 1.994, tales como* ***acueducto, alcantarillado, distribución y comercialización de energía, distribución de gas combustible,*** *telefonía básica conmutada, telefonía móvil y móvil rural y demás servicios de*

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

telecomunicaciones incluyendo los servicios agregados, generación de energía y tratamiento de aguas residuales". (Negrillas y subraya fuera del texto).

En ese orden de ideas, la prestación del servicio de energía se encuentra en cabeza de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., y como quiera que el demandante pretende atribuir el daño a mi defendida, le corresponde al demandante probar no solo la existencia de la presunta falla, sino la relación de causalidad entre ésta y el daño, la cual no se acredita con las pruebas aportadas.

Frente a la legitimación en la causa el Consejo de Estado en providencia ha señalado:

"*...Esta Corporación ha manifestado en cuanto a la legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado. Así mismo, ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, siendo la legitimación en la causa de hecho la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma quien asumirá la posición del demandado; dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción;* ***la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.*** *En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material,* ***pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae dilucidar si existe, o no, relación real de parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza,*** *pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra..."*[4] (Negrillas y subraya fuera del texto).

De lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Santiago de Cali, no participó por acción u omisión en la producción del daño, pues en el acervo probatorio aportado por el demandante no se logra dilucidar la relación de causalidad entre el hecho dañoso y la omisión que se le imputa al ente territorial, pues es de suma relevancia acreditar la falla del servicio en el cumplimiento de su deber y el apoderado del convocante no logra

[4] Sentencia del Consejo de Estado del 25 de marzo de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-0257101 (1275)

demostrar la omisión del ente territorial probatoriamente.

En concordancia con lo antes expuesto, respetuosamente le solicito señor Juez, declarar probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA a favor del Municipio de Santiago de Cali, y acceder a resolver esta excepción en el transcurso de la audiencia inicial, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del art. 180 del C.P.A.C.A, en aras de dar aplicación a los principios de celeridad y economía procesal.

iv. EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL

Ahora bien, la parte actora se encuentra en la responsabilidad de acreditar la **relación de causalidad** entre el daño y la acción de la administración pública, elemento SINE QUA NON para efectuar la imputación de responsabilidad. Es decir, corresponde a ese extremo procesal probar no solo la presunta falla sino la relación de causalidad entre ésta y el daño.

Así las cosas, no es posible determinar o demostrar con las pruebas aportadas por el demandante que el ente territorial haya omitido un deber legal; y es aquí en donde se da la aplicación de la existencia de responsabilidad ligada intrínsecamente a la existencia de tres elementos: el daño, el hecho generador del daño y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta de acción u omisión del agente generador. Este último elemento resulta de vital importancia para que surja la responsabilidad y debe darse en forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño. Es aquí donde se debe tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. Por ende hay que individualizar aquellos fenómenos, circunstancias y hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

En observancia al criterio del riesgo excepcional, le solicito señor Juez desestimar las pretensiones en contra del Ente territorial que represento, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha reiterado que en el evento de causarse daño con ocasión de la conducción de energía eléctrica se presume la responsabilidad de quien en ese momento tenga la propiedad, transporte, o distribución de energía, de lo que se desprende que no tiene asidero jurídico convocar a mi representado a la acción incoada ni al pago de perjuicios, en razón a que el Municipio de Santiago de Cali no tiene la propiedad, ni transporta, ni distribuye energía, siendo esta función exclusiva de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

2. LA INNOMINADA

Respetuosamente le solicito señor Juez, se sirva declarar de oficio al momento de proferir sentencia definitiva, todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso y que resulten desfavorables al Municipio de Santiago de Cali.

v. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Conforme con lo analizado se presenta entonces los eximentes de responsabilidad aplicables al caso en discusión, siendo estos:

1. **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA**: Haciendo recuento de los hechos, se vislumbra en el libelo o en sus anexos que las víctimas asumieron un riesgo latente al iniciar una labor que requiere de cierta pericia y conocimientos sobre electricidad, siendo que, al observar las fotografías aportadas por la parte actora es evidente la irregularidad de la construcción, la altura riesgosa en la cual se encontraba realizando estas labores y peor aún la cercanía de la irregular escalera metálica en forma de caracol y las cuerdas conductoras de energía, escalera construida por fuera del paramento y violatoria de las reglas urbanísticas del Municipio de Santiago de Cali, transportando una varilla metálica, material de gran conducción de energía. Por tal razón es evidente la transgresión voluntaria al deber objetivo de cuidado y autoprotección, luego entonces es la misma víctima la que genera un riesgo inminente con su actuar temerario, con el agravante de involucrar a su menor hijo en la realización de una actividad de alta peligrosidad y riesgo. Así mismo, en lo manifestado por la parte actora no se establece la utilización de elementos de protección para evitar el riesgo de caídas o un siniestro por electrocución tales como: arnés de seguridad, cuerdas, anclajes, baranda de seguridad entre otros. Por tal razón, no es posible atribuirle responsabilidad alguna a mi defendida siendo que la decisión de exponerse a tal riesgo fue exclusiva de la víctima apartándose tal situación de la esfera de control atribuible a la entidad demandada.

La culpa exclusiva de la víctima es única y determinante en el resultado, entonces el **nexo de causalidad se rompe**, por lo cual, aplicando dicha premisa al caso presente es evidente que el Municipio de Santiago de Cali no tuvo incidencia en la producción del daño, pues se reitera, las víctimas obraron de manera imprudente y arriesgada.

En ese sentido, el Ente territorial se libera de la responsabilidad y en consecuencia de la obligación de indemnizar, siendo que nadie puede beneficiarse de sus propios hechos dañosos, de sus propios errores, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia:

"*Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima ha sido concebida dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, como la violación de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, de tal forma que dicha violación por parte d la víctima, puede conducir hacia una exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, de acuerdo con la trascendencia y grado de participación del afectado o afectados en la producción del daño*".[5]

2. **RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y/O PROPIETARIO DE LA EDIFICACIÓN EN LA CUAL OCURRIERON LOS HECHOS:** En aplicación al caso presente, tenemos que la construcción de la vivienda no cuenta con la licencia de construcción reglamentaria, es decir, que en general dicha edificación no cumple con los reglamentos urbanísticos y las características necesarias para la salvaguarda no solo de sus moradores, sino de todos aquellos en su entorno cercano. Siendo este un factor determinante a la hora de establecer el vector de riesgo o causante del hecho dañoso se evidencia que dicho incumplimiento rompe el nexo causal y en consecuencia libera al Municipio de cualquier tipo de responsabilidad y de obligación del pago de perjuicio alguno.

Como corolario de todo lo dicho, le solicito respetuosamente señor Juez acceder a las excepciones propuestas y en virtud de las mismas desvincular al Municipio de Santiago de Cali del proceso o en su defecto proferir sentencia absolutoria en favor del mismo.

vi. PRUEBAS

1. Poder conferido a la suscrita con sus respectivos anexos

PRUEBAS QUE SOLICITO: INTERROGATORIO DE PARTE:
Solicito respetuosamente se llame a la señora VIVIANA VIVEROS para absolver interrogatorio de parte con referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia del accidente y en general todo lo relacionado con los hechos que se debaten en este proceso.

[5] C.E. Exp.1999-N11815

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTION JURIDICA PÚBLICA

vii. ANEXOS

1. Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
2. Llamamiento en garantía en cuaderno separado.

viii. NOTIFICACIONES

Las notificaciones al Municipio de Santiago de Cali se recibirán en el Centro Administrativo Municipal CAM, torre Alcaldía, piso 9°, Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública o en el correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Las notificaciones a la suscrita al correo electrónico angevinas@hotmail.com - Teléfono 300 275 2661.

Del señor Juez,

Atentamente,

Angelica Mª Vinasco

ANGÉLICA MARÍA VINASCO AGUDELO
C.C. 31.323.039 de Cali (v)
T.P. 300084 del C.S.J.

10
395

Señores
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA:

Proceso:	**Reparación Directa**
Demandante:	**Viviana Viveros y otros**
Demandada:	**Emcali E.I.C.E. E.S.P y Municipio de Santiago de Cali**
Radicación:	**2018-00259**

JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO, mayor de edad, domiciliado de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.967.239 expedida en Pasto, abogado titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 33.666 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando con base en el poder conferido a mí por la doctora Sandra Lorena Álvarez Castellón, igualmente mayor de edad y domiciliada en Cali, titular de la cédula de ciudadanía No. 38.612.878 de la misma ciudad, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Resolución No. 000064 de fecha 7 de febrero de 2018, cargo para el cual tomó posesión en la misma fecha, con base en las facultades conferidas mediante la escritura pública 384 del 21 de febrero de 2018 por el Gerente General de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE EMCALI – EMCALI EICE E.S.P.**, en adelante **EMCALI**, citada al proceso de la referencia como demandada, **encontrándome dentro del término legal me permito contestar la demanda** de la siguiente manera:

I. AL CAPITULO DENOMINADO DESIGNACIÓN DE LAS PARTES:

Emcali se opone rotundamente a la designación como parte demandada en este asunto porque, como quedará probado, no existe el derecho sustancial ejercido por la parte demandante con relación a Emcali. No se configura desde ningún punto de vista el nexo causal entre los daños que alega y las actuaciones de mi representada.

II. AL CAPITULO DENOMINADO DECLARACIONES Y CONDENAS:

Me opongo expresamente a la demanda instaurada y solicito respetuosamente que no se acepte ninguna de las pretensiones, declaraciones y condenas deprecadas por la parte demandante, pues las mismas carecen de los fundamentos fácticos y jurídicos que las respalden; en consecuencia, debe absolverse a EMCALI de todos los cargos formulados en su contra, impartiendo condena en costas a la parte actora.

Emcali hace oposición de manera expresa frente a las solicitudes que tienen por objeto la reclamación de perjuicios materiales que no cuentan con el mínimo soporte, atribuyendo un valor irreal a los presuntos daños que soportaron y que no se lograron probar respecto al nexo causal con Emcali.

En lo que corresponde a conceptos de dictámenes, gastos y honorarios y demás pretensiones, igualmente son inválidos sus cobros porque no obra comprobante que dé cuenta de tales pagos.

~~25~~ 4 376

En lo que se refiere a los perjuicios inmateriales Emcali se opone rotundamente a las reclamaciones que para sí relaciona los demandantes y que se refieren a las pruebas aportadas y excepciones formuladas, pues no existe responsabilidad ni vínculo entre Emcali y los perjuicios invocados.

Por lo anterior, se solicita que no se declare administrativa y patrimonialmente responsable a Emcali por cuanto no se logra probar en esta demanda el riesgo excepcional de parte de mi representada por el cual los demandantes alegan daños y perjuicios, y como consecuencia no se declare el pago de perjuicios materiales e inmateriales ni de ninguna tipología de pretensión, pues no se ha logrado probar la culpabilidad de Emcali con los daños antijurídicos en la demanda.

III. AL CAPITULO DENOMINADO HECHOS Y RIESGO INMINENTE:

AL 3.1. No es cierto desde el punto de vista de Emcali. Si bien el dueño de la red eléctrica es Emcali, no por ello debe decirse de manera apresurada que es la responsable por no cumplir con la reglamentación de instalaciones eléctricas, y no se acepta la afirmación precipitada con que los demandantes aseguran que se les ha puesto en peligro por el alto riesgo, pues de no sustentarse con pruebas esto sería una mera especulación. Se debe precisar que no se define a qué tipo de riesgo se refieren, la Real Academia de la Lengua Española dice que *riesgo* es una *"contingencia o proximidad de un daño"*[1], y este puede ocasionarse por un sin número de motivos, en este hecho no se hace referencia a que tipo de riesgo se refiere, es muy vaga la apreciación.

AL 3.2. No es cierto. Es importante resaltar que en este hecho no hay claridad sobre lo que se pretende exponer. Al tratar de descifrar de este escrito se cree que la señora Viviana Viveros estaba en la terraza de su casa, cuarto piso de la carrera 25 P No. 72 U – 59, y que su hijo, Diego Viveros, estaba en el descanso de la escalera del tercer nivel, luego mencionan que la señora Viviana le pasó una varilla de construcción a su hijo y agrega lo siguiente: *"quien también resultó lesionado"*, no es claro el supuesto hecho dañoso, no especifica una secuencia, pues el escrito salta de un suceso de entrega de una varilla a una lesión, sin que medie explicación.

Posteriormente, mencionan los demandantes *que "desconocían que en ese lugar existía riesgo de energización"*, aquí tampoco se define el lugar en donde existe el supuesto riesgo, si es en la terraza del cuarto nivel o en el tercer piso donde al parecer estaba el hijo de la señora Viviana Viveros.

Se debe precisar que para que un daño sea imputable debe existir con precisión la exposición de hechos que contengan integralmente un relato sistemático de lo que ocurrió junto a la inclusión del nexo causal como fuente de vinculación objetiva, pero ante la carencia de hechos jurídicamente sustentados desde la mera exposición de ocurrencias, resultan inválido jurídicamente y no pueden ser aceptados como vinculantes por aportar contenidos incompletos.

AL 3.3. No es cierto. Inicia este hecho 3.3 diciendo *"a raíz de lo anterior"*, pero se debe resaltar que en los numerales anteriores no se dijo nada sobre como aparentemente sucedieron los hechos.

Por su parte, el equivocada la afirmación de los demandantes cuando mencionan que la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros recibieron una descarga de 13200 voltios por un supuesto

---

[1] Real Academia de la Lengua Española: http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=mmy5t5FoLDXX2anUMuMs – Consultado el día 1 de agosto de 2019.

arco eléctrico, ya que de ser así los demandantes habrían fallecido, porque ningún ser humano soporta una descarga semejante.

Asimismo, es tal la imprecisión que los accionantes afirman que las cuerdas de energía están muy cerca del inmueble, con tan solo 2,15 metros de distancia, pero lo que no mencionan en la demanda es que el predio cuenta con una edificación irregular que por su propia cuenta los expuso a una medida de distancia no adecuada y que además las escaleras que conectan los niveles de la casa están construidas sobre el antejardín del predio y salen hasta el borde del andén, es por ello evidente que con las que pretenden validar su demanda son medidas inexactas.

Para lo anterior, aportan un dictamen pericial del Ingeniero Dolcey Casas Rodríguez quien midió la distancia entre el predio y las cuerdas de energía de manera amañada, pues al parecer tomó las medidas desde el borde de las escaleras que están sobre el antejardín, más no desde el predio, de esa manera fue que logró finalmente recortar la distancia entre la casa y las líneas eléctricas.

Las medidas reales desde la terraza del cuarto piso del predio y la red eléctrica son de 2,99 metros, muy superior a lo que exige la normatividad de Instalaciones eléctricas, en adelante RETIE, con mínimo 2,30 metros según su categoría, ahora bien, la medidas deben tomarse con la distancia que existe entre el primer nivel y las cuerdas de energía que son de 3,89 metros de distancia, pues las construcciones del segundo, tercer y cuarto piso, son edificaciones irregulares que no cuentan con permisos municipales y tienen áreas salientes hacia el espacio público, las edificaciones no pueden salirse del perímetro inicial del inmueble ya que aproximaría el predio a las cuerdas de energía y generarían por su propia cuenta riesgo a sus habitantes.

Por su parte, las escaleras que instalaron sobre el antejardín no cumplen con los estamentos del Decreto 069 de 2000 el cual en su artículo 138 numerales 1, 4 y 5 impiden la construcción de escaleras sobre estos espacios, obsérvese:

ARTÍCULO 138: *Normas aplicables a los antejardines. (...)* ***1.*** *Los antejardines no son edificables.* ***4.*** *Los antejardines no se pueden cubrir ni construir.* ***5.*** *No se permiten escaleras en los antejardines. En los casos que sea necesario el manejo de escaleras, éstas deberán desarrollarse a partir de la línea de paramento, hacia el interior del inmueble (...)*[2].

Ahora bien, respecto a la apreciación que se hace respecto al trayecto de la energía por las ondas expansivas que generó explosión de 5000 kg/m2 y 160 decibeles, no se sabe cuál es la fuente científica en la que se basa esta afirmación, misma que es una trascripción del informe pericial aportado, pero que a su vez este no tiene un sustento científico, es más bien una apreciación empírica basada en conjeturas.

Se menciona además que por los 5000 kg/m2 y 160 decibeles la descarga hizo que lanzara el cuerpo de Viviana Viveros sobre la humanidad de su hijo Diego Viveros. Si partimos de la narrativa de los hechos de la demanda sabemos que al parecer la señor Viviana estaba en la terraza que es en el cuarto nivel y su hijo Diego se ubicaba en el descanso de la escalera del tercer piso, de ser ciertas la afirmaciones según las cuales el cuerpo de la señora Viviana fue lanzado por la descarga eléctrica hacia el cuerpo de su hijo Diego, el desarrollo de los hechos hubiese sido más que fatal por ser una caída desde un cuanto piso.

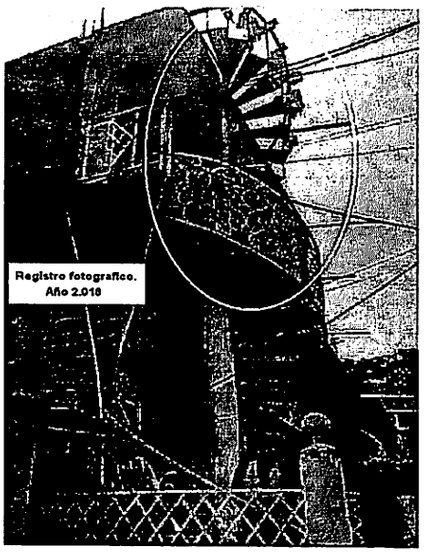
---

[2] Consultado el día 1 de agosto en la dirección web: file:///C:/Users/admin/Downloads/1Acuerdo%20069%20de%202000%20POT.pdf

13
398

Tampoco se explica desde una óptica lógica como pudo caer la señora Viviana Viveros desde el cuarto nivel y parar la caída puntualmente en el descanso de las escaleras del tercer piso que era donde dicen que estaba su hijo Digo Viveros, dado que el descanso de la escalera se ubica exactamente debajo de la terraza, es imposible que un cuerpo vivo realice efectos curvos mientras baja en caída libre desde semejante altura.





Fotos No. 1. Imágenes de la casa donde al parecer ocurrieron los hechos en la carrera 25 P No. 72 U – 59 del barrio Charco Azul, en Cali. Fotografías aportadas por el Ingeniero Luis Eduardo Saavedra C. Jefe del Departamento de Mantenimiento UENE de Emcali en informe técnico.

* Se aclara que las cuerdas que ingresan al predio y que se perciben en las fotos son de propiedad de las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión por cable.

AL 3.4. No es cierto. No le consta a Emcali que el vecindario haya acudido en auxilio de Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros, porque para mí representada los hechos en la forma que se incorporaron al proceso carecen de validez por sus incoherencias.

AL 3.5. No es cierto. Para Emcali no es verdad que los hechos que sustentan la demanda se hayan ocasionado en la manera en que se presentan, máxime cuando no se hace una descripción sistemática de acontecimientos, lo que se mencionan son fragmentos parcializados y ajustados de unas presuntas ocurrencias de las cuales no se presentan ningún argumento de fondo que se pueda admitir como elementos fácticos de vinculación causal con Emcali.

Se debe mencionar de nuevo sobre el hecho supuesto que mi representada no expuso a los demandantes en riesgo, fueron los propietarios de la casa los que al edificar en el predio de manera irregular e instalaron escaleras en el antejardín siendo esto prohibido, aumentaron el riesgo de electrocución a los que habitan en la casa por la proximidad a las cuerdas de energía.

AL 3.6. No es cierto. Desde el punto de vista de Emcali los hechos que sustentan la demanda no pudieron haber ocurrido de la manera en que se presentan, máxime cuando no se hace una descripción sistemática de acontecimientos, lo que se mencionan son fragmentos parcializados y ajustados de unas presuntas ocurrencias de las cuales no se dice ningún argumento de fondo que se pueda admitir como elementos fácticos de vinculación causal con Emcali.

Se hace énfasis de nuevo sobre el hecho de que mi representada no puso a los demandantes en riesgo, ni tuvo relación alguna directa o indirecta con las lesiones que se aducen, fueron los

propietarios de la casa los que al edificar en el predio de manera irregular e instalar escaleras en el antejardín siendo esto prohibido, aumentaron el riesgo de los que habitan en la casa por la disminución inadecuada y sin permiso de las medidas de seguridad.

AL 3.7. No es cierto. Emcali nunca jamás ha faltado a la debida precaución y prevención. Se reitera que el perímetro de distancia entre el predio y las redes de energía tiene una medida desde la terraza de 2,99 metros, las medidas que el perito de los demandantes presenta se encuentran ajustas para que puedan reforzar su ilógica teoría del caso, por ello tomó las medadas desde el borde de las escaleras que instalaron irregularmente sobre el antejardín.

El artículo 13.1 de la norma RETIE delimita los espacios de distancia que deben tener las edificaciones frente las líneas de energía:

> *13.1 DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES. Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto de las construcciones, son las establecidas en la Tabla 13.1 del presente reglamento y para su interpretación se debe tener en cuenta la Figura 13.1.*

Tabla 13.1 distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones

Descripción	Tensión nominal entre fases (kV)	Distancia (m)
Distancia vertical "a" sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como de la edificación (Figura 13.1).	44/34,5/33	3,8
	13,8/13,2/11,4/7,6	3,8
	<1	0,45
Distancia horizontal "b" a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas. (Figura 13.1)	66/57,5	2,5
	44/34,5/33	2,3
	13,8/13,2/11,4/7,6	2,3
	<1	1,7
Distancia vertical "c" sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura. (Figura 13.1)	44/34,5/33	4,1
	13,8/13,2/11,4/7,6	4,1
	<1	3,5
Distancia vertical "d" a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular. (Figura 13.1) para vehículos de más de 2,45 m de altura.	115/ 110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5

Al observar el cuadro anterior, se deja claro que la distancia horizontal que debe tener un predio con las líneas de energía a muros, balcones, salientes, ventanas y deferentes áreas independientes de la facilidad de accesibilidad de personas, varía de acuerdo con los voltios de energía que pasen por las cuerdas, en este caso, las redes de energía que están frente al predio ubicado en la carrera 25 P No. 72 U – 59 del barrio Charco Azul, son de 13,2 (13200) de tensión nominal o voltios como comúnmente se le llama, quiere decir que la distancia horizontal que debe tener el predio con las cuerdas de eléctricas es de 2,3 metros, y las medidas que realmente tiene el inmueble son de 2,99 metros desde la terraza del cuarto piso hasta las cuerdas eléctricas, aun cuando es esta una construcción irregular, y desde el primer nivel hasta las mismas cuerdas de energía existe 3,89 metros de distancia horizontal, siendo esta la medida que se debe tomar en cuenta para la valoración métrica de distancia legal.

Las edificaciones del segundo, tercero y cuarto piso (terraza), no cuentan con los permisos municipales para los balcones salientes que hicieron, quiere decir lo anterior que Emcali ha cumplido cabalmente con la normatividad RETIE y es el predio de que trata esta demanda el que presenta irregularidades en su construcción, pero a pesar de ello se sigue conservando las distancias que

15
400

exige la norma pertinente para estos casos pues con todo lo anterior cuenta con 2,99 metros. Obsérvese el plano que aporta el informe técnico de Emcali.

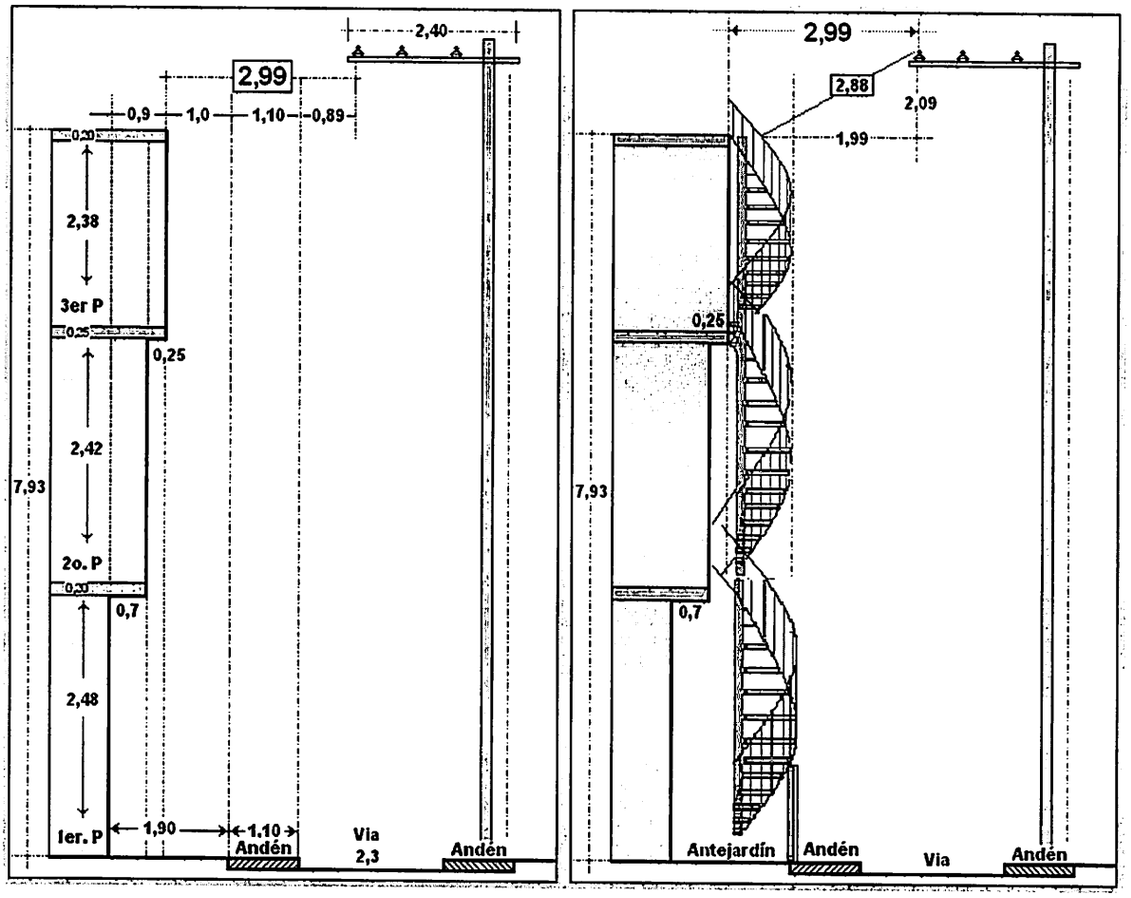


Gráfico de dimensiones según plano levantado por el Ing. Richard Herrera del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Energía UENE - EMCALI. EICE. ESP. aportado en informe técnico por el Ingeniero Luis Eduardo Saavedra C. Jefe del Departamento de Mantenimiento UENE de Emcali.

AL 3.8. No es cierto. Como se expuso en el hecho anterior, las dimensiones métricas que levanto el Ingeniero perito de los demandantes, Dolcey Casas Rodríguez, son ajustadas para poder construir un caso de demanda, basta con analizar el gráfico anterior para determinar las verdaderas medidas del predio frente las redes de energía, los 2,15 metros que se pretenden validar como veraces son inexactos y no se sabe cómo fueron tomados, se presume que son desde el borde de la escalera pues trataron de acomodar las medidas de tal manera que permitiera encajar una demanda en contra de mi representada.

AL 3.9. No es cierto. No se anexa al escrito de la demanda ningún documento que exponga la supuesta advertencia que hizo la comunidad del sector a Emcali para la supuesta prevención y precaución del riesgo presunto que desean atribuir a mi prohijada, así, este tipo de juicios se quedan en la esfera de las meras especulaciones. Se agrega que, si las redes eléctricas están en el espacio permitido por la normatividad que rige las instalaciones eléctricas, no presentan fallas, no existen reportes de la comunidad que denuncien irregularidades en el servicio, no es posible que se le adjudique responsabilidad a Emcali.

AL 3.10. No es cierto. No se aporta al plenario documento que demuestre su empleabilidad, ni tampoco soportes que acrediten vinculación al sistema general de seguridad social, no se ha demostrado aquí que la señora Viviana Viveros seas cotizante como empleada independiente ni

como empleada de empresa, carece entonces de las calidades con que debe contar una persona para considerarse empleado. Nada certifica que la demandante devengué un salario mínimo.

AL 3.11. No es cierto desde el punto de vista de Emcali. Las afectaciones que pueda estar presentando el menor Diego Viveros nunca jamás fueron ocasionadas por acciones u omisiones de Emcali. La responsabilidad que frente a tales hechos le corresponde única y exclusivamente a su progenitora, que de acuerdo con la ley colombiana es quien tiene a su cargo el cuidado y protección de su hijo, que en su condición de menor de edad, no está capacitado ni habilitado para realizar labores como las que según los dichos de la demanda le ocasionaron tales lesiones.

Se quiere significar que en este caso lo reprochable es la irresponsabilidad cometida por la señora Viviana consigo y para con su hijo menor de edad, cuando decidió realizar actividades con elementos de construcción, como la mencionada varilla, sin contar con la experticia y menos con los requerimientos de seguridad e involucrando a su hijo, lo que claramente evidencia la configuración de la culpa exclusiva de la víctima como causante de los daños que alega.

AL 3.12. No es cierto. Hasta este hecho no se ha probado nada, se han contado relatos de juicios parcializados y por partes de lo que al parecer sucedió, pero ni siquiera se logró narrar bien los hechos, solo se dijo que hizo arco eléctrico porque las cuerdas de energía estaba a 2,15 metros y que eso violaba los estándares legales, empero, en esta contestación sí se ha logrado demostrar que las medidas eran falsas y que realmente la distancia horizontal del predio frente a las redes de energía era de 3,89 metros desde el primer nivel, y 2,99 metros desde la terraza del cuarto piso.

AL 3.13. No es cierto desde el punto de vista de Emcali. Se reitera que los acontecimientos narrados aunque irregulares, le son adjudicables única y exclusivamente a la señora Viviana como persona capaz como por la responsable de su hijo menor. En relación con los perjuicios estéticos que de manera genérica menciona este hecho, no cabe ninguna consideración pues de los mismos no obra valoración idónea dentro del plenario.

3.14. No es cierto de la forma planteada. La novedad generada en el sector corresponde como bien lo dice el libelo a una falla que reporta el sistema y de ninguna manera puede de ahí inferirse que corresponde al caso en particular. Pretenden los demandantes mostrar unos hechos incoherentes que no reflejan nexo causal con Emcali, las redes eléctricas están a una distancia más que prudente y dentro del espacio que exige la norma, si un ciudadano osadamente hace actividades que pongan en riesgo su vida, la entidad pública no es la llamada a responder por dichas acciones.

En consecuencia, se reitera la operancia de la culpa exclusiva de la víctima como exonerante de responsabilidad para Emcali.

3.15. No es cierto desde el punto de vista de Emcali. Mi representada nunca jamás ha generado ningún tipo de riesgo excepcional a los demandantes y en lo que se relaciona con los supuestos perjuicios morales tampoco obra prueba que determine las secuelas psicológicas a las que se refieren.

3.16. No es cierto. No se puede corregir algo que nunca ha estado irregular, las redes de Emcali que pasan frente al predio están las óptimas condiciones y a una distancia legal del predio. Se repite una vez más, las verdaderas medidas fueron tomadas por el Ingeniero Richard Herrera del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Energía UENE - EMCALI. EICE. ESP, las cuales reportan realmente la distancia horizontal del predio frente a las redes de energía, que son 3,89 metros desde

~~13~~
402

el primer nivel, y 2,99 metros desde la terraza del cuarto piso. Véase el escrito de **AL 3.7.** de esta respuesta de hechos para verificar las medidas que exige la normatividad RETIE.

3.17. No es cierto. Emcali no tiene la obligación jurídica de reconocer y pagar daños que por su propia irresponsabilidad y negligencia los mismos usuarios se provocan, pues constituye culpa exclusiva de la víctima la construcción de una edificación de manera irregular con balcones o espacios salientes que a riesgo propio disminuyeron las medidas de seguridad, y la realización de labores imprudentes que impusieron un riesgo que es únicamente atribuible a los propietarios del predio y a los mismos demandantes por decidir vivir bajo estas condiciones, más cuando además instalaron en el antejardín una escalera que no cumple con los parámetros urbanísticos.

Finalmente, se debe dejar presente que el perito de la parte demandante no aportó a este proceso copia auténtica de su diploma de ingeniero electricista, ni copia de su hoja de vida con los documentos que le respalden, al plenario solo se integró unas copias minimizadas que es imposible leerlas y analizarlas para lograr controvertirlas, basta con revisar el dictamen para darse cuenta que no hay soportes que determinen las calidades de un perito, solo existe una relación de una aparente experiencia laboral, pero no aportó ningún certificado que atestigüe lo que dice.

IV. AL CAPITULO DENOMINADO FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ARGUMENTOS JURÍDICOS:

Parte la demanda inicia de la responsabilidad que pretende atribuir a Emcali del artículo 90 de la Constitución Política para presentarla como base de las reclamaciones que le atribuyen a todas las demandantes el deber de reparar una supuesta falla en el servicio.

Lo único que presenta el libelo como fundamento jurídico son simples transcripciones jurisprudenciales incompletas acerca de lo que el H. Consejo de Estado ha referido sobre el daño antijurídico a efectos de que sea resarcible y un incompleto y breve resumen de los hechos, además de una muy ligera y acomodada percepción de la normatividad vigente, entre ellas, lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- 2013, en el que se determina con perfección la distancia horizontal que debe tenerse entre un predio y la red eléctrica, que como se ha demostrado en capítulo I de este escrito de contestación de demanda.

Emcali cumple cabalmente con la distancia exigida, es por ello que bajo las premisas acomodadas de los demandantes no es posible imputar a Emcali cargo alguno porque, aunque existió un accidente, esto no es claro respecto a cómo ocurrieron los hechos frente a Emcali, tampoco no concurre el supuesto actuar negligente u omisivo de mi representada y menos que tales acciones hayan generado un daño.

No está claramente determinado el nexo causal y las razones jurídicas de la demanda, lo que pretende la parte actora está encaminada a demostrar la responsabilidad inexistente de un presunto acto precario en la prestación de servicio público, pero que por más que ajustaron los hechos y las pruebas no lograron el umbral probatorio que realmente vincule a Emcali como culpable del aparente accidente de la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros.

Se pretende hacer responsable a mi representada porque al parecer la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros, se electrizaron supuestamente con las cuerdas de energía y recibieron 13200 voltios, cosa que, como ya de mencionó, ni en los hechos ni en las pruebas pudieron con certeza probar el nexo causal con Emcali, será porque si realmente hubieran recibido 13200 voltios de

energía en la actualidad estuvieran muertos los accionante, pues una descarga de tal magnitud no la soporta un ser humano.

Respecto a la existencia real del daño, los demandantes dan por hecho que Emcali le afectó la salud física e integridad moral y le limitó el patrimonio por las lesiones, pero es insensato considerar que Emcali como prestadora de servicios ejecutara actos tendientes a provocar daños en la humanidad la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros, siendo que en los mismos hechos formulados y sus pruebas demuestran contradicciones y ambigüedades que se refutan por sí mismas. Lo que se pretende es endilgar toda la responsabilidad a mi representada presumiendo su actuar omisivo en el servicio, como que como se ha probado anteriormente, no es cierta.

Si bien por la historia clínica aportada en la demandan se perciben lesiones sobre la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros, esto no obedece a un quebrantamiento jurídico y menos a razones propias de culpabilidad contra Emcali. De ahí que, si los cargos de la demanda hacen mención respecto de insuficiencia en la prestación, no lograron configurar la falla en el servicio por parte de Emcali con pruebas ni con argumentos.

En conclusión, no hay daño antijurídico imputable a mi representada que surja de su acción u omisión.

V. AL CAPITULO DENOMINADO ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

Me opongo expresamente a la demanda instaurada y solicito respetuosamente que no se acepte ninguna de las pretensiones, declaraciones y condenas deprecadas por la parte demandante, pues las mismas carecen de los fundamentos fácticos y jurídicos que las respalden; en consecuencia, debe absolverse a EMCALI de todos los cargos formulados en su contra, impartiendo condena en costas a la parte actora.

Sea lo primero manifestar que Emcali es completamente ajena a todas las situaciones narradas en el libelo por cuanto no es de su competencia ordenar o construir sobre predios privados balcones salientes que aproximen la distancia entre el suelo y las cuerdas de energía, y mucho menos instalar escaleras en los antejardines de los inmuebles que recorten aún más el espacio permitido horizontalmente.

En ese sentido, mi representada no ha ejecutado ninguna actuación u omisión que pueda considerarse falla en el servicio, más si se mira el caso desde el punto de vista probatorio no se podrá endilgar responsabilidad a mi representada ya que carece la demanda de fuerza vinculante entre los hechos presuntos y Emcali.

Por los elementos descritos en los hechos anteriores se solicita absolver a mi representada de las pretensiones que buscan su declaración como responsable administrativa, solidaria y extracontractualmente de los daños por las supuestas lesiones de la señora Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros, por ser, como quedará demostrado con los medios exceptivos culpa exclusiva de la víctima y porque se ocasionó a razón de una edificación construida por particulares con una altura tan alta y saliente que imprudentemente disminuyó bajó su propia responsabilidad las medidas de seguridad.

79
40A

VI. EXCEPCIONES QUE SE PROPONEN:

6.1. Inexistencia del derecho sustancial frente al daño atribuible a Emcali.

Es completamente erróneo que la demanda relacione a mí representada como parte pasiva porque no existe un nexo causal entre los daños que alega y las actuaciones de Emcali, como se ha manifestado a lo largo del presente escrito, los demandantes no aportan material probatorio que demuestre la existencia real de una falla en el servicio, más cuando las normatividad que regula las instalaciones eléctricas determina un espacio horizontal obligatorio que debe haber entre los predios y las redes de energía, y mi prohijada cumple completamente con esta regulación, pues el espacio desde el primer piso hasta las líneas de energía es de 3,89 metros de distancia, y desde la terraza y la misma red de energía es de 2,99 metros, contrario a lo que falsamente afirman los demandantes, que según las medidas es de 2,15 metros. Véase **AL 3.7.** del capítulo III de este escrito.

De acuerdo con lo anterior, no es Emcali, por sus acciones u omisiones la entidad llamada a responder frente a las reclamaciones de esta demanda, razón por la cual se solicita el acogimiento de la presente excepción.

6.2. Inexistencia de hecho causante de daño atribuible a Emcali.

Con base en unas interpretaciones erróneas la parte demandante ajusta el accidente de la señora Viviana Viveros y de su hijo Diego Viveros a una presupuesta omisión por falla en el servicio de Emcali, pero estas son meras deducciones y especulaciones que se hacen porque al parecer las redes de energía que pasas frente al predio ubicado en la carrera 25 P No. 72 U – 59 del barrio Charco Azul estaban muy cerca a la casa, estas falsas acusaciones las soportan con un dictamen pericial del Ingeniero Dolcey Casas Rodríguez, quien no aporta copia del diploma que le acredite como ingeniero electricista y quien en su dictamen dice que las medidas son de 2,15 metros, empero, lo que realmente hay en distancia horizontal son de 2,99 metros desde la terraza hasta las cuerdas de energía y de 3,89 metros desde el primer nivel del predio, siendo esta último la medición que debe tenerse en cuenta porque los niveles superiores a la casa fueron edificados de manera irregular y recortaron el espacio horizontal desde el predio hasta las líneas de energía.

Recordemos lo que la definición que hace el tratadista Javier Tamayo Jaramillo respecto a lo que es el daño: *"(...) es el menoscabo o pérdida patrimonial o extrapatrimonial, derivada de una lesión a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial (económico) o extrapatrimonial (no económico). Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima (...)"*[3].

De lo anterior se entiende que, el dispositivo generador del daño debe ser un agente externo o distinto a la misma víctima, de ser contrario no sería un daño indemnizable porque la ocurrencia se ocasionaría por imprudencia o menoscabo del deber de cuidado que toda persona debe tener para consigo mismo.

Si se observan integralmente los hechos de la demanda, con claridad se percibe que los propietarios del predio construyeron de manera irregular los niveles superiores de la casa y recortaron la

[3] Tamayo Jaramillo, Javier. Nuevas Reflexiones Sobre el Daño, Primera Edición, Legis Editores S.A. 2017. Pág. 1. *Qué es el daño – 5. Definición.*

distancia entre el predio y las redes de energía, y adicionalmente instalaron unas escaleras metálicas en el antejardín de la casa, lo que está totalmente prohibido, pues todo esto recortó la distancia, así entonces, los que realmente pusieron en peligro la vida e integridad de los habitantes de la casa fueron los mismos propietarios del predio, quienes negligentemente al edificar se acercaron a las cuerdas eléctricas.

De otro modo, la señora Viviana Viveros no tuvo la previsión de cuidado con sigo misma y de su hijo Diego Viveros, que se encuentra bajo su cuidado y tutela, teniendo encuentra que son personas viven en un predio edificado de manera irregular, ya que desde las mismas escaleras que además de ser instaladas por fuera de la casa y sobre el antejardín, situación agravante en este caso.

Finalmente, carece la demanda de conexidad objetiva entre los hechos demandados y la realidad probada, además de la inexistencia causal entre los hechos de la demanda y mi representada. De acuerdo con lo dicho queda claro que por parte de Emcali no se ha generado ningún tipo de riesgo que diera origen a las lesiones que sufrieron los demandantes por su propia imprudencia.

Por lo anterior, sírvase acoger su señoría la presente excepción.

6.3. Inexistencia de nexo causal entre el incidente narrado en la demanda, la infraestructura de Emcali en el sitio donde se habría producido el suceso y el daño invocado.

No existe falla en el servicio porque no se atribuye responsabilidad por faltante en el servicio público, tampoco existe razón para acusar a mi representada porque no se logró probar el vínculo entre los hechos presuntos y Emcali.

Con la demanda se aporta como prueba documental unas fotografías que al parecer intentar demostrar el escenario de ocurrencia de los hechos. Al respecto debe manifestarse que las mismas carecen de toda legitimidad porque muestran unas imágenes que no recrean los hechos, solo reflejan las secuelas de un aparente accidente, mismo que nunca se dijo como ocurrió, solo que hubo un arco eléctrico, pero no se expuso en los hechos los detalles y sí se omitió todo lo que realmente es importante para la determinación de culpa.

Reviste especial importancia determinar si tales fotografías tienen valor probatorio para apoyar sus peticiones, máxime cuando no es claro la apreciación panorámica del lugar. En efecto, de acuerdo con el artículo 243 del Código General del Proceso, las fotografías son documentos y, como no fueron tomadas por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, son de carácter privado, así entonces, no son leíbles por cuanto no se entiende que se pretende demostrar con ellas.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, las fotografías son documentos *"simplemente representativos"* porque *"sin plasmar narraciones o declaraciones de cualquier índole, contienen imágenes"*, mismas que deben suministrar valor demostrativo en la medida en que haya certeza sobre la representación exacta de lo que se pretende aducir de culpa, pero en el caso particular no existe imagen que demuestre con sensatez la responsabilidad de Emcali.

Finalmente, se debe dejar presente que el perito de la parte demandante no aportó a este proceso copia auténtica de su diploma de ingeniero electricista y de la resolución del Ministerio de Educación que acredite la convalidación en Colombia, por ser un título extranjero, tampoco anexa la copia de su hoja de vida con los documentos que le respalden, al plenario solo se integró una copias

21

minimizadas que es imposible leerlas y analizarlas para lograr controvertirlas, basto con revisar el dictamen para darse cuenta que no hay soportes que determinen las calidades de un perito, solo existe una relación de aparente experiencia laboral, pero sin soporte de ninguna naturaleza ni certificados que atestigüen lo que dice.

El dictamen no cumple con los presupuestos del artículo 226 del Código General del Proceso, especialmente con lo exigido en el inciso 4 y los numerales del mismo articulado.

Sea lo anterior suficiente para el acogimiento de la presente excepción.

6.4. Inexistencia de Perjuicios.

No dio cumplimiento la demanda al requisito según el cual el valor de los perjuicios debe corresponder a la estimación razonada que de los mismos haga el demandante bajo la gravedad del juramento. Por esta razón no se imponen como ciertas las sumas de dinero que por tal concepto se presentan por los accionantes, lo cual significa que no está relevado de la carga de su prueba, acompañada de la determinación de tratarse de daños ciertos, actuales y determinados.

A pesar de lo anterior, sí cabe afirmar que cuando ese libelo habla de daños morales, como los mismos son de orden subjetivado, requieren expresa demostración, ya que no son presumidos por la ley ni la jurisprudencia, mucho menos cuando se reclaman por los demandantes por supuestas actividades de las cuales no obran pruebas.

El Honorable Consejo de Estado ha fijado unos parámetros para la valoración del perjuicio moral en los eventos de lesiones, según la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada. De manera que para que exista un reconocimiento dinerario por ese concepto, debe mediar una valoración entre el elemento fáctico y las causales de responsabilidad de la entidad pública.

En lo que respecta a los perjuicios materiales, el libelo hace una especie de relación de valores para llegar a un total de supuestos ingresos que percibirían los presuntos lesionados junto con perjuicios a la salad, todo esto sin sustento probatorio más que la declaración de hechos. A Emcali no se le pueden atribuir el pago de estas relaciones de gastos porque no realizó u omitió acciones que generaran los daños que aparentemente suportaron la señora Viviana Viveros y Diego Viveros.

En lo que se refiere a los perjuicios inmateriales, Emcali se opone rotundamente a las reclamaciones que para sí relaciona los demandantes y que se refieren a las pruebas aportadas y excepciones formuladas, pues no existen los perjuicios invocados.

Sírvase acoger su señoría la presente excepción.

6.5. Culpa exclusiva de la víctima Viviana Viveros y su hijo Diego Viveros.

Si a los hechos de la demanda se les da una lectura con sentido lógico, es claro que surgen muchísimas inquietudes sobre la veracidad de la versión según la cual la causa de la imprudencia y el descuido de los aparentes lesionados generaron las supuestas lesiones en sus cuerpos, de una lado la señora Viviana Viveros realizó maniobras con una varilla e imprudentemente expuso a su hijo asumiendo el riesgo de encontrarse en una construcción de escaleras en espacios prohibidos, como también por los salientes balcones que irregularmente construyeron hasta la terraza del cuarto piso, todo esto conlleva a una lógica de autoprevención que los habitantes de un predio en

22
407

estas condiciones deben tener presente diariamente, pues su cohabitación permanente hace que deban tener las precauciones necesarias para evitar accidentes.

Por todo lo expuesto, comedidamente solicitamos el acogimiento de la presente excepción.

VII. PRUEBAS:

Sírvase tener como pruebas con valor probatorio que les asigna la ley, los documentos que en las oportunidades de ley sean allegados por Emcali al proceso.

7.1. Documentales:

7.1.1 Copia de Memorando - Informe técnico entregado por el Ingeniero Luis Eduardo Saavedra C., Jefe Departamento de Mantenimiento UENE EMCALI. EICE. ESP. Con el que se demostrará las medidas reales que median las distancia entre el predio sujeto de esta demanda y las cuerdas de energía.

7.1.2 Copia del Acuerdo 069 de 2000 – Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, el cual en el artículo 138 numerales 1, 4 y 5, se hace prohibición de construcciones en antejardines. Se anexa en medio magnético C.D.

7.1.3 Copia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE- 2013, en el cual el artículo 13.1 delimita las medidas que debe tenerse respecto a la distancia horizontal entre los predios y las redes eléctricas. Se anexa en medio magnético C.D.

7.2. Interrogatorios de parte:

7.2.1 Solicito llamar a los demandantes para que bajo la gravedad del juramento respondan al interrogatorio de parte que habré de formularles en audiencia pública sobre los hechos de la demanda y de la presente respuesta y específicamente sobre los daños que aducen. Sírvase, su Señoría, señalar fecha y hora para la práctica de esta prueba.

7.3 Testimoniales:

7.3.1 Sírvase citar al ingeniero ***Luis Eduardo Saavedra C.***, mayor de edad, vecino de Cali, quien se desempeña como Ingeniero Jefe Departamento de Mantenimiento UENE EMCALI. EICE. ESP de la entidad demandada y se localiza en la Carrera 6ª No. 28-30 de la ciudad de Cali, para que bajo la gravedad del juramento rinda declaración respecto de los hechos, consideraciones y conclusiones de su informe técnico.

7.3.2 Sírvase citar al señor Dolcey Casas Rodríguez, quien funge como petito de la parte demandante, para que bajo la gravedad del juramento rinda declaración respecto de cómo midió la distancia horizontal entre el predio sujeto de esta demanda y las redes de energía que pasan frente al inmueble, además que se sirva declara sobre de los hechos, consideraciones y conclusiones de su dictamen pericial.

33

VII. ANEXOS:

Anexo al presente escrito el poder a mí conferido por el representante legal de Emcali, debidamente autenticado, acompañado de los documentos que acreditan la existencia y representación legal de esa institución.

IX. NOTIFICACIONES:

Bajo la gravedad del juramento informo que:

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho o en la Avenida 4 Norte No. 21N-35, Edificio Arroyohondo, Oficina 202, de Cali. Correo electrónico: **jecrespobotero@yahoo.com**

Emcali y su representante legal en el Centro Administrativo Municipal – CAM, Torre Emcali, Piso 3. Correo electrónico: notificaciones@emcali.com.co.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE CRESPO BOTERO
C. de C. No. 12.967.239 de Pasto
T. P. No. 33.666 del Consejo Superior de la Judicatura.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

DOCTOR

OSCAR EDUARDO GARCIA GALLEGO

JUEZ 14 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E S. D.

MEDIO DE CONTROL:	**REPARACIÓN DIRECTA**
RADICACIÓN:	**2018-00259-00**
DEMANDANTE:	**VIVIANA VIVEROS Y OTROS**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE CALI Y EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

DIANA SANCLEMENTE TORRES, ciudadana mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cali (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No. 38.864.811 expedida en Buga (Valle), abogada titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 44.379 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada judicial de la llamada en garantía, **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,** REPRESENTADA LEGALMENTE por el **Dr. JOAN SEBASTIAN HERNANDEZ ORDOÑEZ,** ciudadano mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.014.214.701 expedida en Bogotá D.C., domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C. y conforme al poder a mi otorgado, respetuosamente, me dirijo a Usted, para contestar la **DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA** formulada por la señora **VIVIANA VIVEROS Y OTROS** contra el **MUNICIPIO DE CALI Y EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** y al llamamiento en garantía formulado por **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.:**

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO PRIMERO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE.

No me consta que a la altura de la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali, se encuentren ubicados varios postes (hincados), que transportan cuerdas de conducción de energía eléctrica de media tensión, tampoco me consta que dichas cuerdas de energía eléctrica, para el día 21 de abril del 2018, se encontraran muy cerca de las casas, sin cumplir las normas obligatorias de distancia establecidas en el RETIE.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

AL HECHO SEGUNDO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE.

No me constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, donde resultaron lesionados la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS, ya que no hubo un reporte del accidente eléctrico a EMCALI EICE E.S.P.

AL HECHO TERCERO: NO ES CIERTO.

No es cierto que las lesiones que presentan la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS sean consecuencia de un riesgo creado por EMCALI, toda vez, que el tendido eléctrico ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 barrio Charco Azul de Cali, es prexistente a la posterior construcción de segundo piso, tercer piso y terraza, en dicho inmueble.

El incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad entre la edificación y el tendido eléctrico, tiene origen en la trasgresión de las normas por parte del propietario del inmueble, quien debió solicitar las licencias de construcción ante la autoridad competente.

En el INFORME TÉCNICO efectuado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali , realizado por el ingeniero Luis Eduardo Saavedra, se pudo establecer que : *"Es una edificación irregular, que el propietario del inmueble, por su propia cuenta los expuso a una medida de distancia no adecuada, porque las escaleras que conectan los niveles de la casa, se encuentran construidas sobre el antejardín del predio y salen hasta el borde del andén del inmueble."*

Igualmente, que las medidas reales que tiene el predio desde la terraza ubicada en el cuarto piso y la red eléctrica, supera en forma positiva las distancias mínimas establecidas para instalaciones eléctricas determinadas en el RETIE.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

El RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) establece, que la distancia horizontal mínima entre una edificación y la red eléctrica debe ser de 2.30 metros según la categoría, y que la forma para determinar la distancia, es desde la construcción inicial, eso quiere decir desde el primer nivel del inmueble hasta las cuerdas de energía; y el inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali en el primer nivel supera las medidas mínimas de 2.30 metros, pero es necesario aclarar que las construcciones del segundo, tercero y cuarto piso, a pesar de ser edificaciones irregulares que no cuentan con los permisos, se encuentran a distancias permitidas por el RETIE. Ahora, el problema de este inmueble es que tiene áreas salientes hacia el espacio público, porque tiene instaladas unas escaleras de metal en forma de caracol sobre el antejardín del inmueble, escaleras que no logran cumplir con las distancias verticales y horizontales respecto del tendido eléctrico, incumpliendo con los estamentos del Decreto 069 del 2000 en su artículo 138 numeral 1, 4 y 5 que impiden las construcciones de escaleras sobre estos espacios, donde describe:

Decreto 069 del 200 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, artículo 138: Normas Aplicables a los Antejardines. (...) 1. Los antejardines no son edificables. (...) 4. Los antejardines no se pueden cubrir ni construir (...) 5. No se permiten escaleras en los antejardines. En los casos que sea necesario el manejo de escaleras, éstas deberán desarrollarse a partir de la línea de paramento, hacia el interior del inmueble (...)

AL HECHO CUARTO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE.

AL HECHO QUINTO: ES PARCIALMENTE CIERTO.

Es cierto que la historia Clínica del Hospital Universitario del Valle, indica la asistencia médica debida por la señora VIVIANA VIVEROS, con motivo de las lesiones sufridas. La historia clínica no es el instrumento probatorio para endilgar responsabilidad de EMCALI EICE E.S.P. resulta ser un medio inconducente.

AL HECHO SEXTO: ES PARCIALMENTE CIERTO.

Es cierto que la historia clínica del H.U.V., prueba la asistencia médica debida por el paciente DIEGO VIVEROS, sin embargo, no es el instrumento probatorio conducente para endilgar responsabilidad a EMCALI EICE E.S.P.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

AL HECHO SEPTIMO: NO ES CIERTO

En el INFORME TÉCNICO efectuado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. sobre el bien inmueble ubicado en la carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali , realizado por el ingeniero Luis Eduardo Saavedra, se pudo establecer que : "Es una edificación irregular, que el propietario del inmueble, por su propia cuenta los expuso a una medida de distancia no adecuada, porque las escaleras que conectan los niveles de la casa, se encuentran construidas sobre el antejardín del predio y salen hasta el borde del andén del inmueble."

Decreto 069 del 200 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, artículo 138: Normas Aplicables a los Antejardines. (...) 1. Los antejardines no son edificables. (...) 4. Los antejardines no se pueden cubrir ni construir (...) 5. No se permiten escaleras en los antejardines. En los casos que sea necesario el manejo de escaleras, éstas deberán desarrollarse a partir de la línea de paramento, hacia el interior del inmueble (...)

Las lesiones sufridas por los demandantes no fueron producidas por la INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE EMCALI EICE, pues fue el propietario del inmueble ubicado en la carrera 25p Nro.72-U-59 de Cali, construyo en el antejardín, una escalera caracol, vulnerando la línea de paramento y acercando el inmueble al tendido eléctrico.

AL HECHO OCTAVO: NO ES UN HECHO, HACE REFERENCIA A LA PRUEBA DEL DICTAMEN PERICIAL APORTADO POR LA PARTE DEMANDANTE , EL CUAL DEBERA SER OBJETO DE CONTRADICCION EN AUDIENCIA DE PRUEBAS.

"Artículo 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN: La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S
Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntar asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor."

El Dictamen Pericial elaborado por el Ingeniero DOLCEY CASAS, endilga la responsabilidad del accidente ocurrido el día 21 de abril del 2018 a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI E.I.C.E. E.S.P., sin determinar la incidencia de la conducta de las víctimas, la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS.

Igualmente de la incidencia de la construcción de la escalera caracol en el antejardín del inmueble.

AL HECHO NOVENO: NO ES CIERTO.

EMCALI EICE E.S.P. no recibió solicitud alguna de la comunidad sobre irregularidades en el inmueble, por lo tanto es una afirmación carente de soporte probatorio

AL HECHO DÉCIMO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE.

No me consta la actividad laboral a la que se dedicaba la señora VIVIANA VIVEROS para el momento de los hechos, lo cierto es que en el proceso no se aportó prueba que indique incluso que la demandante estuviera ejerciendo alguna labor, respecto de su profesión o el salario que percibía por este, e igualmente no se aporta soporte de pago al sistema de seguridad social.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: NO ES UN HECHO ES LA DESCRIPCION DE UN PERJUICIO.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE POR EL MEDIO PROBATORIO IDONEO, CONDUCENTE Y PERTINENTE.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

AL HECHO DÉCIMO TERCERO: NO ES UN HECHO, ES LA DESCRIPCION DE UN PERJUICIO

AL HECHO DÉCIMO CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO.

Es parcialmente cierto, porque mediante oficio No. 5220466542018 del 12 de Julio del 2018, EMCALI informa que si hubo una falla transitoria en la subestación de Potencia Juanchito generando una ausencia del servicio en todo el sector por un periodo de tiempo menor a un minuto.

Pero no es cierto, que la falla transitoria ocurrió en el lugar del presunto accidente.

AL HECHO DÉCIMO QUINTO: NO ES UN HECHO , ES UNA CONSIDERACION JURIDICA DE LA PARTE ACTORA, OBJETO DE PRUEBA Y DECISION EN EL PRESENTE PROCESO.

AL HECHO DÉCIMO SEXTO: NO ES CIERTO.

Los demandantes lesionados jugaron un papel activo en la producción del accidente al manipular un objeto metálico. Igualmente el dueño del inmueble afectó la distancia horizontal al construir una escalera caracol en la parte del antejardín del inmueble, lo cual está prohibido por ley.

AL HECHO DÉCIMO SEPTIMO: NO ES UN HECHO ES UNA CONSIDERACION JURIDICA DE LA PARTE ACTORA.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a que sean declaradas favorablemente a la parte Demandante, pues el daño que se pretende imputar a la Entidad prestadora del servicio de energía EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. no fue causado por una acción u omisión de la misma.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

La causa eficiente del siniestro, fue la construcción irregular del inmueble, al tener instaladas unas escaleras de metal en forma de caracol en el antejardín, siendo esto prohibido. se vulneraron las distancias verticales y horizontales mínimas de seguridad establecidas en el RETIE, ocasionando con ello que se generara una situación de peligro. Debe tenerse en cuenta, que el tendido eléctrico, fue instalado con anterioridad a la construcción del inmueble donde presuntamente, se produjo el accidente padecido por la Señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS.

Igualmente, en la producción del accidente, participaron de forma activa las víctimas, quienes manipularon imprudentemente una varilla metálica, generando con ello que las redes de distribución de energía produjeran la descarga eléctrica.

Los constructores, y en general, quienes presenten proyectos a las curadurías, a las oficinas de planeación del orden municipal y demás entidades responsables de expedir licencias o permisos de construcción, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE.

Como se ha establecido por la Jurisprudencia y doctrina Nacional, la aplicación del artículo 90 de la Constitución política, impone la obligación de analizar la responsabilidad del Estado desde la perspectiva de la víctima y desde allí determinar: Si el daño sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada, si le es imputable a dicha entidad y si tiene el carácter antijurídico, esto es, si la víctima no debe soportarlo.

Si bien es cierto, la entidad demandada EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Tiene a su cargo la actividad peligrosa (PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA) que impone a los ciudadanos un riesgo excepcional, del cual debe responder, no es menos cierto, que en el presente caso, no fue dicha actividad la que ocasionó las lesiones de hoy demandante, sino la aproximación irregular del inmueble al tendido eléctrico preexistente, tal y como se evidencia en grafico de dimensiones del bien inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali y que se aporta en el INFORME TÉCNICO realizado por EMCALI, donde se evidencian los puntos que presentan una saliente como lo son las escaleras de metal en forma de caracol ubicadas en el inmueble.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

Este grafico permite evidenciar, que uno de los puntos que puede llegar a presentar un peligro por aproximación son las escaleras de metal en forma de caracol, voladizo que fue construido de forma saliente al antejardín, acortando las distancias tanto verticales como horizontales de seguridad que se deben guardar y respetar respecto a la red de media tensión, dado que el inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali presenta una fachada irregular.

"En este caso particular, la disminución de la distancia de seguridad establecida en el RETIE, es responsabilidad exclusiva del propietario del inmueble quien modificó el tipo de fachada, al instalar unas escaleras de metal en forma de caracol, evidenciándose una construcción irregular, porque acorta las distancias verticales y horizontales respecto del tendido eléctrico, en cuyo caso el Ente encargado de esta regulación en la construcción es la oficina de Planeamiento Urbanístico. "

De acuerdo con la orientación que se ha dado por el Consejo de Estado, la empresa prestadora del servicio de energía, debe responder cuando la actividad peligrosa de la que es responsable, es la causa cuya indemnización se reclama. Pero no debe responder cuando, como en el presente caso, aparece acreditado que el perjuicio no fue ocasionado por la realización de un riesgo propio de la actividad peligrosa ejercida por la entidad demandada sino por un factor externo como fue el acercamiento irregular del inmueble al tendido eléctrico y la manipulación de una varilla metálica, por parte de las víctimas, que hizo contacto con la red eléctrica.

Como se ha establecido por parte del CONSEJO DE ESTADO a partir de 1984, la RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS QUE SE PRODUCEN CON REDES DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDE MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL TITULO DE IMPUTACIÓN OBJETIVO, no es menos cierto que la RESPONSABILIDAD NO ES ABSOLUTA ni opera de forma AUTOMATICA, se debe, por tanto, analizar las causales eximentes de responsabilidad.

En Sentencia del 4 de octubre de 2001 (Consejero Ponente Dr. Germán Rodríguez Villamizar) se establecen las siguientes precisiones:

"Existe un régimen conceptual y probatorio especial en las actividades peligrosas, por cuanto su naturaleza coloca a los asociados en inminente peligro de sufrir lesiones, aunque desarrollen con toda la diligencia posible, dado que quien motiva la actividad crea una irregularidad para los asociados en donde la inminencia del riesgo va implícita con la naturaleza de la actividad.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

La sala desea precisar que en los casos en que se examina la responsabilidad de la administración, por la explotación de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica, no es pues del caso analizar profundamente interrogantes para responder rigurosamente si hubo falta o culpa en la conducta de la entidad demandada, pues de lo que se trata es de reparar un daño a quien está legitimado para ello, con fundamento en la TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, que impone la obligación al explotante de la actividad peligrosa de reparar los perjuicios derivados de ésta. En efecto este es un riesgo de aquellos que implican generalmente a los particulares una exposición del cual se pueda derivar un accidente más o menos grave y por ello puede decirse que sólo la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias.

No obstante, lo dicho anteriormente, estima la sala que la mera generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por la culpa exclusiva de la víctima, o por cualquier otra causa extraña como la fuerza mayor o el hecho de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.

En el régimen de responsabilidad por RIESGO EXCEPCIONAL no se prescinde de la exigencia del NEXO CAUSAL, y por ello cuando la administración demuestra la existencia de una causa extraña, se libera de su obligación resarcitoria."

La Jurisprudencia Nacional ha establecido que cuando se genera un daño generado en razón de una actividad peligrosa (prestación del servicio de energía eléctrica) debe verificarse si el accidente fue con motivo del ejercicio de dicho riesgo, o si es ajeno a este, mediante la presencia de una causa extraña, esto es la fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima o también si ambas concurrieron en la producción del mismo.

De acuerdo con la orientación que se ha dado por el Consejo de Estado, la empresa prestadora del servicio de energía, debe responder cuando la actividad peligrosa de la que es responsable es la causa de los perjuicios que se reclaman.

No debe responder, cuando, como en el presente caso, el perjuicio no fue ocasionado por la realización del riesgo propio de la actividad peligrosa ejercida por la entidad demandada, sino por un factor externo como fue el acercamiento irregular del inmueble

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

al tener instaladas unas escaleras de metal en forma de caracol que acortan las distancias verticales y horizontales respecto al tendido eléctrico y además se evidencia la manipulación de la varilla metálica, por parte de los demandantes, la cual produjo la descarga eléctrica que afectó a la señora VIVIANA VIVEROS y a su hijo DIEGO VIVEROS.

EXCEPCIONES QUE SE PROPONEN FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

1. ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO SUFRIDO POR LAS VÍCTIMAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. POR EL HECHO DE UN TERCERO.

El artículo 4 de la ley 472 de 1998 establece que son derechos e intereses colectivos, los relacionados con "*...La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes...*"

El artículo 8 de la ley 388 de 1997 consagra la función pública de ordenamiento del territorio en cabeza de la entidad Municipal, mediante la ACCIÓN URBANÍSTICA.

"La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que le son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del sueld'

En concordancia con las anteriores disposiciones, el artículo 33.1 del RETIE, establece que los proyectos de construcción o ampliación de edificaciones que se pretenden en las oficinas de planeación municipal, curadurías o demás autoridades que expidan licencias o permisos de construcción, deberán dar estricto cumplimiento al RETIE en lo referencia a distancias mínimas de seguridad y servidumbres. (Subrayado fuera de texto)

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI es el ente administrativo encargado de conceder las licencias de construcción y en caso de violación de normas urbanísticas es el encargado de sancionar y tomar las medidas respectivas en aras a proteger el espacio público y proteger la vida de los ciudadanos.

Como lo establecen los artículos 13 y 33.1 del RETIE es el constructor de la vivienda y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación del orden territorial quien debe manifestar a la autoridad competente que la construcción cumple con las distancias mínimas de seguridad.

De acuerdo con este marco legal, al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI le es exigible la obligación de una intervención activa en todas las construcciones, ampliaciones y modificaciones que tengan lugar dentro de su territorio con el fin de que se hagan respetar las normas de ordenamiento.

En el presente asunto se evidencia claramente un rompimiento del nexo causal entre la conducta desplegada por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el daño sufrido por la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS, quien violó la normativa concerniente a la distancia de seguridad fue el propietario del inmueble, así como el constructor de la misma, que como se evidencia en el gráfico de dimensiones que se encuentra en el INFORME TÉCNICO realizado por EMCALI, se demarcan unos puntos de peligro de aproximación como las escaleras de metal en forma de caracol construidas de manera saliente sobre el antejardín.

Al realizar una construcción irregular como la que se presenta en el inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali, se puede evidenciar que el diseño de la fachada es irregular, dado que se instalaron unas escaleras de metal en forma de caracol sobre el antejardín, generando que se acorte la distancia verticales y horizontales de seguridad mínima que debe tener el inmueble respecto a la red de media tensión.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, debió conocer estas irregularidades que se presentaban en la construcción de la edificación, tal y como lo dispone la ley 388 de 1997, y tomar las medidas de control y sanción, configurándose de esta forma el eximente de responsabilidad administrativa denominada HECHO DE UN TERCERO.

2. ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO POR LA CULPA DE LA VÍCTIMA.

En relación a las causales eximentes de responsabilidad se pronunció el CONSEJO DE ESTADO, *sección tercera, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, en fallo de MARZO DE 2006:*

"... ha sido reiterado en múltiples oportunidades por la jurisprudencia de esta sala que el hecho exclusivo y determinante de la víctima, culpable o no, constituye causal de exoneración de la responsabilidad, pues no sólo debe demostrarse la ocurrencia del daño sino también debe probarse la relación directa e inmediata entre el hecho y el daño causado. Por lo tanto, dicha circunstancia tiene la plena capacidad para romper el nexo de causalidad, en tanto que resulta evidente que la verdadera causa del daño no es atribuible al que presta el servicio sino a la misma víctima. Para ello es necesario averiguar cuál fue la causa adecuada y eficiente en la producción del daño, pues como lo ha advertido la doctrina, la teoría de la causa adecuada es en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. Según esta interpretación, para que exista relación causal, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto esperado tiene que determinarlo, así las cosas, como lo ha advertido esta sala, para que exista relación de causalidad entre el perjuicio y el hecho, la omisión o la operación administrativa imputable a la entidad demandada, es necesario demostrar que aquellas circunstancias que le preceden al daño fueron idóneas, eficientes y adecuadas, esto es decisivas para su producción."

Como se ha establecido por la DOCTRINA NACIONAL, el hecho de la víctima es importante, desde el punto de la responsabilidad civil, para exonerar parcial o totalmente al demandado que ha causado un daño, su influencia definitiva será determinada en la medida en que ese hecho haya sido causa exclusiva o parcial del perjuicio, a veces el daño se produce teniendo por única causa la conducta del perjudicado; en otras situaciones, el hecho se combina con la intervención activa de la víctima y del demandado.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

El artículo 2357 del Código Civil establece: *"La apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente."*

Esta disposición legal se refiere no solo a quien voluntariamente acepta un riesgo, sino a quien se expuso a él imprudentemente. Ahora bien, el conocimiento o aviso del riesgo o peligro es un elemento subjetivo indispensable para deducir o no la culpa de la víctima y ese elemento entraña en cada caso una cuestión de hecho que debe estimarse ante las pruebas del proceso.

En el presente asunto, las víctimas se encontraban bajando desde la terraza y el tercer piso por las escaleras de metal en forma de caracol, que se encuentran construidas en el antejardín, portando en sus manos una varilla de construcción, la cual, por la cercanía de la construcción irregular del inmueble, generó un mayor riesgo de electrocución.

De acuerdo con lo anterior, las víctimas lesionadas jugaron un papel activo en la producción del accidente eléctrico, pues manipularon una varilla de construcción cerca de las redes de conducción de energía, lo que les ocasionó las lesiones que hoy reclama mediante el presente medio de control de reparación directa. La actuación imprudente de la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVERO fue determinante en la producción del daño.

3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A CARGO DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E ESP.

En el presente caso no se configura RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por parte de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., toda vez que no existe relación de causalidad entre la prestación del servicio de energía y el daño padecido por la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVEROS.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece: *"Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, **causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas"** (subrayado fuera de textos)*

El daño padecido por las víctimas, no es imputable a EMCALI, ya que la prestación del servicio de energía no fue la causa eficiente del siniestro, el cual fue originado por una serie de factores ajenos a la actuación de la EMPRESA DE ENERGÍA, debido a que fue producto del HECHO DE UN TERCERO y de LA CULPA DE LA VÍCTIMA.

Al analizar las pruebas allegadas, se evidencia claramente el rompimiento del nexo causal entre la conducta desplegada por la EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y el daño sufrido por la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVERO, pues el tendido eléctrico situado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali, es preexistente a la edificación levantada, ya que de acuerdo al informe técnico de EMCALI donde mencionan que:

"... Es evidente que el diseño de la fachada del inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul de Cali *es irregular, disminuyendo la distancia de seguridad..."*

Respecto a esto, el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, no debió otorgar licencias para este tipo de construcciones irregulares, y debió conocer de las irregularidades que presentaba la construcción del inmueble, tal y como lo dispone la ley 388 de 1997, generando de esta forma que se configure el eximente de responsabilidad administrativa denominado HECHO DE UN TERCERO.

Y hay que tener presente que, en la producción del accidente, participaron de forma activa las víctimas, quienes manipularon de manera imprudente una varilla de construcción, generando con ello que las redes de distribución de energía produjeran la descarga que los afectó.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

4. EXCESIVO COBRO DE PERJUICIOS E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS MISMOS.

Dentro de las pretensiones de la demanda, se solicita el reconocimiento de perjuicios morales sin tenerse en cuenta la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, según la cual la reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fijó como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima.

Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos. hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

En cuanto a la condena que se pretende se le reconozca igualmente a manera de indemnización daño a la integridad personal, daño a la salud y perjuicio estético cada uno por separado cuando de probarse el daño, todos los anteriores se reducen al DAÑO A LA SALUD, igualmente las cifras solicitadas por señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVERO no corresponden ya que solicitan 100 S.M.L.M.V por daño a la integridad personal, 400 S.M.L.M.V por daño a la salud y 100 S.M.L.M.V por perjuicio estético; se debe aducir que de igual forma este es un perjuicio que de acuerdo a la Jurisprudencia debe ser tasado por el Juez de una manera objetiva, mediante el porcentaje de pérdida de capacidad laboral probado; de esta manera el Juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación de la víctima, considerando las consecuencias del accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima y todo esto de acuerdo al siguiente cuadro.

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de la lesión	**Víctima directa**
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

En lo ateniente a la condena pretendida por perjuicios materiales por la suma de $78.124.200, por lucro cesante pasado por $4.930.520, por lucro cesante futuro por $175.773.786 a favor de la señora VIVIANA VIVEROS, y para su hijo DIEGO VIVEROS ha pretendido por perjuicios materiales la suma de $78.124.200, por lucro cesante futuro o anticipado por $195.179.172, la cual como se ha dicho reiteradamente no

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

corresponde al perjuicio sufrido por las víctimas, toda vez, que no existe una calificación de capacidad de perdida laboral por parte de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, y tampoco hay prueba que demuestre que la señora VIVIANA VIVEROS estuviera trabajando o realizando alguna actividad laboral.

Como lo estableció el CONSEJO DE ESTADO, sección tercera, Consejero Ponente CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA en Sentencia del 18 de Julio de 2019:

" *Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento oficioso por parte del Juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la demanda no poder ser objeto de reconocimiento alguno.*

Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno "

5. GENÉRICA O INNOMINADA.

Solicito reconocer de oficio cualquier otra excepción que se configure, que resulte demostrada dentro del proceso y que extinga la obligación de mi representada.

CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO.

AL HECHO SEGUNDO: ES CIERTO.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

EXCEPCIONES QUE SE PROPONEN FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

1. FALTA DE COBERTURA CONTRACTUAL POR CUANTO EL SINIESTRO NO FUE ORIGINADO POR UNA ACCIÓN U OMISIÓN DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 22155989 vigencia comprendida entre el 20/09/2017 a 20/09/2018.)

El presente proceso se originó por hechos que, presuntamente, tuvieron lugar el día 21 de abril de 2018, cuando señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVERO, se encontraban en la terraza y el tercer piso del inmueble ubicado en la Carrera 25P No. 72-U-59 Barrio Charco Azul, bajando una varilla de construcción, la cual, debido a la construcción irregular del inmueble provocó un acercamiento irregular al tendido eléctrico.

En la póliza **Nro. 22155989** para la vigencia comprendida entre el **20 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2018**, ampara la responsabilidad civil en que incurra al asegurado, durante la vigencia del seguro, por daños a terceros en sus predios o por las operaciones que lleva a cabo dentro y fuera de los mismos en el curso normal de sus negocios.

El accidente donde resultaron lesionados la señora VIVIANA VIVEROS y su hijo DIEGO VIVERO, no obedeció a la ejecución de la actividad asegurada sino al acercamiento irregular del inmueble al tendido eléctrico preexistente, producto de la construcción de una escalera caracol en el antejardín del inmueble. Igualmente, por la conducta imprudente de la víctima, quien manipuló una varilla de construcción, generando con esto que se produjera la descarga eléctrica que los afectó.

La causa eficiente del siniestro fue la construcción irregular de la escalera caracol en el antejardín del inmueble, que no cumplió con las disposiciones técnicas establecidas en el REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE y la conducta IMPRUDENTE DE LA VÍCTIMA.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

Por lo tanto, en el presente asunto no se ha producido un siniestro imputable al asegurado EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en consecuencia, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS no tiene a su cargo obligación indemnizatoria alguna.

2. LIMITE DEL VALOR ASEGURADO Y DEDUCIBLE A CARGO DEL ASEGURADO.

La suma indicada en la caratula de la presente póliza como VALOR ASEGURADO para cada amparo contratado, es el límite máximo de responsabilidad de la compañía para todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro.

En ningún caso y por ningún motivo la responsabilidad de la compañía puede exceder ese límite del valor asegurado durante la vigencia, aunque durante el mismo periodo ocurran uno o más siniestros.

La suma asegurada indicada en las condiciones particulares, representa la cifra máxima por la cual el asegurador será responsable por todo concepto de "indemnización," conforme a los límites de cobertura indicados en dicha condición particular.

Conforme lo establece el artículo 1089 del Código de Comercio, la CUANTÍA MÁXIMA DE LA INDEMNIZACIÓN así: "Dentro de los límites indicados en el artículo 1079, la indemnización no excederá en ningún caso del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo de los perjuicios patrimoniales sufridos por el asegurado o por el beneficiario. Se presume el valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el Asegurado y el Asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, más no que es inferior a él."

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S

Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

El límite del valor asegurado establecido en la Póliza No. 22155989 PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 20 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2018 es de$10.000.000.000,oo para el amparo de PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, y se pactó un DEDUCIBLE que debe asumir el asegurado equivalente a 10% del valor de la pérdida mínimo $70.000.000,oo. De igual forma se precisa que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS solo participa en un porcentaje del 20%.

DEDUCIBLE: Es la suma o porcentaje previamente pactado como tal, que invariablemente se sustrae del valor de la indemnización y que siempre queda a cargo del asegurado. El deducible será el pactado en la carátula de la póliza, se aplicará de acuerdo con el amparo afectado

3. COASEGURO O PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS EN UN PORCENTAJE DE 20% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA.

En la póliza de seguros Póliza N° 22155989 PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 20 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2018 correspondiente a un seguro de responsabilidad civil extracontractual se pactó un COASEGURO o distribución proporcional del riesgo, del cual LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS participa en un porcentaje del 20%.

El artículo 1095 del código de comercio define el COASEGURO así: "Las normas que anteceden se aplicaran igualmente al COASEGURO en virtud del cual dos o más aseguradoras, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro."

El artículo 1092 del código de comercio establece que, en caso de PLURALIDAD O COEXISTENCIA DE SEGUROS, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S
Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

477

En la póliza Nro. 22155989 se pactó un COASEGURO con un porcentaje de participación así:

ALLIANZ SEGUROS S.A. 80%

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 20%

PRUEBAS QUE SE HACEN VALER

1. DOCUMENTALES QUE SE APORTAN

- Poder para actuar. (Se aporta)

- Certificado de existencia y representación legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. (Se aporta)

- Póliza de seguro N° 22155989 PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 20 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2018 suscrita entre el demandado LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y las compañías ALLIANZ SEGUROS S.A. Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. (obra en el proceso)

- Condiciones generales de la póliza N° 22155989 PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 20 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2018 suscrita entre el demandado LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E E.S.P y las compañías ALLIANZ SEGUROS S.A. Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. (Obra en el proceso)

2. **INTERROGATORIO DE PARTE**

- Solicito al señor Juez, se sirva citar a la señora VIVIANA VIVEROS, ciudadana mayor de edad, domiciliada y residente en Cali, a fin de que absuelva el interrogatorio de parte, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro.

21

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S
Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

La señora VIVIANA VIVEROS podrá ser citada por medio de su apoderado judicial.

3. **CONTRADICCION DEL DICTAMEN PERICIAL**

- Solicito al señor Juez, se sirva citar al señor DOLCEY CASAS RODRÍGUEZ en su calidad de PERITO, a fin de que sustente el Dictamen pericial elaborado por él y aportado por la parte demandante, a fin de que exprese la razón y conclusiones de su dictamen, permitiendo que se le formulen preguntas relacionadas con el mismo.

El perito se puede citar a través del apoderado de la parte demandante.

4.**OFICIO A EMCALI EICE E.S.P.**

Solicito al Honorable Despacho, se sirva oficiar al señor GERENTE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P., con el fin de que informe si con anterioridad al 21 de abril de 2018 se solicitó reubicación, reparación, encauchamiento de tendido eléctrico a la altura de la carrera 25P No.72-U-59 del BARRIO CHARCO AZUL de la ciudad de cali.

Líbrese el oficio respectivo.

NOTIFICACIONES

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - REPRESENTANTE LEGAL:

Calle 10 Nro. 4 - 47 Piso 8 de Cali.

SANCLEMENTE
Jurídico S.A.S
Calle 22 Norte No. 8N-63 Edif. Apolo Ofic. 202 B/Santa Monica
dsancle@emcali.net.co Tel: 660 9117 Cel: 315 556 7213
Cali - Colombia

Diana Sanclemente Torres
Abogada Especialista en Responsabilidad
Civil y Seguros

Las personales las recibiré en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada ubicada en la **Calle 22 Norte No. 8N-63 oficina 202 de Cali.**

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: **dsancle@emcali.net.co**

Del Señor Juez, Atentamente,

DIANA SANCLEMENTE TORRES
C.C. 38.864.811 de Buga valle
T.P. 44.379 del C.S. de la J.

NOTARIA 8a. DE CALI
EL ANTERIOR ESCRITO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR
Diana Sanclemente T CON C.C. 38864811
EXPEDIDA EN Buga Y T.P. 44379
SE FIRMA EN CALI
A LOS 03 MAR 2020
EL NOTARIO
República de Colombia Notaría 8 Cali
Luis Orison Arias Bonilla
Notario Titular

EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO DEL
CIRCULO DE CALI DEJA CONSTANCIA QUE
EL OTORGAMIENTO Y FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO
SE REALIZO FUERA DEL DESPACHO DE LA NOTARIA
EL DÍA 03 DEL MES 03 DEL AÑO 2020
EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
Cl 22N #8N-63 202
República de Colombia Notaría 8 Cali
Luis Orison Arias Bonilla
Notario Titular

Señores:
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI.
E. S. D.

PROCESO:	**EJECUTIVO.**
DEMANDANTE:	**GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA.**
DEMANDADOS:	**LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**
RADICADO:	**76001-33-33-013-2017-00240-01.**

OSCAR GERARDO TORRES TRUJILLO, identificado como aparece junto a mi firma, actuando en calidad de apoderado del señor **GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA**, tal como fue reconocido dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me permito presentar la actualización del crédito, dando así cumplimiento a lo ordenado por su Despacho mediante el Auto Interlocutorio Nro. 679 del 23 de noviembre de 2022.

MONTO DE LA PENSIÓN:

De conformidad con el Certificado de Sueldos expedido por **LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI**, el cual fue anexado a la entidad al momento de solicitar el respectivo cumplimiento de la sentencia; el Docente **GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA** tiene derecho a una mesada pensional liquidada con la totalidad de los Factores Salariales devengados entre el **19 de enero de 2004 y el 19 de enero de 2005**, fecha en la cual mi mandante adquirió el status de pensionado, conforme a la siguiente liquidación:

FACTOR SALARIAL	AÑO	VALOR
SUELDO BASICO MENSUAL	2004	$ 17.514.469,80
SUELDO BASICO MENSUAL	2005	$ 972.514,20
PRIMA VACACIONES	2004	$ 741.445,55
PRIMA VACACIONES	2005	$ 40.521,45
PRIMA NAVIDAD	2004	$ 1.463.654,55
PRIMA NAVIDAD	2005	$ 83.419,55

TOTAL DEVENGADO **$20´816.025**

Pensión: ($20´816.025 / 12 = $1´734.668 x 75%) = $ 1´301.001,57.

Es **UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE**, efectivos a partir del 18 de enero de 2005, fecha en que efectivamente mi mandante adquirió el status de pensionado y en la que debió pagársele el valor de pensión aquí establecido; existiendo entonces una diferencia de **$148.733,** entre la cuantía pensional reconocida por parte el FNPSM en la

Resolución Nº 950 del 01 de junio de 2005 ($1´152.268), y la que debió establecerse con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año en que adquirió el status de pensionado **($1´301.001)**.

SE DEBE APLICAR COMO RETROACTIVO LAS MESADAS CAUSADAS DESDE EL 18 DE JULIO DE 2005 (FECHA ORDENADA POR LA SENTENCIA) HASTA EL 05 DE MAYO DE 2015 (FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA):

2005	ENERO	56,45%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	FEBRERO	57,02%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	MARZO	57,46%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	ABRIL	57,72%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	MAYO	57,95%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	JUNIO	58,18%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	MESADA ADC.	58,18%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	JULIO	58,21%	85,12%	$ 69.409,00	$ 101.496,20	$ 170.905,20
	AGOSTO	58,21%	85,12%	$ 148.733,57	$ 217.491,87	$ 366.225,44
	SEPTIEMBRE	58,46%	85,12%	$ 148.733,57	$ 216.561,78	$ 365.295,35
	OCTUBRE	58,60%	85,12%	$ 148.733,57	$ 216.044,39	$ 364.777,96
	NOVIEMBRE	58,66%	85,12%	$ 148.733,57	$ 215.823,41	$ 364.556,98
	DICIEMBRE	58,70%	85,12%	$ 148.733,57	$ 215.676,35	$ 364.409,92
	MESADA ADC.	58,70%	85,12%	$ 148.733,57	$ 215.676,35	$ 364.409,92
	TOTAL 2005	**4,85%**		**$ 961.810,42**	**$ 1.398.770,34**	**$ 2.360.580,76**
2006	ENERO	59,02%	85,12%	$ 155.947,15	$ 224.910,56	$ 380.857,71
	FEBRERO	59,41%	85,12%	$ 155.947,15	$ 223.434,12	$ 379.381,27
	MARZO	59,83%	85,12%	$ 155.947,15	$ 221.865,64	$ 377.812,79
	ABRIL	60,09%	85,12%	$ 155.947,15	$ 220.905,66	$ 376.852,81
	MAYO	60,29%	85,12%	$ 155.947,15	$ 220.172,85	$ 376.120,00
	JUNIO	60,48%	85,12%	$ 155.947,15	$ 219.481,17	$ 375.428,32
	MESADA ADC.	60,48%	85,12%	$ 155.947,15	$ 219.481,17	$ 375.428,32
	JULIO	60,73%	85,12%	$ 155.947,15	$ 218.577,66	$ 374.524,81
	AGOSTO	60,96%	85,12%	$ 155.947,15	$ 217.752,97	$ 373.700,12
	SEPTIEMBRE	61,14%	85,12%	$ 155.947,15	$ 217.111,89	$ 373.059,04
	OCTUBRE	61,05%	85,12%	$ 155.947,15	$ 217.431,96	$ 373.379,11
	NOVIEMBRE	61,19%	85,12%	$ 155.947,15	$ 216.934,49	$ 372.881,63
	DICIEMBRE	61,33%	85,12%	$ 155.947,15	$ 216.439,28	$ 372.386,43
	MESADA ADC.	61,33%	85,12%	$ 155.947,15	$ 216.439,28	$ 372.386,43
	TOTAL 2006	**4,48%**		**$ 2.183.260,07**	**$ 3.070.938,72**	**$ 5.254.198,80**
2007	ENERO	61,80%	85,12%	$ 162.933,58	$ 224.415,96	$ 387.349,54
	FEBRERO	62,53%	85,12%	$ 162.933,58	$ 221.796,04	$ 384.729,62
	MARZO	63,29%	85,12%	$ 162.933,58	$ 219.132,66	$ 382.066,25
	ABRIL	63,85%	85,12%	$ 162.933,58	$ 217.210,75	$ 380.144,33
	MAYO	64,05%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.532,50	$ 379.466,08
	JUNIO	64,12%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.296,11	$ 379.229,69
	MESADA ADC.	64,12%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.296,11	$ 379.229,69
	JULIO	64,23%	85,12%	$ 162.933,58	$ 215.925,68	$ 378.859,26
	AGOSTO	64,14%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.228,66	$ 379.162,24
	SEPTIEMBRE	64,20%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.026,58	$ 378.960,16
	OCTUBRE	64,20%	85,12%	$ 162.933,58	$ 216.026,58	$ 378.960,16
	NOVIEMBRE	64,51%	85,12%	$ 162.933,58	$ 214.988,47	$ 377.922,05
	DICIEMBRE	64,82%	85,12%	$ 162.933,58	$ 213.960,30	$ 376.893,88
	MESADA ADC.	64,82%	85,12%	$ 162.933,58	$ 213.960,30	$ 376.893,88

	TOTAL 2007	**5,69%**		**$ 2.281.070,13**	**$ 3.038.796,69**	**$ 5.319.866,81**
2008	ENERO	65,51%	85,12%	$ 172.204,50	$ 223.752,82	$ 395.957,32
	FEBRERO	66,50%	85,12%	$ 172.204,50	$ 220.421,76	$ 392.626,26
	MARZO	67,04%	85,12%	$ 172.204,50	$ 218.646,29	$ 390.850,79
	ABRIL	67,51%	85,12%	$ 172.204,50	$ 217.124,09	$ 389.328,59
	MAYO	68,14%	85,12%	$ 172.204,50	$ 215.116,63	$ 387.321,13
	JUNIO	68,73%	85,12%	$ 172.204,50	$ 213.270,00	$ 385.474,50
	MESADA ADC.	68,73%	85,12%	$ 172.204,50	$ 213.270,00	$ 385.474,50
	JULIO	69,06%	85,12%	$ 172.204,50	$ 212.250,90	$ 384.455,40
	AGOSTO	69,19%	85,12%	$ 172.204,50	$ 211.852,10	$ 384.056,61
	SEPTIEMBRE	69,06%	85,12%	$ 172.204,50	$ 212.250,90	$ 384.455,40
	OCTUBRE	69,30%	85,12%	$ 172.204,50	$ 211.515,83	$ 383.720,33
	NOVIEMBRE	69,49%	85,12%	$ 172.204,50	$ 210.937,50	$ 383.142,00
	DICIEMBRE	69,80%	85,12%	$ 172.204,50	$ 210.000,68	$ 382.205,18
	MESADA ADC.	69,80%	85,12%	$ 172.204,50	$ 210.000,68	$ 382.205,18
	TOTAL 2008	**7,67%**		**$ 2.410.863,02**	**$ 3.000.410,18**	**$ 5.411.273,19**
2009	ENERO	70,21%	85,12%	$ 185.412,59	$ 224.787,34	$ 410.199,93
	FEBRERO	80,80%	85,12%	$ 185.412,59	$ 195.325,73	$ 380.738,32
	MARZO	71,15%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.817,56	$ 407.230,15
	ABRIL	71,38%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.102,82	$ 406.515,41
	MAYO	71,39%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.071,85	$ 406.484,44
	JUNIO	71,35%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.195,79	$ 406.608,37
	MESADA ADC.	71,35%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.195,79	$ 406.608,37
	JULIO	71,32%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.288,83	$ 406.701,42
	AGOSTO	71,35%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.195,79	$ 406.608,37
	SEPTIEMBRE	71,28%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.413,01	$ 406.825,60
	OCTUBRE	71,19%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.692,93	$ 407.105,51
	NOVIEMBRE	71,14%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.848,74	$ 407.261,33
	DICIEMBRE	71,20%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.661,79	$ 407.074,37
	MESADA ADC.	71,20%	85,12%	$ 185.412,59	$ 221.661,79	$ 407.074,37
	TOTAL 2009	**2,00%**		**$ 2.595.776,21**	**$ 3.077.259,75**	**$ 5.673.035,96**
2010	ENERO	71,69%	85,12%	$ 189.120,84	$ 35.428,83	$ 224.549,67
	FEBRERO	72,28%	85,12%	$ 189.120,84	$ 33.595,90	$ 222.716,74
	MARZO	72,46%	85,12%	$ 189.120,84	$ 33.042,64	$ 222.163,48
	ABRIL	72,79%	85,12%	$ 189.120,84	$ 32.035,44	$ 221.156,28
	MAYO	72,87%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.792,65	$ 220.913,49
	JUNIO	72,95%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.550,39	$ 220.671,22
	MESADA ADC.	72,95%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.550,39	$ 220.671,22
	JULIO	72,92%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.641,17	$ 220.762,01
	AGOSTO	73,00%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.399,24	$ 220.520,08
	SEPTIEMBRE	72,90%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.701,74	$ 220.822,58
	OCTUBRE	72,84%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.883,63	$ 221.004,47
	NOVIEMBRE	72,98%	85,12%	$ 189.120,84	$ 31.459,67	$ 220.580,51
	DICIEMBRE	73,45%	85,12%	$ 189.120,84	$ 30.048,20	$ 219.169,04
	MESADA ADC.	73,45%	85,12%	$ 189.120,84	$ 30.048,20	$ 219.169,04
	TOTAL 2010	**3,17%**		**$ 2.647.691,73**	**$ 447.178,09**	**$ 3.094.869,82**
2011	ENERO	74,12%	85,12%	$ 195.115,97	$ 28.956,77	$ 224.072,74
	FEBRERO	75,57%	85,12%	$ 195.115,97	$ 24.657,37	$ 219.773,34
	MARZO	74,77%	85,12%	$ 195.115,97	$ 27.008,83	$ 222.124,80
	ABRIL	74,86%	85,12%	$ 195.115,97	$ 26.741,78	$ 221.857,75
	MAYO	75,07%	85,12%	$ 195.115,97	$ 26.121,16	$ 221.237,13

	JUNIO	75,31%	85,12%	$ 195.115,97	$ 25.416,12	$ 220.532,08
	MESADA ADC.	75,31%	85,12%	$ 195.115,97	$ 25.416,12	$ 220.532,08
	JULIO	75,42%	85,12%	$ 195.115,97	$ 25.094,47	$ 220.210,44
	AGOSTO	75,39%	85,12%	$ 195.115,97	$ 25.182,10	$ 220.298,07
	SEPTIEMBRE	75,62%	85,12%	$ 195.115,97	$ 24.512,06	$ 219.628,02
	OCTUBRE	75,77%	85,12%	$ 195.115,97	$ 24.077,26	$ 219.193,23
	NOVIEMBRE	75,87%	85,12%	$ 195.115,97	$ 23.788,36	$ 218.904,33
	DICIEMBRE	76,19%	85,12%	$ 195.115,97	$ 22.868,95	$ 217.984,92
	MESADA ADC.	76,19%	85,12%	$ 195.115,97	$ 22.868,95	$ 217.984,92
	TOTAL 2011	**3,73%**		**$ 2.731.623,56**	**$ 352.710,30**	**$ 3.084.333,86**
2012	ENERO	76,75%	85,12%	$ 202.393,79	$ 22.072,13	$ 224.465,93
	FEBRERO	77,22%	85,12%	$ 202.393,79	$ 20.705,92	$ 223.099,71
	MARZO	77,31%	85,12%	$ 202.393,79	$ 20.446,20	$ 222.839,99
	ABRIL	77,42%	85,12%	$ 202.393,79	$ 20.129,58	$ 222.523,38
	MAYO	77,66%	85,12%	$ 202.393,79	$ 19.441,90	$ 221.835,69
	JUNIO	77,72%	85,12%	$ 202.393,79	$ 19.270,64	$ 221.664,43
	MESADA ADC.	77,72%	85,12%	$ 202.393,79	$ 19.270,64	$ 221.664,43
	JULIO	77,70%	85,12%	$ 202.393,79	$ 19.327,70	$ 221.721,49
	AGOSTO	77,73%	85,12%	$ 202.393,79	$ 19.242,12	$ 221.635,92
	SEPTIEMBRE	77,96%	85,12%	$ 202.393,79	$ 18.588,24	$ 220.982,04
	OCTUBRE	78,08%	85,12%	$ 202.393,79	$ 18.248,62	$ 220.642,42
	NOVIEMBRE	77,98%	85,12%	$ 202.393,79	$ 18.531,57	$ 220.925,36
	DICIEMBRE	78,05%	85,12%	$ 202.393,79	$ 18.333,43	$ 220.727,22
	MESADA ADC.	78,05%	85,12%	$ 202.393,79	$ 18.333,43	$ 220.727,22
	TOTAL 2012	**2,44%**		**$ 2.833.513,12**	**$ 271.942,11**	**$ 3.105.455,23**
2013	ENERO	78,28%	85,12%	$ 207.332,20	$ 18.116,41	$ 225.448,61
	FEBRERO	78,63%	85,12%	$ 207.332,20	$ 17.112,88	$ 224.445,09
	MARZO	78,79%	85,12%	$ 207.332,20	$ 16.657,10	$ 223.989,30
	ABRIL	78,99%	85,12%	$ 207.332,20	$ 16.089,97	$ 223.422,17
	MAYO	79,21%	85,12%	$ 207.332,20	$ 15.469,43	$ 222.801,63
	JUNIO	79,39%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.964,27	$ 222.296,47
	MESADA ADC.	79,39%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.964,27	$ 222.296,47
	JULIO	79,43%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.852,33	$ 222.184,53
	AGOSTO	79,50%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.656,69	$ 221.988,89
	SEPTIEMBRE	79,73%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.016,31	$ 221.348,52
	OCTUBRE	79,52%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.600,86	$ 221.933,06
	NOVIEMBRE	79,35%	85,12%	$ 207.332,20	$ 15.076,33	$ 222.408,53
	DICIEMBRE	79,56%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.489,28	$ 221.821,48
	MESADA ADC.	79,56%	85,12%	$ 207.332,20	$ 14.489,28	$ 221.821,48
	TOTAL 2013	**1,94%**		**$ 2.902.650,84**	**$ 215.555,40**	**$ 3.118.206,24**
2014	ENERO	79,95%	85,12%	$ 211.354,45	$ 13.667,32	$ 225.021,77
	FEBRERO	80,45%	85,12%	$ 211.354,45	$ 12.268,80	$ 223.623,25
	MARZO	80,77%	85,12%	$ 211.354,45	$ 11.382,84	$ 222.737,29
	ABRIL	81,14%	85,12%	$ 211.354,45	$ 10.367,15	$ 221.721,60
	MAYO	81,53%	85,12%	$ 211.354,45	$ 9.306,54	$ 220.660,99
	JUNIO	81,61%	85,12%	$ 211.354,45	$ 9.090,24	$ 220.444,68
	MESADA ADC.	81,61%	85,12%	$ 211.354,45	$ 9.090,24	$ 220.444,68
	JULIO	81,73%	85,12%	$ 211.354,45	$ 8.766,57	$ 220.121,02
	AGOSTO	81,90%	85,12%	$ 211.354,45	$ 8.309,66	$ 219.664,11
	SEPTIEMBRE	82,01%	85,12%	$ 211.354,45	$ 8.015,03	$ 219.369,47
	OCTUBRE	82,14%	85,12%	$ 211.354,45	$ 7.667,84	$ 219.022,29
	NOVIEMBRE	82,25%	85,12%	$ 211.354,45	$ 7.374,92	$ 218.729,37

	DICIEMBRE	82,47%	85,12%	$ 211.354,45	$ 6.791,43	$ 218.145,88
	MESADA ADC.	82,47%	85,12%	$ 211.354,45	$ 6.791,43	$ 218.145,88
	TOTAL 2014	**3,66%**		**$ 2.958.962,27**	**$ 128.890,01**	**$ 3.087.852,27**
2015	ENERO	83,00%	85,12%	$ 219.090,02	$ 5.596,03	$ 224.686,05
	FEBRERO	83,96%	85,12%	$ 219.090,02	$ 3.026,97	$ 222.116,99
	MARZO	84,45%	85,12%	$ 219.090,02	$ 1.738,19	$ 220.828,21
	ABRIL	84,90%	85,12%	$ 219.090,02	$ 567,72	$ 219.657,74
	MAYO	85,12%	85,12%	$ 219.090,02	$ 0,00	$ 219.090,02
	JUNIO	85,21%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	MESADA ADC.	85,21%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	JULIO	85,37%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	AGOSTO	85,78%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	SEPTIEMBRE	86,39%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	OCTUBRE	86,98%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	NOVIEMBRE	87,51%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	DICIEMBRE	88,05%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	MESADA ADC.	88,05%		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	TOTAL 2015	**6,77%**		**$ 1.095.450,10**	**$ 10.928,92**	**$ 1.106.379,02**

TOTAL 2005	$ 961.810,42	$ 1.398.770,34	$ 2.360.580,76
TOTAL 2006	$ 2.183.260,07	$ 3.070.938,72	$ 5.254.198,80
TOTAL 2007	$ 2.281.070,13	$ 3.038.796,69	$ 5.319.866,81
TOTAL 2008	$ 2.410.863,02	$ 3.000.410,18	$ 5.411.273,19
TOTAL 2009	$ 2.595.776,21	$ 3.077.259,75	$ 5.673.035,96
TOTAL 2010	$ 2.647.691,73	$ 447.178,09	$ 3.094.869,82
TOTAL 2011	$ 2.731.623,56	$ 352.710,30	$ 3.084.333,86
TOTAL 2012	$ 2.833.513,12	$ 271.942,11	$ 3.105.455,23
TOTAL 2013	$ 2.902.650,84	$ 215.555,40	$ 3.118.206,24
TOTAL 2014	$ 2.958.962,27	$ 128.890,01	$ 3.087.852,27
TOTAL 2015	$ 1.095.450,10	$ 10.928,92	$ 1.106.379,02
TOTAL FINAL	**$ 25.602.671,46**	**$ 15.013.380,51**	**$ 40.616.051,97**

DIFERENCIA EN LAS MESADAS PENSIONALES CAUSADA DESDE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA JUDICIAL (05 DE MAYO DE 2015) HASTA LA FECHA EN LA CUAL SE INCLUYO EN LA NOMINA DE PENSIONADOS, EL ACTO ADMINISTRATIVO Nro. 4143.010.21.0.03464 DEL 20 DE MAYO DE 2019.

AÑO	I.P.C. a APLICAR	VALOR MESADA PENSIONAL	MESADAS ADEUDADAS MÁS PRIMA ADICIONAL	TOTAL
2.015	6,77%	$ 219.090	26 DÍAS Y 9 MESADAS	$ 2.161.688
2.016	5,75%	$ 233.922	14 MESADAS	$ 3.274.914
2.017	4,09%	$ 247.373	14 MESADAS	$ 3.463.221
2.018	3,18%	$ 257.490	14 MESADAS	$ 3.604.867
2.019	3,80%	$ 265.679	8 MESADAS	$ 2.125.429

TOTAL RETROACTIVIDAD **$ 14.630.118,75**

VALOR DEL CRÉDITO POR LOS INTERESES GENERADOS DESDE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA 05 DE MAYO DE 2015, HASTA EL MES DE JULIO DE 2019, FECHA EN LA CUAL SE INCLUYO EN LA NOMINA DE PENSIONADOS, EL ACTO ADMINISTRATIVO Nro. 4143.010.21.0.03464 DEL 20 DE MAYO DE 2019.

RES. NO.	DESDE	HASTA	DÍAS	TASA MENSUAL INTERES COMERCIAL	TASA NOMINAO EFECTIVA DIARIA	DIFERENCIA PENSIONAL	CAPITAL BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR INTERESES CORRIENTES MENSUALES
369	01-may-15	31-may-15	31	19,37%	0,0485%	$ -	$ 40.616.051	$ 610.662
369	01-jun-15	30-jun-15	30	19,37%	0,0485%	$ 219.090	$ 40.835.141	$ 594.151
913	01-jul-15	31-jul-15	31	19,26%	0,0483%	$ 219.090	$ 41.054.231	$ 614.705
913	01-ago-15	31-ago-15	31	19,26%	0,0483%	$ 219.090	$ 41.273.321	$ 617.985
913	01-sep-15	30-sep-15	30	19,26%	0,0483%	$ 219.090	$ 41.492.411	$ 601.225
1341	01-oct-15	31-oct-15	31	19,33%	0,0484%	$ 219.090	$ 41.711.501	$ 625.839
1341	01-nov-15	30-nov-15	30	19,33%	0,0484%	$ 219.090	$ 41.930.591	$ 608.832
1341	01-dic-15	31-dic-15	31	19,33%	0,0484%	$ 219.090	$ 42.149.681	$ 632.414
1788	01-ene-16	31-ene-16	31	19,68%	0,0492%	$ 233.922	$ 42.383.603	$ 646.435
1788	01-feb-16	29-feb-16	29	19,68%	0,0492%	$ 233.922	$ 42.617.525	$ 608.067
1788	01-mar-16	31-mar-16	31	19,68%	0,0492%	$ 233.922	$ 42.851.447	$ 653.570
334	01-abr-16	30-abr-16	30	20,54%	0,0512%	$ 233.922	$ 43.085.369	$ 661.791
334	01-may-16	31-may-16	31	20,54%	0,0512%	$ 233.922	$ 43.319.291	$ 687.564
334	01-jun-16	30-jun-16	30	20,54%	0,0512%	$ 233.922	$ 43.553.213	$ 668.977
811	01-jul-16	31-jul-16	31	21,34%	0,0530%	$ 233.922	$ 43.787.135	$ 719.423
811	01-ago-16	31-ago-16	31	21,34%	0,0530%	$ 233.922	$ 44.021.057	$ 723.266
811	01-sep-16	30-sep-16	30	21,34%	0,0530%	$ 233.922	$ 44.254.979	$ 703.654
1233	01-oct-16	31-oct-16	31	21,99%	0,0545%	$ 233.922	$ 44.488.901	$ 751.640
1233	01-nov-16	30-nov-16	30	21,99%	0,0545%	$ 233.922	$ 44.722.823	$ 731.218
1233	01-dic-16	31-dic-16	31	21,99%	0,0545%	$ 233.922	$ 44.956.745	$ 759.544
1612	01-ene-17	31-ene-17	31	22,34%	0,0553%	$ 247.343	$ 45.204.088	$ 774.934
1612	01-feb-17	29/02/2017	28	22,34%	0,0553%	$ 247.343	$ 45.451.431	$ 703.770
1612	01-mar-17	31-mar-17	31	22,34%	0,0553%	$ 247.343	$ 45.698.774	$ 783.414
488	01-abr-17	30-abr-17	30	22,33%	0,0552%	$ 247.343	$ 45.946.117	$ 760.868
488	01-may-17	31-may-17	15	22,33%	0,0552%	$ 247.343	$ 46.193.460	$ 382.482
488	01-jun-17	30-jun-17	30	22,33%	0,0552%	$ 247.343	$ 46.440.803	$ 769.060
907	01-jul-17	31-jul-17	31	21,98%	0,0552%	$ 247.343	$ 46.688.146	$ 798.928
907	01-ago-17	31-ago-17	31	21,98%	0,0544%	$ 247.343	$ 46.935.489	$ 791.520
1155	01-sep-17	30-sep-17	30	21,48%	0,0533%	$ 247.343	$ 47.182.832	$ 754.453
1298	01-oct-17	31-oct-17	31	21,15%	0,0526%	$ 247.343	$ 47.430.175	$ 773.396
1447	01-nov-17	30-nov-17	30	20,96%	0,0521%	$ 247.343	$ 47.677.518	$ 745.200
1619	17-dic-17	31-dic-17	15	20,77%	0,0517%	$ 247.343	$ 47.924.861	$ 371.657
1619	01-dic-17	31-dic-17	15	20,77%	0,0517%	$ 247.343	$ 48.172.204	$ 373.575
1890	01-ene-18	31-ene-18	31	20,69%	0,0515%	$ 257.490	$ 48.429.694	$ 773.180
131	01-feb-18	28-feb-18	28	21,01%	0,0523%	$ 257.490	$ 48.687.184	$ 712.975
259	01-mar-18	31-mar-18	31	20,68%	0,0515%	$ 257.490	$ 48.944.674	$ 781.402
398	25-abr-18	30-abr-18	6	20,48%	0,0511%	$ 257.490	$ 49.202.164	$ 150.854

527	01-may-18	31-may-18	31	20,44%	0,051%	$ 257.490	$ 49.459.654	$ 781.957
687	01-jun-18	30-jun-18	30	20,28%	0,0506%	$ 257.490	$ 49.717.144	$ 754.706
687	01-jun-18	30-jun-18	30	20,28%	0,0506%	$ 257.490	$ 49.974.634	$ 758.615
820	01-jul-18	31-jul-18	31	20,03%	0,05%	$ 257.490	$ 50.232.124	$ 778.598
954	01-ago-18	31-ago-18	31	19,94%	0,0498%	$ 257.490	$ 50.489.614	$ 779.459
1112	01-sep-18	30-sep-18	30	19,81%	0,0495%	$ 257.490	$ 50.747.104	$ 753.594
1294	01-oct-18	31-oct-18	31	19,63%	0,0491%	$ 257.490	$ 51.004.594	$ 776.341
1521	01-nov-18	30-nov-18	30	19,49%	0,0488%	$ 257.490	$ 51.262.084	$ 750.477
1708	01-dic-18	31-dic-18	31	19,40%	0,0486%	$ 257.490	$ 51.519.574	$ 776.194
1708	01-dic-18	31-dic-18	31	19,40%	0,0486%	$ 257.490	$ 51.777.064	$ 780.073
1872	01-ene-19	31-ene-19	31	19,16%	0,048%	$ 265.679	$ 52.042.743	$ 774.396
111	01-feb-19	28-feb-19	28	19,70%	0,0493%	$ 265.679	$ 52.308.422	$ 722.065
263	01-mar-19	31-mar-19	31	19,37%	0,0485%	$ 265.679	$ 52.574.101	$ 790.452
389	01-abr-19	30-abr-19	30	19,32%	0,0484%	$ 265.679	$ 52.839.780	$ 767.234
574	01-may-19	31-may-19	31	19,34%	0,0485%	$ 265.679	$ 53.105.459	$ 798.441
697	01-jun-19	30-jun-19	30	19,30%	0,0484%	$ 265.679	$ 53.371.138	$ 774.949
697	01-jun-19	30-jun-19	30	19,30%	0,0484%	$ 265.679	$ 53.636.817	$ 778.807
829	01-jul-19	31-jul-19	31	19,28%	0,0483%	$ 265.679	$ 53.902.496	$ 807.082
TOTAL INTERESES MORATORIOS								**$ 38.326.070,63**

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO HASTA EL MES DE JULIO DE 2019, FECHA EN LA CUAL SE INCLUYO EN LA NOMINA DE PENSIONADOS, EL ACTO ADMINISTRATIVO Nro. 4143.010.21.0.03464 DEL 20 DE MAYO DE 2019.

CONCEPTO	VALOR
RETROACTIVO	$ 25.602.671
INDEXACIÓN	$ 15.013.380
MESADAS POSTERIORES	$ 14.630.118
INTERESES	$ 38.326.070
TOTAL	$ 93.572.239
ABONO:	$ 33.078.595
TOTAL ADEUDADO	**$ 60.493.644**

INTERESES GENERADOS DESDE LA FECHA EN LA CUAL SE INCLUYO EN LA NOMINA DE PENSIONADOS, EL ACTO ADMINISTRATIVO Nro. 4143.010.21.0.03464 DEL 20 DE MAYO DE 2019 HASTA LA FECHA.

RES. NO.	DESDE	HASTA	DÍAS	TASA MENSUAL INTERES COMERCIAL	TASA NOMINA O EFECTIVA DIARIA	DIFERENCIA PENSIONAL	CAPITAL BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR INTERESES CORRIENTES MENSUALES
1018	01-ago-19	31-ago-19	31	19,32%	0,0484%	$ -	$ 20.823.901	$ 312.442
1145	01-sep-19	30-sep-19	30	19,32%	0,0484%	$ -	$ 20.823.901	$ 302.363
1293	01-oct-19	31-oct-19	31	19,10%	0,0479%	$ -	$ 20.823.901	$ 309.214
1474	01-nov-19	30-nov-19	30	19,03%	0,0477%	$ -	$ 20.823.901	$ 297.990
1603	01-dic-19	31-dic-19	31	18,91%	0,0475%	$ -	$ 20.823.901	$ 306.632

1603	01-dic-19	31-dic-19	31	18,91%	0,0475%	$ -	$ 20.823.901	$ 306.632
1768	01-ene-20	31-ene-20	31	18,77%	0,0471%	$ -	$ 20.823.901	$ 304.050
94	01-feb-20	29-feb-20	29	19,06%	0,0478%	$ -	$ 20.823.901	$ 288.661
205	01-mar-20	31-mar-20	31	18,95%	0,0476%	$ -	$ 20.823.901	$ 307.277
351	01-abr-20	30-abr-20	30	18,69%	0,047%	$ -	$ 20.823.901	$ 293.617
437	25-may-20	31-may-20	31	18,19%	0,0458%	$ -	$ 20.823.901	$ 295.658
505	01-jun-20	30-jun-20	30	18,12%	0,0456%	$ -	$ 20.823.901	$ 284.871
505	01-jun-20	30-jun-20	30	18,12%	0,0456%	$ -	$ 20.823.901	$ 284.871
605	01-jul-20	31-jul-20	31	18,12%	0,0456%	$ -	$ 20.823.901	$ 294.367
685	01-ago-20	31-ago-20	31	18,29%	0,046%	$ -	$ 20.823.901	$ 296.949
769	01-sep-20	30-sep-20	30	18,35%	0,0462%	$ -	$ 20.823.901	$ 288.619
869	01-oct-20	31-oct-20	31	18,09%	0,0456%	$ -	$ 20.823.901	$ 294.367
947	01-nov-20	30-nov-20	30	17,84%	0,045%	$ -	$ 20.823.901	$ 281.123
1034	01-dic-20	31-dic-20	31	17,46%	0,0441%	$ -	$ 20.823.901	$ 284.684
1034	01-dic-20	31-dic-20	31	17,46%	0,0441%	$ -	$ 20.823.901	$ 284.684
1215	01-ene-21	31-ene-21	31	17,32%	0,0438%	$ -	$ 20.823.901	$ 282.747
1215	01-feb-21	28-feb-21	28	17,32%	0,0438%	$ -	$ 20.823.901	$ 255.384
161	01-mar-21	31-mar-21	31	17,41%	0,0444%	$ -	$ 20.823.901	$ 286.620
305	01-abr-21	30-abr-21	30	17,31%	0,0437%	$ -	$ 20.823.901	$ 273.001
407	01-may-21	31-may-21	31	17,22%	0,0435%	$ -	$ 20.823.901	$ 280.810
509	01-jun-21	30-jun-21	30	17,21%	0,0435%	$ -	$ 20.823.901	$ 271.752
622	01-jul-21	30-jul-21	30	17,21%	0,0434%	$ -	$ 20.823.901	$ 271.127
804	01-ago-21	31-ago-21	31	17,24%	0,0436%	$ -	$ 20.823.901	$ 281.456
931	01-sep-21	30-sep-21	30	17,19%	0,0435%	$ -	$ 20.823.901	$ 271.752
931	01-oct-21	31-oct-21	31	17,19%	0,0435%	$ -	$ 20.823.901	$ 280.810
1045	01-nov-21	30-nov-21	30	17,46%	0,0441%	$ -	$ 20.823.901	$ 275.500
1045	01-dic-21	31-dic-21	31	17,46%	0,0441%	$ -	$ 20.823.901	$ 284.684
1597	01-ene-22	31-ene-22	31	17,66%	0,0446%	$ -	$ 20.823.901	$ 287.911
1597	01-feb-22	28-feb-22	28	17,66%	0,0446%	$ -	$ 20.823.901	$ 260.049
256	01-mar-22	31-mar-22	31	18,47%	0,0464%	$ -	$ 20.823.901	$ 299.531
382	01-abr-22	30-abr-22	30	19,05%	0,0478%	$ -	$ 20.823.901	$ 298.615
617	01-may-22	31-may-22	31	20,40%	0,0509%	$ -	$ 20.823.901	$ 328.580
617	01-jun-22	30-jun-22	30	20,40%	0,0509%	$ -	$ 20.823.901	$ 317.981
801	01-jul-22	31-jul-22	31	21,28%	0,0529%	$ -	$ 20.823.901	$ 341.491
973	01-ago-22	31-ago-22	31	22,21%	0,0555%	$ -	$ 20.823.901	$ 358.275
1126	01-sep-22	30-sep-22	30	23,50%	0,0578%	$ -	$ 20.823.901	$ 361.086
1537	01-oct-22	31-oct-22	31	25,78%	0,0629%	$ -	$ 20.823.901	$ 406.045
1715	01-nov-22	30-nov-22	30	28,84%	0,0694%	$ -	$ 20.823.901	$ 433.554

1715	01-dic-22	31-dic-22	31	28,84%	0,0694%	$ -	$ 20.823.901	$ 448.005
1868	01-ene-23	31-ene-23	31	28,84%	0,0694%	$ -	$ 20.823.901	$ 448.005
TOTAL INTERESES MORATORIOS								**$ 13.823.842,56**

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO HASTA LA FECHA (ENERO 2023):

CONCEPTO	VALOR
SALDO PENDIENTE	$ 60.493.644
INTERESES	$ 13.823.942
TOTAL ADEUDADO	**$ 74.317.586**

ANEXOS

1. Copia de la Resolución Nro. 4143.010.21.0.03464 del 20 de mayo de 2019 proferida por LA SECREARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI.

2. Copia del Desprendible de pago del mes de julio de 2019, fecha en la cual se incluyó en la nómina de pensionados de la FIDUPREVISORA el acto administrativo Nro. 4143.010.21.0.03464 del 20 de mayo de 2019 proferida por LA SECREARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI.

NOTIFICACIONES

Gustosamente las recibiré en la ciudad de Cali, en la Avenida 2 Norte No. 7 N – 55 Oficina 413 Centenario II – Teléfono: 8813530 – 32. y/o de conformidad con lo preceptuado en los Artículos **54, 56, 201, 203 y 205 de la Ley 1437 de 2011,** se me puede notificar por medio electrónico al siguiente correo: abogadooscartorres@gmail.com

Atentamente:

OSCAR GERARDO TORRES TRUJILLO
C.C. N° 79´629.201 de Bogotá D.C.
T.P. 219.065 del C.S.J.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 4143.010.21.0. 03464 DE 2019
(Mayo 20)

POR MEDIO DE LA CUAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI

La Secretaria de Educación Municipal en ejercicio de las facultades legales conferidas en la ley 812 de 2003 el artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 Decreto 2831 de 2005 , Decreto 1075 de 2015 y

C O N S I D E R A N D O

Que mediante Sentencia Judicial proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali se falló el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicación 2008-00281-00 interpuesto por el señor GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA , identificado con la cedula de ciudadanía No.2.570.071 el cual fallo en los siguientes términos:

"PRIMERO DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 4143.3.13.2354 del 18 de julio de 2018 por el cual se niega la reliquidación de una pensión de jubilación por nuevos factores, expedida por el Municipio de Cali (Secretaria de Educación del Municipio de Santiago de Cali) .

TERCERO A título de restablecimiento del derecho se ordena a la NACION MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES Y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL reliquidar la pensión del señor GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA para que se incluya como factores salariales: sueldo, prima de vacaciones docente y prima de navidad, devengados por el demandante el último año de servicio.

TERCERO Se declara la prescripción de las diferencias resultantes anteriores al 18 de julio de 2005 de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO La pensión decretada será ajustada en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente formula…"

$$R = Rh \times \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca Sala Contencioso Administrativo laboral en su parte considerativa expuso:

"… Por otra parte y para dilucidar el inconformismo planteado por la entidad demandada en el sentido de afirmar que el acto administrativo demandado responde a una decisión de la Secretaria de Educación y no de la Nación. Ministerio de Educación y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, destaquemos que la ley 91 de 1989 creo el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 4143.010.21.0. 03464 DE 2019
(Mayo 20)

POR MEDIO DE LA CUAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI

independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, teniendo como funciones, entre otras, el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados.

Así las cosas, se resalta el contenido del artículo 9 de la ley 91 de 1989 el cual señala: "Articulo 9. Las prestaciones sociales que pagara el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional; función que delegara de tal manera que se realice en las entidades territoriales.

De lo anterior se puede concluir que las entidades territoriales están facultadas para reconocer las prestaciones sociales que pagara el FNPSM lo que significa que no es de recibo para la sala el argumento expuesto por la entidad apelante, en el sentido de señalar que los actos administrativos demandados no responden a la voluntad de las demandadas, toda vez que por orden legal los municipios están facultados para expedir actos administrativos como los impugnados. "

Que en la parte resolutiva confirmo la sentencia No. 147 del 31 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, que CONCEDIO las pretensiones de la demanda.

Que mediante oficio radicado en el sistema SAC de la Secretaria de Educación de Cali, con el No.2016PQR 25076 el Dr. Oscar Gerardo Torres Trujillo solicita el cumplimiento de este fallo judicial para lo cual anexa copia autentica del fallo con la constancia que esta sentencia, se encuentra debidamente Notificada y Ejecutoriada desde el 30 de Abril de 2015, que este fallo judicial quedo radicado en la pagina WEB del F.N.P.S.M Fiduprevisora S.A. bajo el numero 2016 PENS376167 .

Que en cumplimiento del Decreto 2831 de 2005 se envió el proyecto de acto administrativo a la Fiduprevisora S. A. para su correspondiente estudio y aprobación mediante oficio No. 1827 del 03 de noviembre de 2016 recibido en la Fiduprevisora con radicado 20160323?0562 el cual es aprobado luego de varias devoluciones con fecha de estudio 22 de abril de 2019 lo aprueba en los siguientes términos

1. Reconozca ajuste a la pensión de jubilación del docente GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA con un Ingreso Base de Liquidación $ 1.653.216 x el 75% $ 1.239.912 fecha de efectividad a partir del 18/07/2005 por prescripción trienal

2.Reconocer el valor de las mesadas atrasadas por la diferencia entre el valor de la mesada pagada y el valor de la nueva mesada, $22.925.128, tal como se refleja en la liquidación efectuada en Excel y que se anexa a este oficio en dos (2) folios, desde el 18/07/2005 al 22/04/2019 inclusive las mesadas subsiguientes se liquidaran cuando se reciba la orden para pago.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 4143.010.21.0. 03464 DE 2019
(Mayo 20)

POR MEDIO DE LA CUAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI

Se precisa que del valor a pagar de diferencia de mesadas $22.925.128 se descontara los aportes de Ley 91 de 1989(5%), Ley 812 de 2003 (12%), y Ley 1250 del 2008 el (12%)).La Secretaria de Educación, debe incluir en la resolución que da cumplimiento al fallo el valor de la diferencia mesadas atrasadas a pagar, según la hoja de liquidación en Excel que se anexa a este oficio.

3. Reconocer la indexación de la suma que se pague por diferencia de mesadas causadas, desde el 18/07/2015 al 30/04/2015 fecha de ejecutoria de la sentencia por valor de $2.349.472 se tomó como índice inicial 18/07/2005 = IPC= 58,21000000000001 índice Final la fecha de ejecutoria de la sentencia 30/04/2015= IPC =84.900000000006.

4. En cuanto al reconocimiento y pago de intereses corrientes y moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA:

Intereses moratorios desde 30 abril 2015 al 29 julio 2015 y desde 9 junio 2016 al 30 abril 2019 por $ 11.227.254

Como consecuencia de todo lo anterior se procede a reconocer:

CONCEPTO	VALOR
VALOR NETO DIFERENCIAS ATRASADAS	$ 22.925.128
INDEXACION	$ 2.349.472
INTERESES MORATORIOS	$11.227.254
TOTAL	$36.501.854

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer al licenciado GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.570.071 de Guacari (Valle del Cauca) , ajuste a la pensión de jubilación con un Ingreso Base de Liquidación $ 1.653.216 x el 75% $ 1.239.912 fecha de efectividad a partir del 18/07/2005 por prescripción trienal , tal como lo ordena el fallo judicial.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer el valor de las mesadas atrasadas por la diferencia entre el valor de la mesada pagada y el valor de la nueva mesada, $22.925.128, tal como se refleja en la liquidación efectuada por la Fiduprevisora y que se anexa a este oficio en dos (2) folios, desde el 18/07/2005 al 22/04/2019 inclusive las mesadas subsiguientes se liquidaran cuando se reciba la orden para pago.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 4143.010.21.0. 03464 DE 2019
(Mayo 20)

POR MEDIO DE LA CUAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI

Se precisa que del valor a pagar de diferencia de mesadas $22.925.128 se descontara los aportes de Ley 91 de 1989(5%), Ley 812 de 2003 (12%), y Ley 1250 del 2008 el (12%).

ARTICULO TERCERO: Reconocer la indexación de la suma que se pague por diferencia de mesadas causadas, desde el 18/07/2015 al 30/04/2015 fecha de ejecutoria de la sentencia por valor de $2.349.472 se tomó como índice inicial 18/07/2005 = IPC= 58,21000000000001 índice Final la fecha de ejecutoria de la sentencia 30/04/2015= IPC =84.900000000006.

ARTICULO CUARTO: Reconocer

Intereses moratorios desde 30 abril 2015 al 29 julio 2015 y desde 9 junio 2016 al 30 abril 2019 por $ 11.227.254

ARTICULO QUINTO: Las diferencias causadas entre esta prestación y la principal reconocida ya pagada, serán canceladas por la Entidad Fiduciaria así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR NETO DIFERENCIAS ATRASADAS	$ 22.925.128
INDEXACION	$ 2.349.472
INTERESES MORATORIOS	$11.227.254
TOTAL	$36.501.854

ARTICULO SEXTO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio descontará los aportes de cada mesada pensional de acuerdo a lo establecido en la Sentencia Judicial proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali.

ARTICULO SEPTIMO: Las diferencias causadas entre esta prestación y la principal ya pagada, se cancelaran a través de la Entidad Fiduciaria.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 4143.010.21.0. 03464 DE 2019

(Mayo 20)

POR MEDIO DE LA CUAL EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI

ARTICULO OCTAVO: Reconocer personería jurídica al Doctor Oscar Gerardo Torres Trujillo I con Cedula de Ciudadanía No 79.629.201 de Bogotá y TP 219065 del CSJ para los efectos del poder conferido.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución NO proceden recurso alguno por ser un acto de ejecución.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los (20) días del mes de Mayo del año 2019.

LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA
Secretaria de Despacho

Proyecto : Maribel Zapata Escobar
Reviso Rodrigo A Plazas Yepes / Profesional Unive. 04
Álvaro David Adarve Subsecretario Administrativo Financiero

Powered by CamScanner

fomag

Número de generación: CN20221128092850141523 1
Fecha generación: 2022-11-28 09:28:50

COMPROBANTE DE NÓMINA

FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 201907310050385

El (la) señor(a) GUSTAVO ADOLFO BARONA MONTOYA identificado(a) con tipo de documento 1 número 2570071, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo julio de 2019, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	GUSTAVO ADOLFO	**Apellidos docente**	BARONA MONTOYA
Tipo documento	1	**Número documento**	2570071

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	
Tipo de documento	-
Número de documento	

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	**********
Número de documento	01-JUL-19

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
PAGO POR INDEXACION E INTERESES	$13,576,726	$0
MESADAS ATRASADAS	$331,560,099	$0
DESCUENTO MESADAS RECIBIDAS	$0	$19,794,505
APORTE DE LEY	$0	$40,234,588
DESCUENTO MESADAS RECIBIDAS	$0	$251,185,558

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Oficina Principal
Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03
Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15
Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031
www.fomag.gov.co

Fomag @FomagOficial

La educación es de todos Mineducación

Powered by CamScanner

fomag

BANCO POPULAR	$0	$614,293
BANCO BBVA	$0	$229,293
REAJUSTE PENSIONAL	$2,214,821	$0
	TOTAL A PAGAR	$35,293,416

Esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para expedirlos.

En estos términos Fiduprevisora S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Pública celebrado entre ésta y la Nación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 1049 de 2006, da respuesta a la solicitud.

Recuerde que usted tiene 30 días calendario para realizar el cobro de su mesada pensional (45 días Banco Agrario), pasado este tiempo la entidad bancaria procederá a reintegrarnos el dinero. En caso, de no retirar su mesada pensional por más de 2 periodos, se procederá con la suspensión de la pensión.

Dada a solicitud del(a) interesado(a) a los 28 días del mes de Noviembre del año 2022 09:28:50AM.

Cordialmente.

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Oficina Principal
Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03
Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15
Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031
www.fomag.gov.co
Fomag @FomagOficial

La educación es de todos Mineducación

Powered by CamScanner

RV: C22-13157 RV: C22-13084 RV: contestacion demanda Dte. Nacion Vs. Ivan Caicedo Rad. 2017-00349

Tecnico Sistemas Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <tecofadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 7/04/2022 10:15 AM

Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

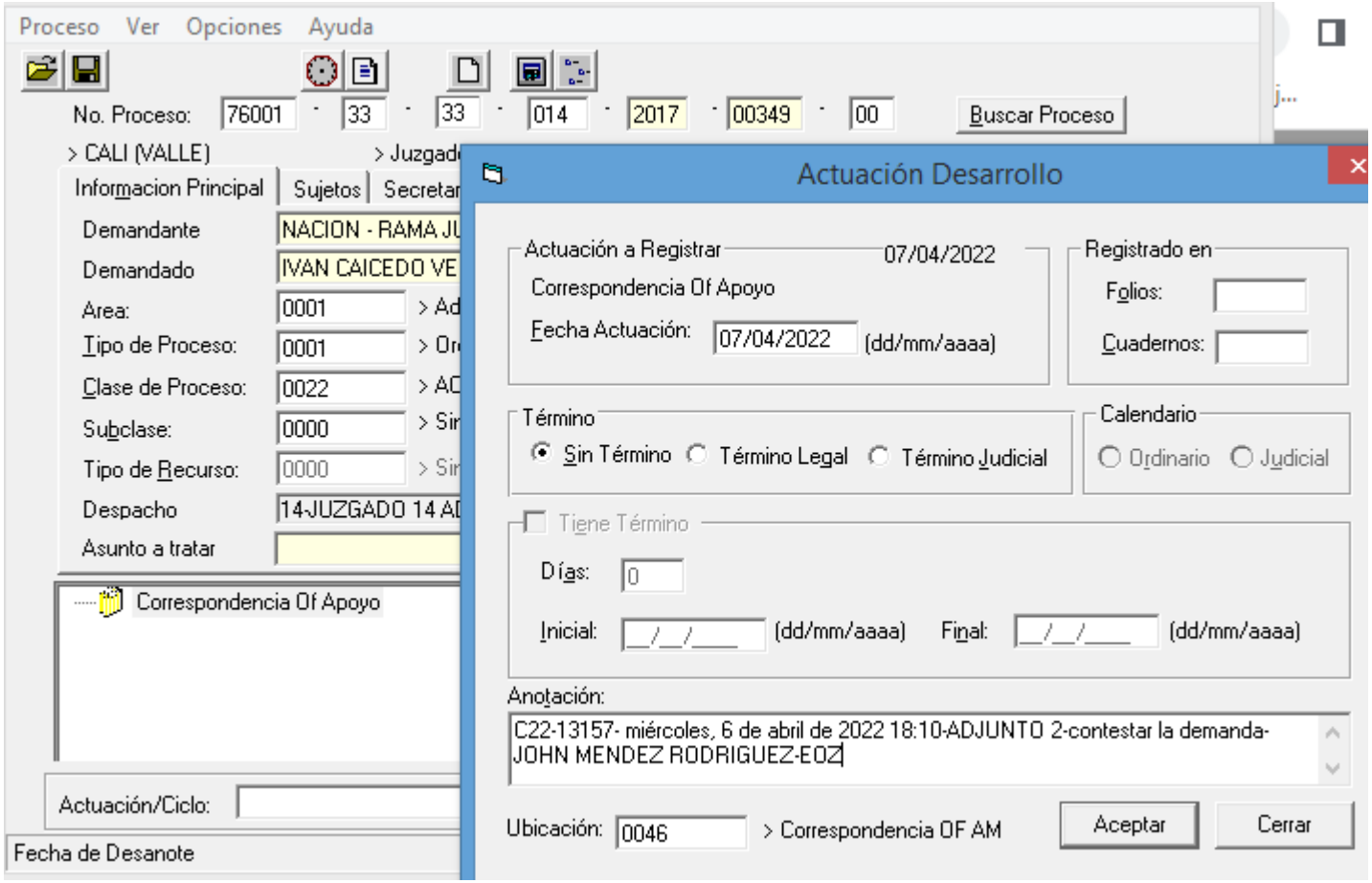
CC: johnmendez@asinteabogados.com <johnmendez@asinteabogados.com>

Cordial saludo,

Anexo constancia de radicación de documento allegado de manera digital.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co



EDWARD ANDRES OSPINA ZAPATA
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali



De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de abril de 2022 7:44 a. m.
Para: Tecnico Sistemas Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <tecofadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C22-13157 RV: C22-13084 RV: contestacion demanda Dte. Nacion Vs. Ivan Caicedo Rad. 2017-00349

DIANA PATRICIA ZAPATA FLOREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca



De: John Mendez <johnmendez@asinteabogados.com>
Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 18:10
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: C22-13084 RV: contestacion demanda Dte. Nacion Vs. Ivan Caicedo Rad. 2017-00349

Buena tarde,

Nos permitimos adjuntar la contestación de la demanda con la radicación correspondiente al proceso.

Feliz noche.

El mié, 6 abr 2022 a las 16:27, Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali (<of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Favor confirmar a cuál proceso está dirigida su solicitud.
>
> Lo anterior, dado que el asunto indica una radicación y unas partes y en el anexo otras.
>
> La información suministrada en el anexo no tiene concordancia en el aplicativo siglo XXI.
>
> **DIANA PATRICIA ZAPATA FLOREZ**
> **ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO**
> Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
> Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca
> *cid:image001.png@01D38AB8.5F7EFE10*
>
> ---
>
> **De:** Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
> **Enviado:** miércoles, 6 de abril de 2022 15:18
> **Para:** Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
> **Asunto:** C22-13084 RV: contestacion demanda Dte. Nacion Vs. Ivan Caicedo Rad. 2017-00349
>
> **DIANA PATRICIA ZAPATA FLOREZ**
> **ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO**
> Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
> Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: John Mendez <johnmendez@asinteabogados.com>
Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 15:14
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: contestacion demanda Dte. Nacion Vs. Ivan Caicedo Rad. 2017-00349

Buena tarde Sr. Juez,

En mi condición de curador ad-litem, mediante la presente me permito adjuntar contestación de la demanda del proceso en asunto.

Cordial saludo,

JOHN MENDEZ RODRIGUEZ
Abogado

--

Asinte S.A.S.
Nit:900.513.683-7
Carrera 4 N° 8 - 63 Oficina 607
Edificio Josenao
Cali - Valle del Cauca
Cel. 301 3112199, Email: johnmendez@asinteabogados.com

JOHN MENDEZ RODRIGUEZ
Abogado

Señor (a):
JUEZ CATORCE ADMINISTRATIVO DE CALI.
E S. D.

Ref : ACCION DE REPETICION .
Dte. : LA NACION. RAMA JUDICIAL Y OTYROS
Ddo. : IVAN CAICEDO VELASCO
Rad : 2017-00349

JOHN MENDEZ RODRIGUEZ, abogado, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como CURADOR AD LITEM.**,** me permito mediante el presente escrito contestar la demanda, en los siguientes términos:

A LOS HECHOS:

AL PRIMERO: Se admite, atendiendo lo indicado y allegado con el escrito genitor de la demanda.

AL SEGUNDO: Se admite. La probanzas incorporadas en el plenario, confirman que efectivamente el citado señor fue condenado penalmente en las condiciones que se indican.

AL TERCERO: La fecha y hora del hecho expresado no me consta, como tampoco el lugar y el período en que la persona que se cita, pues con el proceso no se incorpora la prueba de ello.

AL CUARTO: No me consta nada de lo expresado. Pese a que en la providencia que motiva este proceso, se hace alusión a dicho aspecto, dicha circunstancia no es conocida, pues no hay prueba que milite en dicho sentido.

AL QUINTO: Se admite en el sentido que la sentencia del Tribunal Administrativo así lo expresa.

AL SEXTO: La providencia que condena a los entes que promueven la presente acción, cita específicamente dicho asunto; lo cual me lleva a admitirlo.

AL SEPTIMO: No me consta dicha situación, pese a que la decisión final que dispuso la condena a los entes públicos así lo menciona.

AL OCTAVO: Se admite, pues si no fuera así, el Tribunal Administrativo no se hubiera pronunciado en los términos que lo hizo. Además, se allega con esta acción, copia de la sentencia.

AL NOVENO: Se admite. Dentro del haber probatorio se incorpora prueba de lo indicado.

AL DECIMO: Se admite.

A LAS PRETENSIONES:

A LA PRIMERA: Me opongo. No cursa la prueba del dolo o culpa grave necesaria. Para ello.

A LA SEGUNDA: Me opongo. La culpa grave o el dolo deben probarse. No existe una acción u omisión del funcionario

A LA TERCERA. CUARTA. QUINTA y SEXTA. Me opongo. Si las dos primeras no tienen éxito, las posteriores resultan imprósperas.

Ahora bien, a fin de enervar las pretensiones, formulo las siguientes excepciones:

1. **INEXISTENCIA DE DOLO O CULPA GRAVE.**

Se advierte a lo largo del presente asunto que el proceso penal , cuya injusta privación a la libertad motivo la sentencia que hoy se pretende en repetición , toda la actuación procesal se tramito bajo la ley 600 de 2000.

Lo anterior indica que toda la actuación, previa al juicio, era de cargo absoluto de la Fiscalía General de la Nación, así lo disponía el artículo 26 de la citada norma **"La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación ya los jueces competentes durante la etapa de juzgamiento; … "**

Por su parte el artículo 74 ibidem, disponía:

"Corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación e instrucción en materia penal. "

Es decir, la primera etapa del proceso penal estaba en su totalidad a cargo de la Fiscalía General de la Nación, en un sistema procesal que lo encargada de la investigación e instrucción

Dentro de la fase de investigación existía la investigación previa, la cual contenía entre otras finalidades **"recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o**

participes de la conducta punible" art 322 ibídem.

Desde ya entonces, la norma vigente imponía en cabeza del fiscal encargado, la labor de individualizar e identificar el sujeto de la investigación penal, quien quedaba atado al proceso penal una vez fuera escuchado en indagatoria o declarado persona ausente (art 332 CPP Ley 600 de 2000).

Dentro de las formalidades de la indagatoria, el funcionario de la fiscalía tenía el deber de interrogar al procesado por su nombre y apellidos, documentos de identificación y su origen y otros que se señalan en el artículo 338 ejusdem.

Ahora bien, si el imputado no compareciere a la indagatoria, se le declaraba persona ausente (art 344 misma norma), lo que ocurrió en el trasunto, en donde se nos expresa que se acudió a dicho mecanismo procesal.

La jurisprudencia de ese entonces (CSJ, Sala Penal, sentencia febrero 13 2003, rad. 11412. MP Dr. Edgar Lombana Trujillo. , dispuso la prohibición de vincular a una persona que no estaba plenamente identificada, señalando sobre el tema lo siguiente:

" La posibilidad de vincular a una persona sindicada que esté adecuadamente individualizada o identificada no sufrió alteración alguna en el nuevo código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, pues la investigación previa tiene entre sus finalidades la de recaudar pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible (art 322; la apertura de instrucción también tiende a determinar quién o quiénes son los autores o participes de la conducta punible…. (…).

Entonces, en el régimen anterior como en el vigente, la prohibición de vincular a una persona que no esté plenamente identificada, ha de entenderse referida a la suficiente identificación o individualización del procesado… "

Respecto de lo anterior, se puede concluir que la labor de identificación o individualización el procesado, en vigencia de la norma aplicable, era del resorte exclusivo del fiscal encargado de la etapa de investigación e instrucción del proceso, no del juez, a quien le correspondía la etapa final del proceso en juicio y frente a quien ya le venía el asunto con la identificación del sujeto activo el proceso penal.

El juez , ya venía condicionado por el actuar del fiscal del caso, quien en el caso que nos ocupa, procedió a acudir a declarar como persona ausente, pues el imputado no compareció a la indagatoria y con ello vincularlo formalmente al proceso, claro está, previamente su identificación o individualización, de allí que no es predicable dolo o culpa grave en el

operador judicial que a la postre adelanto el juicio y encontró responsable penalmente al sujeto que la fiscalía identifico o individualizo como sujeto activo de la acción penal.

Tampoco se visualiza una acción, omisión o extralimitación en sus funciones, pues se eitera, el devenir de la identificación del imputado venía precedido de la conducta de la fiscalía general de la Nación, de tal manera que la sentencia se formuló sobre la persona que la fiscal identifico como el sujeto sobre el cual debía recaer la acción penal.

2. **LA INNOMINADA.**

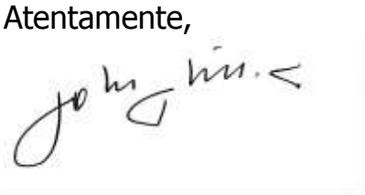
Sírvase de manera oficiosa, tener como prueba todo hecho que debidamente probado constituya medio exceptivo, tal como lo dispone el artículo 282 del C.G.P, cuya filosofía esta orientada a la búsqueda de la verdad real sobre la formal y donde los poderes oficiosos del juez confirman que lo prioritario no es la intitulación de la excepción, sino los hechos o pruebas que la configuran.

PRUEBAS :

NOTIFICACIONES:

Las personales las recibiré en la carrera 73 No 6-48 de Cali. Direccion electrónica johnmendez@asinteabogados.com.

Atentamente,



JOHN MENDEZ RODRIGUEZ
C.C. 12.227.606 de Pitalito – H
T.P. 67.526 del C S de la Judicatura

Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali

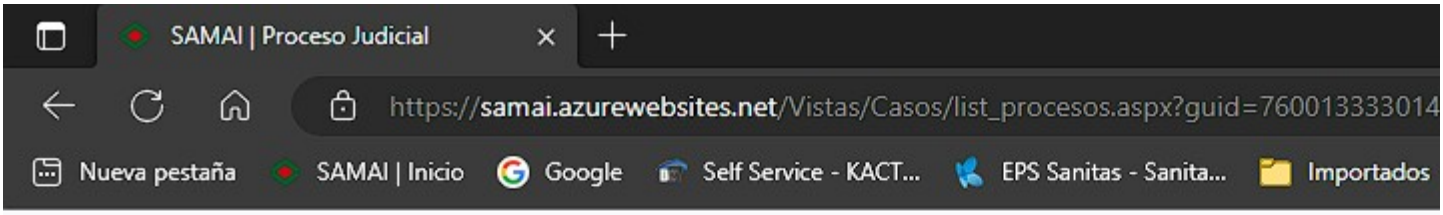
De: Jose David Colmenares Rodriguez
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 7:30 a. m.
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali
CC: Mauricio Londoño Uribe
Asunto: RV: C23-26915 RV: ALLIANZ 2098 María Fernanda Gaviria Vozmediano EMCALI RC Generales / Automóviles Administrativo Juzgado 14 Administrativo 2019-00231 Cali
Datos adjuntos: MARIA FERNANDA GAVIRIA- RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACION.pdf

Cordial saludo,

Remito constancia de que el correo recibido, fue radicado en el aplicativo denominado SAMAI proceso judicial.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email **of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co**



SAMAI
Acciones que transforman la JUSTICIA

2	Apo.Demandante	HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR	4729611
3	Demandante	ELIZABETH VOZMEDIANO VELASQUEZ Y OTROS	31924292
4	Apo.Demandante	HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR	4729611
5	Demandante	MARIA FERNANDA GAVIRIA VOZMEDIANO	1144037227
6	Apo.Demandante	HERNANDO BERMUDEZ SALAZAR	4729611
7	Demandado	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	76001

← Regresar al historial

Historial de actuaciones judiciales

Historial de actuaciones | Tramitar

Buscar: Para buscar una actuación en la historia digite aqui el dato a buscar

Filtrar: ◉ Ver todo ○ Decisiones ○ Despacho ○ Secretaria ○ Notificaciones

	Fecha registro	Fecha actuacion	Actuación

Atentamente,

JOSE DAVID COLMENARES RODRIGUEZ
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 12:17 p. m.
Para: Jose David Colmenares Rodriguez <jcolmenaresr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C23-26915 RV: ALLIANZ 2098 María Fernanda Gaviria Vozmediano EMCALI RC Generales / Automóviles Administrativo Juzgado 14 Administrativo 2019-00231 Cali

---

De: Notificaciones Londoño Uribe Abogados <notificaciones@londonouribeabogados.com>
Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 11:48
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: abogado.bermudez@hotmail.com <abogado.bermudez@hotmail.com>; carolina.ocampo.fr@gmail.com <carolina.ocampo.fr@gmail.com>; carlosandres <carlosandres@londonouribeabogados.com>; jessicapamela <jessicapamela@londonouribeabogados.com>
Asunto: Re: ALLIANZ 2098 María Fernanda Gaviria Vozmediano EMCALI RC Generales / Automóviles Administrativo Juzgado 14 Administrativo 2019-00231 Cali

Buenos días, actuando como apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A. anexo remito poder memorial que contiene impugnación contra el auto que niega la vinculación de LA PREVISORA.

LONDOÑO URIBE ABOGADOS

MAURICIO LONDOÑO URIBE
Director
Teléfono 399 - 0319 / CEL - 3007758618
mauricio@londonouribeabogados.com
www.londonouribeabogados.com
Cali - Colombia

El mié, 31 ago 2022 a la(s) 14:24, Notificaciones Londoño Uribe Abogados (notificaciones@londonouribeabogados.com) escribió:

> Buenas tardes, actuando como apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A. anexo remito poder, contestación al llamamiento en garantía y anexos, igualmente formula llamamiento en garantía a la coaseguradora LA PREVISORA S.A.

LONDOÑO URIBE ABOGADOS

MAURICIO LONDOÑO URIBE
Director
Teléfono 399 - 0319 / CEL - 3007758618
mauricio@londonouribeabogados.com
www.londonouribeabogados.com
Cali - Colombia

Santiago de Cali, mayo de 2023

Señores
JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO DE CALI.

REFERENCIA:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-014-2019-00231-00
DEMANDANTE:	MARIA FERNANDA GAVIRIA VOZMEDIANO Y OTROS.
DEMANDADO:	EMCALI EICE ESP Y OTROS.
EN GARANTIA:	ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACION CONTRA EL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 16 DE MAYO DE 2023

JUAN JOSÉ LIZARRALDE V., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.032.328, residente y domiciliado en Santiago de Cali, Valle del Cauca, portador de la tarjeta profesional número 236.056 del CSJ y con fundamento en los artículos 224, 225, 242 y 243, numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 2080 del 2021, en concordancia con los artículos 61, 64, 320, 321 y 322 del Código General del proceso, procedo a interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del Auto Interlocutorio del 16 de mayo de 2023 mediante el cual el Juzgado resolvió:

"De esta forma, en el presente asunto no se advierte la relación contractual o legal entre la entidad llamante, ALLIANZ SEGUROS S.A., con la coaseguradora, LA PREVISORA S.A , sin que de esta forma exista razón para el llamamiento en garantía que aquí se estudia, ya que, si en gracia de discusión fuera procedente la vinculación de dicha coaseguradora, la entidad competente para realizar el citado llamamiento es el asegurado, lo cual radica en las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP.
Conforme los fundamentos arriba señalados, será negado el llamamiento en garantía efectuado por la entidad aseguradora y se resolverá sobre la renuncia de poder presentada a índice 25 de Samai. En virtud de lo anterior, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali, ***RESUELVE:***
PRIMERO: *Negar el llamamiento en garantía solicitado por la compañía de seguros ALLIANZ SEGUROS para la compañía de seguros la PREVISORA S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."*

Procedo a sustentar mi recurso de la siguiente manera:

Con relación a la solicitud de llamamiento en garantía realizados por mi representada para integrar a la coaseguradora, el Juzgado equivocadamente concluyó que:

(…)

"Ahora bien, la figura del coaseguro del artículo 1095 del Código de Comercio se da cuando "… dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro…". A su vez la doctrina ha establecido que lo que caracteriza esta figura, es la distribución del riesgo entre varios aseguradores mediante una misma póliza, de tal manera que en la misma proporción en que se distribuye la responsabilidad sobre el riesgo, los coaseguradores perciben el importe de las primas y asumen la responsabilidad respecto de los reclamos3.
De esta forma, en el presente asunto no se advierte la relación contractual o legal entre la entidad llamante, ALLIANZ SEGUROS S.A., con la coaseguradora, LA PREVISORA S.A, sin que de esta forma exista razón para el llamamiento en garantía que aquí se estudia, ya que, si en gracia de discusión fuera procedente la vinculación de dicha coaseguradora, la entidad competente para realizar el citado llamamiento es el asegurado, lo cual radica en las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP."

De acuerdo a lo anterior, el Juzgado se equivoca al negar la vinculación de la coaseguradora por considerar primeramente que dicha facultad solo le asiste a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, situación que no es cierta toda vez que al día de hoy existe profusa jurisprudencia del Consejo de Estado que admite que la aseguradora líder con fundamento en la relación contractual en cualquier tipo de contrato de seguro, puede vincular a quien o quienes tengan un porcentaje de participación en el negocio asegurador. Así las cosas, se tiene entonces que mi representada ALLIANZ SEGUROS S.A. al ser la compañía líder dentro de las pólizas número 022155989/0 (GENERALES) y 022154062/752 (AUTOMOVILES), se encuentra legítimamente facultada para realizar la solicitud de vinculación en calidad de llamada en garantía a la PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Por la póliza de Automóviles No. 022154062 / 752 se evidencia lo siguiente:

Coasegurо

Código	Tipo	Nombre de la Compañía	Líder	% de Participación	Prima
1003	CEDIDO	ALLIANZ SEGUROS S.A.	X	80,00	1.447.468,80
1041	CEDIDO	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		20,00	361.867,20

Por la póliza de Generales No. 022155989 / 0 se evidencia lo siguiente:

Coasegurо

Código	Tipo	Nombre de la Compañía	Líder	% de Participación	Prima
1003	CEDIDO	ALLIANZ SEGUROS S.A.	X	80,00	2.554.174.124,00
1041	CEDIDO	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		20,00	638.543.531,00

En virtud de tal condición es claro que resulta cierto que entre las aseguradoras participantes del contrato de seguro existe una relación de naturaleza contractual, por cuanto a que cada una de ellas se obligó a responder por un porcentaje en las pólizas número 022155989/0 (GENERALES) y 022154062/752 (AUTOMOVILES) con la que sea vinculado el asegurado y, en el evento en que éste llegare a ser declarado responsable y se concretara el riesgo del cual depende la obligación indemnizatoria, cada una de los participantes de la póliza deberá responder en los porcentajes que se acordó en el contrato de seguro, motivo por el cual es necesaria que las coaseguradoras comparezcan.

En ese orden, no se encuentra razones sustanciales o procesales para que el Juzgado niegue las vinculaciones anteriores, pues los mismos fueron debidamente tramitados dentro de los términos establecidos en la ley.

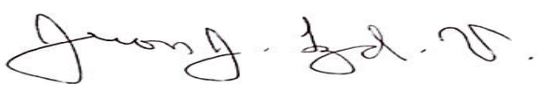
El Juzgado debe tener en cuenta, que en el presente asunto, el vínculo contractual requerido para la procedencia de la solicitud de llamado en garantía fue el coaseguro establecido en las pólizas número 022155989/0 (GENERALES) y 022154062/752 (AUTOMOVILES), pues las aseguradoras acordaron distribuir la indemnización del riesgo amparado, por lo que, ante la ocurrencia del siniestro, dicha indemnización debe cubrirse en atención a la proporción señalada en el respectivo contrato, de ahí que en el presente asunto sea necesaria la comparecencia de la PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., como tercero garante de lo pactado en las mencionadas pólizas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, comedidamente le solicito al Juzgado se sirva reponer el numeral primero de la parte resolutiva del auto interlocutorio No. 205 del 16 de mayo de 2023 y en su lugar conceda la vinculación de la PREVISORA COMPAÑÍA SEGUROS S.A., en calidad de llamada en garantía conforme a lo pactado en las pólizas número 022155989/0 (GENERALES) y 022154062/752 (AUTOMOVILES). En el remoto caso de no acceder a mi solicitud comedidamente solicitamos conceder el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

NOTIFICACIONES:

- Recibiré notificaciones en la Calle 16 A No. 121 A - 214 Oficina 307 - Edificio Paloalto de Cali - Valle del Cauca Correo electrónico **notificaciones@londonouribeabogados.com**

Atentamente,



JUAN JOSE LIZARRALDE VILLAMARIN
C.C. 1.144.032.328
T. P. 236.056 CSJ

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Señores
JUZGADO CATORCE (14°) ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
E. S. D.

REF: **MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA**
DEMANDANTE: CARLOS ANDRES FIGUEROA PIEDRAHITA Y OTROS
RADICADO: 2021 - 00092

DARIO CESAR AGUDELO BUSTAMANTE, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali- Valle, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.586694 expedida en Cali (V), con Tarjeta Profesional No.82.194 del Consejo Superior de la Judicatura, Profesional de Gestión II de la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, actuando en calidad de apoderado judicial mediante poder otorgado por la Doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, debidamente designada mediante oficio 20181500002733 del 4 de abril de 2018 en los términos de la delegación efectuada por el señor **FISCAL GENERAL DE LA NACION**, mediante el artículo octavo de la Resolución No. 0-303 del 20 de marzo de 2018, estando dentro de los términos de ley y previo reconocimiento de la personería para actuar, respetuosamente me permito **CONTESTAR** la demanda del proceso de la referencia en los siguientes términos:

FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Con relación a los hechos narrados por la parte actora, me permito manifestar que no me constan, razón por la cual me atengo a lo que de ellos resulte probado en legal forma dentro de este proceso administrativo, guarden relación con las pretensiones del libelo de la demanda en tanto comprometan la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Entidad que represento.

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

Respecto a todas y cada una de las enunciadas pretensiones de la demanda, manifiesto que me opongo a que prosperen en relación con mi representada la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dado que no hay mérito para declarar su responsabilidad, toda vez que de su actuar no se evidencia una actuación arbitraria, ni que haya error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración, como pretende hacer ver el demandante en el presente proceso.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

En el evento de no considerar la no responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, ruego tener en cuenta la siguiente **objeción a la cuantía**:

II EN CUANTO A LOS PERJUICIOS MORALES

Para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal, todo dentro del marco de la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.

Sin embargo, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, el Consejo de Estado ha brindado pautas que sirven de referencia a los juzgadores, así:

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad	Víctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidad	Parientes en el 2º de consanguinidad	Parientes en el 3º de consanguinidad	Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2º	Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses		50% del Porcentaje de la Víctima directa	35% del Porcentaje de la Víctima directa	25% del Porcentaje de la Víctima directa	15% del Porcentaje de la Víctima directa
	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9 e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3 e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1	15	7,5	5,25	3,75	2,25

Bajo este contexto, se tiene que no es viable lo solicitado por la parte demandante por concepto de perjuicios morales, comoquiera que no se ajusta a la tabla o límites establecidos por el H. Consejo de Estado, en tanto solicita reparación sin tener en cuenta el término de privación de la libertad y el nivel en el que se encuentra cada uno de los demandantes.



Ahora bien, la función del juez implica la asunción de una responsabilidad mayor a afectos de determinar no sólo la existencia del perjuicio moral, sino su intensidad, así lo ha expresado el Alto Tribunal:

> "Deberá ponerse especial esmero en el cumplimiento del deber de evaluar los diferentes elementos que, en cada proceso, permitan establecer no sólo la existencia del perjuicio moral, sino su intensidad, e imponer las máximas condenas únicamente en aquellos eventos en que, de las pruebas practicadas, resulte claramente establecido un sufrimiento de gran profundidad e intensidad, superior a muchos de los pesares imaginables[1]."

Asimismo, la Corte Constitucional ha manifestado respecto de los daños morales:

> " (…) El daño moral puede probarse por cualquier medio probatorio"; b) "la prueba solo atañe a la existencia del mismo, pero no permite determinar de manera precisa el monto en que deben reconocerse los perjuicios morales que, por su naturaleza (no puede intercambiarse la aflicción por un valor material) no tienen un carácter indemnizatorio sino compensatorio (en alguna manera intentan recomponer un equilibrio afectado)"; c) para "la tasación del daño, el juez se debe guiar por su prudente arbitrio, pero está obligado a observar, por expreso mandato legal los principios de equidad y reparación integral"; d) el "Consejo de Estado ha decidido establecer las condenas por perjuicios morales en términos de salarios mínimos, considerando que es un parámetro útil en tanto el salario mínimo se fija de acuerdo con el IPC, y de esa forma mantiene un poder adquisitivo constante (o al menos se acerca a ese ideal). Para la alta Corporación es útil establecer el máximo de 100 SMLMV como tope, con el fin de que exista un parámetro que evite el desconocimiento al principio de igualdad. Sin embargo, esa suma no vincula de forma absoluta a los jueces[2]".

De allí que el quantum deberá ser proporcional a la intensidad del daño, objetivamente valorados por el Juez, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar los topes señalados por la jurisprudencia.

III. EN CUANTO A LA AFECTACIÓN DE BIENES O DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS – HONRA, HONOR Y BUEN NOMBRE – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Respecto a la afectación de bienes o derechos constitucionalmente protegidos, a la honra, honor y buen nombre, y a la privación injusta de la libertad, además de pertenecer una mismo concepto**,** se debe precisar que la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo adoptó la denominación de "alteración a las condiciones de existencia", para efectos de indemnizar no sólo los daños ocasionados a la integridad física y/o psíquica,

[1] Sentencia del Consejo de Estado, C.P Alier Hernández Enríquez, expediente 13.232-15646 fecha 06 de septiembre de 2001.

[2] Sentencia T- 351 del 05 de mayo de 2011. M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

sino cualquier vulneración de bienes, prerrogativas, derechos o intereses diferentes a los señalados, o lo que es lo mismo decir, aquellas prerrogativas que sobrepasan la esfera de lo corporal del sujeto afectado, tales como la honra, el buen nombre, el daño al proyecto de vida, entre otras.

El H. Consejo de Estado en decisión del 1º de noviembre de 2012, exp. AG – 99, señaló:

> "En el proceso se encuentra demostrado que el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana alteró la calidad del aire a unos niveles que de acuerdo con diferentes estudios y monitorias técnicas no constituían un riesgo para la Salud Humana. Sin embargo, esta conclusión no desmiente el hecho de que la calidad del aire de las áreas afectadas disminuyó ostensiblemente llevando no sólo a los espacios públicos sino al interior de los hogares aromas fétidos y nauseabundos, los cuales perduraron aproximadamente seis meses lo que generó un cambio en los hábitos de los núcleos familiares. Se trata así de una injerencia arbitraria atentatoria del derecho a la intimidad, comoquiera que ésta situación trajo como consecuencia: modificación en las costumbres alimenticias (muchos alimentos se dañaban rápidamente), la necesidad de controlar vectores como ratas y moscos y en algunos casos el traslado de residencia.
>
> "De igual forma, está acreditado que la alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre. En otros términos, la posibilidad de realizar labores encaminadas a la diversión, entretenimiento y práctica del deporte para aliviar el cansancio propio del trabajo y del estudio se vio restringida pues las opciones mientras duró la fetidez en el olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados del lugar de residencia en los que no se hubiera presentado la afectación ambiental o en donde ésta se hubiere dado con menor intensidad.
>
> "Así las cosas, como consecuencia de la catástrofe ambiental se produjo un daño en los derechos a la intimidad familiar y a la recreación y utilización del tiempo libre. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la filosofía incorporada por la constitución política de 1991 en materia de responsabilidad civil extracontractual es la de imponer en cabeza de las autoridades públicas una obligación de carácter indemnizatorio por cualquier daño que se cause sobre un bien jurídicamente protegido. De forma tal que el juez como operador jurídico, apelando a la categorización de perjuicios inmateriales opta por ordenar un resarcimiento haciendo una diferenciación de los derechos conculcados.

Por consiguiente, la falla del servicio del Distrito sí produjo un daño referido a la violación de los derechos a la intimidad familiar y a la recreación y utilización del tiempo libre de los demandantes, circunstancia por la cual se declarará la responsabilidad y se reconocerá la indemnización precisada y, por último, se adoptarán de oficio medidas de justicia restaurativa, en aras de restablecer el núcleo esencial de los derechos fundamentales lesionados.

Pues bien, la parte actora considera que el perjuicio por este concepto está dado por la alteración de las condiciones de vida padecidas por el detenido, lo que a juicio de este Togado corresponde a una calificación del perjuicio moral, por lo que estaríamos frente a una doble pretensión por el mismo concepto, amén de que no obra prueba en el expediente que permita demostrar la existencia de tales alteraciones.

En efecto, aduce los demandantes que presuntamente padecieron un perjuicio moral, pero no se demuestra que hubieran visto afectado otros bienes, intereses o derechos constitucionales que pudieran ser reconocidos de manera autónoma e independiente, de conformidad con los recientes lineamientos de la jurisprudencia de la Corporación que no admite categorías abiertas de perjuicios, sino la reparación o resarcimiento de los derechos, intereses legítimos o bienes constitucionalmente protegidos, esto es, una tipología de perjuicios fundamentada en la vulneración a garantías constitucionales consideradas en sí mismas, siempre y cuando se demuestre a través de los diferentes instrumentos o mecanismos probatorios reconocidos por la ley, que es necesario el reconocimiento de un perjuicio autónomo (v.gr. daño a la salud, daño a la libertad, daño a la familia, etc.) en aras de compensar o retribuir la afectación o lesión padecida al respectivo derecho.

Con todo, en el evento de ser probada la responsabilidad estatal aquí pretendida, respetuosamente solicito se niegue esta pretensión por la **afectación de bienes o derechos constitucionalmente protegidos**, por no estar demostrados, y en su lugar se tasen a la justa proporción los daños morales.

EXCEPCIONES

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Con fundamento en la Ley 906 de 2004, se puede señalar que la Entidad actuó en cumplimiento del deber legal, con fundamento en el mandato constitucional del artículo 250**3**[3], y conforme a ello ejecutó las gestiones propias del ente instructivo, tales como ejercer la acción penal, garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal, todo en el marco de la confianza y seguridad jurídica de

[3] ARTICULO 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. (…)

la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación[4], en los términos del artículo 66 de la mencionada Ley que prevé:

> *"Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.*
>
> *No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez de control de garantías".*

Es el Juez con Funciones de Control de Garantías quien ostenta el poder de decisión sobre la libertad de una persona, de conformidad con el artículo 306 ibídem, saber:

> *"Artículo 306: Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.*
>
> *Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.*
>
> ***La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia**.". (Negrilla fuera de texto)*

A su vez, el artículo 308 ibídem, modificado por la Ley 1760 de 2015, señala cuales son los requisitos que deben cumplirse, para que un Juez con Funciones de Control de Garantías imponga una medida de aseguramiento, norma que reza:

> *"Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:*
>
> *1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.*
> *2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.*

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

PARÁGRAFO 1o. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será, en sí misma, determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El Juez de Control de Garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configurarán los requisitos para decretar la medida de aseguramiento, sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga". (Destacado propio)

Entonces, le corresponde al Juez de Garantías estudiar la solicitud privativa de la libertad, analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, y decretar las que estime procedentes, para luego si establecer la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento, es decir, que en últimas, si todo se ajusta a derecho, es el Juez de la República quien decide y decreta la medida de aseguramiento a imponer; de manera que, no es de recibo la pretensión del demandante de declarar administrativamente responsable a la Fiscalía General de la nación que represento por "detención ilegal", ya que si bien es cierto se dio esta medida, ella no fue proferida por mi representada.

Sobre este particular, en la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004, por la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal, se señaló:

"De cara al nuevo sistema no podría tolerarse que la Fiscalía, a la cual se confiere el monopolio de la persecución penal y por ende, con amplios poderes para dirigir y coordinar la investigación criminal, pueda al mismo tiempo restringir, por iniciativa propia, derechos fundamentales de los ciudadanos o adoptar decisiones en torno de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal, pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos.

Por ello, en el proyecto se instituye un conjunto de actuaciones que la Fiscalía debe someter a autorización judicial previa o a revisión posterior, con el fin de establecer límites y controles al ejercicio del monopolio de la persecución penal, mecanismos estos previstos de manera escalonada a lo largo de la actuación y encomendados a los jueces de control de garantías.

Función deferida a los jueces penales municipales, quienes apoyados en las reglas jurídicas hermenéuticas deberán establecer la proporcionalidad, razonabilidad, y necesidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales solicitadas por la Fiscalía, o evaluar la legalidad de las actuaciones objeto de control posterior.

El juez de control de garantías determinará, particularmente, la legalidad de las capturas en flagrancia, las realizadas por la Fiscalía de manera excepcional en los casos previstos por la ley, sin previa orden judicial y, en especial, tendrá la facultad de decidir sobre la imposición

de las medidas de aseguramiento que demande la Fiscalía, cuando de los elementos materiales probatorios o de la información obtenida a través de las pesquisas, aparezcan fundados motivos para inferir que la persona es autora o partícipe de la conducta que se indaga.

De otra parte, armonizando la naturaleza de las medidas de aseguramiento con la filosofía que inspira el sistema acusatorio y acorde con la jurisprudencia constitucional, sobre la materia, su imposición queda supeditada a unos fines que justifican la restricción del derecho fundamental a la libertad. En consecuencia, no bastará con evidencias de las cuales se pueda inferir la autoría o participación en la comisión de un delito, sino que se torna indispensable que la privación de la libertad devenga necesaria en razón del pronóstico positivo que se elabore, a partir de tres premisas básicas: que el imputado estando en libertad pueda obstruir el curso de las investigaciones; que pueda darse la fuga; o que, por la naturaleza del hecho investigado, constituya un peligro para la sociedad o las víctimas del delito[4]."

Luego entonces, a la Fiscalía General de la Nación no le era exigible otra conducta, teniendo en cuenta su labor investigativa y todas las obligaciones que le recaen como órgano persecutor penal, empero era el Juez de Control de Garantías quien tenía el deber de determinar la necesidad y procedencia de la captura, pues él descansa la responsabilidad de decretarla, comoquiera que la solicitud formulada por mi representada sobre la imposición de la medida restrictiva de la libertad, no presentaba para el juzgador la obligación de acceder a su aplicación, por cuanto la misma no constituye un factor determinante en la decisión, la cual corresponde única y exclusivamente al Juez.

Fue así que la Fiscalía General de la Nación, al momento de solicitar la medida restrictiva de la libertad, tenía los elementos probatorios suficientes para considerar que **CARLOS ANDRES FIGUEROA PIEDRAHITA se encontraba incurso en el delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO, tales como la denuncia, así como el informe entre otros, al punto que la medida de aseguramiento fue ordenada por el Juzgado con Función de Control de Garantías, Despacho que analizó su pertinencia, conducencia y necesidad.**

Respecto a este tema, el H. Consejo de Estado en sentencia del 24 de junio de 2015, Radicación 38.524, C.P. Hernán Andrade Rincón, manifestó:

"En efecto, con la expedición de la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal – el legislador artículo el proceso penal de tal manera que buscó fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, como de instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar dentro de la acción penal, por lo que,

[4] Gaceta del Congreso # 134 del 26 de abril de 2002. Exposición de motivos del Acto Legislativo 237 de 2002 – Cámara (Actual Acto Legislativo 02 de 2003).

suprimió del ente investigador- Fiscalía – la facultad jurisdiccional la cual venía ejerciendo por disposición del antiguo código de procedimiento penal- ley 600 de 2000.

Así las cosas, a la luz de las nuevas disposiciones del procedimiento penal, la facultad jurisdiccional quedó en cabeza de la rama Judicial, razón por la cual, las decisiones que impliquen una privación de la libertad, son proferidas por los Jueces que tienen a su cargo el conocimiento del proceso penal, como en efecto ocurrió en este caso mediante el auto proferido el 18 de noviembre de 2005 por el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías que decretó la medida de aseguramiento contra el actor.

*Así pues, en el sub examine las decisiones que llevaron a la privación de la libertad del señor Carlos Julián Tuñón Gálviz, si bien es cierto fueron solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que dicho ente no tenía la potestad del hoy actor, cosa que sí le correspondía a la Rama Judicial, por encontrarse dentro de sus funciones jurisdiccionales, razón por la cual**,** forzoso resulta concluir que en el presente asunto y, a la luz de las nuevas disposiciones penales, no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Fiscalía General de la nación, razón por la cual se confirmará su falta de legitimación en la causa por pasiva por la privación de la libertad del señor Carlos Julián Tuñón Gálviz…".*

Igualmente, en sentencia del 26 de mayo de 2016, Consejero Ponente Dr. HERNÁN ANDRADE RINCÓN, expediente 41573, anotó sobre la falta de legitimación de la Fiscalía General de la Nación, así:

*"…**4. La falta de legitimación de la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación:***

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Sobre el particular, la Sala estima necesario reiterar el criterio expuesto en sentencia proferida el 24 de junio de 2015 , según el cual si bien cada una de las entidades demandadas ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia (inciso segundo del artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Rama Judicial (representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), razón por la cual una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual fue debidamente notificada y representada.

En efecto, con la expedición de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal- el legislador articuló el proceso penal de tal manera que buscó fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, como de instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar dentro de la acción penal, por lo que, suprimió del ente investigador -Fiscalía- la facultad jurisdiccional , la cual venía ejerciendo

por disposición de los antiguos Códigos de Procedimiento Penal -Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000-.

Así las cosas, a la luz de las nuevas disposiciones del procedimiento penal, la facultad jurisdiccional quedó exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, las decisiones que impliquen una privación de la libertad, son proferidas por los Jueces que tienen a su cargo el conocimiento del proceso penal , como en efecto ocurrió en este caso mediante el auto proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Armenia con funciones de control de garantías que declaró la legalidad de la captura, según se desprende del oficio No. CCSJ-0095 expedido por la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales.

Así pues, en el asunto sub examine la decisión que llevó a la privación de la libertad del señor Pedro Pablo Palacio Molina, si bien es cierto fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que dicho ente no tenía la potestad de decidir sobre la privación de la libertad del ahora demandante, cosa que sí le correspondía a la Rama Judicial, por encontrarse dentro de sus funciones jurisdiccionales, razón por la cual, forzoso resulta concluir que en el presente asunto y, a la luz de las nuevas disposiciones penales, no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Fiscalía General de la Nación…"

Posteriormente, en sentencia del 30 de junio de 2016, Consejera Ponente Dra. MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO, expediente 41604, reiteró:

"(…) En efecto, tal y como lo ha puesto de presente esta Subsección, con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio distinguió de manera clara y precisa en cabeza de quién recaen las funciones de investigar y acusar -Fiscalía General de la Nación- y sobre quién radica la función de juzgar - Rama Judicial-. Así las cosas, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías, tal y como en efecto sucedió. NOTA DE RELATORIA: Referente a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, consultar sentencia de 16 de abril de 2016, Exp. 40217, MP. Carlos Alberto Zambrano Barrera".

Posición que ha sido reiterada por el Alto Tribunal de lo Contencioso, entre otras, en la (i) Sentencia del 14 de julio de 2016, Consejera Ponente Dra. MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO, expediente 42476, (ii) Sentencia del 14 de julio de 2016, Consejera Ponente Dra. MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO, expediente 42555, (iii) Sentencia del 21 de 2016, Consejero Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO, expediente 41608, en las que ha deprecado que a la Fiscalía General de la Nación no le resulta atribuible el daño alegado por la privación injusta de la libertad, comoquiera que si bien pone a disposición del Juez de Control de Garantías el material probatorio y su teoría del caso, es éste último quien conforme a las facultades que le otorga la normatividad y en ejercicio de la sana critica,

conforme a la Ley 906 de 2004, quien impone la medida de aseguramiento, y por ende la Fiscalía no es condenada.

No siendo ajeno a esta realidad jurídica y jurisprudencial, los Jueces Administrativos en demandas en contra de la Fiscalía General de la Nación y otros, por casos similares al que hoy nos ocupa, han desestimado la responsabilidad de mi representada, e incluso, han decidido favorablemente sobre esta exceptiva de falta de legitimación en la casusa por pasiva, ejemplo de ello, el **JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI en sentencia No. 009 del 31 de enero de 2017, radicado No. 76001-33-33-009-2014-00279-00, accionante JULIÁN CASTAÑO BEDOYA y OTRO,** señaló:

> *"De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, para el Despacho es claro que en el sub-lite se configura la existencia de un daño antijurídico, como quiera que el demandante Julián Castaño Bedoya fue privado injustamente de su libertad desde el 21 de junio de 2011 hasta el 12 de junio de 20126, en atención a la orden de captura No. 0285891, emitida por el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali y legalizada de manera posterior por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali**;** circunstancia que a toda luces vulneró una de sus garantías fundamentales (la libertad) y se ubica por sí sola en el régimen de responsabilidad objetivo, bajo el título de imputación del daño especial, al encontrarse acreditado que su absolución se dio en aplicación al principio universal in dubio pro reo.*
>
> *A partir de lo anterior, es importante señalar que los perjuicios ocasionados a los demandantes resultan imputables únicamente a la Nación-Rama Judicial**,** en atención a que la detención del demandante, Julián Castaño Bedoya**,** tuvo origen en las decisiones adoptadas por los Juzgados en comento, las cuales, independientemente de ser legítimas o no, enerve la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado, por cuanto el control y la imposición de la medida privativa de la libertad se encuentra radicada en cabeza del Juez de control de garantías, quien valga la pena resaltar, actúa en calidad de Juez Constitucional, al tener la obligación de garantizar los derechos fundamentales del procesado, lo que conlleva a una imputación material y jurídica del daño, pues es el mismo ordenamiento jurídico quien la atribuye cuando éste, después de ejercer su función punitiva, no logra desvirtuar la presunción de inocencia que como derecho fundamental cobija a todos los administrados.*
>
> *Por otra parte, se vislumbra la existencia del nexo de causalidad entre la actuación realizada por parte de la Nación - Rama Judicial y el daño que sufrió el demandante, si se tiene en cuenta que en la sentencia absolutoria, al realizar un detallado análisis del material probatorio recaudado, se estableció que las pruebas aportadas no eran suficientes para imputarle responsabilidad penal al señor Julián Castaño Bedoya**,** pues el único testigo presentado por la Fiscalía como presencial de los hechos, no asistió al juicio.*
>
> *Tomando como marco de reflexión lo expuesto, es claro que existe relación causal entre el obrar de la demandada Nación - Rama Judicial y el daño que se produjera al demandante*

Julián Castaño Bedoya, con lo que se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad estatal en este asunto.

*Como consecuencia del análisis efectuado, deberá descartarse la presencia de responsabilidad por parte de la también demandada Fiscalía General de la Nación**,** amén de que, de acuerdo con el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, las funciones de dicha entidad se limitan a solicitar la imposición de la medida privativa de la libertad, más no tiene injerencia alguna en la decisión que se tome respecto de su aplicación, pues ésta es del resorte exclusivo del Operador Judicial".*

Así también, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA ha reiterado tal posición de negar las pretensiones respecto a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por cuanto dicha Entidad no interviene en la imposición de la medida privativa de la libertad, recientemente, en sentencia del 12 de marzo de 2018, radicado No. 76-001 - 33-33-006-2012-00230-01, M.P. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**, indicó:

"Frente al nexo causal, se encuentra probado que si bien la privación de la libertad del señor JOSÉ ALEJANDRO RAMIREZ LÓPEZ, fue producto de una solicitud presentada por parte de la FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN, lo cierto es que la misma tuvo lugar con ocasión a una decisión judicial tomada por el Juzgado Veinticinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, quien resolvió ordenar su captura preventivamente, mientras se le adelantaba una investigación penal, la cual, posteriormente, fue culminada por parte del Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, al declarar la absolución del procesado, ante las dudas que existían frente a su participación en la conducta punible de la que se le acusaba.

Como consecuencia de lo anterior, es menester indicar que en atención a que se encuentra acreditada la relación de causalidad entre la actuación de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL y el daño antijurídico que se le produjo al demandante, al ser privado de su libertad, es procedente declarar la responsabilidad Estatal en el asunto objeto de estudio, bajo el régimen de imputación objetivo, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en la jurisprudencia a la que se hizo mención en párrafos precedentes y como quiera que de las pruebas obrantes en el proceso no se desprende que el sindicado hubiere dado lugar, con su actuar, a la privación de su libertad, amén de que tampoco se observó la configuración de alguna causal eximente de responsabilidad.

(…)

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de imponer la condena sólo contra la NACIÓN-RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, debiéndose negar las pretensiones respecto a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en atención a que dicha institución no interviene en la imposición de la medida privativa de la libertad, pues dentro de sus funciones no se encuentran la de impartir decisiones jurisdiccionales, ni deprecar medidas de dicha índole".

Por lo brevemente expuesto, se puede concluir que la Fiscalía General de la Nación no se encontraría legitimada en la causa en este proceso, toda vez que por sus funciones le corresponde adelantar la investigación y de acuerdo con la prueba obrante en el momento procesal, solicitar como medida preventiva la detención del sindicado, siendo competente y responsable de su decreto el Juez de la República, es decir, **la decisión causante del daño antijurídico emanó únicamente del Juez de la República**.

2. AUSENCIA DEL DAÑO ANTIJURIDICO E IMPUTABILIDAD DEL MISMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

El Honorable Consejo de Estado en Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 05001-23-25-000- 1995-01119-01(21536)Actor: LUZ OFELIA JIMENEZ Y OTROS, Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA; RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, **no es posible reconocer el daño con una mera conjetura:**

> *"El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien, o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura**. En efecto, la antijuridicidad del daño es un requisito sine qua non de la responsabilidad del Estado, y además, el primer elemento en el análisis que debe hacer el juez contencioso para tal efecto" (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

Esta decantado por la jurisprudencia de la instancia de cierre de esta jurisdicción, que un requisito sine qua non para que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado, es la existencia de un daño antijurídico, y en el caso concreto, la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** no está legitimada para responder por los daños presuntamente causados a los demandantes, por ello se hace necesario esgrimir como excepción la ausencia del daño con el fin de resolver desfavorablemente las pretensiones de la demanda, pues si no hay daño antijurídico no hay lugar a reparación esto por cuanto además no todo daño implica necesariamente un perjuicio que se deba reclamar.

El artículo 90 de la Constitución Política literalmente indica: "*Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. () En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".*



Bajo esta premisa para que proceda el deber de responder patrimonialmente, se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos constitucionales: (i) El daño antijurídico y (ii) la imputabilidad del daño antijurídico al Estado.

En este sentido, el Doctor Enrique Gil Botero ha manifestado:

> *"La objetivación del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.[5]"*

De igual manera, como lo manifestó el tratadista en derecho Libardo Rodriguez, para que el daño sea indemnizable se requiere:

> *"(…) El actor sólo debe acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el hecho causante del perjuicio[6]".*

De esta manera, es necesario tener claro el concepto de daño antijurídico y la imputabilidad que se acepta por parte del Consejo de Estado, para lo cual se transliteran apartes de sentencias y de conceptos de procuradores delegados ante la precitada Corporación:

> *"El concepto de daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución, ni en la Ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del Profesor Eduardo Garcia Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991hasta épocas más recientes, como el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.*
>
> *(…)*
>
> *La imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a entidad pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto en principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad, esto es, del subjetivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional y daño especial)[7].*

Así las cosas, se puede observar que la Entidad, por el hecho de tener la titularidad de la acción penal, propendió a evitar que los presuntos infractores de la ley penal pudieran obstruir la justicia o que en su defecto representaran un peligro para la sociedad, ello con ocasión a las funciones que cumple conforme a la Ley 906 de 2004.

---

[5] Responsabilidad Extracontractual del Estado, Ed Temis, pág. 28, 2011.

[6] Derecho Administrativo General y colombiano, Ed Temis, pág. 625,2013.

[7] Concepto 12-23 Expediente: 27001233100020090007 9-01 Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, enero 30 de 2011.

3. INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD

Es importante precisar, que para que pueda condenarse al Estado, deben demostrarse en el proceso los siguientes supuestos: (i) Existencia del hecho (falla en el servicio), (ii) Daño o perjuicio sufrido por el actor, y (iii) Relación de causalidad entre el primero y el segundo. Bajo este escenario, no se evidencio falla en el servicio y en consecuencia no existe el daño aducido por el demandante, por parte de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,** toda vez, que dentro del plenario no se aportaron las pruebas que conlleven a la responsabilidad patrimonial y administrativa de mi prohijada.

4 HECHO DE UN TERCERO

Respecto de la causal de ausencia de responsabilidad por el hecho de un tercero, el Consejo de Estado en sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 25000-23-26-000-1992-0844501(18148), con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón, señaló:

"Esta Sala ha manifestado que el hecho del tercero constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos:

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponde pagar en la medida de su intervención.

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende el hecho del tercero no será ajeno al demandado.

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, "sólo cuando el acontecimiento o sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor".

En relación con la imprevisibilidad, señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño".

Llama la atención el actuar de la víctima que en su entrevista señala al aquí demandante como la persona que la accedió pero fue con su consentiniento por lo que no hay un señalamiento directo en contra del aquí demandante por lo que finalmente la Fiscal que no se pudo probar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del procesado por la no participación en los delitos investigados, así que tal situación permitió la exoneración de responsabilidad del hecho delictivo al hoy demandante, lo que podría considerase como una inexistencia del vínculo causal entre el accionar de la FGN y los perjuicios por cuya indemnización se reclama, pues la situación planteada en la demanda no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la Administración de Justicia -a pesar de ser la causa inmediata- sino en la conducta asumida por un tercero.

Corolario de lo anterior, tenemos que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, sino del proceder -activo u omisivo- de un tercero, en este caso la de la víctima que no señalo al aquí demandante, como autor del acceso carnal violento puesto que dicho acceso fue consentido por la víctima y en el juicio no aparece su declaración señalando al aquí demandante, formulado causa eficiente en la producción del resultado o daño que hoy alega la parte demandante, lo que rompe el nexo de causalidad y por ello el daño no puede ser imputable a la FGN, porque aunque hubiese sido su conducta anómala (no probada en

el presente proceso) la causa material del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del tercero.

PETICION

Solicito a su Despacho, de manera respetuosa y por las anteriores razones, se procure un fallo que deniegue todas las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, pues no se avizora ningún tipo de responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la Nación.

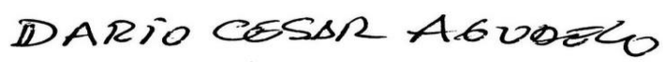
ANEXOS

- Poder para actuar.
- Copia de la Resolución de nombramiento y acta de posesión de la Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
- Copia de la Resolución Nro. 0-0303 del 20 de marzo de 2018.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Calle 10 No. 5-77, oficina 1506 piso 15, Edificio San Francisco, Cali- Valle, o en la Secretaría del despacho. Correos para notificaciones judiciales; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co o al correo electrónico institucional del suscrito dario.agudelo@fiscalia.gov.co.

Del Honorable Juez,



DARIO CESAR AGUDELO BUSTAMANTE
C. C. No. 16.586.694 de Cali
T. P. No. 82.194 del C. S. de la J.
Teléfono :3045981637

Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali

De: Andrés Mauricio Paque Cárdenas
Enviado el: lunes, 6 de febrero de 2023 4:22 p. m.
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali
CC: secretaria.juridica@jamundi.gov.co
Asunto: RV: C23-5514 RV: Contestación de demanda 76001333301420210009900
Datos adjuntos: poder - rad. 2021-00099 (1).pdf; RAD. 2021-00099 - CONTES DDA CONTROVERSIA CONTRACTUAL - MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ.pdf; anexos apoderado (1).pdf; DOCUMENTO ALCALDE JAMUNDI (2) (1).pdf

Cordial saludo,

Remito constancia de radiación en adjunto denominado SAMAI proceso judicial.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.
Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co



Atentamente,

ANDRES MAURICIO PAQUE CÁRDENAS
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 16:02
Para: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C23-5514 RV: Contestación de demanda 76001333301420210009900

DHORA STELLA RAMÍREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Secretaría Juridica <secretaria.juridica@jamundi.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de febrero de 2023 15:58
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Contestación de demanda 76001333301420210009900

Cordial saludo,

Respetuosamente se adjunta contestación de demanda y anexos del proceso:

Medio de Control: Acción Contractual
Demandante: María del Rosario Rodríguez
Demandado: Municipio de Jamundí
Radicación: 76001333301420210009900
Actuación: Contestación de Demanda

Atentamente,

_34-14-04-389 de 2017 a.pdf

34-14-04-389 de 2017 b.pdf

34-14-04-389 de 2017 c.pdf

34-14-04-414 de 2016 a.pdf

34-14-04-414 de 2016 b.pdf

--

ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

Gobierno de los Ciudadanos

Secretaría Jurídica
Secretaria
Amanda Catalina Rojas Díaz

Teléfono: (57+2) 5190669 Ext: 1063
Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia
www.jamundi.gov.co

Señores
JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Ref.
Medio de Control: Acción Contractual
Demandante: María del Rosario Rodríguez
Demandado: Municipio de Jamundí
Radicación: 76001-33-33-014-**2021-00099- 00**
Actuación: Contestación de Demanda

FABIÁN DAVID OROZCO GONZÁLEZ, domiciliado en Palmira, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.698.405 expedida en Palmira, Abogado Titulado, portador de la Tarjeta Profesional No. 225.823 del C. S. J., actuando en mi calidad de apoderado del MUNICIPIO DE JAMUNDI, representada legalmente por el Señor Alcalde ANDRES FELIPE RAMIREZ RESTREPO según consta en el Acta de Posesión No. 01 del 30 de diciembre de 2019 de la Notaria Única de Jamundí, que acompaño, por medio del presente escrito procedo a dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y PROPONER LAS EXCEPECIONES, en relación al medio de control instaurado por la Señora AIDA LUCUMÍ DÍAZ.

I. TEMPORALIDAD DEL ESCRITO

Mi procurada recibió la notificación por correo electrónico del auto que admitió la demanda el día 30 de noviembre de 2022, por consiguiente, el término de treinta (30) días para contestar inició su contabilización el 2 de diciembre de 2022 y se vencería el 7 de febrero de 2023, teniendo en cuenta los dos (2) días que alude el Decreto 806 de 2020, así como también lo consagrado en el párrafo cuarto del artículo 199 del CPACA.

II. PARTES INTERVINIENTES

PARTE ACCIONANTE: Está constituida por la señora MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía. No. 31.235.604.

PARTE ACCIONADA. Está constituida por el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, identificada con el N.I.T. 890399046-0, cuya representación legal está en cabeza del señor alcalde

ANDRES FELIPE RAMIREZ RESTREPO o quien haga sus veces en cada etapa procesal.

III. A LOS HECHOS U OMISIONES

AL HECHOS 1: ES CIERTO, así se desprende de los documentos adosados a la demanda.

AL HECHOS 2: ES PARCIALMENTE CIERTO. Si bien se establecieron las cláusulas que corresponden al contrato objeto de debate, estas no fueron impuestas, cumplió con el requisito de ser un acuerdo entre las partes, las cuales fueron aceptadas con la suscripción de este.

A LOS HECHO 3 Y 4: NO SON HECHOS COMO TAL. Es una descripción o fragmentos de varias normas contenidas en la Ley 80 de 1993.

Los contratos de arrendamiento son de naturaleza comercial, y se rigen además por la Ley 80 de 1993 de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 40; este último artículo establece lo siguiente:

> ***"Artículo 40. Del Contenido del Contrato Estatal****. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*
>
> ***Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.***
>
> ***En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.***
>
> *En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.*
>
> *(…)"*

AL HECHO 5: NO ME CONSTA, que se demuestren en el tránsito procesal, ya que se sustenta en una certificación que no hace parte del plenario.

AL HECHO 6: NO ME CONSTA, que se demuestren en el tránsito procesal.

Aunque en su parte inicial refiera un número diferente de contrato, en su contenido tanto en la parte considerativa como la parte definitiva, se hace referencia al objeto contractual entre las partes.

No existe prueba o documento que conste la existencia de saldo a favor de la accionante.

AL HECHO 7: NO ME CONSTA, que se demuestren en el tránsito procesal.

A LOS HECHOS 8 Y 9: NO SON HECHOS COMO TAL. Es una descripción o fragmentos de varias normas.

Cabe resaltar que el objeto contractual en los contratos 414 de 2016 y 389 de 2017 consistía en poner a disposición los locales 316 y 317 para el FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, condición que se cumplió por el término contractual, ya que la referida secretaría ocupó los inmuebles hasta el mes de diciembre de 2017.

A LOS HECHOS 10, 11, 12 13 Y 14: SON CIERTOS, así se desprende de los documentos adosados a la demanda.

Un hecho notorio que La Secretaría de Hacienda expidió el MAN DAMIENTO DE PAGO No.40-02-83 del 12 de septiembre de 2017, y procedió a ordenar el embargo y secuestro de los cánones de arrendamiento mediante Resolución de Medida Cautelar No. 1770 del 29 de diciembre del 2017, al que tiene derecho la contribuyente MARIA ROSARIO RODRIGUEZ GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31235604 dentro del contrato de arrendamiento No. 31-14-08-389 de fecha 19 de Mayo de 2.017, celebrado con el Municipio de Jamundí, sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-597708 ubicado en la k 1113 39 local 201. Estos actos administrativos se notificaron a la accionante el día 29 de diciembre de 2017, adicionalmente se notificó el Oficio No. 39-1 9-007 del 23 de Febrero de 2018, recibido el 26 de febrero de la misma anualidad.

Además de lo anterior, se debe considerar, es que la accionante cuenta con una obligación a favor de mi representada, consistente en impuesto predial de los bienes a su nombre, obligación que al año 2019 ascendía a $372.864.306,oo; por este motivo en el mismo año 2019 se le propuso como alternativa de pago, cruzar el pago de los cánones de arrendamiento con la obligación de impuesto predial.

Lo anteriormente relacionado, se encuentra sustentado en la carpeta administrativa adjunta a la presente contestación.

AL HECHO 15: ES CIERTO, así se desprende de los documentos adosados a la demanda.

Cabe resaltar, que los requerimientos radicados por la accionante consisten en reclamar cánones de arrendamiento hasta el mes de enero de 2018, y no hasta la vigencia 2020, como lo pretende en el presente asunto, sin demostrar bajo ninguna prueba, que haya existido un supuesto hecho cumplido de ocupación que se haya prolongado más allá del mes de diciembre de 2017.

AL HECHO 16: NO ME CONSTA, que se demuestren en el tránsito procesal.

Aunque la parte accionante relaciona un incumplimiento, no existe un inventario, o prueba alguna que haya dejado relación del estado de los locales al ser ocupados por mi representada, ni inventario estado al ser desocupados al 29 de diciembre de 2017.

AL HECHO 17: ES PARCIALMENTE CIERTO, así se desprende de los documentos adosados a la demanda.

Cabe resaltar que el oficio relacionado, describe “una humedad, generada por el sitio de la cocina de nuestra oficina hacia el tercer piso”, lo que se puede deducir que se trata de fugas o filtraciones en la red hidráulica, las cuales corresponde al arrendador o propietario el mantenimiento de los mismos, mas no del arrendatario. Este oficio demuestra el incumplimiento por parte de la accionante.

AL HECHO 18: NO ES CIERTO. Los locales comerciales objeto de arrendamiento, fueron ocupados por mi representada hasta el día 29 de diciembre de 2017 para el funcionamiento de la secretaría de salud, como objeto contractual. Por lo tanto, se dio cumplimiento al objeto del mismo.

Cabe resaltar, que los requerimientos radicados por la accionante consisten en reclamar cánones de arrendamiento hasta el mes de enero de 2018, y no hasta la vigencia 2020, como lo pretende en el presente asunto, sin demostrar bajo ninguna prueba, que haya existido un supuesto hecho cumplido de ocupación que se haya prolongado más allá del mes de diciembre de 2017.

AL HECHO 19: NO ES UN HECHO COMO TAL, es el cumplimiento de un requisito de procedibilidad.

Sin embargo, la parte accionante ya había acudido a la conciliación extrajudicial anteriormente bajo el Radicado No. 10196 del 12 de abril de 2019, solicitud de

conciliación sustentada bajo los mismos hechos, pero reclamando cánones de arrendamiento hasta el mes de enero de 2018; y en la solicitud que se elevó ante la Procuraduría 166 Judicial II para asuntos administrativos, se corroboró la caducidad de la acción de controversia contractual, así mismo se declaró la inadmisión de la solicitud, no siendo subsanada la misma y posteriormente rechaza.

Lo anteriormente relacionado, se encuentra sustentado en la carpeta administrativa adjunta a la presente contestación.

IV. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DEFENSA

Invoco como fundamento de derecho las siguientes disposiciones:

- Artículo 230 de la Constitución Política de Colombia
- Artículo 138, 164, 175, 306, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Artículo 19 de la Ley 678 de 2001.
- Artículo 40 de la Ley 2080 de 2021.

- **CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CUANDO HAY OBLIGACIONES POR CUMPLIR:**

El Consejo de Estado indicó que el término de caducidad de la acción contractual se computa así[1]:

1. Si la liquidación del contrato fue efectuada de manera bilateral, el término para formular la demanda se cuenta desde el día siguiente al de la firma del acta;
2. Si la liquidación del contrato ha sido efectuada unilateralmente por la administración, el término de caducidad debe contabilizarse desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe y
3. Si no se realizó la liquidación del contrato, el conteo del plazo para formular la demanda se contabiliza una vez vencido el término de 2 meses para liquidar el contrato unilateralmente.

A pesar de lo anterior, la Corte consideró que luego de la liquidación del contrato pueden persistir obligaciones que deben cumplirse con posterioridad a esta o surgir aspectos que no podían determinarse al momento de realizar dicho balance técnico-económico, de ahí que en esos casos sea necesario aplicar la regla de caducidad prevista en el inciso 1 del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según la cual el término

[1] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. RAD. 64413. 02 DE JULIO DE 2020.

para formular la demanda de controversias contractuales se computa a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento.

El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales para debatir aspectos que deben cumplirse o que surgen luego de la firma del acta de liquidación del contrato, se contabiliza a partir del momento en el que nacen o se hacen evidentes los motivos de hecho o de derecho que los fundamentan, esto por cuanto el balance final del negocio jurídico no tiene como efecto declarar a las partes a paz y salvo por asuntos que no podían ser conocidos o exigibles.

En este sentido, tenemos que el bien inmueble se ocupó por parte de mi representada, hasta el día 29 del mes de diciembre de 2017, teniendo entonces que la accionante tuvo la oportunidad de ejercer la acción contractual hasta el día 29 de diciembre de 2019; y si bien radicó reclamación administrativa el día 16 de enero de 2018, sólo hasta el 12 de mayo de 2022 mediante apoderado judicial radicó ante los juzgados contenciosos administrativos del circuito de Santiago de Cali la demanda del asunto.

V. EXCEPCIONES

- Me permito proponer la siguiente EXCEPCIÓN PREVIA:

1. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Conforme a lo consagrado en el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificada por la Ley 2080 de 2021 en su precepto 40, me permito proponer la excepción de caducidad de la acción, habida cuenta que, el medio de control impetrado tiene más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció los hechos que supuestamente dieron origen a la demanda (Otrosí No. 2 del 16 de abril de 2016) y la fecha que se admitió la demanda fue el 19 de agosto de 2021.

Por tanto, ruego al Honorable Juez que se dé aplicación a la figura de la caducidad de la acción, como quiera que, la parte demandante no ejerció oportunamente la acción que supuestamente tiene, esto debe entenderse, no como un premio para el demandado, sino como un castigo, para quien no inició, en el tiempo que concede la ley, la solicitud de los respectivos derechos.

- De igual manera, me permito proponer las siguientes EXCEPCIONES DE MÉRITO:

1. COBRO DE LO NO DEBIDO POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Consiste esta excepción en el hecho, y como ya se ha planteado, que mi representada no ha incumplido con las obligaciones contenidas en los contratos de arrendamiento suscritos entre el municipio de Jamundí y la señora María Rosario Rodríguez García, dado que, los locales objeto de arrendamiento para el funcionamiento de la secretaría de salud, fueron ocupados hasta el mes de diciembre de 2017, y no hasta el año 2020, como lo pretende la parte actora, además de que existe una medida cautelar de embargo de los cánones de arrendamiento causados sobre los contratos de arrendamiento; por lo tanto, mal haría el Municipio de Jamundí reconocer y pagar por situaciones que no han son atribuibles a éste.

Así las cosas, se puede vislumbrar con bastante notoriedad que es una demanda temeraria y de mala fe en contra de la entidad territorial. Es por ello, que al ser inexistente lo solicitado por la parte actora, resulta improcedente exigirle cumplir la obligación, y pagar lo que legal y/o contractualmente no debe.

2. BUENA FE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEMANDADA

Sin que ello implique reconocimiento de derecho alguno, es pertinente afirmar que la buena fe debe presumirse en analogía con el principio universalmente reconocido de la inocencia; en consecuencia, cualquier indemnización deberá estar antecedida de una valoración de las pruebas que se aporten al expediente, y/o las que llegaré a solicitar oficiosamente el Juzgador, que sin asomo de duda corroboren que mi representada no actuó de mala fe. En virtud de lo anterior, mi mandante no puede ser condenada a ninguna indemnización derivada de un proceder de mala fe a ella imputable, toda vez que, en sus actuaciones siempre demostró haberse ceñido a las normas que regulan los hechos en discusión y creyó haber hecho lo que correspondía conforme su comprensión de la ley.

3. MALA FE DE LA PARTE ACTORA

Resulta totalmente claro que la demandante pretende obtener, mediante engaños, el reconocimiento de serie de sumas de dinero y beneficios, sustentando sus pretensiones sobre argumentos completamente ilógicos e inexistentes. Este tipo de situaciones podría inclusive generar la iniciación de procesos disciplinarios.

En armonía con lo expuesto, la Jurisprudencia nacional ha sostenido que otro principio igualmente vigente en el derecho positivo es el de la buena fe. La expresión buena fe (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias

del decoro social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. Trátese de una lealtad activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren como nosotros decorosamente.

Así las cosas, vemos que la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido si lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, el de mala fe. En general obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre. Desde luego, toda persona trata de obtener ventajas en sus transacciones, pero quien pretende obtener tales ventajas obrando en sentido contrario a la buena costumbre, actúa de mala fe. El hombre de buena fe trata de obtener ventajas, pero estas se encuentran autorizadas en la buena costumbre".

4. INNOMINADA

Teniendo como sustento el artículo 282 del Código General del Proceso, alego a favor de mí representada, cualquier hecho que constituya una excepción la cual deberá ser reconocida y declarada de oficio por el Juez de Conocimiento en la sentencia.

VI. A LAS PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS

En cuanto a las pretensiones, declaraciones y condenas de toda cualidad y calidad perseguidas en este proceso, ME OPONGO A TODAS, aduciendo como base la obligación de reconocer y pagar la exorbitante económica que presuntamente debe el ente territorial, según al supuesto incumplimiento que quiere enlazar la parte actora, cuando realmente no existe una orden judicial que así lo amerite, y por ende, resulta desacertado que sea el municipio el que asuma la cancelación de dicho pago, indemnización y demás emolumentos solicitados en el libelo demandatorio.

Igualmente solicito al despacho de conocimiento que no se declare, no se ordene ni se condene al MUNICIPIO DE JAMUNDI al pago de los conceptos instados por la señora MARÍA ROSARIO RODRÍGUEZ GARCÍA y los cuales pretenden que le reconozcan.
Siguiendo esa misma línea, muy respetuosamente le solicito al Operador Judicial se sirva declarar lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción previa denominada CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada COBRO DE LO NO DEBIDO POR INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada BUENA FE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEMANDADA.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada MALA FE DE LA PARTE ACTORA.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada INNOMINADA.

QUINTO: en relación con las costas, si no son de recibo las condenas solicitadas en contra de mi procurada, mucho menos puede pretenderse que prospere una condena accesoria como son las costas judiciales, por lo cual me opongo a que se profiera algún tipo de condena por este concepto. Por el contrario, quien deberá asumir una condena ejemplar en costas judiciales, es la parte actora, por la temeridad y falta de fundamentos jurídicos en lo atinente a requerir judicialmente al municipio de Jamundí.

VII. PETICION ESPECIAL

Conforme al precepto 306 contemplado en la Ley 1437 de 2011, nos remitimos al Código General del Proceso en cuánto a la integración del litisconsorcio necesario consagrado en el artículo 61 que reza:

> *"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*
>
> *En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.*
>
> *Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.*
>
> *Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.*

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio."

En lo atinente a la norma citada, comedidamente me permito solicitarle, se sirva integrar como litisconsorte necesario a los siguientes:

- MANUEL SANTOS CARRILLO OCHOA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.873.038, recibirá notificación personal en la Calle 16D No. 6-26 o Condominio La Morada, Etapa 7 y 8 Manzana D Casa 4 en Jamundí.

- PEDRO RAFAEL VIZCAINO LASCANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.190.423, recibirá notificación personal en la Carrera 11 No. 6-70 en Jamundí. Y al correo electrónico pedrovizcainolascano@hotmail.com

Debido a que, sin la intervención de las aludidas personas en el presente proceso que ocupa nuestra atención, no se podrá, por parte del Juzgador, hacer un pronunciamiento de fondo.

Sustentando lo anterior, debemos ceñirnos por lo contemplado en el artículo 19 de la Ley 678 de 2001, que indica:

"Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PARÁGRAFO. La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor."

Así las cosas, es menester hacer comparecer a los señores PEDRO RAFAEL VIZCAINO LASCANO y MANUEL SANTOS CARRILLO OCHOA, en sus calidades de exalcalde y exsecretario de salud respectivamente del Municipio de Jamundí y quienes suscribieron el primero, los contratos de arrendamiento, y el segundo como supervisor de los contratos, habida cuenta que en el evento de que la sentencia sea favorable para el demandante, aquellos exservidores públicos deberán asumir el pago.

VIII. A LAS PRUEBAS

Además, si las solicitadas son conducentes y procedentes con miras al total esclarecimiento de los hechos, me adhiero a su práctica y desde ya le solicito a la Señora Juez, señalar día, hora y fecha para su práctica a efectos de poder tener conocimiento de ello, a fin, de poder ejercitar el sagrado derecho de contradecir y contra interrogar.

IX. SOLICITUD DE PRUEBAS

Solicito a la Señora Juez, que se sirva decretar y practicar las siguientes pruebas, para que sean tenidas en cuenta, al elaborarse la sentencia respectiva y velando por el principio del Derecho de Defensa y Contradicción, así:

A. DOCUMENTALES:

- Antecedentes Administrativos relacionados al contrato de arrendamiento No. 34-14-04-414 del 16 de junio de 2016 en un total de 120 folios.

- Antecedentes administrativos relacionados al contrato de arrendamiento No. 34-14-04-389 del 19 de mayo de 2017, en un total de 481 folios.

B. INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito comedidamente, al Señor Juez, se sirva fijar fecha y hora para interrogar de manera verbal o escrita, con el objeto de aclarar los hechos y pretensiones que dieron origen a la demanda, a la Señora MARÍA ROSARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, cuya ubicación puede hacerse de acuerdo con la dirección que figura en el expediente o a través de su apoderado.

X. ANEXOS

- Poder a mi conferido para actuar, con sus correspondiente.
- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.

XI. NOTIFICACIONES

El demandado: recibirá notificaciones personales en la Carrera 10 No. 9-74 en la Alcaldía Municipal de Jamundí, correo electrónico: despacho1@jamundi.gov.co y secretaria.juridica@jamundi.gov.co

El Apoderado del demandado: recibiré notificaciones personales en la carrera 10 No. 9-74 en la Alcaldía Municipal de Jamundí, correo electrónico: despacho1@jamundi.gov.co y secretaria.juridica@jamundi.gov.co, Celular; 300-6728868.

La demandante MARÍA ROSARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, recibirá notificaciones personales en la dirección suministrada en la demanda.

De esta manera dejo contestada la demanda y estando en el término legal.

De la Señora Juez, con todo respeto.

FABIÁN DAVID OROZCO GONZÁLEZ
C.C. No. 14.698.405 de Palmira
T.P. No. 225.823 del C. S. J.

Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali

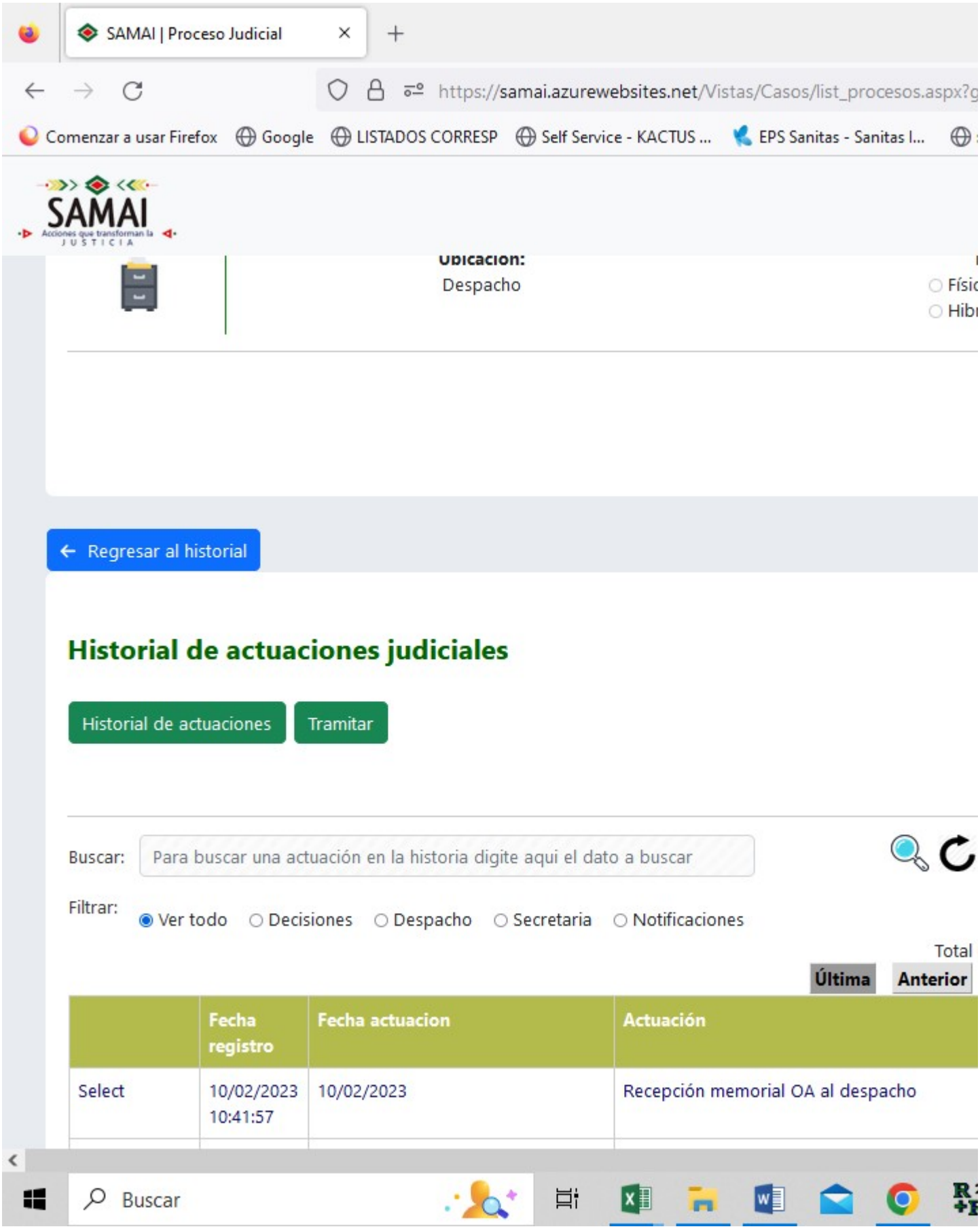
De: Jose David Colmenares Rodriguez
Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2023 10:43 a. m.
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali
CC: gamacias@registraduria.gov.co
Asunto: RV: C23-6719 RV: CONTESTACION DEMANDA- RAD: 76001-33-33014-2021-00140-00
Datos adjuntos: CONTESTACION DEMANDA.pdf; poder.pdf; anexos poder.pdf; 1 PRUEBA RNEC Correo Lider C.I. Delegacion del Valle.pdf; 2 PRUEBA RNEC correo Amanda Ceballos Entregando Funciones.pdf; 3 PRUEBA RNEC Visita Adm.Reg. Especial de Palmira 11-SEP- 2017.pdf; 4 PRUEBA RNEC Renuncia Irrevocable Amanda Ceballo.pdf; 5 PRUEBA 1 RNEC Visita Administrativa Reg. Esp. Palmira 28-FEB 2018.pdf; 6 PRUEBA INFORME DE GESTION REGISTRADORES DEL ESTADO CIVIL DIC 2018.pdf; 7 PRUEBA correo Gerente de Talento Humano.pdf; 8 Prueba oficio UNP -.pdf; 8 PRUEBA RESPUESTA DE LA UNP A SOLICITUD DE LA RNEC.pdf; 9 PRUEBA CORREOS ENVIO RENUNCIA.pdf; 10 PRUEBA Correo talento humano DDVAL ofreciendo acompañamiento en la situacion de amanezar de la funcionaria Amanda Ceballos.pdf; Prueba 8.1 oficio UNP en respuesta a solicitud del GErente de Talento Humano RNEC.pdf

Cordial saludo,

Remito constancia de radicación en el aplicativo denominado SAMAI proceso judicial.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email **of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co**



Atentamente,

JOSE DAVID COLMENARES RODRIGUEZ
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 10:37 a. m.
Para: Jose David Colmenares Rodriguez <jcolmenaresr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C23-6719 RV: CONTESTACION DEMANDA- RAD: 76001-33-33014-2021-00140-00

DHORA STELLA RAMÍREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Gloria Amparo Macias Blandon <gamacias@registraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 10:29
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <jadmin14cli@notificacionesrj.gov.co>
Cc: Ivanova Hortencia Agualimpia Soto <ihagualimpia@registraduria.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA- RAD: 76001-33-33014-2021-00140-00

Santiago de Cali, 10 de febrero de 2023

Doctor

OSCAR EDUARDO GARCIA GALLEGO

Juez catorce (14) Administrativo

Cali Valle

Asunto: CONTESTACION DE LA DEMANDA

demandante: AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ

Demandado: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Radicado: 76001-33-33-014-2021-00140-00

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito enviar CONTESTACION DE LA DEMANDA Y ANEXOS de la demanda referencia, con el fin de que sea integrada al expediente y seguir su curso normal.

CONFIRMAR ACUSO DE RECIBIDO

Cordialmente,

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

GLORIA AMPARO MACIAS B.
Profesional Universitario

gamacias@registraduria.gov.co
Oficina Jurídica
Calle 9 No.40-64 Piso 2 CP 760046
Pbx: (602) 8826024
Cali -Colombia

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Santiago de Cali, 10 de febrero de 2023

Doctor
OSCAR EDUARDO GARCIA GALLEGO
Juez Catorce Administrativo
Cali - Valle

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
RADICACIÓN: 76001-33-33-014-2021-00140-00
DEMANDANTE: AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ Y OTROS
DEMANDADO: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTROS

IVANOVA HORTENSIA AGUALIMPIA SOTO, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.634.079 de Medellín (A) y portadora de la Tarjeta Profesional No. 132.118 del C.S.J, en calidad de apoderada principal y **GLORIA AMPARO MACIAS BLANDON**, igualmente mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.143.666 de Andalucía (V)., y portadora de la Tarjeta Profesional No. 190.944 del C.S.J, actuando en calidad de apoderada suplente de la Entidad demandada REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, según poder que con el presente escrito aportamos, para lo cual solicitamos se nos reconozca personería para actuar, atendiendo el Auto Interlocutorio No. 565 de fecha 10 de octubre de 2022, por medio del cual se decide la admisión de la demanda de Reparación Directa, se vincula como parte Demandante a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTROS, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 y (CPACA), Por ello nos permitimos presentar ante su despacho contestación a la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

1. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA PETICIÓN:

La ciudadana AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ y su familia, actuando mediante apoderada judicial la Dra. SUSANA MERCEDES SARRIA CORREA, pretende lo siguiente:

1. *"Se declare que **LA NACION – REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,** representada por Dr. Alexander Vega Rocha o quien haga sus veces; la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** representada por el Dr. Francisco Roberto Barbosa Delgado o quien haga sus veces - **FISCALIA SECCIONAL CALI**; y la **POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL "DIJIN"** son **administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de sus omisiones y** acciones*

en contra de la doctora ***AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ****, afectándola en su esfera personal, laboral, en su vida de relación con su familia y la sociedad.*

2*.- Condenar en consecuencia* ***LA NACION – REGISTRADURIA NACIONAL DEL*** **ESTADO CIVIL,** representada por *Dr. Alexander Vega Rocha o quien haga sus veces; la* ***FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN*** *representada por el Dr. Francisco Roberto Barbosa Delgado o quien haga sus veces -* ***FISCALIA SECCIONAL CALI****; y la* ***POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL "DIJIN"*** *como reparación del daño ocasionado, a pagar a mis procurados* ***Dra. AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ****,* ***FABIO GALINDO SARRIA****,* ***ALEJANDRA GALINDO CEBALLOS****;* ***MARCELA GALINDO CEBALLOS*** *y la señora* ***TERESA SARRIA DE GALINDO****, en calidad de madre del señor* ***FABIO GALINDO SARRIA Y JULIAN MANUEL LATORRE CEBALLOS*** *en calidad de sobrino de la demandante, el reconocimiento y pago de los perjuicios inmateriales en sus modalidades de "daño moral" y "daño psicológico", así como la indemnización de perjuicios de orden material por concepto de lucro cesante en su modalidades de indemnización como sigue:*

2.1 *Se reconozca y ordene pagar* ***POR PERJUICIOS INMATERIALES*** *en sus modalidades de daño moral y daño psicológico ocasionados a la* ***Dra. AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ*** *y a sus familiares cercanos por la aflicción, desasosiego, temor, peligro inminente, y gran dolor generados por las responsabilidad del estado derivada de la falla del servicio frente las acciones y omisiones que derivaron en la salida forzosa del país de mis prohijados, que cambiaron permanentemente la vida cotidiana, la salud, la vida de su núcleo familiar, su estado sicológico y el de sus allegados de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Código Penal: "Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.*

LUCRO CESANTE y DAÑO EMERGENTE

TOTAL DE LOS PERJUICIOS MATERIALES (LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE... ***($670.471.855).***

2. PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD FRENTE A LAS DECLARACIONES Y PRETENSIONES

1.- Nos oponemos a la prosperidad de todas las pretensiones en contra de la Registraduria Nacional del Estado Civil. Lo anterior por cuanto al ser inexistente perjuicio alguno, al no existir nexo de causalidad frente alguna acción u omisión por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Toda vez que la no caducidad de la demanda se originó alegando como hecho generador de la posible reparación, uno que tiene por fecha del 23 de marzo de 2019, tal como se relaciona en la demanda en el acápite de caducidad, fecha para la cual esta entidad no tenía relación laboral alguna con la Demandante o su familia, y el hecho no genera vinculo con la entidad, por lo que solicitamos e insistimos en que **opera la caducidad** frente a la entidad Registraduría Nación del Estado Civil, siendo improcedente acceder a la reparación de daño alguno, con lo cual se demuestra la caducidad .

Se resalta que es inexistente prueba siquiera sumaria, que demuestre los elementos de la responsabilidad requeridos en para la reparación directa, como se puede constatar sin asombro alguno, que en efecto la gran mayoría de pruebas corresponden a documentales que no nos relacionan y que son propias de un proceso administrativo. Tampoco existe dictamen pericial alguno que soporte los perjuicios sufridos por la parte actora y menos que relacionen a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

2.- Nos oponemos a la prosperidad de esta. En razón a la improcedencia de la pretensión primera, la segunda correrá la misma suerte.

2.1.- Nos oponemos a la prosperidad de esta. En razón a la improcedencia de la pretensión primera y segunda, la dos uno correrá la misma suerte.

2.2.- Nos oponemos a la prosperidad de esta. En razón a la improcedencia de la pretensión primera, segunda, la dos uno y los dos puntos dos correrán la misma suerte.

2.2.2.- Nos oponemos a la prosperidad de esta. En razón a la improcedencia de la pretensión primera y segunda, los dos puntos dos puntos uno, la dos punto dos, punto dos, punto dos, correrá la misma suerte.

3. RESPECTO A LOS HECHOS:

Frente a los hechos nos referimos de la siguiente forma:

HECHO PRIMERO. Es un hecho cierto, la señora AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ, en lo que se refiere al tipo de vinculación y contrato, al igual que el tiempo de prestación de servicios laborado por la Dra. AMANDA CEBALLOS;

dejando constancia que revisada la historia laboral no reposa en la misma llamados de atención ni sanciones disciplinarias.

HECHO SEGUNDO. ES CIERTO.

HECHO TERCERO. No nos consta este hecho, por tal razón la exservidora tendrá que entregar las pruebas que acrediten que desde el año 2015 puso en conocimiento supuestas irregularidades, de igual forma deberá indicar ante quien o quienes lo hizo, el medio a través del cual reporto las supuestas irregularidades que según ella denuncio; toda vez que como ella misma lo dice y lo prueba la denuncia de las supuestas amenazas lo hizo en unos pocos días antes de irse del país, el 7 de diciembre del 2018 y en la redacción de muchos de los hechos son la trascripción del deber legal que tienen todos los Registradores de cumplir las órdenes entregadas por Dirección Nacional de Registro Civil en Circulares y Decreto 356, olvidando decir que son los registradores los responsables de los tramites que firman y realizan.

Es de aclarar que el procedimiento surtido frente a la comunicaciones con migración Colombia obedece a lo dispuesto en la circular 052 del 29 de marzo de 2017, por cuanto no es una acción propia de la servidora, pues obedece al desarrollo del decreto 356 del 03 de marzo de 2017 de la Presidencia de la República, para evitar que extranjeros obtengan de manera fraudulenta registro civil de nacimiento, adoptado por la Registraduria Nacional del Estado Civil y de obligatorio cumplimiento para aquellos funcionarios que desarrollan la labor registral.

Ahora frente a los 27 párrafos que contiene este hecho, no podemos referirnos a ellos por desconocimiento total de los mismo y por no relacionar nuestro actuar a los mismos, siendo necesario que la actora acredite y contextualice las circunstancias de tiempo modo y lugar, al igual que identificar a las personas que en ellos intervinieron. De igual forma la Registraduría Nacional del Estado Civil, desconocía la noticia criminal por amenazas interpuesta por la Dra. Ceballos ante la Fiscalía el 7 de diciembre del 2018, porque no fuimos informados en su momento, por ello nos allanamos a lo que LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN arroje, conteste y pruebe frente a este hecho[1].

HECHO CUARTO. No nos consta, la exservidora jamás informo a la entidad de este asunto, por lo que deberá probarlo con EMP[2] que hagan referencia de tiempo modo y lugar, y conduzcan a probar lo ahí firmado.

---

[1] La denuncia por amenazas interpuesta por la Dra. Ceballos ante la Fiscalia el 7 de diciembre del 2018, solo se presentó a la Registraduría Nacional del Estado Civil el 28 de abril del 2021, con el memorial de conciliación.
[2] EMP Elemento Material Probatorio.

HECHO QUINTO. Es parcialmente cierto; efectivamente la Dra. AMANDA CEBALLOS presento renuncia irrevocable a su cargo como Registradora Especial de Palmira, pero como hemos sostenido en el hecho 3ro y 4to, la servidora nunca puso formalmente en conocimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que era objeto amenazas en su contra o en contra de su familia. Mucho menos que las mismas se originaron como consecuencia de su labor como registradora, solo hizo con su renuncia, lo que debió ser porque solo habían transcurrido 20 días corrientes de haber puesto en conocimiento a las autoridades dichas amenazas.

HECHO SEXTO. No es un hecho, son afirmaciones basadas en las apreciaciones tanto de la jurista y/o su apoderada, que no compartimos en especial cuando se refiere *a que estaba sola y abandonada por la entidad*; ya que la actora ya no estaba vinculada con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para esa fecha. Frente a las demás afirmaciones no nos consta, al no involucrar el actuar de esta entidad.

HECHO SEPTIMO: No nos consta.

HECHO OCTAVO: No nos consta.

HECHO NOVENO: No nos consta.

HECHO DECIMO No nos consta y los hechos relacionados no involucran el actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil ni servidor alguno de la misma.

HECHO DECIMO PRIMERO: NO es un hecho y No compartimos esta afirmación, al no estar claro quién o en quienes no entregaba garantías laborales la exservidora; ya que como se evidencia en las pruebas aportadas por los actores la Registraduría Nacional del Estado Civil, ofreció protección (al momento de su renuncia) y la oportunidad de continuar en el cargo de registradora Especial a la Dra. Ceballos, propuesta que fue rechazada de plano por ella y adicional a ello en el mes de mayo del 2019, cuando se indica tomo la decisión de dividir su núcleo familiar, no existía vínculo laboral entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Dra. Ceballos, siendo ajenos e ignorantes del rumbo su vida laboral, al no ser del resorte los mismos.

HECHO DECIMO SEGUNDO: No nos consta y los hechos no involucra el actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil ni servidor alguno de la misma.

HECHO DECIMO TERCERO: No nos consta este hecho y los hechos no involucra el actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

HECHO DECIMO CUARTO: No nos consta este hecho, lo que nos lleva allanarnos a la respuesta que frente a la investigación penal "denominada caso piel roja" arroje y entregue la Fiscalía General de la Nación, al ser los competentes para ello.

HECHO DECIMO CUARTO-UNO-DOS- TRES Y CUARTO: No nos consta, lo que nos lleva allanarnos a la respuesta que frente a la investigación penal "denominada caso piel roja" arroje y entregue la Fiscalía General de la Nación, al ser los competentes para ello.

Queda así contestado los hechos.

4. PRESUNTAS NORMAS VIOLADAS

Señala la Dra. SUSANA MERCEDES SARRIA CORREA apoderada de los accionantes en el acápite de las que las normas, que los derechos supuestamente infringidos son los siguientes: *"Derecho a la Vida, (CN art. 11 y CIDH art. 5) Derecho a la seguridad e Integridad Personal, (CIDH art. 7), en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1 del mismo instrumento, en perjuicio de mi representada; y del artículo 5 de la Convención, Derecho a la Integridad Personal en perjuicio de su familia. Asimismo, violación de los artículos 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos contenida en el artículo 1(1) de dicho tratado, en perjuicio de la víctima Dra. Amanda Ceballos y sus familiares; al no ser atendida por su empleador como lo establecen las normas nacionales e internacionales."* Lastimosamente no relaciona, hecho, acción u omisión, actor(es), y pruebas con derecho(s) infringido(s), lo que vuelve gaseosa la demanda, las pretensiones y más la cuantía.

5. SOPORTE PROBATORIO.

La abogada SUSANA MERCEDES SARRIA CORREA pide que se tenga las siguientes como pruebas:

No.	FECHA	QUIEN LO SUSCRIBE	QUE PRUEBA
06	28/12/2017	Amanda Ceballos Fernandez	la realización de una consulta a la Dirección Nacional de Registro Civil, reiterada a los Delegados Departamentales e ingenieros de la Delegacion. Actuar enmarcado por una investigación Disciplinaria que se adelantaba contra unos funcionarios de esa Registraduria, Por hechos anteriores. **Folios 64,65 y 66 de la demanda. En relación con esta prueba no indica que relación tiene con el caso en comento.**
07	28/12/2018	Delegados Departamentales	La prórroga del nombramiento de la exservidora por periodo de dos meses (enero 01 de 2019 a febrero 28 de 2019) **folios 67 y 68 de la demanda. . En relación con esta prueba no indica que relación tiene con el caso en comento.**

08	03/01/2018	Amanda Ceballos Fernandez y Adriana Maria Correa Sanchez Registradoras Especiales de Palmira	Acta de recibos de los formularios e Informe dirigido a los Delegados Departamentales con la relación de seriales entregados por el ex – servidor JUAN CARLOS CORREA CORRALES, quien fue sancionado disciplinariamente mediante proceso de radicado 031-0864-18 y condenado penalmente. **Folios 58 a 61, 75 y 76 de la demanda. Los cuales no se relacionan con la exservidora y por tanto no debe ser prueba en esta demanda**
09	05/01/2018 10/01/2018	Funcionarios de la Dirección Nacional de Registro Civil y Registradores Especiales de Palmira (Amanda Ceballos Fernandez y Adriana Maria Correa Sanchez). JHON FRANCISCO AGUILERA DIAZ, JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ, REGISTRADORA ESPECIAL DE PALMIRA	Acta de Auditoria N° 01 mediante la cual se realiza el seguimiento al proceso de inscripción de Registro Civil y el cumplimiento de la normatividad aplicable al mismo. (dentro de los actos encaminados en la investigación aperturada en contra de la funcionaria Ceballos). **Folios 69 a 74 de la demanda.** DILIGENCIA DE DECLARACION JURAMENTADA ANTE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. **FOLIO 95 AL 98** **En relación con estas pruebas no indica que relación tienen con el caso en comento**
10	16/01/2018 08/06/2018	JUAN CARLOS GALINDO VACHA, REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.	Resolución 363 por la cual se efectúan unos traslados. **Folios 84 y 85 de la demanda** Resolución 8211 del 08 de junio de 2018 a **folio 144 a 146 de la demanda** **En relación con estas pruebas no indica que relación tienen con el caso en comento**
11	Sin fecha	Amanda Ceballos Fernandez	Observaciones e inconformidades frente a unas auditorías realizadas en la Registraduria de Palmira. **Folios 86 a 89 de la demanda.**
15	02-01-2019	Amanda Ceballos Fernandez	Carta de Renuncia Irrevocable al cargo de Registrador Especial, **folio 104 de la demanda.** **En relación con estas pruebas no indica que relación tienen con el caso en comento**

16	02/01/2019	Delegada Departamental Valle del Cauca Patricia Rico Rojas.	Correo respuesta a la carta de renuncia, por parte de la Delegada del Valle del Cauca, en el cual se le brinda apoyo por parte de la entidad y la posibilidad de tomar una licencia, igualmente se le informa que se colocara en conocimiento de la UNP su situación para lo pertinente. **Folio 105 de la demanda**. **En relación con estas pruebas no indica que relación tienen con el caso en comento**
19	23/11/2018	Coordinador Talento Humano de la Delegacion Departamental Doctor Hever Zapata	Certificado o Carta Laboral fechada el 23 de noviembre de 2018, prueba la relación laboral que para esa fecha se encontraba vigente con la entidad. **En relación con estas pruebas no indica que relación tienen con el caso en comento**

Confirmado con la anterior relación que a las que involucra Registraduria Nacional del Estado Civil (Pruebas No. 6,7,8,9,10,11,15,16), son anteriores al corte de la fecha de la caducidad (23 de marzo de 2019) y de incorporarse viciaria el proceso, razón que nos lleva a solicitar se excluya del acervo probatorio, con el fin de no inducir en error en el presente proceso a su señoria.

5.1. PRUEBAS DE OFICIO SOLICITADAS A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Frente a las pruebas solicitadas a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, queremos informar que: la versión de la Dra. AMANDA CEBALLOS, que indica ella es prueba en el proceso disciplinario que se adelantó contra el exfuncionario JUAN CARLOS CORREA, situación que no guarda relación con su decisión de Renuncia irrevocable al cargo de Registrador Especial de Palmira. Por lo que se hace necesario que la servidora explique la relevancia que el expediente representa dentro del proceso.

A pesar de ello, de probarse por parte de la parte demandante la eficacia y concurrencia de la prueba, el operador disciplinario de la Registraduria Nacional del Estado Civil la expedirá una vez se admita la demanda y el juez ordene para que se integre al proceso.

Referente a la auditoria que dice la ciudadana Ceballos Fernandez realizo el servidor JHON RAMOS de la Delegacion del Valle del Cauca, informamos que no

existe auditoria donde el servidor haya participado, pero si hay dos (2) visitas administrativas realizadas a ese despacho registral el 11 de septiembre del 2017 y 28 de febrero del 2018, y él servidor John Uvildes Ramos ***(enlace de la Oficina de Control Interno de la Delegacion Departamental del Valle del Cauca)***, participo en la 28 de febrero del 2018[3]. Luego las mismas no pueden ser objeto probatorio en este proceso por la fecha en que se realizaron y al no guardar relevancia con su renuncia irrevocable.

5.2. PRUEBAS TESTIMONIALES QUE SOLICITA LA PARTE DEMANDANTE:

Frente a las pruebas solicitadas, no presentamos objeción alguna, toda vez que las mismas se encaminan a tomar declaración de personas que no han tenido vínculo con la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, menos frente a hechos sobre los que nos recaiga caducidad, es decir posterior a 23 de marzo de 2019 (Maria Ruth Ceballos Fernández, Esneda Ceballos Fernández y Julio César Correa Villa).

5.3. DOCUMENTALES QUE SOLICITA LA PARTE DEMANDANTE

Revisada la lista de documentos que solicita la profesional del derecho se tengan como prueba:

9. Declaración juramentada ante la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría Nacional de Estado Civil[4] (sobre la que recae caducidad).

10. Resolución 363 de enero 16 de 2018 por medio del cual es trasladada a la ciudad de Pasto y Resolución No.8211 de junio de 2018 por medio del cual la trasladan a Popayán[5](sobre la que recae caducidad).

15. Correo respuesta a la carta de renuncia de la Registraduría Delegada Valle del Cauca [6](sobre la que recae caducidad).

Frente a las otras nos abstenemos de hacer referencia al no estar relacionada con la responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y/o ser EMP o prueba dentro de los procesos que se adelanta y son las autoridades quienes deben hacer su evaluación y respuesta a la mismas.

---

[3] 5 **Prueba** 1 RNEC - Correo de John Uvildes Ramos del 20 de mayo del 2021 y Actas el 11 de septiembre del 2017 y 28 de febrero del 2018.

[4] Se solicita claridad si esto es la misma prueba que los convocantes solicitan se realice como prueba de oficio.

[5] Se pide se tenga encuesta al dejar claro que el traslado la ciudad de pasto se originó por funciones electorales del señor registrador de trasladar servidores en época electoral, en virtud de la facultad entregada por la ley 1350 2009.

[6] Se pide se tenga como prueba al dejar constancia que la Registraduria Nacional del Estado civil dio total apoyo a la servidora cuando por primera vez nos informó de estar amenazada, cooperación que no acepta y renuncia irrevocablemente.

6. ANÁLISIS DE CADUCIDAD PARA EL CASO CONCRETO

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A), expresa lo concerniente a la oportunidad que tienen los coadministradores cuando se pretenda la reparación directa al considerar vulnerado alguno de sus derechos por alguna entidad del Estado. En el caso del mecanismos de Reparación directa en termino está consagrado en el literal i) ibidem que indica:

> *" i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia."...*

En tal sentido de la lectura de las pretensiones y los hechos relacionados en el escrito de solicitud de conciliación, tenemos que el memorial nos entrega como fecha para contar la caducidad el **23 de marzo de 2019**, fecha que hace referencia a una conducta ajena a cualquier entidad del Estado Colombiano; toda vez que esa fecha **(10 de septiembre del 2019),** en la fecha en la cual según ella los EEUU negaron la solicitud de asilo que la Dra. AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ y su familia que presentaran a este país 26 de mayo del 2019.

Por lo anterior y de conformidad con la documentación que reposa en la historia laboral de la actora, y que es para nosotros la prueba fehaciente tanto del cumplimiento del vínculo laboral como del actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el termino para demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se empezaría a contar a partir del 02 de enero del 2018, fecha en la cual la servidora a través de correo electrónico remitido a los Delegados Departamentales siendo las 7:39 a.m. puso por primera vez en conocimiento de sus jefes que existían amenazas contra su vida "sin el detalle que hoy por hoy lo hizo en la demanda", y contrario a ser omisivos la entidad ofreció su apoyo y protección, los que fueron rechazados por la actora.

En el caso concreto, se tiene que la convocante Amanda Ceballos Fernández pretende ejercer dicho medio de control a partir del último perjuicio presuntamente causado, esto es, Caracol, según entrevista exclusiva con el Director de la Dijin en esa el 23 de marzo de 2019 fecha en la cual se ocurre la última acción causante del daño, la cual es la noticia emitida por el noticiero época Gr RICARDO LONDOÑO, informa no solo a CARACOL NOTICIAS – NOTICIA EN DESARROLLO – sino a frente a los micrófonos de todos los noticieros de radio y

televisión del país se anuncia que la Registradora, doctora Amanda Ceballos se encuentra prófuga de la justicia. Se toma entonces como fecha final de la caducidad para interponer la Acción de Reparación Directa el día: 30 de Septiembre de 2021; habiéndose ya interrumpido con el agotamiento del requisito de Prejudiciallidad y además teniendo en cuenta la suspensión de términos estipulada mediante Decreto 564 de 2020 y el acuerdo PCSJA20-11567, el término se extendió hasta el 30 de septiembre de 2021, según lo afirma la convocante

Bajo tales presupuestos, es pertinente desestimar de plano la demanda incoada por la señora Amanda Ceballos Fernández, por cuanto el medio de control se encuentra caducado por los siguientes aspectos a saber.

De conformidad con el criterio normativo antes descrito, es preciso determinar en qué momento se concreta el daño antijurídico que se pretende acreditar, que no es otro que la fecha de conocimiento del daño, el cual, según los hechos expuestos por la convocante, iniciaría desde el 26 de octubre de 2018, momento en el que iniciaron las amenazas que atentaban contra su vida y la de su núcleo familiar, siendo la última de ellas el 13 de diciembre del mismo año, sin embargo, es menester indicar que solo hasta el 31 de diciembre de 2018 a través de correo electrónico la señora Ceballos Fernández informó a la Entidad la renuncia irrevocable al cargo de Registradora Especial de Palmira, fundando tal decisión en las "amenazas de muerte" en contra de ésta y su familia, momento éste en el que puso en conocimiento de la entidad el daño alegado.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, para el cómputo del término de la caducidad, tal como lo prevé la norma, ha de precisarse que se contará a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o cuando la demandante tuvo conocimiento, que, para el caso objeto de estudio, inició desde el 2 de enero de 2019 hasta el 03 de enero de 2021, como máximo lapso para ejercer el medio de control de reparación directa en contra de la Registraduria Nacional del Estado Civil si habría lugar.

Por ende, resulta desacertado lo expuesto por la convocante, en el sentido de señalar que el término de caducidad contaría desde el último perjuicio ocasionado, el 23 de marzo de 2019 fecha en la cual se ocurre la última acción causante del daño, por cuanto dicho fenómeno jurídico ha de determinarse a partir del conocimiento del daño antijurídico o hecho dañoso, en tanto es el elemento fundamental para su estudio, pues es a partir de éste momento que se tiene un interés legítimo para acudir a la jurisdicción, pues emprender tal cómputo desde una contextualización histórica o una circunstancia que no es el sustento de la pretensión indemnizatoria, implicara la creación de un requerimiento que la ley no contempla para nosotros.

Sobre el tema, el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, con radicado 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308) señaló:

"(...) el legislador estableció unos plazos razonables para que las personas acudan ante la Jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, en concordancia con lo previsto por las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, así como tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez. Se produce cuando el término concedido por la ley para presentar la demanda ha vencido. El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo. sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina "contra non volenten agere non currit prescriptio", es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse."

Con fundamento en lo expuesto, es claro que el medio de control invocado por la convocante ha superado el término establecido, por cuanto ha operado el fenómeno de la caducidad, desde el momento mismo en que solicito la conciliación extrajudicial la cual fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de abril de 2021.

7. EXCEPCIONES PREVIAS

Proponemos la excepción previa **"ineptitud de la demanda"**, en virtud de que la supuesta omisión se encuentra por fuera de control en sede administrativa y judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 140 y 161 de la Ley 1437 de 2011 y sustentado en la falta de requisitos formales de la demanda. en el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el termino para demandar hubiera sido hasta el **31 de diciembre del 2020** y a raíz de la suspensión de términos por pandemia COVID- 19, dicha caducidad se prorrogo hasta **el 17 de abril del 2021**.

No está de más recordar que el Consejo de Estado ha dicho frente a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que es un presupuesto procesal y/o instrumento a través del cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados en desarrollo del principio de la seguridad jurídica, bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal para la reclamación judicial de los derechos operado de forma automática.

7.1 FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa sea por activa o por pasiva, es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste a una persona -natural o jurídica- para ostentar dicha calidad y. por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 7 de junio de 2012 dentro del radicado 70001-23-31-000-1999-01916-01 (22678), señalo:

"La legitimación en la causa por pasiva "es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho. Así las cosas, si se acredita que la persona o entidad demandada no es la obligada a responder por el supuesto daño alegado, se deben negar las pretensiones de la demanda. (...)"

Con base en el precedente Jurisprudencial en cita, en el caso concreto, no se vislumbra que la Registraduría Nacional del Estado Civil esté legitimada para actuar, pues las pretensiones incoadas por la convocante están encaminadas a que se le reconozca los presuntos perjuicios materiales e inmateriales causados por la acción, omisión y falla en el servicio por parte de la Entidad, las cuales originaron la salida del país de ésta y su grupo familiar, con ocasión a las amenazas de las que fueron objeto los días 26 de octubre: 22 de noviembre: 3 y 13 de diciembre de 2018.

En primer lugar, es importante precisar que la señora Amanda Ceballos Fernández fue nombrada en libre nombramiento y remoción en el cargo de Registrador Especial de la Delegación del Valle del Cauca, entre el 8 de mayo de 2013 hasta el 3 de enero de 2019, luego de que ésta presentará renuncia irrevocable al cargo el 31 de diciembre de 2018.
En segundo término, se tiene que la funcionaria Ceballos Fernández en ejercicio de sus funciones puso en conocimiento a sus superiores jerárquicos, los trámites fraudulentos que al interior de la Delegación del Valle del Cauca se estaban presentando en el proceso de registro e identificación por parte de funcionarios adscritos a la Entidad Electoral y personas externas, hechos que en su momento, contrario a lo expuesto en el libelo de la demanda, fueron objeto de las respectivas investigaciones disciplinarias y penales, las cuales

Ahora bien, recalca la demandante que a raíz de dichas denuncias, fue objeto de amenazas junto a su grupo familiar entre el 26 de octubre y el 4 de diciembre de 2018, razón por la que el 7 de diciembre de 2018 interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de Palmira - Valle por el punible consagrado en el art. 347 del C.P. pese a ello, el 13 de diciembre de 2018, nuevamente fue amenazada, por lo que pone en conocimiento de la Fiscalía 143 Seccional de Palmira, a quien por reparto le correspondió la causa, sin obtener respuesta positiva o medida provisional alguna ante los hechos denunciados, contrario a ello, adoptó un desinterés desmedido.

Ante tal panorama, el 14 de diciembre de 2018 la señora Ceballos Fernández optó por salir del país junto con su grupo familiar por temor a las amenazas recibidas, sin embargo, ha de precisarse que solo hasta el 31 de diciembre de 2018, la alusiva funcionaria puso en conocimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil las "amenazas de muerte" de que fue objeto, a través de la renuncia irrevocable al cargo, realizado mediante correo electrónico el lunes 31 de

diciembre de 2018 en el horario de 7:39 a.m. dirigido a los señores Delegados Departamentales Patricia Rico Rojas y Carlos Alberto Torres Luna, y el líder de Talento Humano Hever Zapata Diaz.[7]

Por ende, los Delegados Departamentales, ante la magnitud de lo expuesto, procedieron a establecer comunicación vía correo electrónico con la funcionaria, con el objetivo de brindarle apoyo y solidaridad, por lo que en aras de salvaguardar su vida y la de su familia, le propusieron tomar una licencia no remunerada por 60 días inicialmente, a fin de poner en conocimiento a la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de la Policía, como entidades competentes para implementar dichas medidas de protección. Por lo anterior, el 3 de enero de 2019 Ceballos Fernández, desestimó la ayuda suministrada, al indicar que había salido del país (situación ésta que la Entidad desconocía) y en consecuencia, ratifica su renuncia.

Es oportuno precisar que la Entidad Electoral actuó conforme a los presupuestos dados para este tipo situaciones, en tanto prestó su apoyo total y propuso vías alternas para proteger y amparar la vida e integridad física de Ceballos Fernández y su núcleo familiar. brindándole así una licencia remunerada, como mecanismo de protección mediato, en tanto las entidades competentes adelantaban las acciones pertinentes que permitieran identificar el nivel de riesgo y adoptar el esquema de seguridad más conveniente para minimizar el grado de amenaza.

Así mismo, es importante resaltar que mediante oficio GTH-0700 del 02 de enero de 2019, la Gerencia de Talento Humano, puso en conocimiento las presuntas situaciones de riesgo en contra de la servidora Amanda Ceballos Fernández ante la Unidad Nacional de Protección, quienes con oficio N.OFI19-00002941 del 24 de enero de 2019 y recibido por la entidad el 4 de febrero del mismo año, dieron alcance a la solicitud de protección invocada, razón por la que se equivoca la convocante al afirmar que la Entidad no realizó los trámites ante las autoridades competentes.

Por lo expuesto, resulta desacertado atribuir un nexo causal preponderante o perjudicial entre el actuar de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el supuesto daño causado a la convocante, pues se evidencia que el hecho generador de la presunta acción, omisión o falla en el servicio, obedeció a la intervención de un tercero en ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, es pertinente precisar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus funciones, no cuenta con las facultades legales y constitucionales que le permitan implementar medidas de protección a un funcionario objeto de amenazas.

Por ende, valga resaltar, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no es la llamada a responder por el presunto daño lesivo ocasionado a la convocante, pues

[7] Prueba N° 9 de los anexos de la contestación.

es evidente que dicho conflicto debe ser dirimido entre la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional de Colombia y la Unidad Nacional de Protección, por cuanto en su momento eran las entidades encargadas de tomar las acciones necesarias para velar por la protección y seguridad de la ciudadana Ceballos Fernández, tanto más, cuando era competencia de éstos: (i) adoptar las medidas de protección dispuesta por la Ley con ocasión a la denuncia penal interpuesta por la convocante y (ii) realizar el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza frente a los hechos puestos en conocimiento por la Registraduría Nacional del Estado Civil, respectivamente.[8]

En ese orden, no le asiste razón a la convocante en el sentido de que sea la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien deba reconocer a título de indemnización, los perjuicios materiales y morales perseguidos.

Sobre el particular, se cita jurisprudencia conforme a la cual para que proceda la imputación de culpa en cabeza de alguna Entidad Estatal, se requiere que se haya cometido un hecho o se haya incurrido en una omisión antijurídica, es decir faltar a un deber normativamente considerado a cargo de la Entidad.

En sentencia del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 8 de mayo de 1995, consejero Ponente, doctor Juan de Dios Hernández, que retoma palabras de la corte Constitucional, se afirmó:

"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

La Noción del daño antijurídico es invariable cualquier sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar".

"..."

Precisados los alcances del artículo 90 como cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, entra la Corte a determinar si la disposición impugnada vulnera este mandato constitucional. Así, el artículo acusado señala que ***"las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas".***

Finalmente, en lo que respecta a los demás hechos y entidades vinculadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil se abstendrá de emitir algún tipo de pronunciamiento por no ser de su competencia.

---

[8] Pruebas 7, 8, 8.1.

7.2 INEXISTENCIA DEL DAÑO POR PARTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La Registraduria Nacional del Estado Civil considera que sobre este caso y nosotros se avizora una inexistencia del daño causal el cual ha sido debatido en otros despachos judiciales.

La acción de reparación directa plasmada en el artículo 140° del C.P.A.C.A. persigue declarar la responsabilidad patrimonial, de naturaleza extracontractual, a cargo del Estado, en este caso LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, como consecuencia de daños inferidos a causa de **hechos, omisiones, operaciones administrativas** o a la ocupación temporal o permanente por motivo de trabajos públicos o de cualquier otra causa, imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

De las pruebas aportadas por la demandante se desprende que la entidad no tuvo posibilidad alguna de brindar acompañamiento puesto que la servidora manifestó haber salido del país, sin embargo, ejerció acciones tendientes a que se le brindara protección a la misma.

Por consiguiente y para que ésta se configure es necesario que se presenten todos y cada uno de los elementos estructurales de la misma, los que la doctrina y la jurisprudencia, han coincidido en determinar así:

a) ***Una falla o falta en la prestación del servicio por omisión, retardo, ineficiencia o ausencia del mismo.***

b) ***Un daño que implique lesión de un bien jurídicamente tutelado y,***

c) ***Un nexo causal entre el daño y la falla en la prestación del servicio a que la administración está obligada.***

En cuanto al primer elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual de la administración, esto es, la falla en la prestación del servicio por omisión, retardo, negligencia, imprudencia e imprevisión, en el presente asunto no se logra demostrar su existencia, en la medida en que la Registraduría Nacional del Estado Civil, tan pronto tiene conocimiento del hecho esto es el 31 de diciembre de 2018, le expresa el apoyo y ofrece el acompañamiento a la funcionaria y solicita a la UNP la protección para la funcionaria, encontrándonos con que la misma se encontraba fuera del País, lo que escapa al ámbito de acción de la entidad.

En cuanto al segundo elemento, el daño, éste **NO** ha sido demostrado por los demandantes; no pudiendo deducirse responsabilidad de la Administración, en este caso representada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que no existió negligencia, ni omisión, ni error jurisdiccional o un irregular procedimiento en las funciones propias de la Entidad; de parte de sus agentes o sus Servidores Públicos.

8. CONSIDERACIONES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

En el presente caso no le asiste razón a los demandantes al afirmar que existe responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por acción y omisión que se le causó serios perjuicios a los demandantes por no haberse apersonado de las denuncias realizadas por la Dra. Ceballos, máxime cuando se tiene que la convocante Amanda Ceballos Fernández pretende ejercer dicho medio de control a partir del último perjuicio presuntamente causado, esto es la noticia emitida por el Gr RICARDO LONDOÑO, informando no solo a CARACOL NOTICIAS – NOTICIA EN DESARROLLO –, Caracol, según entrevista exclusiva con el Director de la Dijin el 23 de marzo de 2019.

Los demandantes pretenden se le cancelen perjuicios en la modalidad de **PERJUICIOS INMATERIALES**, en el estimado de **$1.800.000.oo**, PERJUICIOS MATERIALES estimado en **$670.471.855.oo** discriminados en **LUCRO CESANTE $ 243.243.000**, y **DAÑO EMERGENTE $ 427.228.855** perjuicios que de ninguna manera son ni deben ser imputables a la Entidad; de un lado porque no se causaron y de otro lado porque no se demuestran, toda vez que se trata de hechos producto de acciones de un tercero y posteriores a la desvinculación laboral con la entidad.

Los perjuicios inmateriales no se encuentran probados que hayan sido causados por la entidad.

Frente al Lucro Cesante, vale la pena recordar que la señora AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ, tenía una vinculación en un cargo de libre nombramiento y remoción, el cual fue prorrogado mediante resolución 1303 del 28 de diciembre de 2018, por un periodo de dos meses a partir del 01 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019 inclusive. Prorroga no aceptada por la señora CEBALLOS manifestada con la renuncia a su cargo. No se puede hacer responsable a la Registraduria por este hecho al haber sido una decisión unilateral de la exservidora. Adicional a ello téngase en cuenta que ella desempeñaba un cargo de Libre Nombramiento y Remoción lo que no permite endilgar

responsabilidad a la Demandada por una Cesación laboral, pues la funcionaria tenía conocimiento que de aceptar su vinculación podría terminar el 28 de febrero de 2019.

De la narrativa en la denuncia penal[9], manifiesta la ciudadana que desde el 26 de octubre iniciaron las amenazas en su contra. En el deber ser la exfuncionaria encontrándose activa en la entidad para el momento de los hechos, debió haber comunicado a la misma los hechos de intimidación a los cuales se estaba viendo sometida. Sin embargo y solo hasta el 31 de diciembre de 2018 como ya se apuntó, renuncia a la entidad y a través del informe de entrega de funciones manifiesta estar siendo objeto de amenazas sin anexar ningún otro soporte. Es decir, solo hasta el momento en el que Renuncia de manera irrevocable a la entidad, coloca en conocimiento de esta la situación de peligro en la cual se encuentra. tal como se puede evidenciar en la prueba numero 15 aportada en la demanda

Por tanto, el daño emergente que se predica por parte de la demandante no puede adjudicarse a la demandada.

Conviene precisar que en la presente demanda no existe prueba alguna que permita determinar el padecimiento moral sufrido por los demandantes, ya que no existe prueba que indique que la congoja y padecimiento interno fue ocasionado por el hecho de desempeñarse como funcionaria de la entidad, pues todos los reportes datan de fechas posteriores a la desvinculación con la misma

De acuerdo con lo anterior, los elementos arrimados a la foliatura no tienen la fuerza que permitan determinar daños que supuestamente se generaron con la presunta irregularidad de la Entidad, **Existe carencia absoluta de probanzas que acrediten los daños inmateriales y perjuicios materiales causados por la Registraduria Nacional del Estado Civil.**

Ha dicho el Honorable Consejo de Estado que: "Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en *"el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien"*. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado"; y en el presente caso no ha sido demostrado que el daño fuese causado durante el tiempo que laboro en la entidad, sino posterior a su retiro.

[9] Prueba 12. Folio 92 de la demanda, denuncia a Fiscalía de fecha 07 de diciembre de 2018

El Honorable Consejo de Estado ha edificado una nutrida línea jurisprudencial en torno al daño antijurídico como elemento de la Responsabilidad Patrimonial del Estado y la necesidad de su acreditación para establecerla en las acciones de reparación directa. Sobre la noción del daño, el Alto Tribunal ha manifestado:

"El daño, en "su sentido natural y obvio", es un hecho, consistente en "el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien","...en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc..." y "...supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo". Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir que el daño carece de "causales de justificación". Adviértase como, entendido así el daño antijurídico frente al cual el estatuto superior impone la obligación reparatoria a cargo del Estado, si bien puede revestir modalidades diversas (material, moral, fisiológico, etc), constituye una constancia, razón por la cual, ***al tiempo que constituye un elemento indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, se sitúa en la base misma de la institución jurídica proveyéndola de fundamento."*** *(Resaltado del Despacho). (Consejo de Estado, Sección III, Sentencia del 11 de noviembre de 1999. Rad. 11499. C.P. Alier Eduardo HERNÁNDEZ).*

Ahora bien, la referida Corporación ha establecido, que además de tener el daño una connotación antijurídica, esto es, que el actor no esté en la obligación de soportar, debe ser este indemnizable y debe cumplir unos requisitos para su reparación:

"Ha sido criterio reiterado de la Corporación, que ***el daño, para su reparación además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso, los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo****. En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio según el cual,* ***el perjuicio eventual*** *no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual –sin dar posibilidad de derecho a indemnización-, o de cierto – con lo cual surge entonces la posibilidad de derecho a indemnización-, pero jamás puede recibir las dos calificaciones". (Resaltado del Despacho, fuera de texto). (Consejo de Estado, Sección III, Sentencia del 15 de junio de 2000, Rad. 11614C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros).*

Sobre la importancia de establecer la existencia del daño, como presupuesto para continuar con el análisis de la Responsabilidad de la Administración, el Consejo de Estado en reciente Sentencia considero lo siguiente:

"La responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se fundamenta en dos elementos, a saber: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del

mismo a una autoridad en sentido lato o genérico. El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". Y es así, como la jurisprudencia de esta Corporación lo ha entendido (...) el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de éste, se toma inútil cualquier otro análisis y juzgamiento. (...). Así las cosas, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado – en materia contractual y extracontractual-, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación." (Resaltado fuera de texto). (Consejo de Estado, Sección III, Sentencia del 54 de octubre de 2011, Rad. 20170 C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz).

Y en cuanto al **tercer elemento el nexo causal** entre la falla en la prestación del servicio y el daño, tampoco se encuentra acreditado en el presente asunto, y menos aún los perjuicios cuya indemnización reclama los demandantes, pues si bien es cierto la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue la empleadora de la señora AMANDA CEBALLOS FERNANDEZ, para que surja para la entidad pública la obligación de reparar un daño resulta necesario que la lesión pueda serle imputada jurídicamente. Para valorar este punto es indispensable acudir tanto al desenvolvimiento físico de los hechos como al deber ser o conducta exigida normativamente a la Administración, de acuerdo con las circunstancias particulares, de cada caso y los instrumentos al alcance de la Administración".

En consecuencia, ni el perjuicio ni los daños antijurídicos en calidad de daños morales, ocasionados le son imputables a la Entidad por carencia de causalidad.

Tal como lo podemos observar en las pruebas aportadas por la demandante:

Prueba N° 6 la cual no constituye una denuncia toda vez que se trata de una consulta elevada a la Dirección Nacional de Registro Civil y al Servicio Nacional de Inscripción. Así mismo se elevan consultas a los Delegados Departamentales del Valle del Cauca e Ingenieros de Sistemas de la entidad.

Prueba N° 8 acta de auditoria 001 del 05 de enero de 2018, mediante la cual la Registraduria inicia acciones ante la consulta elevada por la ex servidora Amanda Ceballos.

Prueba N° 12 denuncia ante la fiscalía

Prueba N° 14 ampliación de denuncia

Y las pruebas 7, 9, 10, 11, 15, 16 y 19

8.1 SOBRE LA FALLA DEL SERVICIO

Como se observa y se aprobado, la misma no puede ser defendida, menos frente a la Registraduria Nacional del Estado Civil, cuando la misión de esta es

> *"..... garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar, en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas.*

Por ello, al no haber relación entre nuestro deber constitucional, los hechos anunciados y la demanda de reparación directa, cabe resalta la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, de fecha 7 de marzo de 2012, Consejero Ponente, Hernán Andrade Rincón, Radicación: 25000-23-26-000-1996-03282-01, reiteró el concepto sobre la falla del servicio de la siguiente manera:

"La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual (...) así las obligaciones que están a cargo del Estado – **y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión -, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo**. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, **si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.** Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las

normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del miso cuando la Administración teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía".

9. PRUEBAS

Con el ánimo de validar todo lo manifestado en la presente contestación, en aras de salvaguardar los intereses de la Entidad y que se nos desvincule del proceso para que sobre el mismo no recaiga la caducidad nos permitimos aportar los documentos que servirán como pruebas aportadas por esta instancia al plenario para que en su momento oportuno sean analizadas por su señoría y sirvan para indicar que la Entidad NO tuvo injerencia en el error cometido, para lo cual aportamos los siguientes:

1. RNEC Correo informe Líder Control Interno Delegacion del Valle
2. RNEC, Correo electrónico mediante el cual se efectuó la renuncia y entrega de informe de funciones de fecha 31- DIC-2018.
3. RNEC Visita Administrativa Reg. Especial de Palmira de fecha 11-SEP-2017
4. RNEC oficio renuncia irrevocable AMANDA CEBALLOS
5. RNEC visita administrativa Delegacion Departamental a la Registraduria de Palmira de fecha 28 febrero 2018
6. RNEC entrega de informe de gestión de la funcionaria Amanda Ceballos de diciembre de 2018
7. RNEC Correos Delegados y Gerente del Talento Humano frente a la renuncia de Amanda Ceballos
8. RNEC oficios respuesta UNP a la solicitud elevada por la Registraduría para protección de la ex - funcionaria Ceballos.
9. RNEC Correos mediante los cuales se allega la renuncia de la señora Ceballos el 31 de diciembre de 2018 a las 7:25 a.m.
10. RNEC Correos gerente del Talento Humano ofreciendo apoyo a la exfuncionaria
11. Las presentadas con la demanda que demuestran la caducidad de la acción frente a la entidad y que corresponden a la siguiente numeración:

Prueba N° 6 la cual no constituye una denuncia toda vez que se trata de una consulta elevada a la Dirección Nacional de Registro Civil y al Servicio Nacional de Inscripción. Así mismo se elevan consultas a los Delegados Departamentales del Valle del Cauca e Ingenieros de Sistemas de la entidad.

Prueba N° 8 acta de auditoria N° 1 del 05 de enero de 2018, mediante la cual la Registraduria inicia acciones ante la consulta elevada por la ex servidora Amanda Ceballos.

Prueba N° 12 denuncia ante la fiscalía

Prueba N° 14 ampliación de denuncia

Y las pruebas 7, 9, 10, 11, 15, 16 y 19

10. ANEXOS

Solicitamos tener los siguientes:

1. Poder debidamente conferido por el Doctor **LUIS FRANCISCO GAITAN PUENTES** Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2. Copia del Acta de Posesión.
3. Copia de la Certificación emanada por el Grupo de Registro y Control de la Entidad.
4. Copia de la Resolución No. 20783 fecha 09 de diciembre de 2019, "Por la cual se efectúa el nombramiento al Doctor **LUIS FRANCISCO GAITAN PUENTES** Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
5. Copia de la Resolución No. 0307 de fecha 21 de enero de 2008, "Por la cual se delegan funciones"
6. Copia de la Resolución No. 5138 de fecha 02 de abril de 2014 "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 307 del 21 de enero de 2008"

11. SOLICITUD

Por las anteriores consideraciones, solicitamos Señor Juez, se tenga en cuenta lo manifestado en el escrito de contestación de demanda, se declare la Caducidad frente a la entidad Registraduria Nacional y la misma sea retirada del Litis Consorte, se declaren probadas las excepciones propuestas y sean desestimadas en su totalidad, las pretensiones de la Actora, frente a la Entidad que representamos por no encontrarse estructurados los elementos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso el pertinente al comportamiento anormal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que genere la falla en el servicio, habrán de negarse las pretensiones de la demanda en cada uno de sus apartes, toda vez que el error que se presentó no fue producto de la omisión de la entidad que representamos, toda vez que siempre que exista una relación causal que permita al juez inferir que la acción del demandado ha sido la

causa del daño, siendo indispensable que se logre demostrar por parte de la Demandante el citado nexo causal.

La doctrina ha señalado respecto al tema puntual de la teoría de imputación jurídica que: *"Esta dicotomía propone entonces distinguir entre la causalidad de hecho y la causalidad de derecho para indicar que el examen causal debe partir, en un primer estadio, de la verificación fáctica del nexo —o verificación naturalista, fundamentada en los criterios de la ciencia y de la física— (causalidad de hecho) y, una vez determinado el conjunto de causas fácticas, seleccionar aquella o aquellas que resulten jurídicamente relevantes (causalidad de derecho). Puesto, en otros términos, esta es una teoría que le indica al intérprete que el estudio de la causalidad no se agota en la aplicación de una sola fase, sino que, por el contrario, requiere dos etapas o estadios: uno primero, en el que se determina si fácticamente un suceso puede ser considerado como causa del otro (causalidad de hecho).*

Asi, en lo que consiste la imputación objetiva o causalidad de derecho es, esencialmente, en una etapa de selección; una etapa en la que, dado un conjunto de causas físicas del resultado, se escoge cuál de todas ellas es la que resulta juridicamente relevante y, de contera, la que puede llevar a que se comprometa la responsabilidad. (...)

12. NOTIFICACIONES

La suscrita, las recibirá en la Secretaria de su Despacho, o en la Delegación Departamental del Valle del Cauca, ubicada en la Calle 9 No. 40-64, Piso 2° de la Ciudad de Cali o al correo electrónico ihagualimpia@registraduria.gov.co o notificacionjudicialval@registraduria.gov.co

Solicitamos su Señoría, dar por contestada la presente demanda dentro del término legal y reconocernos personería para actuar dentro de este proceso.

Del Señor Juez;

Atentamente,

IVANOVA HORTENSIA AGUALIMPIA SOTO
CC. 43.634.079 de Medellín (A)
T. P. No. 132.118 del Consejo Superior de la Judicatura

GLORIA AMPARO MACIAS BLANDON
C.C. No. 29.143.666 de Andalucía (V).
T.P. No. 190.944 del C.S de la J.

Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali

De: Jose David Colmenares Rodriguez
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 1:12 p. m.
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali
CC: Orduz Trujillo Edid Paola
Asunto: RV: C22-57409 RV: RAD: 76001333301420210023900 CONTESTACION DEMANDA
Datos adjuntos: PODER_ALBA LILIANA VALDÉS PEREA.pdf; ConDem-202100239_ALBA VALDÉS.pdf; CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES-ESCRITURAS.pdf

Cordial saludo,

Remito constancia de radicación en el aplicativo denominado SAMAI proceso judicial.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email **of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co**

SAMAI | Proceso Judicial

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=

Nueva pestaña | SAMAI | Inicio | Google | Self Service - KACT... | EPS Sanitas - Sanita... | Importados

SAMAI
Acciones que transforman la JUSTICIA

Medid
Tie

Ubicación:
Secretaria

← Regresar al historial

Historial de actuaciones judiciales

Historial de actuaciones | Tramitar

Buscar: Para buscar una actuación en la historia digite aqui el dato a buscar

Filtrar: ◉ Ver todo ○ Decisiones ○ Despacho ○ Secretaria ○ Notificaciones

	Fecha registro	Fecha actuacion	Actuación

Atentamente,

JOSE DAVID COLMENARES RODRIGUEZ
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 5 de diciembre de 2022 9:42 a. m.
Para: Jose David Colmenares Rodriguez <jcolmenaresr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C22-57409 RV: RAD: 76001333301420210023900 CONTESTACION DEMANDA

DHORA STELLA RAMÍREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: ORDUZ TRUJILLO EDID PAOLA <t_eorduz@fiduprevisora.com.co>
Enviado: lunes, 5 de diciembre de 2022 9:29
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ANGELICA MARIA GONZALEZ <abogada1lopezquinteroarmenia@gmail.com>
Cc: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>
Asunto: RAD: 76001333301420210023900 CONTESTACION DEMANDA

Buenos días

SEÑORES
JUZGADO 014 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 76001333301420210023900
Demandante: ALBA LILIANA VALDÉS PEREA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG

Actuando en calidad de apoderada judicial de la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION Y FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO de manera atenta allego al Despacho Contestación de demanda dentro del proceso de la referencia.

Cordialmente

Edid Paola Orduz Trujillo
Cel: 3507430299
Profesional IV Zona 6
Unidad Especial de Defensa Judicial FOMAG
Vicepresidencia Jurídica
Calle 72 No. 10-03
PBX 5945111 Ext. 2019
Bogotá, Colombia



La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y/o privada. Solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Fiduprevisora S.A. y/o elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. La respuesta a este correo con el envío de información personal, propia o de terceros, implica su aceptación inequívoca al eventual uso o tratamiento de datos personales que realice Fiduprevisora S.A conforme a las finalidades contenidas en la política de protección de datos personales publicada en www.fiduprevisora.com.co, en la cual se detallan entre otros aspectos, los derechos que le asisten como titular de información para realizar consultas, peticiones o reclamos relacionados con el tratamiento de información por parte de Fiduprevisora S.A. Así mismo, podrá solicitar información relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: Dirección Calle 72 No. 10-03, Bogotá, Teléfono (1) 5945111 o al correo electrónico: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co. “Defensoría del Consumidor Financiero – Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity de la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. Correo electrónico: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com, de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones del Defensor del Consumidor son: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad. Asimismo, tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. Fiduprevisora S.A. remite la información contenida en este mensaje de datos por considerar que es de su interés.

20221182934861

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20221182934861**
Fecha: **01-12-2022**

SEÑORES
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CALI - VALLE DEL CAUCA
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
abogada1lopezquinteroarmenia@gmail.com
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
E. S. D.

RADICADO No.	76001333301420210023900
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE	ALBA LILIANA VALDÉS PEREA
DEMANDADO	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA

EDID PAOLA ORDUZ TRUJILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.008.202 de Bogotá, y portadora de la Tarjeta Profesional No. 213.648 del Consejo Superior de la Judicatura apoderada sustituta de la Doctora **AIDEE JOHANNA GALINDO ACERO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.863.417 de Bogotá, y portadora de la Tarjeta Profesional No. 258.462 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada general de la **NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL N.I.T. 899.999.001-7**, conforme al Poder General otorgado por el Doctor **ALEJANDRO BOTERO VALENCIA**, mediante Escritura Pública No. 10184 de 09 de noviembre de 2022, protocolizada en la notaría 27 del círculo de Bogotá, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de las facultades a él conferidas a través de la Resolución No. 018907 del 26 de septiembre del 2022, expedida por el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, según lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes y demás normas concordantes, por medio del presente escrito, encontrándome dentro del término legal procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

I. A LAS PRETENSIONES

Actuando en nombre y representación de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, me opongo a TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES SOLICITADAS EN LA DEMANDA, SUS DECLARACIONES Y CONDENAS, por carecer de fundamentos de derecho, debiéndose absolver a mi representada de lo pretendido en esta instancia, y en su lugar imponer condena en costas a la actora.

1. **ME OPONGO** a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos producto de las peticiones presentadas el 31 de mayo de 2021, en lo que se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, ya que estos se ajustan a derecho, debido a que, no es el acá demandado el llamado a pagar.

2. **ME OPONGO** al reconocimiento y pago de la sanción por mora y de todo lo solicitado en el presente escrito y más aún que la culpa recaiga de manera directa por mi defendida, pues como se indicó con antelación el ente territorial empleador tiene responsabilidad de manera directa en el retraso de tiempo para el pago oportuno de acuerdo a lo entrecavado por la normatividad, así mismo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 1955 en su artículo 57 mi poderdante no es la llamada a pagar ya que la mora es causada con posterioridad a diciembre del 2019.

3. Me opongo a la declaratoria y condena por concepto de intereses moratorios, toda vez que teniendo en cuenta que la misma se causó con posterioridad a diciembre del 2019, no somos los llamados a pagar teniendo en cuenta la ley 1955 del 2019 en su artículo 57. Por otro lado, cabe advertir que, de generarse dicha sanción, estaría generando un detrimento del patrimonio económico injustificado al patrimonio del estado, afectando de manera directa y tajante el principio constitucional de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y economía fiscal.

4. Me opongo, debido a que de conformidad con el criterio unificado del Consejo de Estado mediante sentencia del dieciocho (18) de julio de 2018, resulta improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

5. Me opongo a que se condene a mi defendida al pago en costas, agencias en derecho, dispensas o indexación en caso de que resulte favorable las pretensiones incoadas por la parte accionante, pues esto generaría un detrimento patrimonial aún más grande.

6. Me opongo pues la sentencia en si ya tiene un carácter vinculante y no se requiere la solicitud de la misma.

II. A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO SEGUNDO: **ES CIERTO**, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO TERCERO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO CUARTO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AL HECHO QUINTO: No es un hecho es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

AL HECHO SEXTO: No es un hecho es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

AL HECHO SÉPTIMO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO OCTAVO: No me consta tal manifestación, en atención a que la misma se apoya en documentales que no son expedidas por mi representada, por lo que deberá ser el señor Juez quien determine la veracidad del mismo y otorgue el ajustado valor probatorio el desarrollo de la Litis.

AL HECHO NOVENO: No me consta tal manifestación, en atención a que la misma se apoya en documentales que no son expedidas por mi representada, por lo que deberá ser el señor Juez quien determine la veracidad del mismo y otorgue el ajustado valor probatorio el desarrollo de la Litis.

AL HECHO DÉCIMO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO: ES CIERTO, según prueba documental allegada al plenario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

III. FUNDAMENTOS DE DEFENSA

Atendiendo a lo dicho, me permito manifestar señor Juez a través de este escrito la fundamentación de defensa que ostenta mi representada en los siguientes términos:

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67[1] contempla la educación como un derecho a la persona y un servicio público que tiene una función social.

Así, mismo la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C 506 de 2006[2] indica que:

> "*Con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, era consecuente que buscando establecer las responsabilidades en la cancelación de las prestaciones sociales de los docentes se diera claridad y unificara el régimen pensional en función del margen de configuración normativa que le asiste al legislador por la entrada en vigencia de una nueva ley, es decir, regulatoria de las situaciones futuras y bajo el respeto de las situaciones consolidadas*".

[1] "*Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*"
[2] Sentencia C 506 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Silva. Corte Constitucional.

Ahora bien, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado mediante la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo tercero señala que:

> ***"Artículo 3º.-*** *Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional."*[3]

Precisando lo entrecavado es importante indicar que el correspondiente contrato de Fiducia Mercantil[4] fue suscrito por el Gobierno Nacional junto con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la cual actúa como vocera y administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO o fidecomiso.

De otro lado, se tiene de manera concreta la estipulación que la normatividad ha realizado respecto del régimen prestacional a los educadores nacionales más concretamente el pago de las cesantías a lo que tienen derecho, de la siguiente manera:

> Al respecto, el artículo 2º de la Ley 244 de 1995[5], establece las formas de liquidación y plazos para el pago de las cesantías a que tienen derecho los maestros:

> ***"ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:>*** *La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.*
>
> *PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este."*

---

[3] Ley 91 de 1989. (Diciembre 29) Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

[4] Contrato de Fiducia Mercantil protocolizado en la escritura pública No. 83 del 21/06/1990. Suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora.

[5] Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.

El Decreto 1272 de 2018 «Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones», artículo 2.4.4.2.3.2.27:

Artículo 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes.

El contrato de fiducia mercantil suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. (protocolizado con la Escritura Pública No. 83 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Círculo Notarial de Bogotá D.C.) -y sus otrosíes-, establece como obligaciones contractuales a cargo de Fiduprevisora S.A., entre otras, las señaladas en la cláusula segunda (numeral 5) del otrosí integral de fecha 22 de junio de 2017, que señala lo siguiente:

"*5. Se modifica la cláusula sexta C "Obligaciones relacionadas con los pagos que deben efectuarse con cargo al fideicomiso" del otrosí del 25 de enero de 2006 la cual tendrá la siguiente redacción:*

(…)

Los pagos que corresponden al Fondo son:
a) Mesadas pensionales sus reajustes y reliquidaciones;
b) Mesada pensional adicional y las sustituciones pensionales;
c) Cesantías definitivas y cesantías definitivas a beneficiarios;
d) Cesantías parciales de acuerdo con lo establecido en la Ley y las prioridades señaladas por el Consejo Directivo;
e) Los intereses a las cesantías; y,
f) Los demás auxilios e indemnizaciones a cargo del Fondo." (negrillas fuera del texto original)

Por otro lado, no se desconoce por parte de este apoderado judicial la existencia de la Sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Evan Humberto Escrucerìa Mayolo. Sentencia que sostuvo:

(…) Por ser un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción alguna, la Sala concluye que en aplicación de los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación sobre la naturaleza de las cesantías y a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia, a los docentes oficiales les es aplicable el régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006, que contempla la posibilidad de reconocer a favor de estos la sanción por el pago tardío de las cesantías previamente reconocidas (…)

Descendiendo al caso que nos ocupa, y si la posición del despacho es la de acoger la sentencia antes mencionada, es claro indicar que la Ley 1071 de 2006[6], en su artículo 5[0], expresa,

> *"La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público…".*

Con el anterior pronunciamiento, se puede evidenciar que no reposa dentro del expediente prueba idónea que logre demostrar que la entidad incurrió en mora del pago de las cesantías parciales, pues se estaba supeditado a que el acto administrativo quedará en firme y luego proceder a realizar dicho pago. Razón por la cual no hay lugar a reconocer ninguna de las pretensiones de la demanda.

De tal suerte que las radicaciones de solicitudes de reconocimiento de prestaciones deben ser radicadas en la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial, de conformidad con la Sociedad Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En este caso, el fondo es el que tiene la función del pago de prestaciones, sin embargo, la expedición del acto corresponde a las secretarias de educación y por otro lado se encarga a una sociedad fiduciaria de la administración de los recursos del fondo, y pagar las prestaciones sociales.

Con lo cual, será la entidad Fiduciaria quien deberá proceder con los pagos prestaciones, luego de contar con el acto administrativo emitido por la respectiva secretaria, previo el trámite legal para su concesión que compromete el reporte de todos los entes comprometidos dentro del salario del docente conforme a derecho y a la mayor brevedad posible según la disponibilidad de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, debemos precisar que el Decreto 2831 de 2005[7], consagró el procedimiento exclusivo para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin realizar discriminación alguna respecto del tipo de prestación que se tramite por dicho procedimiento, quedando entonces las cesantías sujetas a aquel y excluidas por disposición expresa las primas contenidas en el parágrafo 2 de numeral 4 del artículo 15 de la misma ley.

En tal sentido, se encuentra que existe una diferencia entre los trámites contenidos en el Decreto 2831 de 2005 y la Ley 1071 de 2006, sin embargo, en este tipo de asuntos se debe dar aplicación

---

[6] Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.

[7] por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

prevalente y preferencial al Decreto 2831 de 2005 por tratarse de una norma de carácter especial y de un procedimiento exclusivo.

Conforme a lo transcrito y aseverando lo manifestado, el pago se realiza cuando exista la disponibilidad presupuestal estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las resoluciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con la que cuente de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito, y esta sujeción, es la que precisamente influye en el pago tardío que aduce la demandante así como también en la falta de cumplimiento del ente territorial en las fechas estipuladas.

Se advierte igualmente, en estricto sensu que el principio de sostenibilidad financiera el cual es prioridad indispensable en un estado social de Derecho, teniendo en cuenta que es el eje fundamental para lograr un adecuado financiamiento del sistema del estado en genera. La corte en múltiples oportunidad ha establecido que este principio tiene como característica principal *"que permite lograr la cobertura universal"*[8], por ello y aterrizado al caso sub – examine si se llegaré a configurar a mora solicitada así como también condena en costas y/o indexación se afectaría de manera directa las garantías del estado social de derecho con el cumplimiento de deberes a sus ciudadanos, tales como inversión de esos recursos en propiedades conexas con la vida e integridad de la comunidad en general.

En tal sentido, cabe mencionar que conforme con el Acto Legislativo 03 de 2011 el Estado fortalece la normatividad referente al principio del equilibrio financiero consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, debido a que obligo a todos los órganos y ramas del poder público a orientar sus actividades dentro de un marco de sostenibilidad fiscal.

En tal sentido, el Acto Legislativo 01 de 2005, afirmo que los principios de sostenibilidad financiera, y sostenibilidad fiscal tenían un rango constitucional, lo cual implicó que cada ley que se expida con posterioridad a éste deberá regirse por un marco de sostenibilidad de las disposiciones que allí se establezcan. Es decir, determino que las decisiones que se tomaran en vigencia de dichos actos legislativos debían fundarse en la protección de estos principios de carácter constitucional a fin de no contrariar a la carta magna, ello teniendo como horizonte los fines sociales del Estado.

Ahora bien, Respecto de la indexación de la condena es menester memorar que el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación con radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01[9] en lo relativo a la indexación de la sanción por mora, señalo expresamente la incompatibilidad entre la indexación y la sanción por mora y para el

[8] Referencia: Expediente T-6.822.997. Acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo (hoy Juzgado Primero de Familia de Sincelejo). Magistrado ponente: CARLOS BERNAL PULIDO. Fecha: Veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

[9] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Conseja ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

efecto es preciso traer a colación lo que el máximo órgano de cierre en lo contencioso administrativo ha dado al fenómeno de indexación:

> *(…) Esta figura, nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda, cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de manera que, en aplicación de principios como el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos. (…)*

En lo atinente a la compatibilidad de la sanción por mora con la indexación, el Consejo de Estado nos dejó las siguientes enseñanzas:

> *(…) A partir de lo anterior, es posible sacar las siguientes conclusiones relativas a los fines de la sanción moratoria: i) La sanción moratoria se consagró con el fin de conminar a las entidades encargadas al pago oportuno de la prestación social del auxilio de cesantías, ya que generalmente como consecuencia de la burocracia, la tramitología era común la demora en el citado pago y, ii) en el momento de recibir el pago efectivo de la prestación social, únicamente se pagaba lo certificado por la entidad pagadora meses o años atrás, cuando el dinero había perdido su poder adquisitivo, por lo cual, la disposición buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar el retardo en el citado pago y sus consecuencias desfavorables para el trabajador.*
> *De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago, en los siguientes términos:*
> *«La indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, como ya se anunció, es una multa a cargo del empleador y a favor del empleado, establecida con el fin de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la citada Ley.172»*
> *Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito. (…)*

Más adelante concluye:

> *(…) En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo." (…) (Subrayado fuera de texto original).*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Siguiendo con la discusión, el artículo 187[10] del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo asevera que las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor lo cual no debe ser aplicable al caso en concreto en vista que eso implicaría la indexación de la sanción por mora que valga reiterar, son incompatibles entre sí, aunado a que la mentada indexación se encuentra proscrita por vía jurisprudencial y hace mucho más gravosa la situación de la administración, pues pasa por alto que este emolumento no solo cubre la actualización monetaria sino que es superior a dicho valor.

Así las cosas, y como último planteamiento jurídico - procesal de suma relevancia para el caso que nos ocupa en pro de la defensa de mi poderdante, se tiene que la Ley 1955 de 2019[11] en su artículo 57 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cual dispone lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.*** *Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.*
>
> *Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.*
>
> *Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.*

---

[10] *(...)* ***ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.*** *La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. (...)*

[11] *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
La educación es de todos Mineducación

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

***PARÁGRAFO**. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.*

Es decir que, dentro de la puntualización jurídica plasmada con antelación, vislumbra la responsabilidad y obligación de pago de sanción mora al ente territorial que de manera extemporánea expide la Resolución que otorga la cesantía.

Siendo este eje fundamental para la toma de decisión de su Honorable Despacho, pues como se entrevé para el caso objeto de Litis, el ente territorial se extralimito en expedir dicho acto administrativo a sabiendas que la normatividad otorgó el término de 15 días para su conducta, configurándose a todas luces la responsabilidad del pago de sanción por mora en el caso bajo estudio, siendo necesario el arrimo a este proceso del ente territorial para que reconozca dicho actuar y se decrete su falta a través de sentencia.

Así como también, la misma Ley plasmó:

***"PARÁGRAFO TRANSITORIO.** Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.*

La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención."

por ministerio de la ley se encuentran definidos los sujetos responsables del pago de la sanción por mora con sus propios recursos, esto es la Secretaría de Educación del ente territorial o Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), según se haya dado el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el trámite de solicitud y pago de las cesantías, de lo puntualizado se tiene, que toda sanción mora causada a diciembre de 2019, deberá ser cancelada con los fondos descritos y no con fondos del FOMAG para lo cual se solicita a su señoría si se prueba que se incurrió en mora de cancelación de cesantías pronunciarse en su fallo que se cargara a dicho rubro presupuestal.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IV. EXCEPCIONES DE MERITO

Retomando lo señalado, es importante señor Juez advertir que las excepciones que se proponen a continuación intentan delimitar la controversia judicial en primer debate y salvaguardar los intereses de la NACIÓN – MIINSTERIO DE EDUCACIÓN y FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCILES DEL MAGISTERIO.

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Teniendo en cuenta lo decantado por la Ley 1955 de 2019 parágrafo igual artículo 57[12], en el cual se indica que "*la entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio"* y como el caso objeto de Litis se configura de manera directa y sin lugar a dudas lo dicho por demora de expedición de acta administrativo que reconoce dicha cesantía, se solicita a su Honorable Despacho sea probada dicha excepción toda vez que la demora que configura sanción da inició en el ente territorial, facultando a mi representada a solicitar la no acción consecutiva del presente proceso pues no estuvo en nuestro resorte la expedición de dicha Resolución.

En caso de no resultar probada la presente excepción, se solicita su señoría se acoja entonces la excepción de litisconsorte necesario, exteriorizado con antelación.

2. LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA

Al respecto es necesario mencionar que el Código General del Proceso, en el artículo 61 reguló:

> *"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio".*

En la misma línea, Consejo de Estado, ha expresado:

> *(…) El litisconsorcio se presenta cuando uno o los dos extremos de la relación jurídico procesal está integrado por varios sujetos de derecho y puede ser facultativo, cuasinecesario o necesario. El litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica*

[12] *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*

material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso, por ser un requisito imprescindible para adelantarlo válidamente. El elemento diferenciador de este litisconsorcio con el facultativo es la unicidad de la relación sustancial material del litigio; mientras que en el litisconsorcio facultativo los sujetos tienen relaciones jurídicas independientes, en el necesario existe una unidad inescindible respecto del derecho sustancial en debate. El litisconsorcio necesario tiene su fundamento en la naturaleza de la relación sustancial objeto del litigio, defina expresamente por la ley o determinada mediante la interpretación de los hechos y derechos materia del proceso. En el primer evento basta estarse a lo dispuesto por la ley, pero cuando se trata de establecerlo con fundamento en la relación objeto del litigio, se impone un análisis cuidadoso para establecer la naturaleza del asunto y la imposibilidad de proferir un pronunciamiento de fondo, sin la comparecencia de un numero plural de sujetos"[13]*(…)*

De acuerdo con lo expuesto por el poder jurisprudencial, es loable solicitar en esta instancia su señoría de manera respetuosa vincular al ente Territorial como litisconsorcio necesario por pasiva, en virtud del acto administrativo allegado con la demanda, pues se observa la necesidad de vincular al ente territorial en el presente proceso por incumplimiento de los términos otorgados de manera taxativa por la normatividad y más aun otorgando aplicabilidad a la reciente normatividad esto es Ley 1955 de 2019, la cual reza en su Artículo 57[14]:

"*la entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.*"

Es menester indicar que en el caso objeto de Litis se configura de manera directa y sin lugar a dudas lo dicho por demora de expedición de acto administrativo que reconoce dicha cesantía, se solicita a su Honorable Despacho sea probada dicha excepción toda vez que la demora que configura sanción da inició en el ente territorial, facultando a mi representada a solicitar la no acción consecutiva del presente proceso pues no estuvo en nuestro resorte la expedición de dicha Resolución.

Por ello y al tener de lo dispuesto se debe indicar que el reconocimiento de las prestaciones sociales económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterios -FOMAG-, tiene establecido un procedimiento administrativo especial contenido en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005, así como, en el Decreto 2831 de 2005, a favor de los educadores nacionales afilados al mismo. Este régimen especial contempla términos específicos para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales de los docentes, que implica la participación de las entidades territoriales -Secretarias de Educación certificadas-, al igual que de la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

[13] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2004, exp. 15321. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

[14] *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*

Concluyendo entonces, que la Secretaría de Educación territorial a la que se encuentra adscrito el demandante, se demoró en dar respuesta a la solicitud elevada por la parte actora, con lo cual demoro todo el trámite administrativo que de él se decanta, haciendo que fuera aún más demorado el turno de radicación y disponibilidad presupuestal para tal efecto, causando una afectación a las funciones que cumple la entidad a la que represento, siendo en este caso, que el ente territorial tendrá que responder por la falla administrativa que se causó, con la demora en expedir el acto administrativo.

3. DIAS DE SANCION MORA CAUSADOS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2020, SON RESPONSABILIDAD DEL ENTE TERRITORIAL

Tal como se desprende de las documentales probatorias, así como del análisis de las normas sustanciales y adjetivas que subsumen el presente caso, y los esquemas plasmado líneas arriba, los presuntos días de mora que se hubieren causado en vigencia del año 2020, son responsabilidad del **ENTE TERRITORIAL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,** por mandato expreso del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Por ende, los días de mora causados a partir del **01 de enero de 2020** son responsabilidad para su pago, al **ENTE TERRITORIAL.**

El demandante aportó y acreditó los extremos de la presunta moratoria; y esta parte demandada expuso el análisis completo de la normatividad de resuelve el caso, lo cual, valorado, junto a las excepciones arriba expuestas, lleva a la convicción cierta que, de declararse la Nulidad de los Actos Administrativos demandados, **ENTE TERRITORIAL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** le correspondería el pago de la moratoria causada en vigencia del año 2020.

4. COBRO DE LO NO DEBIDO, POR MORATORIA GENERADA EN EL AÑO 2020

En razón a que el demandante presenta la demanda a la **NACION MINEDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,** se configura la presente excepción; pues, tal como ha sido expuesto, la responsabilidad en el eventual pago de moratoria causada en el año 2020, sería responsabilidad del **ENTE TERRITORIAL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** por mandato del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y no el FOMAG por expresa prohibición legal del inciso 4 del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Sean estos motivos suficientes para solicitar al fallador de instancia, hallar configurada la presente excepción, en favor de mi representada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

5.LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATACADOS DE NULIDAD

Los actos Administrativos emitidos por la entidad se encuentran ajustados a derecho, se profirió en estricto seguimiento de las normas legales vigentes ya aplicables al caso de la demandante, sin que se encuentre viciado de nulidad alguna.

Dichos actos no gozan de vicios que lo ataquen de fondo o de forma, pues fueron expedidos en debida forma con todas las rituales que contempla la norma, sin que se pueda alegar su legalidad.

6. IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS

La NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, pagó la obligación ajustada a los preceptos legales vigentes al momento del reconocimiento de la prestación principal, el pago efectivo extingue cualquier obligación accesoria.

Es necesario, precisar que para el caso en concreto no existen valores que fueren adeudados por la NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**,** sobre los cuales se debe aplicar corrección o valorización monetaria alguna.

Así mismo, cabe mencionar que de encontrar su señoría que le asistiera el derecho del reconocimiento de la sanción mora, esta pretensión no es subsidiaria de la indexación de las condenas, lo anterior, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial citado en los numerales anteriores, el cual, ha regulado que lo expresado en el artículo 187 del CPACA en su inciso final, no le es aplicable en el caso en concreto, toda vez, que la indexación de la sanción mora, son inaplicables entre sí, dado que la misma pretensión principal es una sanción que se le causa al ente público, y no debe causarse una doble sanción sobre un mismo derecho.

Además, debemos precisar, que la indexación se encuentra proscrita por vía jurisprudencial y en tal sentido hace mucho más gravosa la situación económica de la administración, pues pasa por alto que este emolumento no solo cubre la actualización monetaria al momento del pago, sino que también supera el valor que se debiera cancelar, carga que le será excesiva para la administración.

7. CADUCIDAD

De acuerdo a esta excepción, es notable de acuerdo al No. 3 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo[15] que no existe termino de caducidad en los actos fictos o presuntos y para el caso sub – examine es incierta la afirmación y pretensión del accionante y su apoderado, pues en caso que se hubiese dado contestación de la solicitud del pago de la sanción moratoria se quebrantaría el andar jurídico de ficto o presunto para recrearse un debate jurídico de agotamiento de vía gubernativa y contabilidad de términos de acuerdo al

[15] *"**ARTÍCULO 136.** Caducidad de las acciones. 3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo."*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

artículo 136 No. 2[16] de cuatro (4) meses para interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho pretendida en la presente.

En este orden de ideas, solicito en esta instancia su señoría que a petición de la suscrita o de oficio se solicite certificación donde conste o no contestación del derecho de petición de solicitud de pago de mora.

8. PRESCRIPCION

Sin que implique reconocimiento de los hechos y pretensiones aducidos por la demandante, se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que se hubiere causado en favor del mismo y que de acuerdo con las normas quedará cobijado por el fenómeno de la prescripción, indicando que la misma consiste en la formalización de una situación de hecho por el paso del tiempo, lo que produce la adquisición o la extinción de una obligación. Esto quiere decir que el derecho a desarrollar una determinada acción puede extinguirse cuando pasa una cierta cantidad de tiempo y se produce la prescripción.

Por su parte el artículo 151 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley 2158 DE 1948, dispone:

ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Por su parte el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA[17], sostuvo:

"…
En este orden de ideas, si bien en virtud del artículo 53 de la Constitución Política14 los beneficios laborales mínimos de los trabajadores comportan carácter irrenunciable, el legislador ha previsto la prescripción extintiva de esos derechos, fundamentalmente con el propósito constitucional de salvaguardar la seguridad jurídica en relación con litigios que han de ventilarse ante los jueces frente a la inactividad del servidor de reclamar su pago oportunamente. Por lo tanto, para que opere el fenómeno prescriptivo se requiere que transcurra el interregno preestablecido durante el cual no se hayan realizado las correspondientes solicitudes."

[16] ***"ARTÍCULO 136.*** *Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones. 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe."*

[17] CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA; Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16; veinticinco (25) de Agosto de dos mil dieciséis (2016) Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.

En este acápite es importante resaltar que la prescripción su señoría se debe contabilizar desde el día en que se solicitó las cesantías y luego del cumplimiento del día hábil siguiente indicado por la normatividad, es decir 65 o 70 días hábiles, teniendo en cuenta el caso concreto.

De lo anterior se intuye que se solicita la cesantía y se contabiliza el término que se tiene para el pago de ahí a partir del día siguiente o sea día 71 se contabiliza el término que tiene el docente para la reclamación del pago de su cesantía y no como se asevera desde el día en que se paga la cesantía. Pues la normatividad es de pleno conocimiento de los maestros y saben que solo se tiene 70 días hábiles para el pago de su cesantía si transcurre más tiempo y no reclaman el pago su actuación es dolosa para que se genere más cantidad de sanción mora, benéfica monetariamente para ellos.

9. COMPENSACIÓN

De cualquier suma de dinero que resulte probada en el proceso a favor del demandante y que haya sido pagada por mi representada o esté en proceso administrativo de pago.

CASO CONCRETO

Así las cosas, en el presente caso su señoría, si bien la demandante radicó la solicitud de su prestación el día 27 de noviembre de 2019, la misma fue resuelta a través de la **Resolución No. 9811 del 10 de diciembre de 2019** que reconoció y ordenó el pago.

Todo lo anterior, nos permite indicar que, con relación a la entidad que represento, y atendiendo a los anexos allegados en el escrito de demanda estaríamos frente a una moratoria a partir del año 2020, de tal suerte que de conformidad el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, **el llamado a reconocer la indemnización por concepto de sanción moratoria es el ente territorial y no el FOMAG por expresa prohibición legal del inciso 4 del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019**.

Conforme a lo anterior, y a la luz del compendio normativo anteriormente citado, por ministerio de la ley se encuentran definidos los sujetos responsables del pago de la sanción por mora con sus propios recursos, esto es la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI,** según se haya dado el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el trámite de solicitud y pago de las cesantías, competencias en cabeza de este y aquel, respectivamente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IV. PETICIONES

Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, comedidamente solicito a Ud., que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO. - Declarar probadas las excepciones propuestas.

SEGUNDO. - En consecuencia, dar por terminado el proceso en contra de mi representada.

TERCERO. - Abstenerse de condenar en costas a mi representada.

CUARTO. - Se me reconozca personería adjetiva para actuar.

VII. PETICION ESPECIAL

Solicito que previo traslado para alegar de conclusión se profiera sentencia anticipada, teniendo en cuenta para ello que, en el presente asunto se reúnen los presupuestos contemplados por el artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080.

En efecto, nótese que a la fecha no se ha evacuado la audiencia inicial, aunado al hecho que, las pruebas a decretar y practicar solo son documentales, sobre las cuales, es de resaltar, las partes no han manifestado reparo alguno, circunstancia por la cual, el despacho se encuentra facultado para proferir la sentencia que en derecho corresponda sin tener que agotar cada una de las etapas previstas en el artículo 179 Ibidem.

Sobre el particular, la norma en su parte pertinente reza:

"Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

(…)

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento. (…)"

Finalmente, resulta pertinente recordar que por regla general las leyes procesales se aplican en forma inmediata, salvo cuando han empezado a correr términos, o se han empezado actuación o diligencia conforme a la ley procesal derogada o modificada, luego el artículo 42 de la Ley 2080 cuya aplicación se invoca en el presente escrito, ya está rigiendo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIII. PRUEBAS

Solicitamos se tengan con pruebas las aportadas en debido tiempo al plenario y adicionalmente las aportadas con la contestación.

IX. ANEXOS

1. Anexos de poder, de acuerdo a lo requerido por el despacho de quien otorga.
2. El poder principal.
3. Certificado de No Antecedentes Administrativos

X. NOTIFICACIONES

La entidad demandada recibe notificaciones en la Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10-03 Bogotá, y a los correos electrónicos: notjudicial@fiduprevisora.com.co, procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co, t_eorduz@fiduprevisora.com.co

Del señor(a) Juez,



_____

EDID PAOLA ORDUZ TRUJILLO
CC. No. 53.008.202 de Bogotá
T.P. No. 213.648 del C.S.J.

Profesional IV – Zona 6
Unidad Especial De Defensa Judicial FOMAG
Vicepresidencia Jurídica
Dirección: Calle 72 N° 10-03
Teléfono:(571) 744 43 33
Bogotá D.C. - Colombia
procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co
Elaboró: Paola Orduz / Aprobó: Maria Camila Petro.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RV: C22-59805 RV: CONTESTACION DE DEMANDA

Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 16/12/2022 11:13 AM

Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: celestevalenciacastillo@gmail.com <celestevalenciacastillo@gmail.com>

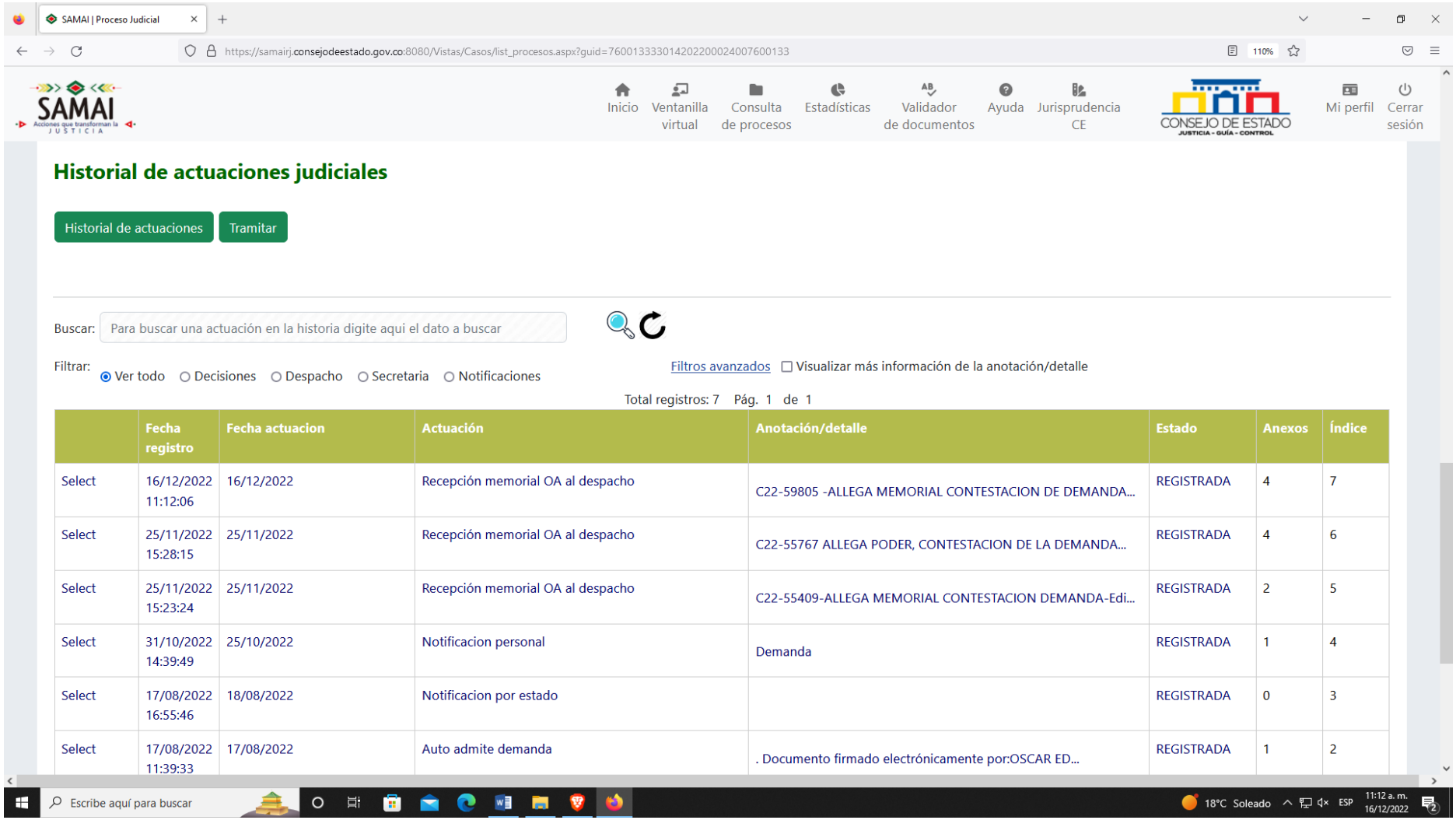
3 archivos adjuntos (7 MB)

ANEXOS DE PODER.pdf; PODER.doc; CONTESTACION DE DEMANDA sra AYALA.doc;

Cordial saludo,

Remito constancia de radiación en adjunto denominado SAMAI proceso judicial.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia. Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co



	Fecha registro	Fecha actuacion	Actuación	Anotación/detalle	Estado	Anexos	Índice
Select	16/12/2022 11:12:06	16/12/2022	Recepción memorial OA al despacho	C22-59805 -ALLEGA MEMORIAL CONTESTACION DE DEMANDA...	REGISTRADA	4	7
Select	25/11/2022 15:28:15	25/11/2022	Recepción memorial OA al despacho	C22-55767 ALLEGA PODER, CONTESTACION DE LA DEMANDA...	REGISTRADA	4	6
Select	25/11/2022 15:23:24	25/11/2022	Recepción memorial OA al despacho	C22-55409-ALLEGA MEMORIAL CONTESTACION DEMANDA-Edi...	REGISTRADA	2	5
Select	31/10/2022 14:39:49	25/10/2022	Notificacion personal	Demanda	REGISTRADA	1	4
Select	17/08/2022 16:55:46	18/08/2022	Notificacion por estado		REGISTRADA	0	3
Select	17/08/2022 11:39:33	17/08/2022	Auto admite demanda	. Documento firmado electrónicamente por:OSCAR ED...	REGISTRADA	1	2

Atentamente,

ANDRES MAURICIO PAQUE CÁRDENAS
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de diciembre de 2022 10:26
Para: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C22-59805 RV: CONTESTACION DE DEMANDA

DIANA PATRICIA ZAPATA FLOREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <jadmin14cli@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de diciembre de 2022 10:21
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CONTESTACION DE DEMANDA

buenos días

favor cargar SAMAI

Jhon Fredy Charry Montoya
secretario

_____

AVISO IMPORTANTE: La dirección de correo electrónico jadmin14cli@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, la dirección adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co es para actuaciones administrativas del Despacho, todo mensaje que se reciba en dichos correos no será leído y automáticamente se eliminara de nuestros servidores.

Apreciado usuario todos los memoriales, contestaciones, solicitudes y demás actuaciones deben ser remitidas al correo electrónico de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Cali: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Celeste Valencia Castillo <celestevalenciacastillo@gmail.com>
Enviado el: jueves, 15 de diciembre de 2022 7:49 p. m.
Para: Juzgado 14 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <jadmin14cli@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DE DEMANDA

NAYIBY AYALA CASTILLO

Señor (a)
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL:	**Nulidad Y Restablecimiento del Derecho - Laboral**
DEMANDANTE:	**NAYIBY AYALA CASTILLO**
DEMANDADO:	**Nación-Ministerio de Educación Nacional-**
ASUNTO:	**Fondo Nacional de prestaciones sociales del Magisterio – Fomag – Departamento del Valle del Cauca- Secretaria de Educación de Educación Departamental. Contestación de Demanda.**
RADICACIÓN:	**76001333301420220002400**

PARTE DEMANDADA:

LÍA PATRICIA PÉREZ CARMONA, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.072.523.299, expedida en San Antero - Córdoba, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No.187.241 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca, en mi condición de Directora Jurídica de acuerdo con el poder general que me otorgó la señora Gobernadora del Departamento, Doctora **CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ**, mediante Escritura Pública No.049 del 13 de enero de 2020 de la Notaria Sexta del Círculo de Cali, la cual se adjunta, respetuosamente manifiesto a usted que por medio del presente escrito otorgo poder especial al Doctor **MERCEDES CASTILLO VALENCIA.**

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO:

MERCEDES CASTILLO VALENCIA, mayor de edad y vecino de Yumbo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.329.955 expedida en Pereira-Risaralda, Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional N° 335896 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando conforme con el poder que le confirió la Señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, a la Directora del Departamento Administrativo Jurídico Doctora **LIA PATRICIA PEREZ CARMONA**, el cual me sustituyó, respetuosamente manifiesto a ese Honorable Despacho Judicial, que procedo a ***CONTESTAR LA DEMANDA,*** en los siguientes términos:

.

CONDENAS

1. Condenar MORA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía de mi representado (a), de conformidad con el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

2. Condenar a LA NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FOMAG, al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías a mi mandante.

3. Que se ordene MORA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A)

4. Condenar MORA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando Como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso y consagrada en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

5. Condenar MORA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago d de la SANCION MORATORIA reconocida en esta sentencia

6. Condenar en costas MORA al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.

I. A LOS HECHOS

1. No me consta, Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

2. No me consta, Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

3. **No me consta,** Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

4. No me consta, Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

5. No me consta, Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

6. **No me consta,** Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

7. **No me consta,** Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

8. Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.
10. Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

10. 1 Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

10. 2 Dicha situación tendrá que probarse y demostrarse durante el decurso del proceso.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

Solicito respetuosamente **DENEGAR** todas y cada una de las Pretensiones de la demanda. Igualmente reconocerme personería jurídica para actuar dentro del proceso.

ARGUMENTOS JURIDICOS

Que el señora **NAYIBY AYALA CASTILLO** identificado con la cédula de ciudadanía 29700355, solicitó el reconocimiento y pago de la **Cesantías SANCION MORATORIA** que, a su juicio, tiene derecho por sus servicios prestados al Departamento del Valle Cauca en la Secretaria de Educación Departamental.

Sea lo primero manifestar que el **DEPARTAMENTO** DEL VALLE DEL CAUCA no es competente para conocer el presente asunto, toda vez que es competencia del MINISTERIO DE **EDUCACIÓN** NACIONAL y del **FONDO** NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el reconocimiento y pago -en caso de que la demandante sea beneficiaria del derecho- que se pretende, para el caso que nos ocupa, de la presunta **cesantías** que alega el accionante **NAYIBY AYALA CASTILLO.**

Así las cosas, es necesario traer a colación la regulación que opera para esta materia, es de advertir que cuando el petitum de la demanda está dirigido a reclamar prestaciones sociales del personal docente, quien tenga el derecho al reconocimiento y pago de esta, debe solicitarla ante la oficina de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación Departamental de la entidad territorial a la que pertenezca, esta entidad está facultada para emitir el acto administrativo de reconocimiento y **pago a nombre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio**, a su vez la entidad fiduciaria que administre los recursos del FNPSM es la encargada de pagar, por lo tanto, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA no es la entidad competente para el reconocimiento de lo aquí pretendido, por lo que se hace necesario indicar que se configura una FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.

Frente el tema, el Decreto 2831 de 2005 establece:
"Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la

sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley. (…)”

De otra parte, La Ley 91 de 1.989, establece en su artículo 4º lo siguiente:

“ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que

se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica."

El H. Consejo de Estado, mediante Sentencia del 5 de diciembre de 2013 con Radicación número: 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12), estipuló:

"Con fundamento en los argumentos facticos y jurídicos esbozados anteriormente, podemos concluir que, para el caso que nos ocupa, la competencia para satisfacer las pretensiones de la demandante, si se logra probar que tiene derecho a ello, es de la Fiduciaria "LA PREVISORA SA." - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, cuenta especial de la nación creada por la Ley 91 de 1989, con independencia patrimonial, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria que tiene como finalidad primordial la eficaz administración de los recursos de la cuenta especial de la nación; y no del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, ya que su función, a través de la Secretaría de Educación Departamental, es la de recibir las solicitudes, proyectar resoluciones, enviarlas al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y, una vez este la aprueba, se firma por el Secretario de Educación Departamental, quedando claro, de acuerdo con las normas antes citadas, que quien reconoce y paga las prestaciones del personal docente afiliado, es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, entidad facultada para satisfacer las pretensiones de la demanda, en caso de que se demuestre que el demandante es beneficiario del derecho que reclama."

EXCEPCIONES

Me permito proponer las siguientes excepciones:

FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA

Hago valer esta excepción teniendo en cuenta que mi representado, Departamento del Valle, no está llamado a responder por el pago de las cesantías parciales y la sanción moratoria, toda vez que corresponde entidad llamada a responder. A NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

INNOMINADA

Esta excepción consiste en todo hecho o acto que resulte probado dentro del proceso, en virtud del cual se establezca que el Departamento del Valle del Cauca no tiene la obligación legal de indemnizar los perjuicios solicitados en la demanda.

SOBRE COSTAS

1. Solicito al Honorable Juez se condene en costas a la parte demandante, en la medida en que está facultado para ello en virtud de lo establecido en el artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A. (Ley 1437 de 2011).

PRUEBAS

Oficio del solicitando antecedentes administrativos.
.

ANEXOS

1. Poder de sustitución de la Directora del Departamento Administrativo Jurídico del Valle del Cauca, Doctora LIA PATRICIA PEREZ CARDONA a mi favor, y de acuerdo con el poder otorgado por la Señora Gobernadora del Departamento del Valle, con sus correspondientes anexos. Contentivo en doce (12) folios.

2. Oficio del relacionado en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

1. El demandante y su apoderado judicial en las direcciones que relaciona en el libelo de la demanda.

2. La parte demandada, Señora Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, las recibirá la Directora del Departamento Administrativo Jurídico Doctora Lía Patricia Pérez Carmona en su Despacho ubicado en el Edificio de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, Palacio de San Francisco, Carrera 6ª Calle 9 y 10, Departamento Administrativo Jurídico, 2° piso, Santiago de Cali.

3. Las mías las recibiré en la Secretaría de su Honorable Despacho o en la Oficina del Edificio de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, Secretaría Jurídica, 2° piso, Palacio de San Francisco, Calle 10 con carrera 6, Santiago de Cali. Correos electrónicos: njudiciales@valledelcauca.gov.co y nconciliaciones@valledelcauca.gov.co

De conformidad con los artículos 203 Y 205 del C.P.A.C.A, solicito se me sea notificado a mi Correo Electrónico

Del Honorable Juez Administrativo,

MERCEDES CASTILLO VALENCIA
C. C. No.1088.329.955 De Pereira-Risaralda
T. P. No. 335896 del Consejo Superior de la Judicatura.

Doctor
OSCAR EDUARDO GARCIA GALLEGO
Juez Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali
E. S. D.

ASUNTO	**:**	CONTESTACIÓN DEMANDA.
REF.	**:**	DEMANDA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN	**:**	2022-00097-00
DEMANDANTE	**:**	**ALICIA OSORIO GONZALEZ**
DEMANDADO	**:**	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

JUAN CARLOS HURTADO HOYOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. **94.448498,** expedida en Cali, abogado titulado y en ejercicio portador de la tarjeta profesional de abogado No,**87.479** proferida por el Consejo Superior de la judicatura, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,** en virtud de poder a mi conferido por la Doctora **MARIA DEL PILAR CANO STERLING**, quien actúa en condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, de la Alcaldía de Santiago de Cali, nombrada mediante Decreto No**. 4112.010.20.0001** del 1 de enero de 2020, y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el doctor **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **6.342.414** expedida en La Cumbre (Valle) en su condición de Alcalde del Municipio de Santiago de Cali y representante legal del mismo, según decreto No. **4112.010.20.0024** del 10 de enero de 2020, "por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial administrativa y extrajudicial y se dictan otras disposiciones". Por medio del presente escrito, y encontrándome en término legal para hacerlo, me dirijo a usted con el objeto de contestar la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la referencia, la cual fue formulada ante usted por, la doctora **ALICIA OSORIO GONZALEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 38.969.635** de Cali, abogada titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. **25.308** del Consejo Superior de la Judicatura**,** quien actúa en su propi nombre y representación, tal como consta en el escrito de la demanda.

FRENTE A LAS PRETENCIONES

Me opongo a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora, por los motivos y razones que expondré más adelante, Pretensiones que buscan la revisión y declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos.

PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016 "POR LA CUAL se declara no probada las excepciones propuestas en contra de la Resolución No.4131.3.21.117752 de fecha noviembre 17 de 2015, por haberse configurado el silencio administrativo positivo frente al Recurso de Reposición formulado en su contra por la Suscrita ALICIA OSORIO GONZALEZ.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior. Declarar la nulidad de la Resolución Número No.4131.032.21.12762 de fecha 21 de diciembre de 2017, expedida por el Dr. EDWIN ALBERTO PEREZ SERRANO, jefe de la OFICINA Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, notificada el día 30 de junio de 2018," POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCIÓN 4131.3.21.170845 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LOA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DE PREDIO B00660224000".

TERCERA. Nominada igualmente al anterior, es decir, "SEGUNDO". Igualmente declarar la nulidad de la Resolución Numero 41.31032.212717 de agosto 22 de 2018, "POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 4131.032.21.12762 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LA CNTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPLA DE LA OBRA 55621 MEGAOBRAS DEL PREDIO B00660224000, que niega la revocatoria directa y el silencio administrativo.

CUARTA, que nominó como "TERCERO". Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de restablecimiento del derecho se declare que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ, no debe al Municipio de Santiago de Cali, la sumas liquidas por valor concepto de la Contribución de Valorización Municipal de la Obras 556-21 Megaobras del predio B00660224000 – Código: 76001020100058.

QUINTA, Nominada igualmente a la anterior como "TERCERO". Que cumplido l anterior, se ordene que sin mas trámites ni dilaciones, Departamento Administrativo de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, ordene al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Cali, cancelar la Anotación No. 009 de fecha 29-01-2010, Radiación 2010-6314 correspondiente a la Resolución No. 189 del 04-09-2009 del Municipio de Cali, Secretaria de Infraestructura y Valorización.

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto al Primer de los Hecho: Es cierto.

Respecto al Segundo de los Hecho: Es cierto.

Respecto al Tercero de los Hecho: No obedece a un hecho, al afirmarse en el hecho tercero que, "expedida cuando ay se había configurado la prescripción de la Acción de Cobro por haber transcurrido 5 años desde la fecha en que quedó en firme la resolución No. 411.0.21.0169 del 4 de septiembre de 2009", se está exponiendo una opinión o una posición jurídica que le corresponderá al señor juez resolver.

Respecto al Cuarto de los Hecho: Es cierto, ello bajo el entendido de que, efectivamente se hiso esa afirmación en el recurso, mas no en el sentido de que la afirmación se acierta.

Respecto al Quinto de los Hecho: Es cierto.

Respecto al Sexto de los Hecho: Es cierto.

Respecto al Séptimo de los Hecho: Parcialmente cierto, toda vez que, es cierto que el día 27 de junio de 2018 se notificó el acto administrativo señalado pero no me consta que no se haya entregado la Resolución notificada.

Respecto al Octavo de los Hecho: No corresponde a un hecho, corresponde a una tesis o posición jurídica sostenida de la parte demandante**.**

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA DEFENSA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto la Administración Municipal de Santiago de Cali, cumplió y actuó con forme derecho, y no puede pretender la parte actora que el municipio de Santiago de Cali aceptara los argumentos propuestos por el contribuyente dentro del proceso de cobro coactivo.

CADUCIDAD

Iniciaremos esta defensa estableciendo una descripción cronológica de los actos demandados, esto para facilitar el establecer la fecha en que estos fueron proferidos.

El proceso de cobro coactivo inicia con la expedición de la Resolución No. 4131.1.21.117752 del 17/11/2015, notificada el 13/01/2016.

Posteriormente se presentó escrito de excepciones por parte del contribuyente el 01/02/2016.

El acto administrativo por medio del cual se resuelven las excepciones es la Resolución 4131.3.21.170845 del **21 /11/2017,** notificada el **19/01/2019.**

Posteriormente se radica por parte del contribuyente recurso de reposición el **15/02/2017**.

El acto administrativo que desata el recurso de reposición es la Resolución No.4131.032.21.12762 del **21/12/2017**, notificada el **25/06/2015**. (se anota que se evidencia en los antecedentes administrativos intentos varios para notificar al contribuyente, quien no asistió a la notificación ese a que en las guías de envió de las citaciones tiene anotación de recibido).

Solicitud de revocatoria directa presentada por el contribuyente, radicada el **02/08/2018**.

Acto administrativo que resuelve la solicitud de revocatoria es la Resolución No. 4131.032.21.212717 del 22/08/2018, notificada el **29/08/2018**.

Ahora bien, ya establecido de manera clara el desarrollo cronológico de la expedición de los actos administrativos, sus notificaciones y los escritos presentados por el contribuyente, es preciso realizar una anotación frente a la solicitud de declaratoria de Silencio administrativo realizado a la administración de Santiago de Cali mediante el escrito con radicado No. 201841730101120762 del **02/08/2018,** al revisar el artículo 100 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0139 de 2012 (norma citada en el escrito anteriormente referenciado solicitud de contribuyente), el cual hace referencia de termino para resolver los recursos, se advierte que en el contenido de este artículo hace referencia especialmente al trámite del recurso de reconsideración del que trata el artículo 91 de la misma norma, en momento alguno está haciendo referencia a los términos para desatar los recursos de reposición o de apelación que se presenten ante las administración de Santiago de Cali, es una noma especial, dispuesta para imponer una plazos perentorios dentro del trámite del proceso de discusión tributaria, si se revisa de una manera armónica y sistemática el Decreto Especial 0139 de 2012, podemos observar que el Titulo IV Capitulo I regula los asuntos propias dela #DISCUCION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN" dentro del proceso de discusión tributaria, no regula este capitulo los proceso de cobro coactivo, ni otros procesos de la administración, estableciendo en el **artículo 89** los recursos contra la administración tributaria, haciendo énfasis en los siguiente:

Artículo 89: Recursos contra los actos de la administración tributaria: Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Decreto, contra las liquidaciones oficiales, liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado por medio de facturación, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los tributos administrados por la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, procede el recurso de reconsideración.

Es así como mas adelante en la norma, se plantea n el artículo 102 del decreto 0139 de 2012, el silencio administrativo, pero es un silencio administrativo que como lo dice l el cuerpo de la norma, opera únicamente y exclusivamente para resolver los recursos de reconsideración, no así para los recursos de reposición presentados ante la administración.

Artículo 102: Silencio administrativo: Si transcurrido el término señalado en el artículo 100 de este Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.

Mal podría la administración de Santiago de Cali ante la solicitud de declaratoria de silencio administrativo presentada por el contribuyente, y fundamentada en el artículo 100 y 102 del decreto extraordinario 0139 de 2012, acceder a las solicitudes del contribuyente.

De otro lado, hay que tener presente que el acto administrativo hoy demandado, es de carácter tributario, y la ley determina un régimen especial de nulidad, en lo relativo a causales, respecto de los actos administrativos proferidos por la administración tributaria correspondiente, casos que se encuentran regulados por el Estatuto Tributario Nacional en su artículo 730, que a la letra reza:

Art. 730. Causales de nulidad.

Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la Administración Tributaria, son nulos:

1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente.

2. Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas.

3. Cuando no se notifiquen dentro del término legal.

4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo.

5. Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.

6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad.

Para el caso en particular, en ningún momento se da ninguna de las causales anteriormente descritas, por cuanto todos los actos administrativos, fueron expedidos y notificados por el funcionario competente, En cuanto a las demás causales de nulidad contempladas, se considera que estas no se configuraron por cuanto la Administración Municipal cumplió y actuó conforme a derecho, respeto todas y cada una de las garantías que supone el debido proceso, dio respuesta dentro de los términos establecidos para ello, dio a conocer la oportunidad para controvertir los actos administrativamente, y no puede pretender la parte actora sin fundamentos jurídicos y pruebas que aceptara los argumentos propuestos por el contribuyente en su derechos de petición.

En este orden de ideas, los actos de la Administración Municipal, gozan de presunción de legalidad, la cual encuentra su fundamento en el ejercicio legítimo del órgano que actúa en función administrativa, en el correlativo deber que tienen las autoridades de acatar y cumplir el ordenamiento jurídico que la regula, y en la suposición de que se respetaron las garantías individuales o subjetivas y los tramites internos y externos, anteriores concomitantes y posteriores, consagrados

en el procedimiento administrativo y en la vía gubernativa para su emisión, con una alta dosis de razonabilidad, consistente en que todo acto administrativo debe fundarse en hechos, conductas, circunstancias y normas jurídicas como sustento de su expedición.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Para finalizar, se procederá a realizar una reflexión frente al proceso en general del cobro de la Contribución de valorización:

Que la Administración Municipal adelantó todo el proceso que corresponde a la notificación de las resoluciones que distribuyeron y asignaron las contribuciones de valorización a todos y cada uno de los propietarios y/o poseedores de los predios en el Municipio, en el caso de aquellos que no comparecieron al proceso de notificación personal, la notificación se realizó por edicto dando cumplimiento a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Considerando, que la resolución Nro. 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009 "Por medio de la cual se fija el presupuesto y se aprueba la distribución y asignación individual de la contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un plan de obras, autorizado mediante Acuerdo 0241 de 2008, modificado por el Acuerdo 0261 de 2009", quedó debidamente ejecutoriada el 20 de octubre de 2009, adicionalmente la Administración Municipal concedió un plazo de pago de contado con derecho a descuento hasta el 30 de junio de 2010, y pago a 60 cuotas a partir del primero (1) de enero de 2010. En el caso concreto las 60 cuotas concedidas por la Administración, se vencieron el 30 de mayo de 2015, fecha desde la cual se hace exigible la obligación y el momento desde el cual se empieza a contar el término de prescripción, vemos entonces que han transcurrido únicamente dos años desde la citada fecha. Sin embargo, al haber fijado este un plazo para el pago de la obligación o, lo que es lo mismo, para hacerla exigible, la Administración Municipal realizó acciones para lograr el cumplimiento de la obligación, momento a partir del cual debe empezar a correr el término de prescripción de la acción de cobro, así lo podemos concluir al analizar la definición y los elementos constitutivos de la prescripción extintiva, que es alegada en este caso concreto, "La Prescripción Extintiva es la manera establecida por la Ley por el cual se extingue la acción ligada a un derecho

subjetivo de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor y por el tiempo que señala la Ley".

Lo anterior nos lleva a deducir, que existen dos elementos que deben ser tenidos en cuenta: el paso del tiempo y la inactividad del acreedor. Es evidente que el lapso de tiempo transcurrido no es suficiente para que la obligación prescriba, aunado a lo anterior, la Administración ha realizado actividades para el cobro de las obligaciones con la elaboración de los Títulos Ejecutivos "Por medio de la cual se cobra y se hace exigible el pago de la contribución de valorización por beneficio general para la construcción del plan de obras 556 a favor del Municipio de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal".

Las cuales fueron notificadas a cada uno de los deudores de manera personal y en caso de no haber sido posible este tipo de notificación, por estado como lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dentro de la citada resolución se informa al deudor, sobre la existencia del título ejecutivo y que el paso siguiente es el inicio del cobro coactivo, y se invita al deudor a cancelar la obligación lo más pronto posible, lo que demuestra que la Administración ha asumido una actitud activa en el cobro del monto adeudado.

De otra parte, para no seguir con la ya larga cadena de interpretaciones de los aspectos sustanciales constitutivos de la contribución de valorización, pertinente es retomar la definición de los mismos en Sentencia C-525 de 2003 sobre este tema específico, que reiteró la Sentencia C-155 de la misma anualidad, que además recogió los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en Sentencia C-1371 de 2000:

"5. La consagración legal de la contribución de valorización contemplada por el Decreto 1604 de 1966.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-155 de 2003, consideró que la contribución de valorización contemplada por el Decreto Extraordinario 1604 de 1966 e incorporada a la legislación permanente por la Ley 48 de 1968, reúne los

requisitos exigidos por el artículo 338 de la Constitución Política. La Corporación explicó así cada uno de los elementos del tributo en cuestión:

"20. El Hecho generador. La Corte considera que uno de los ejemplos donde se refleja con mayor precisión el hecho generador de la obligación tributaria es, precisamente, el de la contribución de valorización. Una simple lectura del artículo 1º del Decreto 1604 de 1966 demuestra que la norma define claramente los supuestos fácticos a partir de los cuales es posible exigir el pago de la obligación: la construcción de obras de interés público que lleve a cabo la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios, a condición de que reporten un beneficio a la propiedad inmueble.

Ahora bien, los criterios a partir de los cuales debe entenderse que hay un beneficio no son un asunto relacionado con el hecho generador sino con otros elementos como la base gravable y especialmente con la tarifa, aspectos que serán tenidos en cuenta oportunamente.

21. Sujeto Activo. No parece existir controversia en que el Decreto señala el sujeto activo de la contribución de valorización, a tal punto que ni siguiera el demandante plantea cuestionamientos de fondo. El sujeto activo de la potestad tributaria (el Estado), está representado en el nivel nacional por el Congreso, en el nivel departamental por las asambleas y en el nivel distrital y municipal por los concejos. El sujeto activo de la obligación tributaria es la entidad que ejecuta las obras como acreedora concreta de los recursos invertidos.

Y finalmente, como beneficiaria también está la entidad encargada de realizar las obras, por ser ella quien tiene la posibilidad de disponer de los recursos obtenidos, como una forma de recuperación de los costos de inversión.

22. Sujeto pasivo. A juicio del demandante la norma no fija los sujetos pasivos de la obligación, "no sólo por atribuir a los predios la capacidad – que ni tienen ni pueden tener-de contraer obligaciones, (…) sino por el hecho de que no se sabe qué predios se benefician".

Sin embargo, la Sala considera que el planteamiento del actor es errado y corresponde a una indebida interpretación de la norma, pues aunque no es expreso en el señalamiento del sujeto pasivo, no cabe duda que están obligados

al gravamen los beneficiados en sus inmuebles con la ejecución de una obra de interés público, entendiendo por estos a los titulares del derecho real, toda vez que es en virtud de ello como se genera el cobro. Cosa distinta es que por la naturaleza real del gravamen el valor a pagar se determine en función del beneficio de un inmueble. Empero, vuelve a reiterarse, los criterios para determinar cuándo hay beneficio son aspectos relacionados especialmente con la tarifa.

23. Base gravable. En este punto la Corte considera que, de alguna manera, el artículo 338 de la Constitución orienta los parámetros a tener en cuenta para la determinación de la base gravable, en la medida en que faculta a las autoridades (administrativas) para fijar la tarifa a partir de los costos de los servicios y los beneficios reportados.

Ahora bien, en el caso de la contribución de valorización el artículo 9º del Decreto el señala los elementos referentes a la base gravable, a partir de los cuales puede cuantificarse el monto total sobre el que se causa el gravamen y que será objeto de distribución entre los contribuyentes. Dice al respecto la norma:

"Artículo 9º.-Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de los tributos.

De esta manera, la forma de determinar la base o monto total a distribuir entre los beneficiarios y futuros contribuyentes es la siguiente: (i) se toma el costo de la obra; (ii) se agrega un porcentaje prudencial para gastos en imprevistos; (iii) puede adicionarse hasta un treinta por ciento más para gastos de distribución y recaudo, denominados también gastos administrativos; (iv) en algunos eventos pueden excluirse partes o proporciones del costo total de la obra y, finalmente (v) si el valor de los costos supera el del beneficio obtenido, aquel se debe reducir hasta llegar al valor de este último.

Es claro que la norma fija como tope el beneficio obtenido sin definir qué entiende por beneficiario, pero ese no es asunto propio de la base gravable sino de la tarifa, como pasa a explicarse a continuación.

24. Tarifa. Constituye el elemento que más problemas plantea frente a la determinación del gravamen y, por lo mismo, sugiere serias dudas sobre la constitucionalidad de la autorización a las entidades administrativas para fijar gravamen.

Un primer aspecto a tener en cuenta es que el Decreto no hace referencia expresa a la tarifa. Pero de ello nada se puede concluir por cuanto, según fue explicado, el criterio definitorio de los elementos de un tributo no es el formal sino el material o sustancial. Y precisamente acudiendo a este último la Sala encuentra algunas particularidades que explican el silencio de legislador.

Pues bien, en el caso de la valorización no parece formalmente correcto hablar de "tarifa", por lo menos como se concibe tradicionalmente, ya que este gravamen ha sido diseñado como una forma de recuperación de los gastos en que incurre una entidad para la realización de una obra donde, a pesar de mediar un interés público, se termina por incrementar el patrimonio el patrimonio de terceros. En estricto sentido no es una tarifa porque el gravamen está diseñado para distribuir el valor agregado que una obra significa para ciertos inmuebles, es decir, como un coeficiente de reparto de costos y beneficios. El valor a pagar será en últimas el incremento patrimonial del bien en relación con la inversión de la entidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-525 de 2003. Mg. Ponente MANUEL JOSE CEPEDA).

De otra parte, para prosperar la demanda contra las normas del Acuerdo 190 de 2006 y 0241 de 2008, tendría que modificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado desde la sentencia de 27 de agosto de 1993 (Sección IV: Magistrada Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos; radicación 4510 y 4511; actores: Yolanda Azouth y Otros), transcrita y además modificar los Decretos nacionales 1604 de 1966 y del Decreto 868 de 1956 vigentes.

Los Acuerdos 178 de 2006, 190 de 2006 y 241 de 2008, mantienen la misma lógica jurídica económica de todos los Acuerdos anteriores que durante más de cuarenta años han regido el sistema de valorización. Que además ha sido avalada

por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y del mismo Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Se establece la valorización por el beneficio que las obras generan en la propiedad inmueble, y este beneficio es la razón para que exista un gravamen que el municipio como sujeto activo puede cobrar a los propietarios y/o poseedores que son los sujetos pasivos, con un límite global que es el costo de las obras más hasta un treinta por ciento de administración, pero siempre y cuando no supere el beneficio.

Adviértase además, que amen de los principios del sistema tributario, se observó impecablemente los principios de legalidad tributaria y certeza del tributo, respecto de las cuales la Corte Constitucional dijo en la Sentencia C-1153 de 2008:

"3.1 El principio de legalidad tributaria. Reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido al principio de la legalidad tributaria que preside la consagración de los tributos. En efecto, en no pocas ocasiones han sido demandadas normas que establecían gravámenes, acusadas por no determinar clara o directamente los elementos del tributo, y en todos esos casos la Corte ha recordado que el mencionado principio, derivado del de representación democrática, implica que sean los órganos de elección popular y no otras autoridades o personas-quienes directamente se ocupen de señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de la obligación tributaria, pues esta exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 superior, conforme al cual "la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos"; sólo excepcionalmente, respecto a la tarifa de las tasas y contribuciones, este mismo artículo de la Carta autoriza que se atribuya la competencia de fijarla a otras autoridades, siempre que en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo se fije el sistema y el método para determinarla.

"3.2 El principio de certeza del tributo. Ahora bien, del principio de legalidad tributaria se deriva el de certeza del tributo, que cobra importancia en el momento de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones que fijan los gravámenes. Conforme este principio no basta con que los órganos colegiados de representación popular sean los que directamente establezcan los elementos del tributo, sino que , además, es menester que al hacerlo determinen con suficiente

claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo, pues de lo contrario no sólo se genera inseguridad jurídica, sino que en el momento de la aplicación de las normas "se permiten los abusos impositivos de los gobernantes, o se fomenta la evasión", pues los contribuyentes obligados a pagar los impuestos no podrán hacerlo, lo que repercute gravemente en las finanzas públicas y, por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado.

Ahora bien, el artículo 64 del Decreto 01 de 1984 consagra:

"Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento.

La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados".

En esta forma, el Acto Administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir.

Para el caso de la contribución de valorización las normas han establecido el concepto de Beneficio General Relativo, y además para medir relación costo beneficio, en el llamado Método de Factores de Beneficio, los números índices, expresivos de la medición de la absorción del monto distribuible, por parte de inmuebles localizados en la zona de influencia, incluyendo distancia y frente de la obra, localización, acceso, rentabilidad o productividad y obviamente capacidad tributaria para la equitativa distribución de las contribuciones; ello explica también porque el área es sustancial en la individualización para cada predio de la obligación tributaria, propia de un gravamen que correlaciona costo y beneficio, como es la contribución de valorización.

De otra parte, el Título 3, Capítulo 1º del Acuerdo Municipal 0178 de 2006. DENUNCIA DE PREDIOS Y REGISTRO DE DIRECCIONES, el cual expresa la obligación de todos y cada uno de los propietarios y/o poseedores de predios en el área de influencia de del Plan de Obras, para que se efectúen ante el Ente Territorial la actualización de los datos maestros y/o principales de los predios de

su propiedad; lo cual permitiría a la Administración hacer los ajustes pertinentes con anterioridad al proceso de liquidación y asignación de la contribución de cada predio, es decir, antes del cuatro (4) de septiembre de 2009 fecha en que se profirió la Resolución No. 411.0.21.0169.

En consecuencia serán imputables al contribuyente, los errores que se tengan como origen la omisión de hacer la denuncia del predio, o las equivocaciones en que este incurra al hacerla.

En tal contexto, resta únicamente iterar que los actos administrativos por medio de la cual se da cumplimiento al artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006 para el cobro de la contribución de valorización por beneficio general para la construcción del plan de obras 556, se expidieron con plena observancia de los dispositivos constitucionales y legales, dentro del ámbito de competencia del Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali, ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006, en concordancia con lo establecido en el artículo 83 y 85 ídem, el Acuerdo 0241 de 2008 y 0261 de 2009 y demás normas complementarias, razón por la cual, los presupuestos en que se funda la pretendida nulidad, no están llamados a prosperar, imponiéndose consecuentemente mantener los actos acusados y por contera denegar las súplicas de la demanda.

Con fundamento en las anteriores apreciaciones de orden legal y procedimental es que se invocan las presentes excepciones:

Con fundamento en las anteriores apreciaciones de orden legal y procedimental es que se solicita de forma respetuosa al despacho que no acceda a las pretensiones de la demanda. Además, para acompañar los argumentos planteados en esta contestación, se solicita que se tengan en cuenta las siguientes.

PRUEBAS

De conformidad a lo establecido en el literal C, del artículo 184 de Ley 1437 de 2011 Solicito se tengan como pruebas los antecedentes administrativos, aportados con la presente.

ANEXOS

- Poder a mi conferido por la Doctora **MARIA DEL PILAR CANO STERLING**
- Decreto No**. 4112.010.20.0001** del 1 de enero de 2020, Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial y extrajudicial".
- Antecedentes administrativos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Constitución Política de Colombia
- Acuerdo No. 0178 de 2006.Ley 100 de 1993.
- Acuerdo No.0241 de 2008.
- Resolución No. 411.0.21.0169 del 4 de septiembre de 2009.
- Resolución No. 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009.
- Resolución No. 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2009.
- Resolución No. 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009.
- Resolución No. 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010.
- Resolución No. 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010.
- Estatuto Tributario Nacional
- Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de 2012.

NOTIFICACIONES

La parte demandada se puede notificar en el Centro Administrativo Municipal Centro de Atención al Contribuyente, Plataforma del CAM.**Buzón de correo electrónico**: **notificacionesjudiciales@cali.gov.co**

El suscrito recibirá las notificaciones en la secretaria del Juzgado, en la Torre de la Alcaldía piso 6° de Santiago de Cali y en el correo electrónico asuntosjuridicos@2005@hotmail.com

La parte demandada se puede notificar en el correo electrónico

alicia2002@yahoo, ello de conformidad a lo establecido en la demanda.

Solicito señor juez, me sea reconocida personería jurídica para actuar dentro del proceso.

Del señor Juez.



JUAN CARLOS HURTADO HOYOS
C.C. No. 94.448.498 de Cali (V)
T.P. No. 87.479 del C.S. de la Judicatura.
Buzón de correo electrónico: asuntosjuridicos2005@hotmail.com
No. Celular: 300 6097984

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

JUEZ CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Correo electrónico: adm14cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: PODER ESPECIAL
Radicación: 76001-33-33-014-2022-00097-00
Demandante: ALICIA OSORIO GONZALEZ
Demandado: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

MARÍA DEL PILAR CANO STERLING, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025 expedida en Cali (V), en mi condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali[1], nombrada mediante decreto No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre (V), en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020[2] a conferir y/o revocar poderes especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, lo cual acredito con copia del precitado decreto y de los documentos que certifican tal condición, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor JUAN CARLOS HURTADO HOYOS identificado con la cédula de ciudadanía número 94.448.498 abogado titulado con Tarjeta Profesional número 87.479 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, actúe dentro del proceso referido, con la facultad expresa de ejercer todas las acciones en defensa de los intereses del ente territorial.

El apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, además de las facultades expresamente consagradas en el artículo 77 de la ley 1564 de 2012, queda facultado para contestar la demanda y conciliar conforme a la autorización que otorgue el comité de conciliación de la administración central del Distrito Especial de Santiago de Cali, cuya determinación deberá constar en el acta pertinente y realizar todas las demás acciones inherentes al presente mandato

Para que se dé estricto cumplimiento al artículo 196[3] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifiesto que como parte, la notificación de las providencias que se profieran en el desarrollo del proceso, las recibiré en el correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co, buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales para el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali a que se refiere el artículo 197[4] de ese código.

1 Ley 1933 de 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE CATEGORIZA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI COMO DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y SERVICIOS"

2 Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

3 ARTÍCULO 196. NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

4 ARTÍCULO 197. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se atenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

El Doctor JUAN CARLOS HURTADO HOYOS con el fin de que ejerza eficazmente el presente mandato como representante judicial, recibirá las notificaciones judiciales en el correo institucional notificacionesjudiciales@cali.gov.co, y en el personal asuntosjuridicos2005@hotmail.com el cual se encuentra inscrito en la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Sírvase señor Juez aceptar este mandato especial y reconocerle personería suficiente al Doctor JUAN CARLOS HURTADO HOYOS en los términos del presente poder.

ANEXOS

1. Copia de la Cedula de ciudadanía del señor Jorge Iván Ospina.
2. Escritura Pública No. 01 de 2020 de la Notaria Tercera del Círculo de Cali- que protocoliza el acta de posesión del Alcalde de Santiago de Cali.
3. Copia del decreto de nombramiento como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública , No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020.
4. Copia del acta de posesión como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública No. 0007 del 1 de enero de 2020
5. Copia del Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020"*Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de Representación Judicial, Administrativa y Extrajudicial y se dictan otras disposiciones"*

Cordialmente

MARIA DEL PILAR CANO STERLING
Directora del Departamento Administrativo
Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía
Buzón de correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Acepto y solicito se me reconozca personería,

JUAN CARLOS HURTADO HOYOS
C.C. No. 94.448.498 de Cali (V)
T.P. No. 87.479 del C.S. de la Judicatura.
Buzón de correo electrónico: asuntosjuridicos2005@hotmail.com
No. Celular: 300 6097984

República de Colombia

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE CALI

ESCRITURA PUBLICA No. UNO (01)

DE FECHA: ENERO PRIMERO (01) DE DOS MIL VEINTE (2.020).

CLASE DE ACTO: PROTOCOLIZACION ACTA DE POSESIÓN ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI.

OTORGANTE: JORGE IVAN OSPINA GOMEZ con C.C No 6.342.414

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA AL PRIMER (01) DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), AL DESPACHO DEL DOCTOR JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO, NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE CALI, -

Compareció el Doctor **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**, mayor de edad, vecino de Cali, Identificado) con la cedula de ciudadanía **No 6.342.414**, hábil para contratar y obligarse, quien en este acto obra en calidad de Alcalde de Santiago de Cali, manifiesta:

PRIMERO. Que constante de dos (02) folios útiles, presenta para su protocolización y guarda en esta Notaria el **ACTA DE POSESION ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA ELECTO PARA EL PERIODO 2020-2023** de fecha **01 de enero de 2020.**

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: En consecuencia. Yo el Notario, lo incorporo al protocolo del presente año y bajo el número de esta escritura, a fin de que el interesado o interesados pueda(n) solicitar las copias que necesitare y el acto surta los demás efectos legales.

Leída la presente escritura por los otorgantes, la aceptan, la aprueban y la firman ante mi el Notario, que de lo expuesto doy fé, advertido de las formalidades legales. Decreto 960 de 1970. "**ARTICULO 9º. <RESPONSABILIDAD EN LA FORMA>**. Los Notarios responden de la regularidad formal de los instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo. Derechos Notariales $ 59.400.oo IVA $ 11.980.oo Retención $0.oo. Recaudo Superintendencia y Fondo Notarial $12.400. Resolución 0691 de enero 24 de 2019, modificada por la Resolución 1002 de Enero 31 de 2019 Se deja constancia que la

Papel notarial para uso exclusivo de la escritura pública - No tiene costo para el usuario

presente escritura se extiende en las hojas de papel notarial distinguidas con los siguientes números: Aa060907650. ----------
NOTA: SE PROTOCOLIZA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA POSESION DE ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI (11 FOLIOS) ----------
EXHIBIDO: "EL" VALE.
El otorgante.

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
C.C No. 6342411.
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DIRECCION. AV. LLANO # 8-14
TELEFONO. 3176480287
OCUPACION: ALCALDE CALI.

JORGE ENRIQUE CALLEDO ZAMORANO
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE CALI

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE POSESION

ENERO PRIMERO (01) DE DOS MIL VEINTE (2020)

NOMBRE DEL POSESIONADO: DR. JORGE IVAN OSPINA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.342.414 expedida en La Cumbre - Valle.

CARGO: ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA ELECTO PARA EL PERIODO 2020-2023

Siendo las cuatro (4:00) PM del dia primero (01) del mes de Enero del año dos mil veinte (2020), en las Instalaciones del Coliseo de Hockey "Miguel Calero" y ante mi, el Suscrito Notario Tercero del Circulo de Cali, JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, se hace presente el Doctor JORGE IVAN OSPINA GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.342.414 expedida en La Cumbre - Valle, con el fin de tomar posesión del cargo de Alcalde de Santiago de Cali, durante cuatro (04) años contados a partir del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023; Cargo para el cual fue nombrado mediante Elección Popular, siguiendo los lineamientos constitucionales y legales. Para este efecto presentó los siguientes documentos:

- Certificado de Antecedentes, certificado ordinario No 138521282 de la Procuraduria General de la Nación, expedido el 19 de diciembre de 2019.

- Certificado de Antecedentes con Radicado No 20191000267191 de la Personeria de Santiago de Cali, expedida el 12 de diciembre de 2019.

- Certificado de Responsebilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republi expedida el 16 de diciembre de 2019.

- Declaración de Renta del año 2018.

- Certificado de Afiliación a la EPS SANITAS.

- Declaración Juramentada de no demanda por Alimentos

República de Colombia

- Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia, expedido el 19 de diciembre de 2019.

- Copia de la Cedula de Ciudadanía.

- Copia de Diploma de Doctor en Medicina del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana – Cuba.

- Copia de Diploma de Especialidad en gestión de la Salud de la Universidad Icesi de Cali.

- Copia de Credencial de Alcalde por el Municipio de Cali – Valle de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En constancia se firma:

EL POSESIONADO:

DR. JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
CC. No 6.342.414 expedida en La Cumbre - Valle

EL NOTARIO

JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE CALI

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS:

Que, JORGE IVAN OSPINA GOMEZ con C.C. 6342414 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de CALI - VALLE, para el periodo de 2020 al 2023, por el PARTIDO COALICIÓN PURO CORAZÓN POR CALI

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en CALI (VALLE), el martes 12 de noviembre del 2019.

DONALD HERNAN GIRALDO EPULVEDA

EMILSEN JUIETA QUINTERO TAMAL

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

DIEGO ALBERTO SEPULVEDA ARGAEZ

SECRETARIO(A) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

NOTARIA 3 DEL CIRCULO DE CALI
LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA (E)

Ge342482350

República de Colombia

Es fiel y primera copia autentica
de la escritura publica Numero 01
de fecha 01 de ENE de 2020
la que expido y autorizo en 08
hojas utiles con destino a:
JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

Hoy 03 ENE 2020

NOTARIA 3
DEL CIRCULO
DE CALI

LILIANA RAMIREZ
NARANJO
NOTARIA (E)

Ge342482350


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.342.414
OSPINA GOMEZ
APELLIDOS
JORGE IVAN
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1965
CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-DIC-1990 LA CUMBRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-3100150-00421857-M-0006342414-20130116
0032102272A 1
2812190022

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SIGSTRA, SGC y MECI)

ACTA DE POSESIÓN

Consecutivo **0007**

El (la) Señor (a) **MARIA DEL PILAR CANO STERLING**

Se presentó en DESPACHO DEL ALCALDE O DEL SUBSECTOR DEL DPTO ADMINISTRATIVO DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Hoy 1 del mes ENERO del año 2020

con el fin de tomar posesión en el siguiente empleo

Denominación del Empleo **DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION)**

Organismo **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA**

Código 055 Grado 07 Posición 20001806 Asignación Mensual $ 12.881.260

El POSESIONADO presento

Documento de identidad C.C. [X] C.E. [ ] Pasaporte [ ] Número 31.869.025 de

Libreta Militar No Tarjeta Profesional No

El POSESIONADO fue nombrado por: Decreto [X] Resolución [ ] Acuerdo [ ] Número 4112.010.20.0001

del día 1 del mes ENERO del año 2020 Emanado ALCALDIA

Se adhieren y se anulan las estampillas relacionadas a continuación así

Asignación Básica Mensual	Código	Valor
Partida Descanso Dominical		$ 428800
Bs Pro Salud (1.5%)		$ 193200
Bs Pro Empleados Labor (2%)		$ 257600

Estampillas Acta de Posesión	Código	Valor
Bs Pro Desarrollo Urbano		$ 1400
Bs Pro Salud Dptal		$ 3300
Bs Pro Hospitales Univ		$ 3300
Bs Pro Deporte		$ 1400

Otros	Valor
Cin Pro Libertad	$
Cin Pro Hospitales	$

OBSERVACIONES

El posesionado manifestó bajo gravedad de juramento respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de desempeñar los deberes que le incumben de acuerdo con el Decreto 648 de 2017 y de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas de acuerdo a la normalidad vigente en materia disciplinaria y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. Además declara no tener conocimiento de procesos pendientes de cargos disciplinarios donde se cumplirá con sus obligaciones de ley, tal como aparece en el último párrafo del artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 648 de 2017.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 1 días del mes de ENERO del año 2020

Firma del Posesionado(a)
Nombre MARIA DEL PILAR CANO STERLING

Firma Alcalde
Nombre JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Cargo Alcalde de Santiago de Cali

Director
Nombre María Abigail Perdomo Rojas
Cargo Apoyo Administrativo

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 315 de la Carta Política, en concordancia con el Artículo 91 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública No. 648 de abril 19 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece las atribuciones del Alcalde, a saber:

"(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente (...)"

Que en armonía con lo anterior, la Ley 136 de junio 2 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.", señala las funciones del Alcalde Municipal en el Artículo 91, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de Julio 6 del 2012, indicando que:

"(...) ARTÍCULO 29. Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 el cual quedará así:"

"Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo."

"Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:"

"d) En relación con la Administración Municipal:"

"1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. (...)"

Que de conformidad a lo dispuesto en la Ley 909 de septiembre 23 del 2004, expresa en el:

"(...) Artículo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

"Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley. (...)"

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112010.20.0001 DE 2020

(Enero 1.)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

Que mediante estudio técnico de verificación de cumplimiento de requisitos, expedido por Carlos Alberto Burgos Ramírez, quien en el momento de la verificación de cumplimiento de requisitos, se desempeñaba en el empleo denominado Subdirector de Departamento Administrativo, código 076, grado 05, como Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano, adscrito al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, emitió concepto de revisión de la hoja de vida de las siguientes personas:

#	Nombre y Apellido	Identificación	Organismo	Nombre del empleo	Código	Grado	No. de cumplimiento	Fecha	Cumple
1	JOSE HARBEY HURTADO GUERRERO	16.639.743	Despacho Alcalde	Asesor	105	2	387-19	diciembre 30 de 2019	SI
2	NELLY MARCELA PATIÑO CASTAÑO	31.573.021	Despacho Alcalde	Asesor	105	2	375-19	diciembre 30 de 2019	SI
3	NHORA YANETH MONDRAGON ORTIZ	66.971.668	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	373-19	diciembre 27 de 2019	SI
4	CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO	29.116.985	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	369-19	diciembre 27 de 2019	SI
5	RAFAEL FERNANDO MUÑOZ CERON	16.929.798	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	76	5	389-19	diciembre 30 de 2019	SI
6	CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTEN	10.535.822	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	383-19	diciembre 30 de 2019	SI
7	MARIA DEL PILAR CANO STERLING	31.889.025	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	393-19	diciembre 26 de 2019	SI
8	FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO	94.326.150	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	380-19	diciembre 30 de 2019	SI

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Nombre y Apellido	Identificación	Organismo	Nombre del empleo	Código	Grado	No. de cumplimiento	Fecha	Cumple
9	JESSICA PEREA HURTADO	38.569.570	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - TESORERÍA	76	5	391-19	diciembre 30 de 2019	SI
10	GUIDO FERNANDO RIOS RAMIREZ	94.430.325	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	55	7	392-19	diciembre 30 de 2019	SI
11	TERESA BEATRIZ CANCELADO CARRETERO	52.105.084	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - INNOVACIÓN DIGITAL	76	5	393-19	diciembre 30 de 2019	SI
12	LUIS ALFREDO VALENZUELA DUQUE	16.637.444	Despacho Alcalde	Asesor	105	2	362-19	diciembre 26 de 2019	SI
13	NANCY FARIDE ARIAS CASTILLO	31.925.537	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - EQUIDAD DE GÉNERO	45	5	384-19	diciembre 30 de 2019	SI
14	FABIOLA PERDOMO ESTRADA	31.897.090	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	402-19	diciembre 30 de 2019	SI
15	JOSE DARWIN LENIS MEJIA	16.799.565	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	396-19	diciembre 30 de 2019	SI
16	TATIANA ZAMBRANO SANCHEZ	1.107.047.409	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - CADENA DE VALORES	45	5	390-19	diciembre 30 de 2019	SI
17	ALEXANDRA MONEDERO RIVERA	1.114.450.640	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - PLANEACIÓN SECTORIAL	45	5	378-19	diciembre 30 de 2019	SI
18	MONICA ANDREA JIMENEZ VALENCIA	1.144.066.708	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - MANEJO DE DESASTRES	45	5	388-19	diciembre 30 de 2019	SI
19	JESUS DARIO GONZALEZ BOLAÑOS	16.758.928	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	359-19	diciembre 26 de 2019	SI
20	LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR	31.992.308	SECRETARÍA DE GOBIERNO	JEFE DE OFICINA - COMUNICACIÓN	6	6	371-19	diciembre 27 de 2019	SI

302

9

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Nombre y Apellido	Identificación	Organismo	Nombre del empleo	Código	Grado	No. de cumplimiento	Fecha	Cumple
21	JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ	16.929.500	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	376-19	diciembre 30 de 2019	SI
22	DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA	11 797 854	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	368-19	diciembre 27 de 2019	SI
23	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	67.021.463	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA	45	6	401-19	diciembre 30 de 2019	SI
24	NATALI GONZALEZ ARCE	38.666.635	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - DERECHOS HUMANOS	45	5	372-19	diciembre 30 de 2019	SI
25	MIYERLANDI TORRES AGREDO	38.877 608	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	361-19	diciembre 26 de 2019	SI
26	GUILLERMO LONDOÑO RICAUTE	1.143.828 334	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - POLÍTICA DE SEGURIDAD	45	5	381-19	diciembre 30 de 2019	SI
27	CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ	16.776.691	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	397-19	diciembre 30 de 2019	SI
28	JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ	1.234 189 398	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	45	5	382-19	diciembre 30 de 2019	SI
29	MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS	29.104 402	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	358-19	diciembre 26 de 2019	SI
30	JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR	1.130.622.217	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - GESTIÓN DEL SUELO	45	5	377-19	diciembre 30 de 2019	SI
31	CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE	14.838.634	SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	SECRETARIO DE DESPACHO	20	7	360-19	diciembre 26 de 2019	SI
32	JOAN ANDRES OSORIO HERRERA	18.471 456	SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - FOMENTO	45	5	367-19	diciembre 27 de 2019	SI
33	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO	18 757 339	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECTOR TÉCNICO	9	5	364-19	diciembre 26 de 2019	SI

401

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Nombre y Apellido	Identificación	Organismo	Nombre del empleo	Código	Grado	No. de cumplimiento	Fecha	Cumple
34	ERIKA SULEY ZAPATA LERMA	66.663.666	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - IMPUESTOS	76	5	379-19	diciembre 30 de 2019	SI
35	JOHANA LETICIA LARA SATIZABAL	31.305.832	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - POBLACIONES Y ETNIAS	45	5	386-19	diciembre 30 de 2019	SI
36	CAROLINA GONZALEZ PEREZ	31.642.083	SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA	SUBSECRETARIO DE DESPACHO - PROTECCIÓN DE LA SALUD	46	5	396-19	diciembre 30 de 2019	SI
37	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO	29.435.276	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANZAS	76	5	400-19	diciembre 30 de 2019	SI

Que por lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRAR respectivamente en los empleos de Libre Nombramientos y Remoción a las personas que se relacionan así:

#	Candidato	Cédula de ciudadanía	Organismo	Código	Grado	ASM Vigencia 2020	Remplaza a	Posición	Unidad Organizativa
1	JOSÉ HARBEY HURTADO GUERRERO	16.839.743	Despacho Alcalde	105	2	$10.966.254	ARANGO SANTA JAIRO ALBERTO	20000032	10000515
2	NELLY MARCELA PATIÑO CASTAÑO	31.573.021	Despacho Alcalde	105	2	$10.966.254	ZAMORANO HINCAPIE MARIA XIMENA	20000033	10000515
3	NEHORA YANETH MONDRAGON ORTIZ	66.971.658	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	55	7	$12.881.260	VASQUEZ TRUJILLO LUZ ADRIANA	20001807	10000454

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Candidato	Cédula de ciudadanía	Organismo	Código	Grado	ABM Vigencia 2020	Remplaza a	Posición	Unidad Organizativa
4	CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO	29.116.985	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	65	7	$12.881.260	BUITRAGO MADRID HUGO JAVIER	20001805	10000452
5	RAFAEL FERNANDO MUÑOZ CERON	16'929.798	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	76	5	$10.326.244	CARLOS ALBERTO BURGOS RAMIREZ	20001827	10000472
6	CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTEN	10.535.822	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	36	7	$12.881.260	BUITRAGO RESTREPO CLAUDIA MARIA	20000669	10000057
7	MARIA DEL PILAR CANO STERLING	31.869.025	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA	55	7	$12.881.260	YABER ENCISO NAYIB	20001806	10000052
8	FULVIO LEONARDO SOTO	94.326.150	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	55	7	$12.881.260	HERNANDEZ GUZMAN PATRICIA	20002405	10000056
9	JESSICA PEREA HURTADO	38.569.570	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	76	5	$10.326.244	ESCOBAR BURBANO LETTY MARGARETH	20002403	10000064
10	GUIDO FERNANDO RIOS RAMIEZ	94.439.325	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	55	7	$12.881.260	URBANO GARCÍA GILBERT STEVEN	20001809	10000453
11	TERESA BEATRIZ CANCELADO CARRETERO	52.105.064	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	76	5	$10.326.244	OMES LOPEZ LUIS HERNANDO	20001831	10000476
12	LUIS ALFREDO VALENZUELA DUQUE	16.637.444	Despacho Alcalde	105	2	$10.996.254	HUNG DUQUE SANTIAGO	20000026	10000515
13	NANCY FARIDE ARIAS CASTILLO	31.925.537	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	45	5	$10.326.244	CAICEDO SINISTERRA JOHANA	20001838	10000492
14	FABIOLA PERDOMO ESTRADA	31.987.890	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	20	7	$12.881.260	CAMPO ANGEL BETSY CAROLINA	20002571	10000079
15	JOSE DARWIN LENIS MEJIA	16.799.565	SECRETARÍA DE CULTURA	20	7	$12.881.260	BETANCOURT LORZA LUZ ADRIANA	20000752	10000074

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Candidato	Cédula de ciudadanía	Organismo	Código	Grado	ABM vigencia 2020	Remplaza a	Posición	Unidad Organizativa
16	TATIANA ZAMBRANO SANCHEZ	1.107 047 409	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	45	5	$10.326 244	GONZALEZ MONDRAGON JUAN SEBASTIAN	20001849	10000483
17	ALEXANDRA MONEDERO RIVERA	1.114.460 640	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	45	5	$10.326 244	CAMPO RODRIGUEZ JAIME	20000936	10000071
18	MONICA ANDREA JIMENEZ VALENCIA	1 144.066.709	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	45	6	$10.326 244	RAMOS TRUJILLO GLORIA	20001835	10000489
19	JESUS DARIO GONZALEZ BOLAÑOS	16.758.928	SECRETARÍA DE GOBIERNO	20	7	$12 881.260	RODAS GAITER ALEJANDRA	20000796	10000451
20	LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR	31.992.308	SECRETARÍA DE GOBIERNO	6	6	$11 881.679	GOMEZ CONCHA RODOLFO	20001816	10000469
21	JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ	16.929.500	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20	7	$12.881.260	CAMACHO FERNEY	20001014	10000078
22	DANIS ANTONIO RENTERIA CHALA	11.797.854	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	20	7	$12 881.260	GUTIERREZ CELY ROCIO	20001811	10000456
23	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	67 021.463	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	45	5	$10.326 244	VIVEROS BERMUDEZ VICTOR HUGO	20001833	10000481
24	NATALI GONZALEZ ARCE	38 666.635	SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	45	5	$10 326.244	BOTERO ESCOBAR FELIPE	20001834	10000482
25	MIYERLANDI TORRES AGREDO	38.877 608	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	20	7	$12 881.260	SINISTERRA CIFUENTES NELSON	20003021	10000072
26	GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE	1.143.828.334	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	45	5	$10 326.244	URIBE MURILLO PABLO ANDRES	20001832	10000480
27	CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ	16.776.693	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	20	7	$12.881.260	VILLAMIZAR PACHON ANDRES	20002717	10000077
28	JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ	1 234.169.398	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	45	5	$10.326.244	CAZA DORADO DARIO FERNANDO	20002718	10000488
29	MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS	29.104.402	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	20	7	$12.881.260	REYES MOSQUERA JESUS ALBERTO	20000635	10000073
30	JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR	1.130.622 217	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	45	5	$10 326 244	CUBILLOS BORRERO MARLON ANDRES	20000637	10000502

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 411.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

#	Candidato	Cédula de ciudadanía	Organismo	Código	Grado	ABM Vigencia 2020	Remplaza a	Posición	Unidad Organizativa
31	CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE	14.638.634	SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	20	7	$12.881.260	SANDOVAL BAFFONI FRANCISCO ALBERTO	20000841	10000075
32	JOAN ANDRES OSORIO HERRERA	18.471.456	SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	45	5	$10.326.244	MUÑOZ ABADIA RUBEN DARIO	20001849	10000508
33	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO	16.757.339.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	5	$10.326.244	PEREIRA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	20001819	10000455
34	ERIKA SULEY ZAPATA LERMA	66.663.686	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	76	5	$10.326.244	LOAIZA GIRALDO PAULA ANDREA	20002407	10000067
35	JOHANA LETICIA LARA SATIZABAL	31.305.632	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	45	5	$10.326.244	COLLAZOS AEDO ANA CECILIA	20001836	10000490
36	CAROLINA GONZALEZ PEREZ	31.642.083	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	45	5	$10.326.244	COLONIA GARCIA FABIAN DARIO	20001842	10000514
37	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO	29.435.276	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	76	5	$10.326.244	QUIÑONEZ BEDOYA EFRAIN	20002406	10000083

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo a las personas relacionadas en el cuadro anterior.

ARTÍCULO TERCERO: El Presente Decreto surte efectos fiscales a partir de la posesión.

PARÁGRAFO: El Artículo Quinto, Parágrafo Segundo del Decreto N°411.0.20.1171 del 24 de Diciembre de 2015 "POR EL CUAL SE INTEGRA AL SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL (SGAFT) LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI", se integró el Módulo de Administración de Talento Humano en el Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGAFT), reglamentado mediante el Decreto N° 411.20.0335B de junio 30 del 2006, así las cosas, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional por la implementación del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial SGAFT, referente a los módulos HCM y SAP, se requiere en el Proceso de Gestión y Desarrollo Humano la organización en las posesiones para ingreso, se deben realizar los primeros diez (10) días calendario del mes. No obstante al momento de su posesión deberá tener registrada, actualizada y

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0001 DE 2020

(Enero 1)

"POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL"

aprobada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP-, la información y soportes de Hoja de Vida e ingresada la Declaración de Bienes y Rentas.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional: Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano: Proceso de Liquidaciones Laborales - Subproceso de Activos; Proceso de Gestión de Seguridad Social Integral, Proceso de Gestión y Desarrollo Humano: Subprocesos de Administración de Planta, Administración de Historias Laborales, Selección y Vinculación (Posesiones), Administración de los Sistemas de Evaluación del Desempeño y Capacitación y Estímulos, para lo de su competencia.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 1 ( ) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020)

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

Publicado en el Boletín Oficial No. 001 Fecha: Enero 2-2020

Elaboró: Proceso de Gestión y Desarrollo Humano
Revisó: Angela María Herrera Cetero – Profesional Especializado (E)
Nina Córdoba Horta – Profesional Universitario

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.869.025

APELLIDOS STERLING

NOMBRES MARIA DEL PILAR





FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1960

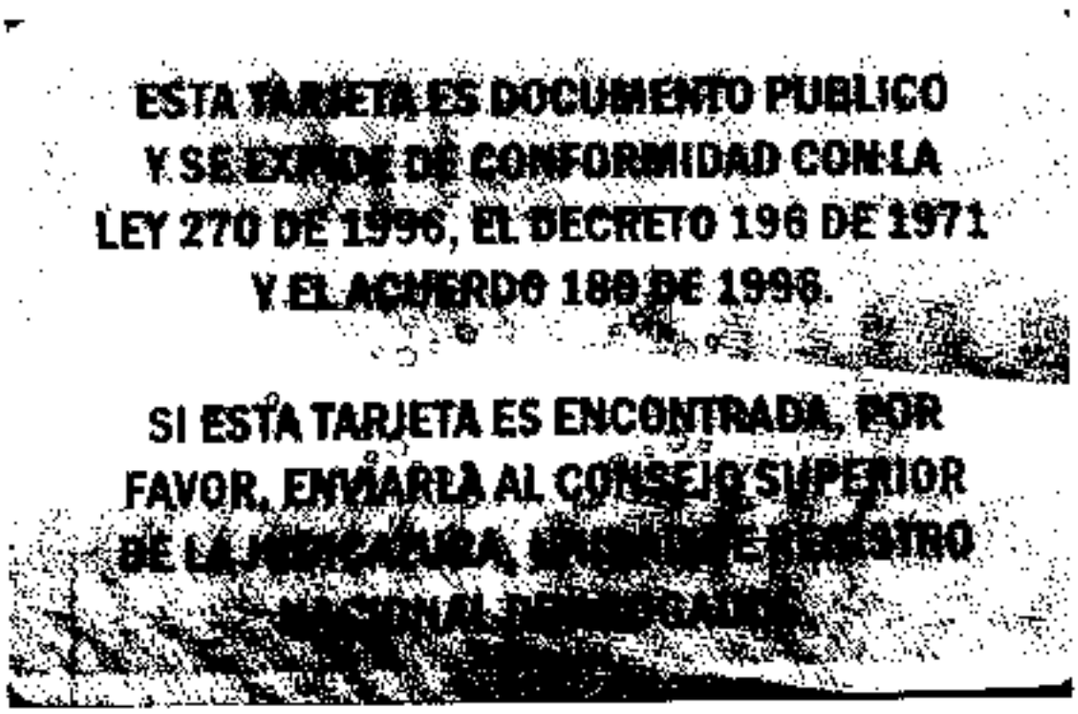
DAGUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

12-NOV-1979 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
NOMBRES
MARIA DEL PILAR
APELLIDOS
CANO STERLING
FECHA DE GRADO
CONSEJO SECCIONAL
VALLE
TARJETA N°
34763


ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.
SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20 0024) DE 2020

(Enero 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA DELEGACION EN MATERIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los Artículos 209, 211 Y 315 de la Carta Política, los artículos 9,10,12 de la Ley 489 de 1998, el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 91 de la ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política el Alcalde debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

Que de acuerdo con el mismo artículo, el Alcalde debe dirigir la acción administrativa de Santiago de Cali, asegurar el cumplimiento de las funciones y representarlo judicial y extrajudicialmente de conformidad con las disposiciones pertinentes.

Que conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Que el artículo 211 de la Constitución Política prescribe que "(...) La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente (...).

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9º consagra que "Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias (...).

Que el parágrafo del artículo 2º de la Ley 489 de 1998, establece que las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, entre otros, se aplicaran, en lo pertinente, a las entidades territoriales.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0024) DE 2020

(Enero 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA DELEGACION EN MATERIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Que el articulo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas en los procesos contencioso adminrstrativos por el respectivo alcalde.

Que por su parte, el decreto extraordinario No. 4110.0.20.0516 de 2.016, determina la estructura de la Administración Central y las funciones de las Dependencias del Municipio de Santiago de Cali

Que en el articulo 5 ibidem consagra que la acción administrativa a cargo de la administración central de Santiago de Cali se desarrollara a través de la desconcentración administrativa. la delegación, la asignación y distribución de funciones entre los organismos y entidades creados por el Concejo Municipal o autorizados por este

Que por su parte el articulo 7 ibidem establece que "(.) el Alcalde podrá delegar en los Secretarios de Despacho y Directores de Departamento Administrativo las diferentes funciones constitucionales y legales a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal"

Que conforme lo delermina el artículo 52 del decreto extraordinario No. 411.0.0.20.0516 de 2016, uno de los propósitos del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica es defender judicial y extrajudicialmente al ente territorial, en el marco de la juridicidad, la prevención del daño antijuridico y la promoción y defensa de los derechos de las personas.

Que una de las funciones del Director del Departamento Administrativo de Gestión Juridica Publica es actuar como abogado general de Santiago de Cali en defensa . de los intereses litigiosos del mismo, conforme al marco de delegaciones o poderes especiales, que otorgue el Alcalde.

Que se hace necesario dictar disposiciones relacionadas con el ejercicio de dicha función de representación judicial y extrajudicial, por parte del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Articulo Primero DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN LO JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL. Delegar en el Director del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica, la representación en todos los asuntos judiciales, administrativos y extrajudiciales de Santiago de Cali, para obrar como demandante, demandado o interviniente en todos aquellos procesos, diligencias y/o

actuaciones judiciales, administrativas y extrajudiciales, que involucren a la Entidad Territorial que se representa.

Artículo Segundo.- **Facultades.** La función de representación en lo judicial, administrativa y extrajudicial de Santiago de Cali, comprende las siguientes facultades:

2.1. Actuar ante las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, organismos de control de cualquier orden y particulares que cumplen funciones públicas, ante los cuales se requiera la representación de SANTIAGO DE CALI.

2.2 Actuar en las audiencias de conciliación prejudiciales y judiciales, con las facultades expresas de recibir, desistir, transigir y conciliar de acuerdo con la posición institucional que fije el Comité de Conciliación de la Entidad territorial.

2.3 Intervenir ante las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial y ante particulares que cumplen funciones públicas, en las actuaciones administrativas, interponer los recursos y solicitar Revocatoria Directa cuando a ello hubiere lugar.

2.4 Actuar como apoderada(o) en los procesos ante la administración de justicia y tribunales de arbitramento, en los que la Entidad Territorial ostente la calidad de demandante o demandado, o como tercero, ejerciendo las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso, o norma que la modifique o sustituya, con las facultades expresas de recibir, desistir, transigir y conciliar de acuerdo con la posición institucional que fije el Comité de Conciliación de la Entidad territorial.

2.5 Constituir apoderados especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, y/o revocarlos.

2.6 Atender, en nombre de Santiago de Cali, los requerimientos judiciales o de autoridad administrativa, relacionados con los asuntos derivados de la función delegada correlativos con la representación legal en lo judicial administrativa y extrajudicial.

2.7 Interponer las acciones judiciales que fueren procedentes para la defensa de los intereses de Santiago de Cali, previa evaluación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, elaboración de la ficha técnica correspondiente por el abogado a cargo del proceso, cuando se trate de acciones de repetición.

2.8 Atender las solicitudes de informes juramentados conforme al artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 195 del Código General del Proceso y demás normas procesales concordantes y aplicables.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0024) DE 2020

(Enero 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA DELEGACION EN MATERIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

2.9 Ordenar dar cumplimiento a las providencias judiciales y decisiones administrativas y extrajudiciales, en las cuales hubiere resultado condenado u obligado directamente el ente territorial Santiago de Cali, sin perjuicio de lo consagrado en el numeral 12 del articulo 67 del Decreto Extraordinario No. 4110.0.20.0516 de 2.016.

Parágrafo. El delegatario ejercerá estas facultades en el marco de la juridicidad, la prevención del daño antijuridico y la promoción y defensa de los derechos de las personas y procurando la salvaguarda y defensa de los intereses de Santiago de Cali.

Artículo Tercero Representación judicial de Santiago de Cali en audiencias de conciliación, judiciales o extrajudiciales o de pacto de cumplimiento. El Alcalde mediante acto administrativo designara los servidores públicos que tendrán la facultad de comparecer en su nombre y representación, ante los Despachos Judiciales o autoridades administrativas, a todas aquellas audiencias de conciliación, judiciales o extrajudiciales, o de pacto de cumplimiento, cuando se requiera, además del respectivo apoderado, la presencia expresa del Alcalde como representante legal de Santiago de Cali.

Parágrafo. El delegatario, previa autorizeción del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Santiago de Cali, tendrá la facultad de conciliar el objeto del proceso y deberá dar estricto cumplimiento a las decisiones del mismo.

Articulo Cuarto. Representación en lo judicial y extrajudicial de los entes de control. En virtud del articulo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de su autonomía administrativa y presupuestal, la Contraloria y la Personeria Municipales, tienen la facultad de representarse legalmente, en lo judicial y extrajudicial, con el propósito de defender directa y exclusivamente los intereses del respectivo órgano, en los procesos judiciales, extrajudiciales y trámites administrativos que se deriven de los actos, hechos, omisiones u operaciones que los mismos expidan, realicen o en que incurran o participen, o que se refieran a los asuntos inherentes a cada uno de ellos, conforme a su objeto y funciones.

Parágrafo Primero. Corresponderá exclusivamente a los Comités de Conciliación de los citados órganos de control adoptar la decisión sobre la procedencia de la respectiva acción de repetición, cuando vean afectado su patrimonio, en el rubro de pago de sentencias, como consecuencia del cumplimiento de las providencias judiciales y decisiones extrajudiciales.

Parágrafo Segundo. En el evento que los despachos judiciales dispongan la vinculación de Santiago de Cali, en los procesos que se adelanten contra los órganos de control de Santiago de Cali, el Director(a) del Departamento Administrativo de la Gestión Juridica Publica, concurrirá para la representación del mismo en los

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0024) DE 2020
(Enero 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA DELEGACION EN MATERIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

términos de la presente delegación.

Articulo Quinto. El presente Decreto rige a partir de su expedición y se pública en el boletín Oficial de Santiago de Cali

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 10 días el mes de Enero de 2020.

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

Publicado
Boletin No. 006. Enero 10-2020

Revisó: María del Pilar Cano Stelling - Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

12

43

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

La Subdirectora de Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los Decretos 411.0.20.062 de Febrero 23 de 2007, Decreto 411.0.020.0982 de Diciembre 31 de 2007, Decreto 411.0.20.0139 de 2012 en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional, Artículo 86° del Acuerdo No. 0178 de 2006 (estatuto de valorización Municipal), Decreto 411.20.0012 de enero 2 de 2008, Decreto 411.0.20.0068 de enero 30 de 2008, Decreto 411.0.20.0470 de julio 2 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que la Administración Municipal expidió la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 04 de 2009 "por medio de la cual se fija el presupuesto y se aprueba la distribución y asignación individual de la contribución de valorización por beneficio general para la contribución de un plan de obras.

Que dicha resolución ha sido aclarada y modificada mediante los siguientes actos administrativos:

ACTO ADMINISTRATIVO	MODIFICACION
Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009	Corrige yerro Res 411.0.21.0169 en el valor del presupuesto del plan de obras
Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 06 de 2009	Modifico los arts. 3 y 4 de la 411.0.21.0169, en el sentido de modificar el plazo inicial de 60 a 90 cuotas mensuales y amplio el % de descuento por pago de contado hasta el 31 de Diciembre de 2009.
Resolución N° 411.0.21.0329 de Diciembre 30 de 2009	Modificó parcialmente el Articulo 4 de la Res 411.0.21.0169, modificado por el Art 1 de la Res 411.0.21.0253, en el sentido de modificar la el plazo para el pago de contado hasta el 31 de Enero de 2010 y en un plazo de 90 meses así: a)- 42 cuotas mensuales del 30 de Junio de 2010 al 30 de Diciembre de 2013 que corresponden al 50% y 47 cuotas periódicas a pagar entre el 1 de enero de 2014 que corresponden del al otro 50% del valor total de la contribución.
Resolución N° 411.0.21.0019 de Enero 29 de 2010	Extendió el plazo de vigencia de los descuentos de los literales b y d del Articulo 1 de la N° 411.0.21.0329, extendiendo hasta el 31 de marzo de 2010 el plazo para pago de contado y en el parágrafo 3 establece que en ningún caso se entenderá ampliado el plaza para beneficiarse del descuento fijado es esta resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Res 411.0.21.0169
Resolución No. N° 411.0.21.0056 de Marzo 30 de 2010	Modifico la Resolución 411.0.21.0019 de 2010, estableciendo que el plazo para pago de contado hasta el 30 de Junio de 2010 y en el parágrafo 3 establece que en ningún caso se entenderá ampliado el plaza para beneficiarse del descuento fijado es esta resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Res 411.0.21.0169.

Que ante la falta de pago de la contribución, la Secretaria de Infraestructura y valorización aplico la cláusula acelaratoria haciendo exigible el pago de la contribución mediante acto administrativo contenido en la Resolución No. 4151.0.21.9368 DE FEBRERO 26 DE 2015 debidamente ejecutoriado.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

Que los anteriores actos administrativos para efectos del cobro coactivo constituyen título ejecutivo complejo, al contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal, por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro coactivo contenido en los Artículos 171 y siguientes del Decreto 0139 de 2012, y con el articulo 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, en armonía con lo dispuesto en el artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización Municipal), se obtenga su pago.

Que conforme al artículo 57 del acuerdo 0178 de 2006, se individualizó la contribución de valorización por beneficio general y se estableció que el sujeto pasivo adeuda al Municipio de Santiago de Cali, según el(los) siguiente(s) titulo(s):

VALORIZACIÓN	N° TITULO EJECUTIVO	CONTRIBUYENTE	IDENTIFICACION	NUMERO DE PREDIO	CUANTIA
Plan de obras 556 "21 megaobras"	TITULO COMPLEJO	OSORIO GONZALEZ ALICIA	38969635	B006602240000	$5509854

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía Administrativa Coactiva a favor del Municipio de Santiago de Cali –Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal y a cargo de OSORIO GONZALEZ ALICIA con identificacion. 38969635, por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 5509854), por el predio B006602240000 por concepto de contribución de valorización (plan de obras 556) "21 megaobras", más los intereses causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta cuando se efectué el pago total de la misma de conformidad con los artículos 175 y 189 del Decreto 0139 de 2012 en concordancia con los artículos 826 y 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante Legal, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificara por correo. En la misma forma se notificara el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Decreto 0139 de 2012 y Articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, para cancelar la deuda con sus respectivos

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

intereses o dentro del mismo término proponer mediante escrito las excepciones que estime pertinentes, conforme al Artículo 181 y 182 del Decreto 0139 de 2012 y 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional.

CUARTO: El presente acto Administrativo es de trámite y contra este solo proceden las excepciones de que trata el artículo anterior, conforme al artículo 185 Decreto 0139 de 2012 y 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

QUINTO: Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 17 del mes de Noviembre de 2015

LUZ DARY BARA JIMENEZ
Subdirectora de Tesorería de Rentas
Departamento Administrativo de Hacienda

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
www.cali.gov.co
No. 2016-41110-008063-2
Asunto: excepcion de prescripc ion
Fecha Radicado 01/02/2016 02:18:26
Usuario Radicador JOHN.CARMONA
Destino Tesoreria General
Remitente (CIU) ALICIA OSORIO GONZALEZ
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldia, Linea 195
20164111000080632

1

Doctora
LUZ DARY BARA JIMENEZ
SUBDIRECTORA DE TESORERIA DE RENTAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
E. S. D.

Ref.: **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO**
En contra de la Resolución Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015

ALICIA OSORIO GONZALEZ, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la C.C. No. 38.969.635 de Cali, por medio del presente y dentro del término dispuesto para ello por medio del presente Escrito procedo a proponer la Excepción en contra DE LA ACCION DE COBRO contenida en la Resolución No4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015. de acuerdo a lo dispuesto en los artículos y 831 de ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL y de los artículos 181 y 182 DEL DECRETO EXTRAODINARIO O139 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, normas que establecen lo siguiente:

TERMINO PARA PROPONER EXCEPCIONES: Tanto el ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL: en el art. 830 como el DECRETO EXTRAORDINARIO O139 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,. Establecen como TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES como sigue : . "Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer las excepciones que considere pertinentes" ., por lo tanto me encuentro dentro del término para proponer excepciones, acogiéndome a las que taxativamente clasifican como excepciones **las EXCEPCIONES que se pueden proponer contra el mandamiento de pago**, las disposiciones del art. 831 E.T. y 182 Decreto Extraordinario o139 del Municipio de Santiago de Cali y que son las siguientes, concretamente a la establecida en el numeral 6º.:

EXCEPCIONES

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. **La prescripción de la acción de cobro,** y
7. La falta de título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió.

Acogiéndome a lo anteriormente expuesto:

Propongo la **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO,** contenida en la Resolución No. 4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015, para que la misma sea declarada fundada y se ordene el definitivo del Proceso Coactivo respecto de mi persona y el levantamiento de la medida que pesa sobre mi inmueble, en atención a los siguientes fundamentos de Hecho y de Derecho:

HECHOS

1. La Resolución Número Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 2015, por medio de la cual se cobra y se hace exigible el cobro de la contribución de valorización por jurisdicción coactiva a la Suscrita, teniendo en cuenta que dicha contribución se asignó mediante Resolución 411.0.21.0169 de fecha Septiembre 4 de 2009, quedó en firme el 15 de diciembre de 2009 mediante Resolución 13355, la Administración Municipal me negó el Recurso de Reposición y en subsidio Apelación interpuesto, radicado bajo el No. 10152023 del 15 de octubre de 2009, tal como consta en el AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO de fecha 23/04/2015.

2. Posteriormente interpuse recurso de Reposición y en Subsidio Apelación con radicado No. 2015411100615232, en contra de la Resolución Número 4151.0.21.9368 de febrero 26 2015, con fundamente en la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO, que ya había operado por el transcurso del tiempo (5 años), el cual fue resuelto en la Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015 , bajo el No.2015-41110-061523-2 de fecha 18-06-2015, cuyo Acápite de RESUELVE me fue transcrito en la comunicación de fecha 13-11-2015 :

Artículo Primero Rechazar por *IMPROCEDENTE,* el Recurso de Reposición interpuesto.....

3. En el Artículo Segundo: .....haciéndole saber que el Recurso de Apelación interpuesto será remitido al SUPERIOR JERÁRQUICO para los fines pertinentes.

4. En el parágrafo final de la citada Comunicación, se me informa que me llegaría un oficio citándome para que me notificara en de la Resolución No. 4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015 *"por la cual se resuelve un recurso de Reposición".*

Resulta que la Resolución No. 4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015, si bien cita un recurso de Reposición, establece que "POR MEDIO DE LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN No. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 " POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL

"ACUERDO 0261 DE 2009".

5. En la Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 7 de 2015, " POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO" en contra de la suscrita se establece en su CONSIDERANDO, que la Resolución No. 411.02.10169 de fecha Septiembre 4 de 2009, fue aclarada y modificada mediante los siguientes actos administrativos:

ACTO ADMINISTRATIVO

Res.No.411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009

MODIFICACION Corrige yerro Res.411.0.31.0169 en el valor del presupuesto del plan de obras.

Res No.411.0.21.0253 :de noviembre 6 de 2009
MODIFICACIÓN: Modificó los arts. 3 y 4 de la 411.0.21.0169 en el sentido de modificar el plazo inicial de 60 a 90 cuotas mensuales y amplió el 0/0 de descuento por pago de contado hasta el 31 de Diciembre de 2009.

Res.No.411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009
MODIFICACION: Modificó parcialmente el art.4 de la Res. No.411.0.21.0253 modificada por el art. 1. de la Res.411.0.21.0253 en el sentido de modificar el plazo para el pago de contado hasta el 31 de mayo de 2010 y en un plazo de 90 meses así: a)-42 cuotas de 30 de junio de 2010 a Diciembre de 2013 que corresponden al 50% y 47 cuotas periódicas a pagar entre el 1°. De Enero de 2014 que corresponden al otro 50% del valor total de la contribución.

Resolución No. 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010
MODIFICACIÓN: Extendió el plazo de vigencia de los descuentos de los literales b y d de la No.411.0.21.0019 extendiendo hasta el 31 de marzo del 2010 el plazo para el pago de contado y en el parágrafo 1°. Establece que en ningún caso se entenderá ampliado el plazo para beneficiarse del descuento fijado en esta Resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Resolución 411.0.21.0169

Resolución No. 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010
MODIFICACION: Modifica la Resolución No 411.0.21.0019 de 2010 estableciendo que el plazo para el pago de contado hasta el 30 de junio de 2010 y en el parágrafo 3 que en ningún caso se entenderá ampliado el plazo para beneficiarse del descuento fijado en esta Resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Resolución 411.0.21.0169

" Que ante la falta de pago de la contribución, la Secretaría de Infraestructura y Valorización aplicó la clausula aceleratoria haciendo exigible el pago de la contribución mediante acto administrativo contenido en la Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015 debidfamente ejecutoriado"

Desconoce flagrantemente la Administración las normas que establecen que las obligaciones tributarias están sujetas al paso del tiempo para su nacimiento, determinación de su vigencia y exigibilidad. El termino de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario .Nacional es de 5 años, que se cumplieron en el año 2014 para aquellos propietarios que nunca pagaron ninguna cuota del gravamen de las 21 megaobras

Con esta maniobra de otorgar plazos de pago La Administración del Municipio de Cali en su afán de correr el término de la prescripción pretenda modificar una situación jurídica consolidada, a fin de enervar los efectos legales de la ejecutoriedad de los actos administrativos y de la prescripción.

En mi caso concreto, pretende la administración que por haber modificado la Resolución No. 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010 y haber extendido el plazo para pagar has junio 30 de 2010 por medio de la Resolución No. 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010, extendió o corrió el plazo de la prescripción hasta junio 30 del 2015 y que en consecuencia al aplicarme la claúsula aceleratoria de pago de la obligación, mediante Resolución No. 4151.0.21.93.68 de Febrero 26 de 2015, ello la faculta legalmente para iniciar el proceso de cobro coactivo y librar el mandamiento de pago.

Pero toda esta actuación de la Administración de Santiago de Cali, que configura conductas violatorias de nuestro ordenamiento jurídico y que está encaminada a obtener como sea el pago de la obligación a mi cargo cuya acción de cobro se encuentra prescrita, por mandato legal, no les funciona ni les puede funcionar para lograr su objetivo por las siguientes razones:

Al serme negado el recurso de apelación que interpuse en contra de la Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 2015, con fundamento en la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO y extenderla arbitrariamente hasta junio del 2015, la Administración incurrió en la violación de las disposiciones legales sobre la materia, como demuestro a continuación:

Por una parte, el termino de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario .Nacional es de 5 años, que en mi caso se cumplieron en el año 2014. Al serme negado el recurso de reposición radicado bajo el No. 10152023 , que interpuse dentro del término en contra de la Resolución No 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009, por medio de la Resolución No 13355 de fecha 15 de diciembre de 2009, es a partir de esta fecha que se debe empezar a contar el término de la Prescripción que me compete, por lo cual la misma habría quedado configurada el 15 de Diciembre de 2014.

Por otra parte, la claridad contundente de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Apoyo Fiscal a las Entidades Territoriales al responder los interrogantes sobre prescripción, que es lo que concierne a este escrito, como demuestro a continuación:

DAFT. **¿Qué se requiere para que opere la prescripción?**

La prescripción extintiva o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

(i) El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la

obligación, ya sea por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el término para que opere la prescripción.

(ii) La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.

(iii) Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor. Es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehúse al pago de la obligación, a título de ejemplo se podrían utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.

Así las cosas, en los casos de solicitud de prescripción, siempre y cuando se verifique el transcurso del tiempo y los requisitos a que haya lugar, se recomienda a las administraciones tributarias la declaratoria de la prescripción, toda vez que de esta forma se evita acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y deudores de la entidad territorial; además, se evitan posibles procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa por los daños que una renuencia injustificada, por parte de la administración en la declaratoria de la prescripción, pueda producir.

DAFT. **Contabilización del término de prescripción de la acción de cobro**

El término de prescripción para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una entidad territorial es de cinco años, con base en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 que remiten al Estatuto Tributario Nacional.

El término de cinco años se cuenta a partir de los siguientes casos señalados en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional: Artículo 817.

Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

Las circunstancias referidas a aquellos tributos de las entidades territoriales que imponen a los sujetos pasivos la obligación formal de declarar (impuesto de industria y comercio, impuestos al consumo) se encuentran reguladas en la norma transcrita a

efectos de la determinación del punto de inicio del término de prescripción. No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales la administración es quien determina la obligación tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro –cuando la liquidación la realiza la administración departamental–, contribución de valorización, etc.) surge la pregunta de,

DAFT **A partir de qué momento se cuenta el término de prescripción de la obligación tributaria?**

La respuesta es desde el momento en que el acto oficial de determinación del gravamen queda en firme; bajo estos parámetros, resulta imperioso que las entidades territoriales, en todos los casos en que las normas vigentes no exijan la declaración y liquidación privada del tributo, expidan dentro de los términos legales los actos administrativos respectivos (actos de determinación oficiales) los cuales, una vez ejecutoriados, servirán de título ejecutivo y de documento respecto del cual se contabiliza el término de cinco años previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.

En este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el título ejecutivo para que se inicie el conteo del término de prescripción, esto no implica que la administración tributaria territorial para dicha expedición cuente con un plazo indefinido, pues la norma prevé este aspecto como se señala a continuación.....

Actos que interrumpen el término de prescripción de la acción de cobro

Es generalizada la creencia en las administraciones territoriales, que la prescripción se interrumpe con la notificación del acto administrativo de determinación oficial del gravamen o la resolución en la que se impone una sanción.

Lo anterior no tiene fundamento legal, motivo por el cual resulta forzoso tener como referente para este aparte el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional (modificado por el artículo 81 de la Ley 6 de 1992) que establece:

Artículo 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. Así lo que se interrumpe es la acción de cobro que impone la existencia de un título ejecutivo, motivo por el cual la expedición del mismo no puede interrumpirlo. Para precisar la idea resulta necesario advertir que tienen que presentarse los siguientes casos para que se interrumpa el término de prescripción: (i) Notificación del mandamiento de pago. Una vez se inicia el proceso de cobro administrativo coactivo, al deudor se le notifica el mandamiento de pago en los términos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y sólo hasta el momento en que se logre realizar la notificación se podrá hablar de la interrupción del término de prescripción que se encontraba corriendo.

Otorgamiento de facilidades para el pago. Estas facilidades deben concederse en los términos señalados en el mismo Estatuto Tributario Nacional, como quiera que esta es una norma de interrupción especial dadas las especiales circunstancias previstas en este texto normativo; **MOTIVO POR EL CUAL NO RESULTAN ADMISIBLES LA CONCESIÓN DE PLAZOS ADICIONALES, LAS AMNISTÍAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DIFERENTES COMO FORMAS DE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN.**

(iii) Admisión del sujeto pasivo en procesos concursales y las liquidaciones forzosas administrativas.....

En lo que respecta a la declaratoria de prescripción, esta será decretada, una vez comprobada su ocurrencia, de oficio o a petición de parte, por el funcionario competente de acuerdo con la norma interna del departamento, distrito o municipio.

Así las cosas las modificaciones que enumera la No. 4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN No. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 " POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN No. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 , pues dichas modificaciones hacen referencia UNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMINISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN.

El CONSEJO DE ESTADO por su parte, ha establecido respecto: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE *COBRO La prescripción de la acción de cobro, trae como consecuencia la extinción de la competencia de la Administración Tributaria para exigir coactivamente el pago de la obligación.*

"CONSEJO DE ESTADO. octubre30 de 2002, Rad. 1.446, Consejero Ponente Dr. César Hoyos Salazar. . LA SALA RESPONDE 4.1. La normatividad sobre prescripción de la acción de cobro de obligaciones fiscales a favor de los municipios y distritos es, en razón de la remisión hecha por el artículo 66 de la ley 383 de 1997, la contenida en los artículos817 a 819 del Estatuto Tributario. 4.2. Los municipios y distritos no tienen autonomía para establecer un término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales a su favor, diferente del señalado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, sino que deben sujetarse a este."

En cuanto a la argucia de pretender que el término de la prescripción puede prorrogarse amañadamente por la Administración Municipal, estableciendo nuevos

plazos por medio de resoluciones no notificadas personalmente y desconocidas por el contribuyente, es aplicable lo que manifiesta el Consejo de Estado:

....." En definitiva, luego de analizar esta providencia, la Sala considera que la decisión transgrede el derecho de defensa como componente fundamental del debido proceso de la parte demandada y contraviene el principio constitucional de buena fe que debe inspirar las actuaciones de las autoridades públicas (artículo 83 C.N.)",

Como consecuencia de lo anterior, la administración del Municipio de Santiago de Cali, debe decretar Prosperidad de la EXCEPCIÓN DE FONDO PROPUESTA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE COBRO DE LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE FECHA SEPTIEMBRE 4 DE 2009 que asignó la contribución y que quedó en firme el 15 de Diciembre de 2010, encontrándose por tanto prescrita la Accion de Cobro de la obligación de pagar la contribución en ella contenida, pero que sin embargo el Municipio utiliza como generadora del cobro contenido en el mandamiento de pago establecido en la Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 7 de 2015 acusada, por ser violatorias de la Constitución y la Ley, de acuerdo a las disposiciones citadas, toda vez que mediante la misma se está cobrando y haciendo exigible una obligación que se encuentra prescrita debido al transcurso del tiempo, 5 años, razón por la cual el Municipio de Cali perdió el derecho el derecho de ejercer la acción de cobro coactivo a pesar de lo cual cual ya libró el mandamiento de pago por medio de la citada ResoluciónNo.4131.3.21.117752 de Noviembre 7 de 2015

POR LO EXPUESTO

En consecuencia el Municipio de Santiago de Cali, debe declarar la prosperidad de la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO, propuesta en este escrito, ordenar el archivo del Proceso de Cobro Coactivo y la cancelación del gravamen de valorización que pesa sobre los inmuebles.

Atentamente:

ALICIA OSORIO GONZALEZ

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

RESOLUCION No. 4151.0.21.9368 de 2015

(febrero 26)

POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización), en concordancia con lo establecido en el artículo 83 y 85º ídem, el Acuerdo 0241 de 2008 y 0261 de 2009 y demás Normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Artículo 87 del Acuerdo 178 de 2006 establece "Título Ejecutivo. Constituye título ejecutivo y fundamento legal para el cobro de la contribución de valorización por jurisdicción coactiva el acto administrativo ejecutoriado donde conste la existencia de la deuda fiscal exigible a cargo del contribuyente expedido por el Secretario de Infraestructura y Valorización".

2. Que mediante resolución 411.0.21.0169 de septiembre 04 de 2009, "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCION Y ASIGNACION INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONTRUCCION DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009".

3. Que conforme al artículo 57 del Acuerdo 0178 de 2006, aun siendo la resolución distribuidora un acto administrativo colectivo, se tiene individualidad jurídica de asignación de contribución de valorización por beneficio general al siguiente predio:

Ubicación	A 3 W 14 34 402P
Código Único	760010102010003022409100058
Número Predial	B006602240000
I.D. Predio	156469
Contribución Notificada	$ 3.141.899,00

4. Que en la mencionada resolución distribuidora se fijó como sujeto pasivo a OSORIO GONZALEZ ALICIA, propietario(a) del inmueble ubicado en la A 3 W 14 34 402P, identificado(a) con CC No. 38.969.635.

5. Que para el pago de la contribución de valorización municipal le correspondió un plan de pagos de 60 meses, con una tasa de financiación del DTF + 2 puntos efectivo anual y tasa de mora, conforme a lo establecido en la resolución 411.0.21.0253 de 2009, por medio de la cual se modifican los artículos 3 y 4 de la resolución 411.0.21.0169 de 2009, Acuerdo 0178 de 2006 y el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional.

6. Que la resolución 411.0.21.0169 de septiembre 04 de 2009 fue debidamente notificada, en la forma prevista en el artículo 59 literales a, b y c, del Acuerdo 0178 de

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

RESOLUCION No. 4151.0.21.9368 de 2015
(febrero 26)

POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL.

2006 (Estatuto de Valorización Municipal), y lo previsto en los artículos 43, 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en la fecha 20 de Octubre de 2009, contra la cual procedía el recurso de reposición, tal como lo prevé el artículo 60º del Acuerdo 0178 de 2006, garantizándole el debido proceso al contribuyente, previsto en el artículo 29º de la Constitución Política de Colombia.

7. Que para el caso que nos ocupa se presentó recurso de reposición radicado No. 10152023 de 15 de octubre de 2009, el cual fue resuelto mediante resolución 13355 de 15 de diciembre de 2009, agotándose la vía gubernativa, quedando ejecutoriado y en firme el acto administrativo que fijó el presupuesto, aprobó y asignó individualmente la contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un plan de obras, autorizado mediante Acuerdo 0241 de 2008, modificado por el Acuerdo 0261 de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 62º del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización Municipal), en armonía con lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

8. Que conforme al artículo 67 del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización Municipal), el contribuyente perdió el derecho al pago de la contribución de valorización por beneficio general por cuotas, aplicándosele la cláusula aceleratoria por dejar de pagar más de 6 cuotas periódicas consecutivas, haciéndose exigible el monto total de la contribución más sus intereses.

9. Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Exigir el pago inmediato a OSORIO GONZALEZ ALICIA, identificado(a) con CC No. 38.969.635, el (la) cual adeuda al MUNICIPIO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, a 31 de enero de 2015 la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 5.509.854,00) discriminados así: por saldo de contribución la suma de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 3.142.000,00), por intereses de financiación la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 462.826,00) al DTF+2 puntos Efectivo Anual y por intereses de mora UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.905.028,00); liquidados conforme a lo establecido en la resolución 411.0.21.0253 de 2009, por medio de la cual se modifican los artículos 3 y 4 de la resolución 411.0.21.0169 de 2009, Acuerdo 0178 de 2006 y el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, más la mora causados desde la fecha de exigibilidad de la obligación, hasta el momento que se realice el pago total de la misma, por concepto de contribución de Valorización por Beneficio General - Plan de Obras 556 - que le fue asignada mediante la resolución No. 411.0.2.21.0169 de septiembre 4 de 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCION Y ASIGNACION INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

RESOLUCION No. 4151.0.21.9368 de 2015

(febrero 26)

POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL.

MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009", que beneficia al inmueble de su propiedad ubicado en la A 3 W 14 34 402P, el cual tiene el NUMERO DE PREDIO B006602240000, y CODIGO ÚNICO No. 76001010201000302240910058.

SEGUNDO: La presente resolución presta merito ejecutivo una vez en firme y debidamente ejecutoriada.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada para notificarse, conforme al artículo 67 y s.s de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de Reposición y Apelación, dentro de la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, de conformidad con lo señalado en los artículos 74, 76 y s.s de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los Veintiseis (26) días de mes de febrero de 2015.

MIGUEL ANTONIO MELENDEZ CARVAJAL
Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal

Proyectó: Jennifer Satizabal - Contratista SIV
Marco Antonio Aldana Olave - Coordinador Jurídico SIV
Oscar Corredor Castro - Coordinador de Cartera SIV
Revisó: José Moreno Barco - Subsecretario Apoyo Técnico SIV
Firma autorizada mediante Decreto 4111.0.20.0686 de octubre 28 de 2014.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

La Subdirectora de Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los Decretos 411.0.20.062 de Febrero 23 de 2007, Decreto 411.0.020.0982 de Diciembre 31 de 2007, Decreto 411.0.20.0139 de 2012 en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional, Artículo 86° del Acuerdo No. 0178 de 2006 (estatuto de valorización Municipal), Decreto 411.20.0012 de enero 2 de 2008, Decreto 411.0.20.0068 de enero 30 de 2008, Decreto 411.0.20.0470 de julio 2 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que la Administración Municipal expidió la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 04 de 2009 "por medio de la cual se fija el presupuesto y se aprueba la distribución y asignación individual de la contribución de valorización por beneficio general para la contribución de un plan de obras.

Que dicha resolución ha sido aclarada y modificada mediante los siguientes actos administrativos:

ACTO ADMINISTRATIVO	MODIFICACION
Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009	Corrige yerro Res 411.0.21.0169 en el valor del presupuesto del plan de obras
Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 06 de 2009	Modifico los arts. 3 y 4 de la 411.0.21.0169, en el sentido de modificar el plazo inicial de 60 a **90** cuotas mensuales y amplio el % de descuento por pago de contado hasta el 31 de Diciembre de 2009.
Resolución N° 411.0.21.0329 de Diciembre 30 de 2009	Modificó parcialmente el Articulo 4 de la Res 411.0.21.0169, modificado por el Art 1 de la Res 411.0.21.0253, en el sentido de modificar la el plazo para el pago de contado hasta el 31 de Enero de 2010 y en un plazo de 90 meses así: a)- 42 cuotas mensuales del 30 de Junio de 2010 al 30 de Diciembre de 2013 que corresponden al 50% y 47 cuotas periódicas a pagar entre el 1 de enero de 2014 que corresponden del al otro 50% del valor total de la contribución.
Resolución N° 411.0.21.0019 de Enero 29 de 2010	Extendió el plazo de vigencia de los descuentos de los literales b y d del Articulo 1 de la N° 411.0.21.0329, extendiendo hasta el 31 de marzo de 2010 el plazo para pago de contado y en el parágrafo 3 establece que en ningún caso se entenderá ampliado el plaza para beneficiarse del descuento fijado es esta resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Res 411.0.21.0169
Resolución No. N° 411.0.21.0056 de Marzo 30 de 2010	Modifico la Resolución 411.0.21.0019 de 2010, estableciendo que el plazo para pago de contado hasta el 30 de Junio de 2010 y en el parágrafo 3 establece que en ningún caso se entenderá ampliado el plaza para beneficiarse del descuento fijado es esta resolución para los contribuyentes que no hayan recurrido la Res 411.0.21.0169.

Que ante la falta de pago de la contribución, la Secretaria de Infraestructura y valorización aplico la cláusula acelaratoria haciendo exigible el pago de la contribución mediante acto administrativo contenido en la Resolución No. 4151.0.21.9368 DE FEBRERO 26 DE 2015 debidamente ejecutoriado.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

Que los anteriores actos administrativos para efectos del cobro coactivo constituyen título ejecutivo complejo, al contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal, por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro coactivo contenido en los Artículos 171 y siguientes del Decreto 0139 de 2012, y con el articulo 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, en armonía con lo dispuesto en el artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización Municipal), se obtenga su pago.

Que conforme al artículo 57 del acuerdo 0178 de 2006, se individualizó la contribución de valorización por beneficio general y se estableció que el sujeto pasivo adeuda al Municipio de Santiago de Cali, según el(los) siguiente(s) titulo(s):

VALORIZACIÓN	N° TITULO EJECUTIVO	CONTRIBUYENTE	IDENTIFICACION	NUMERO DE PREDIO	CUANTIA
Plan de obras 556 "21 megaobras"	TITULO COMPLEJO	OSORIO GONZALEZ ALICIA	38969635	B006602240000	$5509854

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía Administrativa Coactiva a favor del Municipio de Santiago de Cali –Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal y a cargo de OSORIO GONZALEZ ALICIA con identificacion. 38969635, por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 5509854), por el predio B006602240000 por concepto de contribución de valorización (plan de obras 556) "21 megaobras", más los intereses causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta cuando se efectué el pago total de la misma de conformidad con los artículos 175 y 189 del Decreto 0139 de 2012 en concordancia con los artículos 826 y 836-1 del Estatuto Tributario Nacional.

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante Legal, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificara por correo. En la misma forma se notificara el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Decreto 0139 de 2012 y Articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, para cancelar la deuda con sus respectivos

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCIÓN No.4131.3.21.117752 DE 2015
(Noviembre 17)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA EL MANDAMIENTO DE PAGO"

intereses o dentro del mismo término proponer mediante escrito las excepciones que estime pertinentes, conforme al Artículo 181 y 182 del Decreto 0139 de 2012 y 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional.

CUARTO: El presente acto Administrativo es de trámite y contra este solo proceden las excepciones de que trata el artículo anterior, conforme al artículo 185 Decreto 0139 de 2012 y 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

QUINTO: Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 17 del mes de Noviembre de 2015

LUZ DARY BARA JIMENEZ
Subdirectora de Tesorería de Rentas
Departamento Administrativo de Hacienda

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

15

Santiago de Cali, Enero 13 de 2016 Notificación por correo N°. 4131.3.9.5.3591

Señor(a)
OSORIO GONZALEZ ALICIA
AVENIDA 3 OESTE # 14 34 APTO 402
Predio No. B006602240000
Ciudad

ASUNTO: Notificación por correo-Proceso de cobro coactivo contribución por Valorización obra 556 "21 Megaobras".

Habiéndose citado para la notificación personal de la Resolución de Mandamiento de Pago No. 4131.3.21.117752 de 2015, proferida en su contra en el proceso del asunto de la referencia y habiéndose vencido los diez (10) días establecidos como termino, para que se presentara a notificarse personalmente o por medio de Apoderado o representante legal, se procederá a efectuar la notificación por correo de dicho Mandamiento de Pago, siguiendo el procedimiento indicado en el Artículo 175 del Decreto 0139 de 2012, en concordancia con el Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, adjuntando a la presente una copia simple de la resolución No. 4131.3.21.117752 de 2015

Notificada como queda la providencia con este acto, dispone de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de esta Notificación para que cancele las obligaciones por las cuales se ejecuta, so pena de continuar el trámite procesal, que conlleva el embargo, secuestro y remate de bienes, cuentas bancarias y a la condena del pago de costas procesales como honorarios de secuestre, perito publicaciones en radio y prensa, así mismo dentro de este término podrá proponer por escrito las excepciones que considere pertinentes.

Señor contribuyente, lo invitamos a que proceda a realizar su pago y/o suscribir un convenio de pago de la contribución por valorización, para lo cual podrá acercarse a nuestros puntos de atención al contribuyente, donde podrá recibir la orientación y ayuda para la aclaración y resolución de sus inquietudes:

PUNTO DE ATENCIÓN	HORARIO
CAÑAVERALEJO (Av. Roosevelt con Calle 5) Diagonal a la Plaza de Toros	Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua.
CAM – Centro de Atención al Contribuyente	Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua

Se anexa la resolución enunciada, la cual consta de tres (3) folios.

LUZ DARY BARA JIMENEZ
Subdirección de Tesorería de Rentas
Departamento Administrativo de Hacienda

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
No. 2015-41110-061523-2
Asunto: RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION EN
Fecha Radicado 18/06/2015 03:58:55
Usuario Radicador JEFFERSON MOLINA
Destino SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN
Remitente (CIU) ALICIA OSORIO GONZALEZ
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldia, Linea 195
20154111006152 32

17

Señor
SECRETARIO DE INFRESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
E. S. D.

ALICIA OSORIO GONZALEZ, mayor de edad identificada con la C:C:No.38.969.635 de Cali. cen mi condición de propietario del apartamento 402, ubicado en la Avda 3 Oeste No.14 – 34 del Barrio Santa Rita de Santiago de Cali, por medio del presente y dentro del término legal dispuesto para ello, interpongo LOS RECURSOS DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACIÓN en contra de la Resolución4151.0.21.9368 DE Febrero 26 de 2015., por medio de la cual *Por medio de la cual se cobra y hace exigible el pago de la Contribución de Valorización por beneficio general para la Construcción del Plan de Obras 556 a favor del Municipio de Cali – Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal,* todo ello de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que seguidamente expongo:

FUNDAMENTOS:

Con la Resolución Número Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 2015, por medio de la cual se cobra y se hace exigible el cobro de la contribución de valorización por jurisdicción coactiva, teniendo en cuenta que dicha contribución se asignó mediante Resolución 411.02.10160 de fecha Septiembre 4 de 2009, la cual quedó en firme el 15 de diciembre de 2009 mediante Resolución 13355, al negar la Administración Municipal el Recurso de Reposición radicado bajo el No. 10152023 del 15 de octubre de 2009, se está haciendo el cobro de la precitada contribución, sin tener en cuenta que esta no es exigible fiscalmente pues se encuentra prescrita.

- El Artículo 817del Estatuto Tributario Nacional, dice: TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN. "*La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria. La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor*".
- La Resolución No. 411.02.10160 de fecha Septiembre 4 de 2009 es un acto administrativo de carácter municipal; por lo tanto, su término de prescripción es de 5 años; luego, dicho actos están prescritos desde el día 15 de diciembre de 2014, fecha en que se cumplieron los 5 años sin que la Administración Municipio de Santiago de Cali hubiera iniciado la Acción de Cobro correspondiente

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Ha establecido la C.C. : 4.1.1. El artículo 29 de la Constitución Política define el *debido proceso* como un derecho fundamental de aplicación inmediata aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Se halla relacionado íntimamente con el principio de legalidad, ya que la aplicación de normas preexistentes y decididas democráticamente, constituye un límite a la actuación administrativa que evita arbitrariedades por parte de las autoridades y protege los derechos de los ciudadanos en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas . Específicamente, el debido proceso administrativo se consagra en los artículos 29, 6 y 209 de la C.P. Y la jurisprudencia lo ha definido como:*"(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal"*[2]. *Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados"*[3]. De este modo, el desconocimiento del debido proceso administrativo, supone también la violación del derecho de acceso a la administración de justicia y transgrede los principios de igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y contradicción que gobiernan la actividad administrativa .

2. **La LEY 1739 DE 2014 de (Diciembre 23)** ***Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley de 2012,***

Artículo 53*. Modifíquese el artículo del Estatuto Tributario Nacional el cual quedará así:*

*""**Artículo 817.** La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:*

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. (la negrilla es de la suscrita)

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de

los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte"

Dados los hechos, fundamentos de derecho y consideraciones expuestos, respetuosamente solicito mediante el recurso de Reposición ante el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal y en subsidio de Apelación ante el al Señor Alcalde del Municipio de Cali que la administración Municipal :

1. Se sirva derogar para dejar sin efectos la Resolución 4151.0,21,9368 de febrero 26 de 2015, por ser violatoria de la Constitución y la Ley, de acuerdo a las disposiciones citadas, toda vez que mediante la misma se está cobrando y haciendo exigible una obligación que se encuentra prescrita debido al transcurso del tiempo, 5 años, razón por la cual el Municipio perdió el derecho el derecho de instaurar la acción de cobro.

Como consecuencia de lo anterior, la administración del Municipio de Santiago de Cali, debe decretar la PRESCRIPCIÓN, de la Resolución No. 411.02.10160 de fecha Septiembre 4 de 2009 que asignó la contribución y que es la generadora del cobro contenido en la Resolución acusada, para lo cual está legalmente facultada, ya que en mi condición de contribuyente estoy liberada de la obligación de pago por efecto de dicha Prescripción.

PRUEBAS

Acompaño los siguientes documentos:

1. Copia Aviso de notificación de Acto Administrativo.
2. Copia Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Las que me corresponden las recibiré en la Secretaria de Su Despacho, o en la Avenida 3 Oeste #14-34 Apto. 402 Edificio Los Juncos,

Correo Electrónico: aliciaosorio2002@yahoo.com

Teléfono: 8934074 Celular: 3002361637

Atentamente :

ALICIA OSORIO GONZALEZ
C.C.38.969.635 de Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **201541512018451 1**
Fecha: **23-04-2015**
TRD: **4151.2.10.1.823.018451**
Rad. Padre: **201541512018451 1**

AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto administrativo a notificar: Resolución No. 4151.0.21. 9368 de FEBRERO 26 DE 2015, *"POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÒN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÒN MUNICIPAL".*

Sujeto a Notificar: OSORIO GONZALEZ ALICIA
Dirección de correspondencia: AVENIDA 3 OESTE # 14 34 APTO 402
Dirección del predio: A 3 O 14 34 40 2P
Número de predio: B006602240000
Código Único: 760010102010003022409100058

EL SUBSECRETARIO DE APOYO TECNICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL

HACE SABER

Que el día Marzo 5 de 2015, se envió citación al (el) señor (a) OSORIO GONZALEZ ALICIA para notificarle personalmente el contenido de la Resolución No. 4151.0.21.9368 de FEBRERO 26 DE 2015, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 87 del Acuerdo 0178 de 2006 (Estatuto de Valorización Municipal), en concordancia con lo establecido en el artículo 83 y 85° ídem, expedido por el Subsecretario de Apoyo Técnico de la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal.

En dicha misiva, se le indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la notificación del acto administrativo, del cual la (el) señor (a) OSORIO GONZALEZ ALICIA, figura como interesado (a).

Que en atención a la no comparecencia en el término de los cinco (5) días del envío de la citación, ante las Oficinas de la Secretaria de infraestructura y Valorización del Municipio de Cali - Sede Cañaveralejo, a fin de notificarle personalmente del contenido del acto administrativo ya referido al señor (a) OSORIO GONZALEZ ALICIA, éste despacho procede a surtir la diligencia de notificación por Aviso, conforme a lo establecido en el Articulo 69 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, *por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2015415120184511**
Fecha: **23-04-2015**
TRD: **4151.2.10.1.823.018451**
Rad. Padre: **2015415120184511**

De acuerdo a lo anterior, la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal expidió la resolución No. 4151.0.21.9368 de FEBRERO 26 DE 2015, *"POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÒN DE VALORIZACION POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÒN MUNICIPAL"*. Es preciso señalar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Así las cosas, se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber que contra el mismo proceden los recursos de reposición y de apelación en vía gubernativa, los cuales deberán interponerse ante el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal y el recurso de apelación se podrá interponer directamente o como subsidiario del de Reposición ante el Señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, a al vencimiento del término de publicación, según el caso. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 76 y s.s de la Ley 1437 de 2011, *"por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*; radicándolo el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, en la Oficina de Atención al Ciudadano Ventanilla Única, ubicada frente a la bahía vehicular del CAM, contigua a la Oficina de Participación Ciudadana, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua.

Para constancia se firma;

JOSE MORENO BARCO
Subsecretario de Apoyo Técnico
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Proyecto: Abogados Grupo Cobro Coactivo
Revisó y: Aprobó: Oscar Corredor Castro - Coordinador Área de Cartera SIV
Anexo: Resolución No. en (03) folios útiles.
Magyury Reina

CRA 100 # 5-169
DG 25 G 95 A 55
Línea Nal: 01 8000 111 21

REMITENTE
Nombre/ Razón Social
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI - ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección:AVENIDA 2 NORTE NO 10-70
Ciudad:CALI
Departamento:VALLE DEL CAUCA
Código Postal:760045486
Envio:YG109898671CO

DESTINATARIO
Nombre/ Razón Social:
ALICIA OSORIO GONZALEZ
Dirección:AV. 3 OESTE # 14- 34 APT 402 edif los juncos
Ciudad:CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Código Postal:760045
Fecha Pre-Ad
02/12/2015 10:4

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACIÓN

¡Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2015415120263621**
Fecha: **13-11-2015**
TRD: **4151.2.13.1.953.026362**
Rad. Padre: **2015411100615232**

Señora
ALICIA OSORIO GONZALEZ
Avenida 3 Oeste 14-34 Apto 402
Edificio Los Juncos
Ciudad.

ASUNTO: Recurso de Reposición con radicado No. 2015411100615232 contra la Resolución No. 4151.0.21.9368 de Febrero 26 de 2015. Predio B006602240000, ubicado en la A 3 O 14-34 402P.

En atención al radicado mencionado en el asunto, la Secretaria de Infraestructura y Valorización le informa que se ha proyectado la respuesta al recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015, mediante Radicado No. 2015-41110-061523-2 de fecha 18-06-2015. De tal manera, me permito transcribirle el RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: "RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el señor (a) *OSORIO GONZALEZ ALICIA, identificado(a) con CC No. 38.969.635*, propietaria del inmueble ubicado en *la A 3 W 14 34 402P* del Municipio de Santiago de Cali, contra la Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015 *"Por medio de la cual se cobra y se hace exigible el pago de la contribución de valorización por beneficio general para la construcción del plan de obra 556 a favor del municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura y Valorización"*, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente al recurrente o a su apoderado(a), del contenido de la presente Resolución en los términos de los artículos 67 y s.s de la Ley 1437 de 2011,"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", haciéndole saber que el recurso de APELACIÓN INTERPUESTO será remitido al superior jerárquico para los fines pertinentes".

Conforme a lo anterior, le llegará oficio de citación para que se notifique personalmente del contenido de la Resolución 4151.0.21.24772 de Octubre 26 de 2015 "por la cual se resuelve un Recurso de Reposición".

No siendo otro el objeto del presente,

Atentamente,

JOSÉ MORENO BARCO
Subsecretario de Apoyo Técnico
Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal

Proyectó: Dra. Jennifer Satizabal C. – Abogada Contratista.
Revisó: Dr. Marco Antonio Aldana - Coordinador de Jurídico.

PRUEBAS

Solicito que se tengan como pruebas los documentos aportados con el escrito por medio del cual propongo la **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO**

Atentamente

ALICIA OSORIO GONZALEZ
T.P. 25.308 DEL C.S.J.
C.C.38.969.635 de Cali

Son 13 folios

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(NOVIEMBRE 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

El Subdirector de Tesorería de Rentas (E) del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales conferidas por la Resolución No. 4122.0.21.1247 del 11 de octubre de 2016, el Decreto No. 4473 de 2006, el Estatuto Tributario Nacional y el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de 2012, con sus modificaciones o adiciones y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería de Rentas en uso de su facultad de Cobro Coactivo libró MANDAMIENTO DE PAGO dentro del proceso de cobro coactivo por el predio No. B006602240000 el día 17 de Noviembre de 2015 mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 a cargo de la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 por el no pago de la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.509.854) de la obligación por la contribución de valorización por beneficio general plan de obra 556 "21 MEGAOBRAS" contenida en el titulo ejecutivo complejo conformado por los actos administrativos contenidos en las siguientes Resoluciones:

Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009
Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009.
Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009.
Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009.
Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010.
Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010.
Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, se modificó el plazo inicial para pago a cuotas que se había fijado inicialmente en 60 cuotas, ampliándolo a 90 cuotas mensuales y el plazo para pago de contado hasta el 31 de diciembre de 2009.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009, Modificó parcialmente el Articulo 4 de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009, modificado por el Art 1 de la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, en el sentido de modificar el plazo para el pago de contado hasta el 31 de enero de 2010

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 190845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010, Modifico la Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010, estableciendo que el plazo para pago de contado era hasta el 30 de junio de 2010.

Que vencido el plazo la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal dependencia responsable del manejo de dicha Renta, expidió la Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO POR BENEFICIO GENERAL PARA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A VAFOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, declarando además de la exigibilidad, en el Artículo segundo de Dicho acto que : *"la presente resolución presta merito ejecutivo una vez en firme y debidamente ejecutoriada"* lo cual se cumplió el día 29 de junio de 2015.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTADO

Que el Mandamiento de Pago dictado mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 del día 17 de noviembre de 2015, se notificó por aviso mediante envió recibido el día 26 de enero de 2016, según guía de entrega de mensajería especial 10612130556 a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 en su condición de propietaria del predio B006602240000 y ejecutada dentro del proceso de cobro coactivo calidad que fue debidamente acreditada y la cual no se discute en el escrito de excepciones.

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, presentó el día primero (01) de febrero de 2016 - con radicación Orfeo 2016-41110-008063-2, escrito de excepciones dentro del término legal, sustentando su defensa con los siguientes argumentos:

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, con el propósito de sustentar las excepciones propuestas al mandamiento de pago del proceso coactivo presento los siguientes argumentos y excepciones:

FUNDAMENTOS DE DERECHO INVOCADOS POR LA PARTE EJECUTADA:
Estatuto Tributario Nacional, Libro V, artículos 817 y 831

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

EXCEPCIONES PROPUESTAS:

La parte ejecutada propone como excepción lo siguiente:

- La prescripción de la acción de cobro.

ANALISIS DEL CASO:
EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO ALEGADA POR LA PARTE EJECUTADA:
ARGUMENTOS DE LA PARTE EJECUTADA:
La excepción de prescripción propuesta la fundamenta al invocar lo siguiente:
La prescripción extinta o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

i. El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la obligación, ya será por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el termino para que opere la prescripción
ii. La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.
iii. *Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor, es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehusé al pago de la obligación, a título de ejemplo se podría utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.*

.....Así las 1cosas, las modificaciones que enumeran la No 4151.0.21.24772 de octubre 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 200, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESCRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 190845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

No. 4111.02.10169 DE SEPTIEMBRE 04 de 2009, pues dichas modificaciones hacen referencia ÚNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN...

...Como consecuencia de lo anterior, la administración del Municipio de Santiago de Cali, debe decretar Prosperidad de la EXCEPCION DE FONDO PROPUESTA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE FECHA SEPTIEMBRE 4 DE 2009, que asigno la contribución y que quedo en firme el 15 de diciembre de 2010, encontrándose por tanto prescrita la acción de cobro de la obligación de pagar la contribución en ella contenida, pero que sin embargo el Municipio utiliza como generadora del cobro contenido en el mandamiento de pago establecido en la Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015 acusada, por ser violatorias de la Constitución y la Ley, de acuerdo a las disposiciones citadas, toda vez que mediante la misma se está cobrando y haciendo exigible una obligación que se encuentra prescrita debido al transcurso del tiempo, 5 años, razón por la cual el municipio de Cali perdió el derecho de ejercer la acción de cobro coactivo a pesar de lo cual ya libro el mandamiento de pago por medio de la citada Resolución No. 4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015.

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER RESPECTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO:

Para resolver la excepción de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización, es necesario tener presente que la contribución de valorización objeto del presente cobro, ES UNA RENTA CUYO COBRO ESTÁ SOMETIDO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO, por lo tanto no es posible aplicar los términos de prescripción de la acción de cobro de que trata el articulo 817[1] invocado por la parte

[1] Artículo 817. *Término de prescripción de la acción de cobro.* La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas respectivas".

ejecutada, toda vez que estamos frente a una contribución cuya exigibilidad depende del cumplimiento de un plazo establecido por la administración.

Que como ya se dijo en el acápite de los antecedentes del presente acto, la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, (ejecutoriada el 29 de Junio de 2015) por la cual se HACE EXIGIBLE EL PAGO de la contribución de valorización por beneficio general para construcción del PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, acto administrativo que para el asunto que nos ocupa goza de presunción de legalidad y por lo tanto este despacho lo tendrá para efectos de contar el término de prescripción alegado, teniendo en cuenta que el cobro de la obligación tiene un plazo suspensivo que suspende el ejercicio del derecho y con ello, el termino del articulo 817 numeral 4 del Estatuto Tributario Nacional alegado por la ejecutada.

EFECTOS DEL PLAZO SUSPENSIVO

A.- Antes del vencimiento:

Mientras el plazo está pendiente, la obligación existe ya, sólo que como lo expresa el inciso primero del artículo 1551 del Código Civil[2] su cumplimiento se ha diferido hasta cierta época.

Consecuencias del plazo suspensivo:

a). Inexigibilidad de la obligación: Estando el plazo establecido a favor del deudor, que es la hipótesis normal y corriente, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento de aquel. Las acciones del acreedor, tales como la acción ejecutiva y la acción indemnizatoria, están suspendidas entre tanto. Art. 1715 Código Civil.

[2] Código Civil: ARTÍCULO 1551. DEFINICION DE PLAZO. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(NOVIEMBRE 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

b). Imprescriptibilidad del crédito: No hay lugar a que ella comience a correr antes del vencimiento del plazo, porque la inacción del acreedor es forzada, ya que se le prohíbe exigir el cumplimiento de la obligación. Artículo 1553[3].
c). Validez del pago: El artículo 1552[4] establece que lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. La obligación existe antes del vencimiento del plazo y, por consiguiente, el pago que haga el deudor tiene causa suficiente, de donde se concluye que el deudor no puede repetir lo pagado, alegando que el pago no era debido, aun en el caso de que el deudor haya pagado por error, como si ha creído que el plazo se encontraba vencido, el pago es firme, porque corresponde a una obligación existente en el momento de verificarse aquel. Art. 2313.
d). Medidas conservativas: El acreedor puede solicitarlas, aunque el término no haya vencido. El legislador no establece expresamente este efecto, pero como según el artículo 1549 del Código Civil el acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas a pesar de que mientras pende la condición la obligación no existe, se concluye que el acreedor a plazo, cuyo derecho si existe durante el plazo, tiene igual o mejor derecho a que se tomen tales medidas.

B.- DESPUÉS DEL VENCIMIENTO:

Vencido el plazo, la obligación se hace exigible, es decir, se transforma en obligación pura y simple, de donde se colige:

1.- El acreedor puede ejercer todas las acciones que le competen.
2.- El término de la prescripción del crédito comienza a contarse. Art. 2535[5] y 4, y por regla general, el deudor queda constituido en mora. Art. 1608[6] Ord. 1º. Así las cosas y teniendo en cuenta que la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero, declaró la exigibilidad del pago de la contribución de valorización por beneficio general para

[3] ARTICULO 1553. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION ANTES DEL PLAZO. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1o.) Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia.
2o.) Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones.
[4] ARTICULO 1552. PAGO ANTICIPADO. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones.

[5] ARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.

[6] ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

construcción del PLAN DE OBRAS 556 a favor DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, este solo empezó a correr a partir de la ejecutoria, hecho que ocurrió el día 29 de Junio de 2015, por lo tanto no ha operado el fenómeno de la prescripción alegada, en efecto la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta tampoco está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que la mencionada resolución goza de la fuerza ejecutoria para mantener y proseguir el cobro a la ejecutada. Acorde con lo anotado, puede afirmarse que la obligación por la contribución de valorización objeto del presente cobro es una obligación de plazo, cuyo cumplimiento solo puede exigirse después del vencimiento del mismo, exigibilidad que se cuenta a partir del 29 de junio de 2015 por tal razón no ha operado la prescripción de la acción de cobro alegada por la parte ejecutada.

Para reforzar lo anterior, es necesario interpretar el artículo 817 del estatuto tributario invocado por la parte ejecutada, es importante analizar la diferencia entre la exigibilidad de la obligación y el ejecutoria del título ejecutivo que alega la parte ejecutada, pues no es acertado afirmar que la exigibilidad de la obligación comienza cuando se tiene un título ejecutivo, porque precisamente éste surge como consecuencia de aquella y si bien el título se constituye en la base de ejecución para obtener el pago, dentro de sus características, al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra la de contener una obligación expresa, clara y exigible; es decir, se impone la existencia de una obligación exigible, lo que indica que no es que a partir del título la obligación sea exigible, sino que la exigibilidad es una condición para la procedibilidad de la ejecución, que para el presente caso depende del plazo.

En esta forma, los plazos que señala la administración para la cancelación de las obligaciones provenientes de impuestos tasas o contribuciones, determinan la fecha de exigibilidad de las respectivas obligaciones a cargo del contribuyente.

En este orden de ideas, la obligación de valorización para cuya cancelación el Gobierno Municipal otorgó diferentes plazos respecto de una misma obligación, permitiendo pagar la obligación de valorización por cuotas en fechas determinadas, serán exigibles dentro del término legal de 5 años contados desde la fecha en que se hizo exigible tal como se declaró en la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, ejecutoriada el día 29 de junio de 2015.

Así las cosas, se tiene que la Subdirección de Tesorería de Rentas Municipales haciendo uso de las facultades que le han sido otorgadas por la administración

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

los cinco (5) años siguientes a la declaratoria del vencimiento del plazo para pagar, en tal sentido, se declarará no probada la excepción de prescripción de la acción de cobro.

En mérito de lo expuesto éste Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta por la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar seguir adelante con la ejecución y proceder al embargo y remate de los bienes inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país; así como el posterior avalúo y remate de los mismos. Limítese el embargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional y dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes

ARTÍCULO TERCERO. - CITAR a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, con el fin de que comparezca ante este Despacho para notificarse del contenido de la esta resolución, haciéndole entrega de una copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión procede el recurso de reposición ante éste Despacho, dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 834 del Estatuto Tributario. Para ello envíese las comunicaciones pertinentes a la siguiente dirección: Avenida 3 Oeste Nro. 14 - 34 Apto. 402 Edificio los Juncos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 21 días del mes de Noviembre de 2016

LUIS ALFONSO PARRA SAENZ
Subdirector de Tesorería de Rentas (E)
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyecto y Elaboro: Alejandro Zuluaga – Asistencial PS – Grupo Cartera
Reviso: Gloria Cecilia Cuellar de Quintana– Profesional Universitaria - Coordinadora -Grupo Cartera.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2016413130049591**
Fecha: **29-02-2016**
TRD: **4131.3.13.1.953.004959**
Rad. Padre: **2016411100080632**

Señora:
ALICIA OSORIO GONZALEZ
Avenida 3 Oeste No. 14-34 Apto. 402 Edificio Los Juncos
Ciudad

Ref: Respuesta Preliminar Excepción al Mandamiento de Pago.
Rad Padre: 2016411100080632
Predio: B006602240000

Cordial Saludo,

Con relación al asunto le informo que la Subdirección de Tesorería de Rentas, se encuentra realizando el correspondiente análisis de su escrito de excepción al mandamiento de pago, respecto del cobro de la contribución de valorización de la obra 556 denominada "21 megaobras".

En virtud de lo anterior una vez se emita la resolución administrativa del proceso, se notificará la misma de acuerdo a los términos legales consagrados en las normas pertinentes.

Cordialmente,

FRANCISCO MARIO LOPEZ CASANOVA
Profesional Universitario G-02
Cobro Coactivo

Proyectó: Maria del Pilar Correa Lozano
Reviso: Francisco Mario López Casanova

Para conocer su nivel de satisfacción frente a los trámites y servicios prestados y bridar un mejor servicio le invitamos a diligenciar la encuesta, que se encuentra en el siguiente Link:

http://www.cali.gov.co/publicaciones/encuesta_para_medir_la_satisfaccion_del_usuario_pub

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE TESORERIA DE RENTAS

FECHA. HOY 19 DE ENERO DE 2017 PREDIO Y/O NIT B00660224O000

SE PRESENTO SRA. ALICIA OSORIO GONZALEZ. CEDULA No 38.969.635

TARJETA PROFESIONAL No N/A EN CALIDAD DE PROPIETARIO [X] APODERADO Y/O AUTORIZADO [ ] REPRESENTANTE LEGAL [ ]

DEUDOR SOLIDARIO Y/O TERCEROINTERESADO [ ]

CON EL FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO No RESOLUCION No 4131. 3 . 21. 170845

PRESCRIPCION [ ] MANDAMIENTO DE PAGO [ ] RECURSO [ ] EXCEPCIONES [X] AUTO [ ] INCUMPLIMIENTO [ ]
OTROS

DE FECHA NOVIE 21/2016 PROCESO Recurso de Reposicion. TERMINO 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION

NOTIFICADO

NOMBRE Alicia Osorio G.

C.C. No 38'969.635

DIRECCION Avda. 30 esta # 14-34

TELEFONO. 8934071

CORREO ELECTRONICO

HUELLA

Alicia Osorio G.
FIRMA

NOTIFICADOR

Hernan M.
GRUPO CARTERA

OBSERVACIONES.

Esta notificación personal se surte de acuerdo a lo estipulado en los artículos 181 y 182 del Decreto 0139 de 2012, 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional y al artículo 67 de la ley 1437 de 2011

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE TESORERIA DE RENTAS

CERTIFICA QUE LA RESOLUCION No _____ DE FECHA _____

QUEDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADA

EL DIA _____ DEL MES _____ DEL AÑO _____

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2016413130244921**
Fecha: **17-11-2016**
TRD: **4131.3.9.5.1457.024492**
Rad. Padre: **2016411100080632**

Señor(a)
ALICIA OSORIO GONZALEZ
Avenida 3 Oeste Nro. 14 - 34 Apto. 402
Edificio los Juncos
TEL: 8934074 - 3002361637
La Ciudad

ASUNTO: Citación para notificación personal de Acto Administrativo 4131.3.21.170845 del 21 de Noviembre de 2016

Comedidamente se le solicita comparecer a las instalaciones de la Subdirección de Tesorería de Rentas, Grupo de Cartera, ubicado en el CAM primer piso, en el horario de 8:00 AM. a 12 M. y de 2:00 PM. a 5:00 PM., de lunes a viernes dentro de cinco (05) dias contados a partir del recibo de esta citación, para efectos de surtir la notificación personal de la Resolución por la cual se resuelve una solicitud de prescripción de la Acción de Cobro.

Nota: Para efectos de la notificación personal deberá presentar cedula de ciudadanía, para la notificación a través de Apoderado; presentar poder vigente debidamente autenticado, Tarjeta Profesional y Cedula de Ciudadanía, para la notificación a través de representante legal; presentar certificado de existencia y representación legal vigente y cedula de ciudadanía.

Atentamente,

GLORIA CECILIA CUELLAR DE QUINTANA
Profesional Universitario – Coordinadora - Grupo Cartera
Subdirección de Tesorería de Rentas

Proyecto y Elaboro: Alejandro Zuluaga – Asistencial PS – Grupo Cartera

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
No. 2017-4173020-014676-2
Asunto: PRESENTA RECURSO DE RE POSICION CONTRA LA RESOLUCION
Fecha Radicado 16/02/2017 11:33:34
Usuario Escaneador ADRIANA MARQUINEZ Folios
Destino Subdireccion de Tesoreria Municipal
Remitente (CIU) ALICIA OSORIO GONZALEZ ID. 38969635
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Arcadia Linea 195
20174173020014676 2

Santiago de Cali, febrero 14 de 2017

Doctor
LUIS ALFONSO PARRA SAENZ
Subdirector DE Tesorería de Rentas (E)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Ciudad

Ref: **Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016**

ALICIA OSORIO GONZALEZ, mayor de edad y vecina de Cali, por medio del presente y dentro del término legal dispuesto para ello, interpongo Recurso de Reposición en contra de la Resolución No, 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016 por medio de la cual se declara no probada la excepción de Prescripción de la Acción de Cobro propuesta por la suscrita y se ordena seguir adelante con la ejecución, fundamentando este Recurso como expongo a continuación:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

SOBRE LAS CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RESOLVER NEGATIVAMENTE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION PROPUESTA POR LA SUSCRITA.

PRIMERO : MODIFICACIONES DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO.411.021.0169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009

Pretende el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Cali, que por el hecho de haber emitido unas Resoluciones, con las cuales MODIFICABA parcialmente cambiando el plazo para el pago a cuotas de la obligación que ordena cobrarme ejecutivamente, con ello constituyó un TITULO COMPLEJO conformado por esas Resoluciones que cito a continuación:

ACTO ADMINISTRATIVOS

- Resolución No.411.021.0169 de septiembre 4 de 2009
- Resolución No.411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009
- Resolución No.411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2009
- ResoluciónNo.411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009
- Resolución No. 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010

- Resolución No. 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010
- Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015

Igualmente pretendeel Departamento Administrativo de Hacienda que con fundamento en este supuesto "título complejo" ha logrado desconfigurar el término de prescripción de 5 años establecido perentoriamente en el artículo 817 del Estatuto Tributario y sobre el cual existe abundante jurisprudencia de nuestras Altas Cortes, para que dicho término empiece a contarse a partir de la fecha de la última Resolución que extiende el tiempo de plazo para el pago de la contribución por valorización en Santiago de Cali.

En mi caso particular la contribución de valorización me fue asignada mediante la Resolución No. 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009, quedando en firme el 15 de noviembre de 2009 mediante Resolución 13355, con la que la Administración me negó los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra y no el 15 de diciembre de 2010, como establece la Administración en la Resolución objeto de este recurso, en el Acápite Análisis del Caso.

Es por ello que atendiendo lo establecido en el numeral 4°., que destaco con negrilla, del Art. 817 del Estatuto Tributario interpuse la prescripción es una excepción que pueden utilizar los contribuyentes a los que el paso del tiempo, 5 años, durante los cuales no han pagado ni se les ha iniciado el cobro coactivo, los ha liberado del pago de la contribución de valorización

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO
Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro.
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.

Tenemos entonces que de lo establecido en el citado artículo 817, es claro que el Proceso de cobro coactivo debe llevare a cabo en su totalidad dentro del término de prescripción de la acción de cobro en el mismo, como vemos a continuación:

El artículo 817 del estatuto tributario señala que la acción de cobro de las obligaciones tributarias prescribe a los 5 años contados desde la ocurrencia de las situaciones

relacionadas en el mismo artículo, y ha dicho el Consejo de estado que la acción de cobro, en la totalidad del proceso debe realizarse dentro de ese término de 5 años.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 18567, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas, fundamentó su tesis en los siguientes términos:

"La Sala ha señalado que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E.T. se desprende que la obligación de la Administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal. Para estos efectos, advirtió que detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la Administración como para los contribuyentes. Para la Administración, porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y, para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo."

Tenemos que La Administración de Santiago de Cali, emitió una serie de actos administrativos encaminados a obtener el pago de la obligación a cargo de los contribuyentes, tratando de implementar la acción de cobro de una obligación que se encuentra prescrita, por mandato legal, modificando en diversos tiempos y por diferentes razones la Resolución generadora de esa obligación pretendiendo así alterar el término legal de la Prescripción.

Con estos actos administrativos, según la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se amplió el plazo de los cinco años que se cumplía en el 2014, a un año mas, es decir hasta el año 2015 para el pago de la contribución y aplicó la clausula aceleratoria a los contribuyentes que nunca pagamos, haciendo exigible el pago de la contribución, desconociendo así no solo lo dispuesto en el art. 817 del Estatuto tributario sino en el Decreto Extraordinario 0139, vigente, del Municipio de Santiago de Cali que reza:

TERMINO PARA PROPONER EXCEPCIONES: Tanto el ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL: en el art. 830 como el DECRETO EXTRAORDINARIO 0139 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,. establecen el TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES como sigue : . "Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer las excepciones que considere pertinentes" ., por lo tanto los contribuyentes cuya obligación de pago prescribió, pueden proponer excepciones, acogiéndome a las que taxativamente clasifican como **las EXCEPCIONES que se pueden proponer contra el mandamiento de pago**, de acuerdo a las disposiciones del art. 831 E.T. y 182 Decreto Extraordinario 0139 del Municipio de Santiago de Cali y que son las siguientes, concretamente a la establecida en el numeral 6º.:

EXCEPCIONES

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió.

Con el pretendido "titulo ejecutivo complejo", desconoce flagrantemente la Administración las normas establecen que las obligaciones tributarias están sujetas al paso del tiempo para su nacimiento, determinación de su vigencia y exigibilidad. El termino de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional es de 5 años, que se cumplieron en el año 2014 para aquellos propietarios que nunca pagamos ninguna cuota del gravamen de las 21 megaobras

Con esta maniobra perversa de otorgar plazos de pago, haciéndole creer al contribuyente que se corría el término el término de la Prescripción y que continuaba en mora, la Administración del Municipio de Cali pretendió modificar una situación jurídica consolidada, a fin de enervar los efectos legales de la ejecutoriedad de los actos administrativos y de la prescripción.

Por una parte, el término de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional es de 5 años, que como ya se dijo para los contribuyentes que no pagamos como en mi caso, se cumplieron en el año 2014 ya la Resolución que me impuso el gravamen tiene como fecha mes y día del año 2009. Es a partir de esta fecha que se debe empezar a contar el término de la Prescripción, por lo cual la misma habría quedado configurada a los cinco años, en los mismos día y mes, del año 2014

Por otra parte, hay claridad contundente de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Apoyo Fiscal a las Entidades Territoriales al responder los interrogantes sobre prescripción, las cuales expuse para sustentar la excepción interpuesta, que cito nuevamente:

Establece la DAFT. (Dirección de Apoyo fiscal a las entidades territoriales)

¿Qué se requiere para que opere la prescripción?

La prescripción extintiva o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

(i) El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la obligación, ya sea por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración

departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el término para que opere la prescripción.

(ii) La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.

(iii) Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor. Es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehúse al pago de la obligación, a título de ejemplo se podrían utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.

Así las cosas, en los casos de solicitud de prescripción, siempre y cuando se verifique el transcurso del tiempo y los requisitos a que haya lugar, se recomienda a las administraciones tributarias la declaratoria de la prescripción, toda vez que de esta forma se evita acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y deudores de la entidad territorial; además, se evitan posibles procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa por los daños que una renuencia injustificada, por parte de la administración en la declaratoria de la prescripción, pueda producir.

Dice la DAFT. **Contabilización del término de prescripción de la acción de cobro**

" El término de prescripción para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una entidad territorial es de cinco años, con base en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 que remiten al Estatuto Tributario Nacional.

El término de cinco años se cuenta a partir de los siguientes casos señalados en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional: Artículo 817.

Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

Las circunstancias referidas a aquellos tributos de las entidades territoriales que imponen a los sujetos pasivos la obligación formal de declarar (impuesto de industria y comercio, impuestos al consumo) se encuentran reguladas en la norma transcrita a efectos de la determinación del punto de inicio del término de prescripción. No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales la administración es quien determina la obligación tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro –cuando la liquidación la realiza la administración departamental–, contribución de valorización, etc.) surge la pregunta de,

DAFT ***A partir de qué momento se cuenta el término de prescripción de la obligación tributaria?***

La respuesta es desde el momento en que el acto oficial de determinación del gravamen queda en firme; bajo estos parámetros, resulta imperioso que las entidades territoriales, en todos los casos en que las normas vigentes no exijan la declaración y liquidación privada del tributo, expidan dentro de los términos legales los actos administrativos respectivos (actos de determinación oficiales) los cuales, una vez ejecutoriados, servirán de título ejecutivo y de documento respecto del cual se contabiliza el término de cinco años previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.

En este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el título ejecutivo para que se inicie el conteo del término de prescripción, esto no implica que la administración tributaria territorial para dicha expedición cuente con un plazo indefinido, pues la norma prevé este aspecto como se señala a continuación:

Actos que interrumpen el término de prescripción de la acción de cobro

Es generalizada la creencia en las administraciones territoriales, que la prescripción se interrumpe con la notificación del acto administrativo de determinación oficial del gravamen o la resolución en la que se impone una sanción.

Lo anterior no tiene fundamento legal, motivo por el cual resulta forzoso tener como referente para este aparte el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional (modificado por el artículo 81 de la Ley 6 de 1992) que establece:

Artículo 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. *El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.*

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la

terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. Así lo que se interrumpe es la acción de cobro que impone la existencia de un título ejecutivo, motivo por el cual la expedición del mismo no puede interrumpirlo. Para precisar la idea resulta necesario advertir que tienen que presentarse los siguientes casos para que se interrumpa el término de prescripción: (i) Notificación del mandamiento de pago. Una vez se inicia el proceso de cobro administrativo coactivo, al deudor se le notifica el mandamiento de pago en los términos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y sólo hasta el momento en que se logre realizar la notificación se podrá hablar de la interrupción del término de prescripción que se encontraba corriendo.

Otorgamiento de facilidades para el pago**. Estas facilidades deben concederse en los términos señalados en el mismo Estatuto Tributario Nacional, como quiera que esta es una norma de interrupción especial dadas las especiales circunstancias previstas en este texto normativo; **MOTIVO POR EL CUAL NO RESULTAN ADMISIBLES LA CONCESIÓN DE PLAZOS ADICIONALES, LAS AMNISTÍAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DIFERENTES COMO FORMAS DE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN.

(iii) Admisión del sujeto pasivo en procesos concursales y las liquidaciones forzosas administrativas.....

En lo que respecta a la declaratoria de prescripción, esta será decretada, una vez comprobada su ocurrencia, de oficio o a petición de parte, por el funcionario competente de acuerdo con la norma interna del departamento, distrito o municipio."

Así las cosas las modificaciones contenidas en los actos administrativos arriba mencionados por medio de los cuales se pretende modificar la fecha de expedición notificación y ejecutoria de LA RESOLUCIÓN DEL AÑO 2009 que recibí y que establecía que " POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN No. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 , pues dichas modificaciones hacen referencia UNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMINISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, ya que dejan intactos los demás elementos de la Resolución por medio de la cual se me asignó la contribución de valorización.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, queda claro que la ampliación del plazo adicionales para el cumplimiento de la obligación de pagar la contribución de valorización para nada modifica el término de la prescripción establecido legalmente.

Asi las cosas, limitando en este acápite el análisis de la conversión o modificación de actos atributivos o ampliatorios de derechos, cabe concluir que no se trata de imponerle al particular, en este caso la suscrita, un acto administrativo distinto al de la Resolución que le asigno la contribución de Valorización, sino de ofrecerle un modo de obtener mas plazo para el pago. Pretender que estas modificaciones enervaron la Resolución impositiva de septiembre del 2009 es por decir lo menos un exabrupto jurídico.

SEGUNDO: SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

No obstante la claridad de los dispuesto en el art. 817 del Estatuto Tributario, la Administración Municipal hace una amañada interpretación para justificar sus fines, olvidando el principio general de interpretación jurídica «donde la ley (y la jurisprudencia) no distingue, no le es dado al intérprete distinguir»,

Tampoco tiene en cuenta la Administración Municipal que EL ESTATUTO TRIBUTARIO ES UNA LEY ESTATUTARIA, desconociendo así que siendo la legislación fuente principal del derecho, se debe considerar que dentro de las leyes hay que atender a su jerarquía. La jerarquía hace relación a la primacía de una norma respecto a otra u otras. En Colombia la legislación está integrada así:

- La Constitución
- La ley en sentido material (leyes expedidas por el Congreso, tratados internacionales y decretos con fuerza de ley),
- Los actos administrativos en el orden nacional;
- Las Ordenanzas de las Asambleas; l
- Los Acuerdos de los Concejos Municipales y
- Los actos administrativos de los gobernadores y los alcaldes.

El ordenamiento jurídico colombiano supone entonces una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución.
Así las cosas, la supremacía de las normas constitucionales es indiscutible. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que le siguen en la escala jerárquica

Las de Inferior categoría, deben resultar acorde con las superiores y así lo estableció La Corte,mediante Sentencia CC—131 de1993, en la que expresó:
"..La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquier otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la república debe sujetarse en primer lugar a la Constitución"

De otra parte, el artículo 2º Del Código Contencioso Administrativo, establece:
"Los Funcionarios tendrán en cuenta que la actuación Administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.."

Las leyes estatutarias constituyen un tipo especial de ley, por medio del cual el Congreso debe regular ciertas materias, que por su importancia o trascendencia se convierten en una especie de "leyes reforzadas caracterizadas por tener una mayor vocación de permanencia debido a las exigencias particularmente severas que rigen su tramitación" En otras palabras, como lo ha señalado la Corte Constitucional, " *se trata de "leyes fundamentales para la regulación de asuntos medulares", señalados expresamente por el Constituyente en la construcción del modelo político y jurídico que promueve la Constitución de 1991"*

De acuerdo a los anterior, pretender que con un acto administrativo, emanado de la administración municipal, que en la jerarquía de las normas ocupa el último lugar, la entidad pueda interpretar para modificar lo establecido respecto de la prescripción en una ley estatutaria como lo es el Estatuto Tributario y fundamente dichas modificaciones con disposiciones sobre plazo y exigibilidad de la obligaciones contenidas en el Código civil, no tiene ninguna posibilidad de aceptación en nuestro ordenamiento jurídico.

De lo anterior y acorde con lo expresado podrá concluirse que el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, con la actuación aquí impugnada, además de estar declarándome deudora de lo no debido, vulneró el debido proceso y las disposiciones propias de dicha actuación administrativa.

PETICION

Solicito que se revoque y deje sin ningún efecto, el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. Resolución No. 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016 que declara no probada la excepción propuesta y ordena seguir adelante con la ejecución, con fundamento además de todas las razones expuestas en el presente escrito, en el que he demostrado que al expedir dicho Acto Administrativo que simultáneamente sirve de título ejecutivo y de mandamiento de pago, el funcionario violó el debido proceso al fundamentar su decisión, extralimitando en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

En consecuencia, el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, debe declarar la prosperidad del recurso de reposición interpuesto en el presente escrito, Ordenar el archivo del proceso de cobro coactivo y la cancelación de los gravámenes de valorización que pesan sobre los inmuebles de mi propiedad.

Atentamente

ALICIA OSORIO GONZALEZ,
C.C. 38969635 Cali

Dirección:
Avda 3-Oeste #14-34
Apto 403 -
Tel. 3009361637
aliciaosorio2002@yahoo.com.

10

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(NOVIEMBRE 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

El Subdirector de Tesorería de Rentas (E) del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales conferidas por la Resolución No. 4122.0.21.1247 del 11 de octubre de 2016, el Decreto No. 4473 de 2006, el Estatuto Tributario Nacional y el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de 2012, con sus modificaciones o adiciones y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería de Rentas en uso de su facultad de Cobro Coactivo libró MANDAMIENTO DE PAGO dentro del proceso de cobro coactivo por el predio No. B006602240000 el día 17 de Noviembre de 2015 mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 a cargo de la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 por el no pago de la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.509.854) de la obligación por la contribución de valorización por beneficio general plan de obra 556 "21-MEGAOBRAS" contenida en el título ejecutivo complejo conformado por los actos administrativos contenidos en las siguientes Resoluciones:

Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009
Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009.
Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009.
Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009.
Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010.
Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010.
Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, se modificó el plazo inicial para pago a cuotas que se había fijado inicialmente en 60 cuotas, ampliándolo a 90 cuotas mensuales y el plazo para pago de contado hasta el 31 de diciembre de 2009.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009, Modificó parcialmente el Articulo 4 de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009, modificado por el Art 1 de la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, en el sentido de modificar el plazo para el pago de contado hasta el 31 de enero de 2010

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010, Modifico la Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010, estableciendo que el plazo para pago de contado era hasta el 30 de junio de 2010.

Que vencido el plazo la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal dependencia responsable del manejo de dicha Renta, expidió la Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO POR BENEFICIO GENERAL PARA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A VAFOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, declarando además de la exigibilidad, en el Artículo segundo de Dicho acto que : *"la presente resolución presta merito ejecutivo una vez en firme y debidamente ejecutoriada"* lo cual se cumplió el día 29 de junio de 2015.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTADO

Que el Mandamiento de Pago dictado mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 del día 17 de noviembre de 2015, se notificó por aviso mediante envió recibido el día 26 de enero de 2016, según guía de entrega de mensajería especial 10612130556 a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 en su condición de propietaria del predio B006602240000 y ejecutada dentro del proceso de cobro coactivo calidad que fue debidamente acreditada y la cual no se discute en el escrito de excepciones.

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, presentó el día primero (01) de febrero de 2016 - con radicación Orfeo 2016-41110-008063-2, escrito de excepciones dentro del término legal, sustentando su defensa con los siguientes argumentos:

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, con el propósito de sustentar las excepciones propuestas al mandamiento de pago del proceso coactivo presento los siguientes argumentos y excepciones:

FUNDAMENTOS DE DERECHO INVOCADOS POR LA PARTE EJECUTADA:
Estatuto Tributario Nacional, Libro V, artículos 817 y 831

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

EXCEPCIONES PROPUESTAS:

La parte ejecutada propone como excepción lo siguiente:

- La prescripción de la acción de cobro.

ANALISIS DEL CASO:
EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO ALEGADA POR LA PARTE EJECUTADA:
ARGUMENTOS DE LA PARTE EJECUTADA:
La excepción de prescripción propuesta la fundamenta al invocar lo siguiente:
La prescripción extinta o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

i. El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la obligación, ya será por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el termino para que opere la prescripción
ii. La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.
iii. Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor, es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehusé al pago de la obligación, a título de ejemplo se podría utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.

.....Así las 1cosas, las modificaciones que enumeran la No 4151.0.21.24772 de octubre 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 200, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESCRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

No. 4111.02.10169 DE SEPTIEMBRE 04 de 2009, pues dichas modificaciones hacen referencia ÚNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN...

...Como consecuencia de lo anterior, la administración del Municipio de Santiago de Cali, debe decretar Prosperidad de la EXCEPCION DE FONDO PROPUESTA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE FECHA SEPTIEMBRE 4 DE 2009, que asigno la contribución y que quedo en firme el 15 de diciembre de 2010, encontrándose por tanto prescrita la acción de cobro de la obligación de pagar la contribución en ella contenida, pero que sin embargo el Municipio utiliza como generadora del cobro contenido en el mandamiento de pago establecido en la Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015 acusada, por ser violatorias de la Constitución y la Ley, de acuerdo a las disposiciones citadas, toda vez que mediante la misma se está cobrando y haciendo exigible una obligación que se encuentra prescrita debido al transcurso del tiempo, 5 años, razón por la cual el municipio de Cali perdió el derecho de ejercer la acción de cobro coactivo a pesar de lo cual ya libro el mandamiento de pago por medio de la citada Resolución No. 4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015.

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER RESPECTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO:

Para resolver la excepción de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización, es necesario tener presente que la contribución de valorización objeto del presente cobro, ES UNA RENTA CUYO COBRO ESTÁ SOMETIDO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO, por lo tanto no es posible aplicar los términos de prescripción de la acción de cobro de que trata el articulo 817[1] invocado por la parte

[1] Articulo 817. *Término de prescripción de la acción de cobro.* La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas respectivas".

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

ejecutada, toda vez que estamos frente a una contribución cuya exigibilidad depende del cumplimiento de un plazo establecido por la administración.

Que como ya se dijo en el acápite de los antecedentes del presente acto, la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, (ejecutoriada el 29 de Junio de 2015) por la cual se HACE EXIGIBLE EL PAGO de la contribución de valorización por beneficio general para construcción del PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, acto administrativo que para el asunto que nos ocupa goza de presunción de legalidad y por lo tanto este despacho lo tendrá para efectos de contar el término de prescripción alegado, teniendo en cuenta que el cobro de la obligación tiene un plazo suspensivo que suspende el ejercicio del derecho y con ello, el termino del articulo 817 numeral 4 del Estatuto Tributario Nacional alegado por la ejecutada.

EFECTOS DEL PLAZO SUSPENSIVO

A.- Antes del vencimiento:

Mientras el plazo está pendiente, la obligación existe ya, sólo que como lo expresa el inciso primero del articulo 1551 del Código Civil[2] su cumplimiento se ha diferido hasta cierta época.

Consecuencias del plazo suspensivo:

a). Inexigibilidad de la obligación: Estando el plazo establecido a favor del deudor, que es la hipótesis normal y corriente, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento de aquel. Las acciones del acreedor, tales como la acción ejecutiva y la acción indemnizatoria, están suspendidas entre tanto. Art. 1715 Código Civil.

[2] Código Civil: ARTÍCULO 1551. DEFINICION DE PLAZO. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

b). Imprescriptibilidad del crédito: No hay lugar a que ella comience a correr antes del vencimiento del plazo, porque la inacción del acreedor es forzada, ya que se le prohíbe exigir el cumplimiento de la obligación. Artículo 1553[3].
c). Validez del pago: El artículo 1552[4] establece que lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. La obligación existe antes del vencimiento del plazo y, por consiguiente, el pago que haga el deudor tiene causa suficiente, de donde se concluye que el deudor no puede repetir lo pagado, alegando que el pago no era debido, aun en el caso de que el deudor haya pagado por error, como si ha creído que el plazo se encontraba vencido, el pago es firme, porque corresponde a una obligación existente en el momento de verificarse aquel. Art. 2313.
d). Medidas conservativas: El acreedor puede solicitarlas, aunque el término no haya vencido. El legislador no establece expresamente este efecto, pero como según el artículo 1549 del Código Civil el acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas a pesar de que mientras pende la condición la obligación no existe, se concluye que el acreedor a plazo, cuyo derecho si existe durante el plazo, tiene igual o mejor derecho a que se tomen tales medidas.

B.- DESPUÉS DEL VENCIMIENTO:

Vencido el plazo, la obligación se hace exigible, es decir, se transforma en obligación pura y simple, de donde se colige:

1.- El acreedor puede ejercer todas las acciones que le competen.
2.- El término de la prescripción del crédito comienza a contarse. Art. 2535[5] y 4, y por regla general, el deudor queda constituido en mora. Art. 1608[6] Ord. 1°. Así las cosas y teniendo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero, declaró la exigibilidad del pago de la contribución de valorización por beneficio general para

[3] ARTICULO 1553. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION ANTES DEL PLAZO. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1o.) Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia.
2o.) Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones.
[4] ARTICULO 1552. PAGO ANTICIPADO. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones.

[5] ARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.

[6] ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(NOVIEMBRE 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

construcción del PLAN DE OBRAS 556 a favor DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, este solo empezó a correr a partir de la ejecutoria, hecho que ocurrió el día 29 de Junio de 2015, por lo tanto no ha operado el fenómeno de la prescripción alegada, en efecto la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta tampoco está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que la mencionada resolución goza de la fuerza ejecutoria para mantener y proseguir el cobro a la ejecutada. Acorde con lo anotado, puede afirmarse que la obligación por la contribución de valorización objeto del presente cobro es una obligación de plazo, cuyo cumplimiento solo puede exigirse después del vencimiento del mismo, exigibilidad que se cuenta a partir del 29 de junio de 2015 por tal razón no ha operado la prescripción de la acción de cobro alegada por la parte ejecutada.

Para reforzar lo anterior, es necesario interpretar el artículo 817 del estatuto tributario invocado por la parte ejecutada, es importante analizar la diferencia entre la exigibilidad de la obligación y el ejecutoria del título ejecutivo que alega la parte ejecutada, pues no es acertado afirmar que la exigibilidad de la obligación comienza cuando se tiene un título ejecutivo, porque precisamente éste surge como consecuencia de aquella y si bien el título se constituye en la base de ejecución para obtener el pago, dentro de sus características, al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra la de contener una obligación expresa, clara y exigible; es decir, se impone la existencia de una obligación exigible, lo que indica que no es que a partir del título la obligación sea exigible, sino que la exigibilidad es una condición para la procedibilidad de la ejecución, que para el presente caso depende del plazo.

En esta forma, los plazos que señala la administración para la cancelación de las obligaciones provenientes de impuestos tasas o contribuciones, determinan la fecha de exigibilidad de las respectivas obligaciones a cargo del contribuyente.

En este orden de ideas, la obligación de valorización para cuya cancelación el Gobierno Municipal otorgó diferentes plazos respecto de una misma obligación, permitiendo pagar la obligación de valorización por cuotas en fechas determinadas, serán exigibles dentro del término legal de 5 años contados desde la fecha en que se hizo exigible tal como se declaró en la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, ejecutoriada el día 29 de junio de 2015.

Así las cosas, se tiene que la Subdirección de Tesorería de Rentas Municipales haciendo uso de las facultades que le han sido otorgadas por la administración

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

los cinco (5) años siguientes a la declaratoria del vencimiento del plazo para pagar, en tal sentido, se declarará no probada la excepción de prescripción de la acción de cobro.

En mérito de lo expuesto éste Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta por la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar seguir adelante con la ejecución y proceder al embargo y remate de los bienes inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país; así como el posterior avalúo y remate de los mismos. Limítese el embargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional y dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes

ARTÍCULO TERCERO. - CITAR a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, con el fin de que comparezca ante este Despacho para notificarse del contenido de la esta resolución, haciéndole entrega de una copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión procede el recurso de reposición ante éste Despacho, dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 834 del Estatuto Tributario. Para ello envíese las comunicaciones pertinentes a la siguiente dirección: Avenida 3 Oeste Nro. 14 - 34 Apto. 402 Edificio los Juncos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 21 días del mes de Noviembre de 2016

LUIS ALFONSO PARRA SAENZ
Subdirector de Tesorería de Rentas (E)
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyecto y Elaboro: Alejandro Zuluaga – Asistencial PS – Grupo Cartera
Reviso: Gloria Cecilia Cuellar de Quintana– Profesional Universitaria - Coordinadora -Grupo Cartera.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

El Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, en uso de sus facultades legales y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, "por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", en el Decreto No. 411.0.20.0673 del 06 de diciembre de 2016, "por el cual se adopta el manual especifico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del Municipio Santiago de Cali", en el Decreto No. 4112.010.20.0704 del 01 de Noviembre de 2017 "por el cual se realiza un nombramiento ordinario en la Administración Central Municipal", en el Decreto 4112.010.20.0386 del 1° de junio de 2017 "Por el cual se delega la función de Cobro Coactivo y la prescripción de obligaciones a favor del Municipio en el Jefe de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería Municipal", en el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de Febrero 28 de 2012 y el Estatuto Tributario Nacional, y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería Municipal-Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo resolvió mediante acto administrativo contenido en la resolución número 4131.3.21.170845 de Noviembre 21 de 2016, las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 4131.3.21.117752 de noviembre 17 de 2015, acto administrativo que declaro no probadas las excepciones propuestas por la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 38.969.635, en calidad de propietaria contribuyente del predio B006602240000.

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ en su calidad de propietaria contribuyente, presentó dentro del término legal oportuno ante la administración municipal, recurso de reposición mediante radicado orfeo 20174173020014676 2 de febrero 2 de 2017, en contra de la resolución 4131.3.21.170845 del 21 de noviembre de 2016, en concordancia con el artículo 186 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

Que el recurso de alzada en contra de la resolución que declara no probadas las excepciones ya enunciada, en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, es procedente resolver de fondo sobre las pretensiones del actor, las cuales

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

se resumen en que se revoque la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2016, y en consecuencia se declaren probadas las excepciones enunciadas en su pretensión inicial ya resuelta, las cuales serán objeto de motivación en adelante como lo expresa de forma posterior es decir la Prescripción de la Acción de Cobro.

Con respecto a la falta de ejecutoria parcial del título aducida por el actor, y consagrada en el numeral tercero del artículo 182 del Decreto Tributario 0139 de 2012, sea la oportunidad para precisar que las actuaciones que sirven de fundamento para la administración en aras de iniciar el proceso de Cobro Administrativo Coactivo, y es así como en principio se observó dentro de las piezas procesales del predio B006602240000, que el título ejecutivo es complejo y que además se surtieron las instancias procesales como la notificación, ejecutoriedad y firmeza de los actos administrativos. Para tal efecto mírese como el título ejecutivo que sirve de fundamento para el cobro coactivo se encuentra amparado por norma especial como lo es el Estatuto de Valorización municipal 0178 de 2006, que contempla en su artículo 87: *"Título Ejecutivo. Constituye título ejecutivo y fundamento legal para el cobro de la Contribución de Valorización por Jurisdicción Coactiva, el acto administrativo ejecutivo donde conste la existencia de la deuda fiscal, exigible a cargo del contribuyente expedido por el Secretario de Infraestructura y Valorización".*

De igual manera véase que el actor en su debido momento procesal no interpuso los recursos de ley contra el acto administrativo inicial, y no propiamente contra el título ejecutivo antes mencionado, situación que en la instancia actual es objeto de recurso por parte del actor, entiéndase así las cosas que el título ejecutivo contrario a lo expresado por el actor si tiene fuerza ejecutoria y eficaz de pleno derecho, habida cuenta que el título de exigibilidad proferido por la Secretaría de Infraestructura y contenido en la resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015, constituye el elemento de exigibilidad que se requiere en todo título ejecutivo y que además sea legalmente exigible como se deduce del artículo 87 ya superado. El actor indica en su recurso de alzada que los actos administrativos que contienen los plazos modificatorios respecto del plazo inicial no surtieron su etapa de notificación, situación de la que ha de apartarse la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, toda vez que al ser un acto de carácter general porque como se ha manifestado el plazo no beneficiaba a un contribuyente en particular, caso contrario el objeto de la ampliación del plazo consistía en ampliar los términos para que los contribuyentes pudiesen cumplir con el pago de la contribución, ello en razón del clamor general sobre la ampliación de los mismos, situación que la administración cumplió y al ser actos de carácter general fueron publicados en el boletín oficial de la entidad de la siguiente manera: Resolución

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

Distribuidora o inicial 0169 de 2009, publicado en el boletín oficial 165 de septiembre 8 de 2009; Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009 publicada en el boletín oficial 169 de septiembre 14 de 2009; Resolución 411.0.21.0253 publicada en el boletín oficial 2017 de noviembre 9 de 2009; Resolución 411.0.21.0329 publicada en el boletín oficial 242 de diciembre 31 de 2009; Resolución 411.0.21.0019 publicada en el boletín oficial 025 de febrero 8 de 2010; Resolución 411.0.21.0056 publicada en el boletín oficial 063 de abril 6 de 2010. En este orden de ideas menester precisar que las modificaciones del plazo si surtieron su proceso legal, y es oportuno observar lo que expresa la ley 1437 de 2011 en tratándose del acto administrativo de carácter general y concreto en principio establece el artículo 65: Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.

Verbigracia de lo expuesto en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo al constatar que las modificaciones al plazo inicial, se hicieron en concordancia con las disposiciones legales del caso, consagradas tanto en la norma especial de valorización como en la ley contenciosa antes citada.

En este orden de ideas también considera conveniente la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, referirnos a las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo, por lo cual es necesario revisar primero el artículo 99 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece: "Prestaran mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos":

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor

Que la fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aun en contra de la voluntad de los administrados, y los actos que queden en firme al concluir el Procedimiento Administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato, los actos necesarios para su cumplimiento.

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución de la voluntad de los interesados.

Así las cosas el acto administrativo tiene carácter ejecutorio y produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la administración para hacer cumplir las disposiciones contenidas en sus actos administrativos, situación contraria si flagrantemente y bajo el arbitrio de la administración no se cumplen los postulados mínimos de notificación y ejecutoriedad.

En otrora ha sostenido la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo que la falta de ejecutoria debe alegarse en sede contenciosa siempre y cuando en el proceso de cobro coactivo se hayan surtidos los efectos propios de la notificación, ejecutoriedad y firmeza y aun así no se hayan interpuesto los recursos de ley, con ocasión de ello como anteriormente ha sostenido y reiterado la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de acuerdo a la sentencia 16976 del 26 de octubre de 2009 con ponencia del magistrado Héctor Romero Díaz reitera lo ya dicho en Sentencia de 29 de septiembre de 2005:

"En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 [5] del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico".

La Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo considera que el acto administrativo a recurrir por el actor y alegar la falta de ejecutoria parcial del título en su debido momento fue la resolución de exigibilidad proferida por la Secretaría de Infraestructura municipal, dado que el acto administrativo de mandamiento de pago surtió su etapa de notificación debida, prueba de ello que el recurrente haya propuesto las excepciones de ley que consagra el Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

De comento para el proceso, es conveniente precisar en lo que respecta a la Prescripción de la Acción de Cobro invocada nuevamente como causal de excepción, como se expresó en el mandamiento de pago, la contribución por valorización constituye un régimen especial que está sometido al vencimiento del plazo para el pago de la contribución.

Sin embargo la administración en consonancia con lo normado por el artículo 167 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, "Por medio del cual se expide el Procedimiento Tributario del Municipio de Santiago de Cali", interrumpió la prescripción con la notificación al mandamiento de pago.

Es por ello que en el presente acto administrativo se pronunciará la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo en lo que respecta al recurso de reposición interpuesto, por ser este el recurso que ha estipulado la ley en lo que a excepciones y recursos en el Proceso de Cobro Administrativo Coactivo se refiere. Obsérvese que ni el Estatuto Tributario ni el de valorización contemplan la apelación como elemento integral del Procedimiento de Cobro Administrativo Coactivo.

Consideramos oportuno precisar el alcance jurídico del recurso de reposición, en el sentido de indicar que dicho recurso goza de especial relevancia, toda vez que la finalidad del mismo es que se presenten hechos, eventos o situaciones sobrevinientes que no han sido conocidos en el proceso inicial, situaciones que si se hubieren conocido en principio, otra suerte o finalidad se habría desatado del fallo inicial.

En este orden de ideas, considera la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo que no tendrá vocación de prosperar el recurso interpuesto, habida cuenta que una vez analizado el mismo, no encuentra hechos sobrevinientes que conduzcan a ser analizados de forma diferente, bajo el entendido que el argumento esencial tanto del recurso como el de las excepciones al mandamiento de pago instauradas por el actor, en esencia aluden la Prescripción de la Acción de Cobro que enuncia el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional, hecho que en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo ha quedado superado en lo que al fenómeno prescriptivo se refiere.

Así las cosas los actos administrativos son aquellos que deciden resolviendo definitivamente algún asunto o actuación administrativa, situación que se presenta en el caso que nos ocupa, toda vez que no contempla las normas relativas al proceso tributario adoptado por el municipio de Santiago de Cali mediante el decreto

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

extraordinario 0139 de 2012, la segunda instancia en lo que a excepciones se refiere, es decir es taxativa la norma en tratándose del procedimiento de las excepciones tal como es establecido por el artículo 182 del Procedimiento Tributario Municipal consagrado en el decreto mencionado.

En virtud de lo expuesto la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el acto administrativo contenido en la resolución 4131.3.21.170845 del 21 de noviembre de 2016, mediante el cual se resuelven las excepciones propuestas por la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 38.969.635, actuando en calidad de contribuyente propietaria del predio B006602240000.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena seguir adelante con la ejecución y proceder al embargo y remate de los bienes inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país; así como el posterior avalúo y remate de los mismos. Limítese el embargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional y dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR del presente acto administrativo a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ de las condiciones civiles ya conocidas en calidad de propietaria del predio B006602240000.

ARTÍCULO CUARTO: LIBRAR LOS OFICIOS RESPECTIVOS para dar cumplimiento a la presente providencia a todas las entidades competentes.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 12762 DE 2017
(Diciembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 4131.3.21.170845 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 185 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 21 días del mes de Diciembre de 2017.

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO
Jefe de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyectó: Alejandro Zuluaga. Técnico Auxiliar PS. OTOCC
Revisó: Francisco Mario López Casanova. Profesional Universitario G-2. OTOCC

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20184131032005672 1**
Fecha: **12-04-2018**
TRD: **4131.032.13.1.953.005672**
Rad. Padre: **20174173020014676 2**

ALICIA OSORIO GONZALEZ
Carrera 62 # 1-07
Barrio Pampalinda
La Ciudad

Asunto: Citación para notificación personal de la Resolución No 4131.032.21.12762 del 13 de Diciembre de 2017 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra Resolución que resuelve una solicitud de Prescripción.

Comedidamente se le solicita comparecer al Centro de Atención al Contribuyente de la Subdirección de Tesorería Municipal, Oficina Técnica Operativa Cobro Coactivo, ubicado en el CAM primer piso, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM. jornada continua, de lunes a viernes dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de esta citación, para efectos de surtir la notificación personal de la Resolución por la cual se resuelve un Recurso de Reposición, de conformidad con el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

Nota: Para efectos de la notificación personal deberá presentar Documento de Identificación y fotocopia del documento. Para la notificación a través de Apoderado presentar Poder legalmente conferido, Tarjeta Profesional y Documento de Identificación. Para la notificación de Representante Legal presentar Certificado de Existencia y Representación Legal y Documento de Identificación.

Cordialmente

LIA ELEONORA CADAVID
Profesional Universitario
Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Subdirección de Tesorería Municipal

Proyectó: Diego Javier Guerrero Aguirre – PS Notificaciones

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

Santiago de Cali, Julio 30 de 2018

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
No. 2018-4173010-112076-2
Asunto: REVOCATORIA DIRECTA CO BRO MEGAOBRAS -
Fecha Radicado 02/08/2018 02:57:06
Usuario Radicador ORLANDO.ARANGO Folios:
Destino Subdireccion de Tesoreria Municipal
Remitente (CIU) ALICIA OSORIO GONZALEZ ID: 38969635
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldia, Linea 195
20184173010112076 2

Doctor
EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO
Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Departamento Administrativo de Hacienda
Municipio de Santiago de Cali
Ciudad

Ref. : Petición de Revocación Directa, de la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017

ALICIA OSORIO GONZALEZ, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la C:C:38.969.635 de Cali, abogada Titulada, con T.P. No. 25.308 del C.S. de la J., obrando en mi propio nombre y representación, con base en las consideraciones de hecho y de derecho que se relacionan a continuación presento a usted, para que acceda a atenderlas, las Peticiones que mas a<delante le formularé.

I.CUESTIÓN PREVIA

Actúo en mi propio nombre y representación, en mi condición de propietaria del apartamento distinguido con el N. 402 y su respectivo garaje, ubicado en el Edificio LOS JUNCOS en la Avenida 3 Oeste No.14-34 de esta ciudad de Santiago de Cali, para solicitar la Revocatoria Directa de la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, que me fue notificada el día 25 de junio de 2018.

Pretendo que pierda la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017 pierda su valor, invocando para ello los presupuestos legales que determinan la procedencia de la REVOCATORIA DIRECTA que solicito, toda vez que en la Resolución acusada se encuentran claramente determinados dichos presupuestos a saber:

PRIMERO: a) por ser manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley.
SEGUNDO: ; b) por no estar conforme con el interés público
TERCERO: c) por causarme un agravio injustificado.

lo cual demostraré seguidamente.

II. HECHOS Y OMISIONES

1.El día 16 Febrero de 2017 encontrándome dentro del término legal dispuesto para ello, presenté Recurso de Reposición ante la Subdirección de la Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, en contra de la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, Recurso que fue radicado bajo el No.20174173020146762, en el cual solicitaba:

PRIMERO: "Solicito que se revoque y se deje sin ningún efecto el Acto Administrativo contenido Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, que declara no probada la excepción propuesta y ordena seguir adelante con la ejecución, con fundamento además de todas las razones expuestas en el presente escrito, en el que he demostrado que al expedir dicho Acto Administrativo que simultáneamente sirve de título ejecutivo y mandamiento de pago, el funcionario violó el debido proceso al fundamentar su decisión, extralimitando en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

2. El día 27 de Junio de 2018, recibí un correo electrónico enviado a las 11 AM, mediante el cual se surtía la notificación que adjunto como **PRUEBA NO. 1**, de la Resolución No. 4131.032.21. 12762, de fecha Diciembre 21 de 2017, por lo cual acudí a notificarme personalmente a la dependencia correspondiente de la Secretaria de Hacienda Municipal a fin de que se me entregara la citada Resolución, toda vez que aunque se me anunciaba su envío en la notificación enviada a mi correo electrónico ese envío no se efectuó por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

3. Recibida la Resolución No. 4131.032.21. 12762 al proceder a efectuar su estudio, encontré que:

- Efectivamente en la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, se me notifica que se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto el día 16 Febrero de 2017 en contra de la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, Recurso que fue radicado bajo el No.20174173020146762.
- Que si bien la Resolución No. 4131.032.21. 12762 objeto de esta Petición de Revocatoria, fue expedida en la fecha Diciembre 21 de 2017, la misma no se me notifica en debida forma por el correo electrónico de fecha 27 de junio de 2018, sino cuando acudo a notificarme personalmente el día 30 de junio de 2018.

4. Ahora, estableciendo los lapsos de tiempo transcurridos entre los tres eventos, fecha de la Resolución Recurrida la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, fecha del recurso de apelación interpuesto 16 Febrero de 2017 y fecha de la notificación de la resolución, cualquiera de las fechas bien sea la

de la notificación por medio electrónica o la efectuada personalmente, encontramos que:

- El Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, se interpuso el día 16 Febrero de 2017.Así las cosas el término que tenía la Administración para resolver el Recurso era de un año, hasta febrero de 2018, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 del Estatuto Tributario, que establece:

"**ARTÍCULO 101: TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS.** El Secretario de Hacienda o su delegado, tendrá un año (1) para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma.

5. Con acuerdo a lo anterior es claro que la notificación de la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto el día 16 Febrero de 2017 se me notificó un año cuatro meses después de que la suscrita presentó el citado recurso, esto es cuando ya se había producido el decaimiento de la Resolución recurrida, la No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016 y de contera se me notificó la citada Resolución No 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, seis meses después de haber sido expedida.

El Decreto Municipal 0523 de junio 30 de 1999, establece:

> *Artículo 139. Término para resolver los recursos.*
>
> *La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.*
>
> *Artículo 141. Silencio administrativo.*
>
> *Si transcurrido el término señalado en el artículo 139, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte así lo declarará.*

LAS NORMAS PROCESALES:

Establece el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil: ***"Observancia de las normas procesales.*** *Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de ley.*

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas".

Igualmente la Constitución Política preceptúa:

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"

Es clara e indiscutible la violación de los términos de procedimiento en la actuación administrativa que nos ocupa, por parte del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, lo cual tiene dos consecuencias en relación con la notificación de la Resolución No. dicha Resolución No 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017,

LA PRIMERA: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

CUANDO SE NOTIFICO LA RESOLUCIÓN NO 4131.032.21. 12762 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2017 A LA SUSCRITA YA SE HABIA CONFIGURADO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, UN AÑO Y CUATRO MESES DESPUES DE INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACION:

Establece el Estatuto Tributario:

> *"**ARTÍCULO 101: TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS.** El Secretario de Hacienda o su delegado, tendrá un año (1) para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma.*
>
> ***ARTÍCULO 103: SILENCIO ADMINISTRATIVO.** Si transcurrido el término señalado en el artículo 101 del presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración de oficio o a petición de parte, así lo declarará."*

LA LEY 1437 DE 2011 Dispone:

ARTÍCULO 84. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código.

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la configuración del silencio administrativo positivo genera un acto presunto en el cual se decide a favor del

peticionario. Dicho acto presunto lo prueba la escritura pública, que se elabora al presentar ante notario constancia o copia de la presentación de la petición y una declaración jurada en la que conste el hecho de no haber recibido notificación alguna de solución a la solicitud, dentro del término dispuesto para ello.
Es la escritura pública de protocolización del silencio administrativo positivo junto con sus anexos (constancia de la solicitud y declaración jurada) los documentos que generan los mismos efectos que un acto administrativo por ende las autoridades de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011 deberán acatar los derechos que por la decisión positiva se generen a favor del interesado.

La Suscrita cumplió con el requisito de la Protocolización del Silencio Administrativo en la Notaria 15 del Circulo de Cali, como lo pruebo con la Escritura Pública que anexo al presente. Prueba no. 2

ARTÍCULO 85. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, j unto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.

JURISPRUDENCIA . Sentencia 00219 de 2018 Consejo de Estado

"Así las cosas, como lo ha sostenido esta Sección[14], para que se configure el silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: ***i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc.; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo; y iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, se debe entender que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.***

Aunado a lo anterior, se aclara que el argumento esbozado por la entidad demandada, según el cual la contribuyente no informó el cambio de dirección, no constituye un hecho que justifique el vencimiento del término que tenía para notificar la referida resolución, sin embargo, si hubiera lugar a verificar este aspecto, en el expediente consta que en el escrito contentivo del recurso de reconsideración se señaló como dirección de notificación la Calle 94 Nº 7A-47 Bogotá D.C.[26], la misma registrada por la actora en la declaración privada[27], motivo por el cual la demandada

contaba con la información necesaria para notificar en debida forma el acto cuestionado.

Ahora bien, en cuanto a la aducida presentación extemporánea de la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo como requisito para su configuración, la regla general es que tal fenómeno jurídico opera de pleno derecho, por el mero transcurso del tiempo.

En efecto, tanto el Estatuto de Rentas Departamental (Art. 405 de la Ordenanza 026 de 2009), como el Estatuto Tributario Nacional (Art. 734) prevén que sea la Administración quien de oficio o a petición de parte declare la ocurrencia del silencio administrativo positivo. ***«Eso significa que el acto ficto surte efectos, igualmente, a partir del día siguiente a la configuración del silencio administrativo, sin perjuicio del reconocimiento que de esta situación haga la Administración, mediante acto expreso declarativo.[28]»***

Así las cosas, se configuró la falta de competencia temporal frente a la Resolución Nº 0368 del 21 de agosto de 2013 y, por ende, el silencio administrativo positivo, *como lo decidió el a quo, razón por la cual no prospera el recurso de apelación interpuesto por la demandada"*

(Subrayado y Negrilla fuera del texto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION CUARTA
Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA
Radicación número 76001-23-31-000-2002-02196-01(15532)
Actor: FERNANDO GALLEGO QUIROGA.
Demandado: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

"……

Observa la Sala que la Resolución 805 del 25 de octubre de 2001 mediante la cual se falló el recurso de reconsideración incoado por el accionante, se notificó por edicto desfijado el ***3 de abril de 2002*** *(fl. 7 e.), por lo que se realizó por fuera del término legal, ya que el escrito del recurso fue presentado en debida forma el* ***11 de diciembre de 2000*** *y el año venció el* ***11 de diciembre del 2001****, situación por la cual se configuró el silencio administrativo tal como lo declaró el a quo"-.*

DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA.

Ley 1437 de 2011 Artículo 10. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y

jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

LA SEGUNDA: FECHA DE EXPEDICIÓN Y NOTFICACION DE LA RESOLUCIÓN NO. 4131.032.21. 12762 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2017.

Como ya esta demostrado, no obstante que la RESOLUCIÓN NO. 4131.032.21. 12762 tiene como fecha de su expedición DICIEMBRE 21 DE 2017., la misma se me notifica personalmente el dia 30 de junio de 2018, es decir seis mes después de expedida, lo cual se podría considerar como un burdo intento de acomodar los términos legales del procedimiento a favor de la Administración, lo que resulta fallido de acuerdo a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 44:

"..... *La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto."*

Ha establecido el Honorable Consejo de Estado respecto al momento en el cual se debe entender que un acto administrativo se encuentra ejecutoriado:

> *"Para que los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas tengan vocación de ejecutoria, es requisito indispensable que el mismo esté en posibilidad de producir efectos jurídicos y sólo cumplen tal condición las decisiones de la Administración que han sido dadas a conocer a los interesados a través del medio y condiciones de fondo y forma previstas en la ley para el efecto".*

Dicho concepto es reiterado por la jurisprudencia Constitucional en la Sentencia T-1185 de 2004:

> *"La decisión que pone término a una actuación administrativa que no es notificada a las partes vulnera el debido proceso.* ***La ley consagra como sanción su ineficacia (C.C.A. art. 48). Iniciada una actuación administrativa, el acto público que le pone fin, por contener una decisión mediante la cual la administración se inhibe, concede o niega la petición incoada, debe comunicarse en debida forma a la parte interesada, de modo que la conozca y adecúe su conducta a la misma o la impugne, esto es, ejercite el debido proceso****. La notificación es una condición de posibilidad de la ejecución del debido proceso. De ahí que el ocultamiento del acto - que es análogo a su no notificación -, equivale a la vulneración del debido proceso, que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de conocer los actos públicos y ejercitar todos los recursos y acciones que concede la ley." (Subrayado y Negrilla fuera del texto)*

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y las pruebas y requisitos legales que exige la Ley para ello, comedidamente solicito al Doctor **EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO**, Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali:

III.PETICION

1ª. ***PRIMERO***: Que se declare configurado el silencio administrativo positivo frente al recurso de Apelación formulado por la Suscrita, ALICIA OSORIO GONZALEZ, contra la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, proferida por el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali: de conformidad con lo expuesto en este escrito de solicitud de Revocatoria Directa.

2. SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se revoque directamente, en todas sus partes, la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, , que resuelve extemporáneamente el Recurso de Apelación interpuesto el día 16 Febrero de 2017 expedida por usted, en su carácter de Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, en favor de esa Entidad, porque las condiciones de hecho y de derecho existentes justifican la decisión de revocar directamente el acto denunciado.

2ª. **TERCERO**. Que, cumplido lo anterior, y sin más trámites ni dilaciones, ordene al Señor Registrador de Instrumentos Públicos de Cali, cancelar la Anotación No. 009 de fecha 29-01-2010, Radicación No. 2010-6314 correspondiente a la Resolución No. 189 del 04-09 -2009 del Municipio de Cali, Secretaria de Infraestructura y Valorización.

IV.. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente solicitud de revocación directa se funda en la disposición constitucional que establece la prevalencia de sus disposiciones sobre cualquiera otra norma jurídica (Art. 4) de esta forma el acto de cuya revocación se trata, por efecto de la "presunción de legalidad" es "norma jurídica", pues crea la situación jurídica de adjudicatario y extingue la oportunidad de adjudicación para los proponentes rechazados.

La revocación directa es una facultad propia de la administración para dejar sin efecto, directamente, sus propios actos, no obstante que hayan creado una situación jurídica particular y concreta, sin acudir a la jurisdicción en lo contencioso-administrativo;

El régimen se determina así: ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN.

C.C.A. art. 69. Causales de revocación.- Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1°. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley;
2°. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;
3°. Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

En el presente caso ocurren las tres clases de violación:

1°. En la Resolución : la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, es manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; pues hay quebranto de norma superior.

2°. Atenta contra con el interés público; es más: la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017, lo contradice y vulnera puesto que la la Administración quebranta el ordenamiento jurídico que regula una correcta administración de los procedimientos, especialmente en los que afectan directamente a los ciudadanos de forma particular y concreta.

3°. Finalmente, me causa agravio injustificado, puesto que se violó el debido proceso, cercenando mi derecho de utilizar los recursos y acciones que la Ley me concede.

Según la ley (C.C.A., Art. 66), el acto acusado tiene que perder su fuerza ejecutoria, por cuanto no existen los fundamentos de hecho ni de derecho que constituyan su fundamento, como lo he demostrado en el acápite de HECHOS Y OMISIONES, citando las respectivas normas violadas o inobservadas por la administración.

Por otra parte establece el "Artículo 73 (C.C.A.). Revocación de actos de carácter particular y concreto". -Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

"Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales".

"Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos, en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión".

V.PRUEBAS

1. Copia del correo electrónico enviado a las 11 AM, mediante el cual se surtía la notificación de la , la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017que adjunto como **PRUEBA NO. 1**,
2. **Escritura Pública de Protocolización del Silencio Administrativo en la Notaria 15 del Circulo de Cali, con sus anexos que adjunto como Prueba no. 2**

VI. COMPETENCIA

Según el artículo 97 del C.C.A., la revocación directa es un acto obligatorio de competencia reglada, y no discrecional, a cargo del funcionario autor de la decisión, de oficio, o a petición de parte, si existe una de las causales de ley configurada la cual "los actos administrativos deberán ser revocados....", expresión que impide considerarla como una conducta discrecional de la administración.

De acuerdo a lo anterior, Ud. en su calidad de Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, es competente para revocar directamente la Resolución No. 4131.032.21. 12762 de fecha Diciembre 21 de 2017

VII. NOTIFICACIONES

Las que me corresponden pueden ser enviadas a mi correo electrónico **aliciaosorio2002@yahoo.co**.

Atentamente:

ALICIA OSORIO GONZALEZ
C.C.38.969.635 de Cali
T.P.25.308 del C.S.J.

x Avda. 2 oeste # 13-94
apto 401.
-tel. 3002361637

x

11

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20184131032010207 1
Fecha: 25-06-2018
TRD: 4131.032.9.5.1481.010207
Rad. Padre: **20174173020014676 2**

ALICIA OSORIO GONZALEZ
AVENIDA 3 OESTE # 14 – 34 APTO. 402
TELÉFONO: 3002361637
La Ciudad

Asunto: Notificación por correo (Art.13 del Decreto 139 de 2012)

De manera atenta y por medio del presente correo, me permito notificarlo (a) del acto administrativo que se relaciona a continuación:

Nombre del Acto a notificar	Resolución por medio de la cual se resuelve Recurso de Reposición contra Resolución No.4131.3.21.170845 RADICADO: 20174173020014676 2
Consecutivo del acto administrativo	4131.032.21.12762
Fecha del acto	21-Diciembre-2017
Proferido por	Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Procede Recurso	N/A
Dependencia ante la cual se interpone	N/A
Termino para interposición	N/A

Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y el Decreto 139 de 2012.

Atentamente,

LÍA ELEONORA CADAVID
Profesional Universitario
Subdirección de Tesorería Municipal

Elaboró; Myriam Martinez-Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

Anexo: 1 Resolución

NOTARIA QUINCE (15)

DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI

ESCRITURA PUBLICA No: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO (1421)

FECHA: VEINTICINCO (25) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).

ACTO JURÍDICO: SILENCIO ADMINISTRACTIVO POSITIVO (CODIGO 00000416).

OTORGANTE: **ALICIA OSORIO GONZALEZ**, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.969.635 EXPEDIDA EN CALI.

En la ciudad de Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **JULIO** del año Dos Mil Dieciocho (2018), ante el despacho del(la) Doctor(a) **JAVIER FRANCO SILVA**, Notario(a) Quince del Círculo de Cali,

Compareció la señora **ALICIA OSORIO GONZÁLEZ,** de estado civil soltera, mayor y vecina de esta vecindad, titular de la cédula de ciudadanía número 38.969.635 expedida en Cali y declaró bajo la gravedad del Juramento: -- Que el día 16 Febrero de 2017 encontrándome dentro del término legal dispuesto para ello, presenté Recurso de Reposición ante la Subdirección de la Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, en contra de la Resolución No. 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016, Recurso que fue radicado bajo el No. 20174173020-0 146762, y en el cual solicitaba: **PRIMERO:** " Solicito que se revoque y se deje sin ningún efecto el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 4131.3.21 170845 de Noviembre 21 de 2016 que declara no probada la excepción propuesta y ordena seguir adelante con la ejecución, con fundamento además de todas las razones expuestas en el presente escrito, en el que he demostrado que al expedir dicho Acto Administrativo que simultáneamente sirve de título ejecutivo y mandamiento de pago, el funcionario violó el debido proceso al fundamentar su decisión, extralimitando en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

SEGUNDO: En consecuencia, el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, debe declarar a prosperidad del recurso de

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

13/04/2018 10704aBHAQI9BIE 10734VH8CaQMVUCV 17-07-18

Cadena s.a.

reposición interpuesto en el presente escrito, Ordenar el archivo del proceso de cobro coactivo y la cancelación de los gravámenes de valorización que pesan sobre los inmuebles de mi propiedad. ----------

Que la Subdirección de la Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, al cumplirse un año sin haberme notificado ninguna decisión al respecto dentro del término legal estipulado para ello, el cual empieza a correr a partir de la presentación del Recurso, por lo cual transcurrido el plazo señalado por la ley para resolver de fondo, y proferir una decisión, que se debe notificar en debida forma para que surta efectos jurídicos, se configura el Silencio Administrativo Positivo, en los términos del Código Contencioso Administrativo y la ley 142 de 1994, y según lo dispuesto en los artículos 101 y 102 del Estatuto Tributario, que establecen: ------

"ARTÍCULO 101: TÉRMINO PARA RESOLVER LOS RECURSOS. El Secretario de Hacienda o su delegado, tendrá un año (1) para resolver los recursos de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma. ----------

ARTÍCULO 103: SILENCIO ADMINISTRATIVO. Si transcurrido el término señalado en el artículo 101 del presente Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración de oficio o a petición de parte, así lo declarará." ----------

PROTOCOLIZACIONES

Anexo a la presente Escritura Publica copia del Recurso de Reposición presentado a la Subdirección de la Tesorería de Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali y de la Resolución recurrida, distinguida con el No. de radicación 4131.3.21.170845 de fecha noviembre 21 de 2016 .- Copia autenticada de la cédula de ciudadanía del compareciente.----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Leído el presente instrumento a la compareciente, lo aprueba, se ratifica en el y firma por estar en un todo de acuerdo.- se autoriza por insistencia del interesado. **De la identificación biométrica**: Los comparecientes manifiestan que exhiben los documentos de identidad de los cuales son titulares y que son los idóneos para

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

13

Ca279590127

1

No. 2017-4173020-014676-2
Asunto: PRESENTA RECURSO DE RE POSICION CONTRA LA RESOLUCION
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI Fecha Radicado 16/02/2017 11:33:34
Usuario Radicador ADRIANA MARQUINEZ Folios
Destino Subdireccion de Tesoreria Municipal
Remitente (CIU) ALICIA OSORIO GONZALEZ (C) 66969625
Visite Nuestra Pagina - http://www.cali.gov.co
Santiago de Cali - Valle del Cauca - Cam Torre Alcaldia Linea 195
20174173020014676 2

Santiago de Cali, febrero 14 de 2017

Doctor
LUIS ALFONSO PARRA SAENZ
Subdirector DE Tesorería de Rentas (E)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Ciudad

Ref: **Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016**

ALICIA OSORIO GONZALEZ, mayor de edad y vecina de Cali, por medio del presente y dentro del término legal dispuesto para ello, interpongo Recurso de Reposición en contra de la Resolución No, 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016 por medio de la cual se declara no probada la excepción de Prescripción de la Acción de Cobro propuesta por la suscrita y se ordena seguir adelante con la ejecución, fundamentando este Recurso como expongo a continuación:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

SOBRE LAS CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RESOLVER NEGATIVAMENTE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION PROPUESTA POR LA SUSCRITA.

PRIMERO : MODIFICACIONES DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO.411.021.0169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009

Pretende el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Cali, que por el hecho de haber emitido unas Resoluciones, con las cuales MODIFICABA parcialmente cambiando el plazo para el pago a cuotas de la obligación que ordena cobrarme ejecutivamente, con ello constituyó un TITULO COMPLEJO conformado por esas Resoluciones que cito a continuación:

ACTO ADMINISTRATIVOS

- Resolución No.411.021.0169 de septiembre 4 de 2009
- Resolución No.411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009
- Resolución No.411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2009
- ResoluciónNo.411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009
- Resolución No. 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590127
10732aQMVMCVHVC8
17-07-18
Cadena S.A.

- Resolución No. 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010
- Resolución No. 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015

Igualmente pretendeel Departamento Administrativo de Hacienda que con fundamento en este supuesto "título complejo" ha logrado desconfigurar el término de prescripción de 5 años establecido perentoriamente en el artículo 817 del Estatuto Tributario y sobre el cual existe abundante jurisprudencia de nuestras Altas Cortes, para que dicho término empiece a contarse a partir de la fecha de la última Resolución que extiende el tiempo de plazo para el pago de la contribución por valorización en Santiago de Cali.

En mi caso particular la contribución de valorización me fue asignada mediante la Resolución No. 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009, quedando en firme el 15 de noviembre de 2009 mediante Resolución 13355, con la que la Administración me negó los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra y no el 15 de diciembre de 2010, como establece la Administración en la Resolución objeto de este recurso, en el Acápite Análisis del Caso.

Es por ello que atendiendo lo establecido en el numeral 4°., que destaco con negrilla, del Art. 817 del Estatuto Tributario interpuse la prescripción es una excepción que pueden utilizar los contribuyentes a los que el paso del tiempo, 5 años, durante los cuales no han pagado ni se les ha iniciado el cobro coactivo, los ha liberado del pago de la contribución de valorización

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO
Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro.
La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.

Tenemos entonces que de lo establecido en el citado artículo 817, es claro que el Proceso de cobro coactivo debe llevare a cabo en su totalidad dentro del término de prescripción de la acción de cobro en el mismo, como vemos a continuación:

El artículo 817 del estatuto tributario señala que la acción de cobro de las obligaciones tributarias prescribe a los 5 años contados desde la ocurrencia de las situaciones

Ca279590126

relacionadas en el mismo artículo, y ha dicho el Consejo de estado que la acción de cobro, en la totalidad del proceso debe realizarse dentro de ese término de 5 años.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 18567, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas, fundamentó su tesis en los siguientes términos:

"La Sala ha señalado que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E.T. se desprende que la obligación de la Administración no solo es iniciar la acción de cobro coactivo dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hizo exigible la obligación, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal. Para estos efectos, advirtió que detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la Administración como para los contribuyentes. Para la Administración, porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y, para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo."

Tenemos que La Administración de Santiago de Cali, emitió una serie de actos administrativos encaminados a obtener el pago de la obligación a cargo de los contribuyentes, tratando de implementar la acción de cobro de una obligación que se encuentra prescrita, por mandato legal, modificando en diversos tiempos y por diferentes razones la Resolución generadora de esa obligación pretendiendo así alterar el término legal de la Prescripción.

Con estos actos administrativos, según la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se amplió el plazo de los cinco años que se cumplía en el 2014, a un año mas, es decir hasta el año 2015 para el pago de la contribución y aplicó la clausula aceleratoria a los contribuyentes que nunca pagamos, haciendo exigible el pago de la contribución, desconociendo así no solo lo dispuesto en el art. 817 del Estatuto tributario sino en el Decreto Extraordinario 0139, vigente, del Municipio de Santiago de Cali que reza:

TERMINO PARA PROPONER EXCEPCIONES: Tanto el ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL: en el art. 830 como el DECRETO EXTRAORDINARIO 0139 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,. establecen el TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES como sigue : . "Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer las excepciones que considere pertinentes" ., por lo tanto los contribuyentes cuya obligación de pago prescribió, pueden proponer excepciones, acogiéndome a las que taxativamente clasifican como **las EXCEPCIONES que se pueden proponer contra el mandamiento de pago**, de acuerdo a las disposiciones del art. 831 E.T. y 182 Decreto Extraordinario 0139 del Municipio de Santiago de Cali y que son las siguientes, concretamente a la establecida en el numeral 6°.:

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590126
10731MVTCVHVC8Qa
17-07-18

EXCEPCIONES

1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. **La prescripción de la acción de cobro,** y
7. La falta de título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió.

Con el pretendido "titulo ejecutivo complejo", desconoce flagrantemente la Administración las normas establecen que las obligaciones tributarias están sujetas al paso del tiempo para su nacimiento, determinación de su vigencia y exigibilidad. El termino de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional es de 5 años, que se cumplieron en el año 2014 para aquellos propietarios que nunca pagamos ninguna cuota del gravamen de las 21 megaobras

Con esta maniobra perversa de otorgar plazos de pago, haciéndole creer al contribuyente que se corría el término el término de la Prescripción y que continuaba en mora, la Administración del Municipio de Cali pretendió modificar una situación jurídica consolidada, a fin de enervar los efectos legales de la ejecutoriedad de los actos administrativos y de la prescripción.

Por una parte, el término de prescripción de la acción de cobro del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional es de 5 años, que como ya se dijo para los contribuyentes que no pagamos como en mi caso, se cumplieron en el año 2014 ya la Resolución que me impuso el gravamen tiene como fecha mes y día del año 2009. Es a partir de esta fecha que se debe empezar a contar el término de la Prescripción, por lo cual la misma habría quedado configurada a los cinco años, en los mismos día y mes, del año 2014

Por otra parte, hay claridad contundente de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Apoyo Fiscal a las Entidades Territoriales al responder los interrogantes sobre prescripción, las cuales expuse para sustentar la excepción interpuesta, que cito nuevamente:

Establece la DAFT. (Dirección de Apoyo fiscal a las entidades territoriales)

¿Qué se requiere para que opere la prescripción?

La prescripción extintiva o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

(i) El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la obligación, ya sea por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración

departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el término para que opere la prescripción.

(ii) La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.

(iii) Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor. Es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehúse al pago de la obligación, a título de ejemplo se podrían utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.

Así las cosas, en los casos de solicitud de prescripción, siempre y cuando se verifique el transcurso del tiempo y los requisitos a que haya lugar, se recomienda a las administraciones tributarias la declaratoria de la prescripción, toda vez que de esta forma se evita acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y deudores de la entidad territorial; además, se evitan posibles procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa por los daños que una renuencia injustificada, por parte de la administración en la declaratoria de la prescripción, pueda producir.

Dice la DAFT. **Contabilización del término de prescripción de la acción de cobro**

" El término de prescripción para las obligaciones tributarias de las cuales es acreedora una entidad territorial es de cinco años, con base en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 que remiten al Estatuto Tributario Nacional.

El término de cinco años se cuenta a partir de los siguientes casos señalados en el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional: Artículo 817.

Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590125
10735VCVH8CaQMVC
17-07-18
Cadena S.A.

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

Las circunstancias referidas a aquellos tributos de las entidades territoriales que imponen a los sujetos pasivos la obligación formal de declarar (impuesto de industria y comercio, impuestos al consumo) se encuentran reguladas en la norma transcrita a efectos de la determinación del punto de inicio del término de prescripción. No obstante lo anterior, en aquellos tributos en los cuales la administración es quien determina la obligación tributaria inicialmente (impuesto predial, impuesto de registro –cuando la liquidación la realiza la administración departamental–, contribución de valorización, etc.) surge la pregunta de,

DAFT ***A partir de qué momento se cuenta el término de prescripción de la obligación tributaria?***

La respuesta es desde el momento en que el acto oficial de determinación del gravamen queda en firme; bajo estos parámetros, resulta imperioso que las entidades territoriales, en todos los casos en que las normas vigentes no exijan la declaración y liquidación privada del tributo, expidan dentro de los términos legales los actos administrativos respectivos (actos de determinación oficiales) los cuales, una vez ejecutoriados, servirán de título ejecutivo y de documento respecto del cual se contabiliza el término de cinco años previsto en el Estatuto Tributario para la prescripción de la acción de cobro.

En este punto es importante anotar que, si bien es necesario expedir el título ejecutivo para que se inicie el conteo del término de prescripción, esto no implica que la administración tributaria territorial para dicha expedición cuente con un plazo indefinido, pues la norma prevé este aspecto como se señala a continuación:

Actos que interrumpen el término de prescripción de la acción de cobro

Es generalizada la creencia en las administraciones territoriales, que la prescripción se interrumpe con la notificación del acto administrativo de determinación oficial del gravamen o la resolución en la que se impone una sanción.

Lo anterior no tiene fundamento legal, motivo por el cual resulta forzoso tener como referente para este aparte el artículo 818 del Estatuto Tributario Nacional (modificado por el artículo 81 de la Ley 6 de 1992) que establece:

Artículo 818. Interrupción y suspensión del término de prescripción. *El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.*

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la

Ca279590124

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. Así lo que se interrumpe es la acción de cobro que impone la existencia de un título ejecutivo, motivo por el cual la expedición del mismo no puede interrumpirlo. Para precisar la idea resulta necesario advertir que tienen que presentarse los siguientes casos para que se interrumpa el término de prescripción: (i) Notificación del mandamiento de pago. Una vez se inicia el proceso de cobro administrativo coactivo, al deudor se le notifica el mandamiento de pago en los términos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y sólo hasta el momento en que se logre realizar la notificación se podrá hablar de la interrupción del término de prescripción que se encontraba corriendo.

Otorgamiento de facilidades para el pago.** Estas facilidades deben concederse en los términos señalados en el mismo Estatuto Tributario Nacional, como quiera que esta es una norma de interrupción especial dadas las especiales circunstancias previstas en este texto normativo; **MOTIVO POR EL CUAL NO RESULTAN ADMISIBLES LA CONCESIÓN DE PLAZOS ADICIONALES, LAS AMNISTÍAS, Y OTROS INSTRUMENTOS DIFERENTES COMO FORMAS DE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN.

(iii) Admisión del sujeto pasivo en procesos concursales y las liquidaciones forzosas administrativas.....

En lo que respecta a la declaratoria de prescripción, esta será decretada, una vez comprobada su ocurrencia, de oficio o a petición de parte, por el funcionario competente de acuerdo con la norma interna del departamento, distrito o municipio."

Así las cosas las modificaciones contenidas en los actos administrativos arriba mencionados por medio de los cuales se pretende modificar la fecha de expedición notificación y ejecutoria de LA RESOLUCIÓN DEL AÑO 2009 que recibí y que establecía que " POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN No. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 , pues dichas modificaciones hacen referencia UNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMINISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, ya que dejan intactos los demás elementos de la Resolución por medio de la cual se me asignó la contribución de valorización.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, queda claro que la ampliación del plazo adicionales para el cumplimiento de la obligación de pagar la contribución de valorización para nada modifica el término de la prescripción establecido legalmente.

Ca279590124
10734VH8CaQMVVCV
17-07-18
Cadena s.a.

Así las cosas, limitando en este acápite el análisis de la conversión o modificación de actos atributivos o ampliatorios de derechos, cabe concluir que no se trata de imponerle al particular, en este caso la suscrita, un acto administrativo distinto al de la Resolución que le asigno la contribución de Valorización, sino de ofrecerle un modo de obtener mas plazo para el pago. Pretender que estas modificaciones enervaron la Resolución impositiva de septiembre del 2009 es por decir lo menos un exabrupto jurídico.

SEGUNDO: SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 817 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

No obstante la claridad de los dispuesto en el art. 817 del Estatuto Tributario, la Administración Municipal hace una amañada interpretación para justificar sus fines, olvidando el principio general de interpretación jurídica «donde la ley (y la jurisprudencia) no distingue, no le es dado al intérprete distinguir»,

Tampoco tiene en cuenta la Administración Municipal que EL ESTATUTO TRIBUTARIO ES UNA LEY ESTATUTARIA, desconociendo así que siendo la legislación fuente principal del derecho, se debe considerar que dentro de las leyes hay que atender a su jerarquía. La jerarquía hace relación a la primacía de una norma respecto a otra u otras. En Colombia la legislación está integrada así:

- La Constitución
- La ley en sentido material (leyes expedidas por el Congreso, tratados internacionales y decretos con fuerza de ley),
- Los actos administrativos en el orden nacional;
- Las Ordenanzas de las Asambleas; l
- Los Acuerdos de los Concejos Municipales y
- Los actos administrativos de los gobernadores y los alcaldes.

El ordenamiento jurídico colombiano supone entonces una jerarquía normativa que emana de la propia Constitución.
Así las cosas, la supremacía de las normas constitucionales es indiscutible. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que le siguen en la escala jerárquica

Las de Inferior categoría, deben resultar acorde con las superiores y así lo estableció La Corte,mediante Sentencia CC—131 de1993, en la que expresó:
"..La Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquier otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la república debe sujetarse en primer lugar a la Constitución"

De otra parte, el artículo 2° Del Código Contencioso Administrativo, establece:
"Los Funcionarios tendrán en cuenta que la actuación Administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.."

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca279590123

107338CaMVQCVHV

17-07-18

Cadena s.a. NIT 8300...

Las leyes estatutarias constituyen un tipo especial de ley, por medio del cual el Congreso debe regular ciertas materias, que por su importancia o trascendencia se convierten en una especie de "leyes reforzadas caracterizadas por tener una mayor vocación de permanencia debido a las exigencias particularmente severas que rigen su tramitación" En otras palabras, como lo ha señalado la Corte Constitucional, " *se trata de "leyes fundamentales para la regulación de asuntos medulares", señalados expresamente por el Constituyente en la construcción del modelo político y jurídico que promueve la Constitución de 1991*"

De acuerdo a los anterior, pretender que con un acto administrativo, emanado de la administración municipal, que en la jerarquía de las normas ocupa el último lugar, la entidad pueda interpretar para modificar lo establecido respecto de la prescripción en una ley estatutaria como lo es el Estatuto Tributario y fundamente dichas modificaciones con disposiciones sobre plazo y exigibilidad de la obligaciones contenidas en el Código civil, no tiene ninguna posibilidad de aceptación en nuestro ordenamiento jurídico.

De lo anterior y acorde con lo expresado podrá concluirse que el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, con la actuación aquí impugnada, además de estar declarándome deudora de lo no debido, vulneró el debido proceso y las disposiciones propias de dicha actuación administrativa.

PETICION

Solicito que se revoque y deje sin ningún efecto, el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. Resolución No. 4131.3.21 170845 de noviembre 21 de 2016 que declara no probada la excepción propuesta y ordena seguir adelante con la ejecución, con fundamento además de todas las razones expuestas en el presente escrito, en el que he demostrado que al expedir dicho Acto Administrativo que simultáneamente sirve de título ejecutivo y de mandamiento de pago, el funcionario violó el debido proceso al fundamentar su decisión, extralimitando en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.

En consecuencia, el Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, debe declarar la prosperidad del recurso de reposición interpuesto en el presente escrito, Ordenar el archivo del proceso de cobro coactivo y la cancelación de los gravámenes de valorización que pesan sobre los inmuebles de mi propiedad.

Atentamente

ALICIA OSORIO GONZALEZ,
C.C. 38989635 Cali

Dirección:
Avda 30 esta #14-34 1
Apto 403 -
tel: 3008361637
aliciaosorio2002@yahoo.com.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(NOVIEMBRE 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

El Subdirector de Tesoreria de Rentas (E) del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal del Municipio de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales conferidas por la Resolución No. 4122.0.21.1247 del 11 de octubre de 2016, el Decreto No. 4473 de 2006, el Estatuto Tributario Nacional y el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de 2012, con sus modificaciones o adiciones y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería de Rentas en uso de su facultad de Cobro Coactivo libró MANDAMIENTO DE PAGO dentro del proceso de cobro coactivo por el predio No. B006602240000 el día 17 de Noviembre de 2015 mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 a cargo de la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 por el no pago de la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.509.854) de la obligación por la contribución de valorización por beneficio general plan de obra 556 "21-MEGAOBRAS" contenida en el título ejecutivo complejo conformado por los actos administrativos contenidos en las siguientes Resoluciones:

Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009
Resolución 411.0.21.0191 de septiembre 14 de 2009.
Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009.
Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009.
Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010.
Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010.
Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, se modificó el plazo inicial para pago a. cuotas que se había fijado inicialmente en 60 cuotas, ampliándolo a 90 cuotas mensuales y el plazo para pago de contado hasta el 31 de diciembre de 2009.

Que mediante la Resolución 411.0.21.0329 de diciembre 30 de 2009, Modificó parcialmente el Articulo 4 de la Resolución 411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2.009, modificado por el Art 1 de la Resolución 411.0.21.0253 de noviembre 6 de 2.009, en el sentido de modificar el plazo para el pago de contado hasta el 31 de enero de 2010

Ca279590122

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21.170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

REPUBLICA DE COLOMBIA 15 NOTARIA SEXTA BOGOTA D.C.

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Resolución 411.0.21.0056 de marzo 30 de 2010, Modifico la Resolución 411.0.21.0019 de enero 29 de 2010, estableciendo que el plazo para pago de contado era hasta el 30 de junio de 2010.

Que vencido el plazo la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal dependencia responsable del manejo de dicha Renta, expidió la Resolución 4151.0.21.9368 de febrero 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE COBRA Y SE HACE EXIGIBLE EL PAGO POR BENEFICIO GENERAL PARA CONSTRUCCION DEL PLAN DE OBRAS 556 A VAFOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, declarando además de la exigibilidad, en el Articulo segundo de Dicho acto que : *"la presente resolución presta merito ejecutivo una vez en firme y debidamente ejecutoriada"* lo cual se cumplió el día 29 de junio de 2015.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA RESOLVER LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR EL EJECUTADO

Que el Mandamiento de Pago dictado mediante Resolución No. 4131.3.21.117752 del día 17 de noviembre de 2015, se notificó por aviso mediante envió recibido el día 26 de enero de 2016, según guía de entrega de mensajería especial 10612130556 a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635 en su condición de propietaria del predio B006602240000 y ejecutada dentro del proceso de cobro coactivo calidad que fue debidamente acreditada y la cual no se discute en el escrito de excepciones.

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, presentó el día primero (01) de febrero de 2016 - con radicación Orfeo 2016-41110-008063-2, escrito de excepciones dentro del término legal, sustentando su defensa con los siguientes argumentos:

Que la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ antes identificada, con el propósito de sustentar las excepciones propuestas al mandamiento de pago del proceso coactivo presento los siguientes argumentos y excepciones:

FUNDAMENTOS DE DERECHO INVOCADOS POR LA PARTE EJECUTADA:
Estatuto Tributario Nacional, Libro V, articulos 817 y 831

Ca279590122
10732aQMVBCVHVC8
17-07-18
Cadena s.a. Nit. 8909053949

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

EXCEPCIONES PROPUESTAS:

La parte ejecutada propone como excepción lo siguiente:

- La prescripción de la acción de cobro.

ANALISIS DEL CASO:
EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO ALEGADA POR LA PARTE EJECUTADA:
ARGUMENTOS DE LA PARTE EJECUTADA:
La excepción de prescripción propuesta la fundamenta al invocar lo siguiente:
La prescripción extinta o liberatoria se materializa cuando concurren tres elementos:

i. El transcurso del tiempo requerido para su operancia. Una vez determinada la obligación, ya será por el contribuyente (a través de declaración) o por la administración departamental, distrital o municipal (a través de acto administrativo), comenzará a correr el termino para que opere la prescripción
ii. La inacción por parte de la entidad territorial acreedor de la obligación. La administración departamental, distrital o municipal, una vez cuenta con la determinación del monto de una obligación pecuniaria a cargo de una persona determinada a través de un título ejecutivo, que puede ser una declaración o un acto administrativo, no adelanta dentro del término previsto en el ordenamiento las actuaciones tendientes al cobro de la obligación.
iii. Negación de la obligación y rehusarse al pago por parte del deudor, es necesario que el sujeto pasivo de la obligación alegue la prescripción de su obligación, es decir, que desconozca la validez y se rehusé al pago de la obligación, a título de ejemplo se podría utilizar el derecho de petición y la excepción en un proceso de cobro coactivo.

.....Así las 1cosas, las modificaciones que enumeran la No 4151.0.21.24772 de octubre 26 de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 0241 DE 200, MODIFICADO POR EL ACUERDO 0261 DE 2009"., no llenan los requisitos para configurar una interrupción de la PRESCRIPCIÓN de la RESOLUCIÓN

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

No. 4111.02.10169 DE SEPTIEMBRE 04 de 2009, pues dichas modificaciones hacen referencia ÚNICAMENTE A LOS PLAZOS ADICIONALES CONCEDIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO Y DICHOS LOS PLAZOS NO SON ADMISIBLES PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN...

...Como consecuencia de lo anterior, la administración del Municipio de Santiago de Cali, debe decretar Prosperidad de la EXCEPCION DE FONDO PROPUESTA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE LA RESOLUCIÓN NO. 411.02.10169 DE FECHA SEPTIEMBRE 4 DE 2009, que asigno la contribución y que quedo en firme el 15 de diciembre de 2010, encontrándose por tanto prescrita la acción de cobro de la obligación de pagar la contribución en ella contenida, pero que sin embargo el Municipio utiliza como generadora del cobro contenido en el mandamiento de pago establecido en la Resolución No.4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015 acusada, por ser violatorias de la Constitución y la Ley, de acuerdo a las disposiciones citadas, toda vez que mediante la misma se está cobrando y haciendo exigible una obligación que se encuentra prescrita debido al transcurso del tiempo, 5 años, razón por la cual el municipio de Cali perdió el derecho de ejercer la acción de cobro coactivo a pesar de lo cual ya libro el mandamiento de pago por medio de la citada Resolución No. 4131.3.21.117752 de Noviembre 17 de 2015.

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER RESPECTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO:

Para resolver la excepción de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización, es necesario tener presente que la contribución de valorización objeto del presente cobro, ES UNA RENTA CUYO COBRO ESTÁ SOMETIDO AL VENCIMIENTO DEL PLAZO, por lo tanto no es posible aplicar los términos de prescripción de la acción de cobro de que trata el articulo 817[1] invocado por la parte

[1] Artículo 817. *Término de prescripción de la acción de cobro.* La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de.
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2 La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas respectivas".

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590121
10731MV9CVHVC8Qa
17-07-18
Cadena S.A. NIT 8909059340

ejecutada, toda vez que estamos frente a una contribución cuya exigibilidad depende del cumplimiento de un plazo establecido por la administración.

Que como ya se dijo en el acápite de los antecedentes del presente acto, la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, (ejecutoriada el 29 de Junio de 2015) por la cual se HACE EXIGIBLE EL PAGO de la contribución de valorización por beneficio general para construcción del PLAN DE OBRAS 556 A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, acto administrativo que para el asunto que nos ocupa goza de presunción de legalidad y por lo tanto este despacho lo tendrá para efectos de contar el término de prescripción alegado, teniendo en cuenta que el cobro de la obligación tiene un plazo suspensivo que suspende el ejercicio del derecho y con ello, el termino del articulo 817 numeral 4 del Estatuto Tributario Nacional alegado por la ejecutada.

EFECTOS DEL PLAZO SUSPENSIVO

A.- Antes del vencimiento:

Mientras el plazo está pendiente, la obligación existe ya, sólo que como lo expresa el inciso primero del articulo 1551 del Código Civil[2] su cumplimiento se ha diferido hasta cierta época.

Consecuencias del plazo suspensivo:

a). Inexigibilidad de la obligación: Estando el plazo establecido a favor del deudor, que es la hipótesis normal y corriente, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento de aquel. Las acciones del acreedor, tales como la acción ejecutiva y la acción indemnizatoria, están suspendidas entre tanto. Art. 1715 Código Civil.

[2] Código Civil: ARTÍCULO 1551. DEFINICION DE PLAZO. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

b). Imprescriptibilidad del crédito: No hay lugar a que ella comience a correr antes del vencimiento del plazo, porque la inacción del acreedor es forzada, ya que se le prohíbe exigir el cumplimiento de la obligación. Artículo 1553[3].
c). Validez del pago: El artículo 1552[4] establece que lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. La obligación existe antes del vencimiento del plazo y, por consiguiente, el pago que haga el deudor tiene causa suficiente, de donde se concluye que el deudor no puede repetir lo pagado, alegando que el pago no era debido, aun en el caso de que el deudor haya pagado por error, como si ha creído que el plazo se encontraba vencido, el pago es firme, porque corresponde a una obligación existente en el momento de verificarse aquel. Art. 2313.
d). Medidas conservativas: El acreedor puede solicitarlas, aunque el término no haya vencido. El legislador no establece expresamente este efecto, pero como según el artículo 1549 del Código Civil el acreedor condicional puede impetrar medidas conservativas a pesar de que mientras pende la condición la obligación no existe, se concluye que el acreedor a plazo, cuyo derecho si existe durante el plazo, tiene igual o mejor derecho a que se tomen tales medidas.

B.- DESPUÉS DEL VENCIMIENTO:

Vencido el plazo, la obligación se hace exigible, es decir, se transforma en obligación pura y simple, de donde se colige:

1.- El acreedor puede ejercer todas las acciones que le competen.
2.- El término de la prescripción del crédito comienza a contarse. Art. 2535[5] y 4, y por regla general, el deudor queda constituido en mora. Art. 1608[6] Ord. 1°. Así las cosas y teniendo en cuenta que la Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal una vez vencido el plazo para el pago expidió la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero, declaró la exigibilidad del pago de la contribución de valorización por beneficio general para

[3] ARTICULO 1553. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION ANTES DEL PLAZO. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1o.) Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia.
2o.) Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones.
[4] ARTICULO 1552. PAGO ANTICIPADO. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones.

[5] ARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.

[6] ARTICULO 1608. MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590120
10735VCVH8CaQMV8
17-07-18
Cadena s.a. Nit. 890.900.943

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

construcción del PLAN DE OBRAS 556 a favor DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a la Señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, por el predio B006602240000, este solo empezó a correr a partir de la ejecutoria, hecho que ocurrió el dia 29 de Junio de 2015, por lo tanto no ha operado el fenómeno de la prescripción alegada, en efecto la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta tampoco está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que la mencionada resolución goza de la fuerza ejecutoria para mantener y proseguir el cobro a la ejecutada. Acorde con lo anotado, puede afirmarse que la obligación por la contribución de valorización objeto del presente cobro es una obligación de plazo, cuyo cumplimiento solo puede exigirse después del vencimiento del mismo, exigibilidad que se cuenta a partir del 29 de junio de 2015 por tal razón no ha operado la prescripción de la acción de cobro alegada por la parte ejecutada.

Para reforzar lo anterior, es necesario interpretar el articulo 817 del estatuto tributario invocado por la parte ejecutada, es importante analizar la diferencia entre la exigibilidad de la obligación y el ejecutoria del titulo ejecutivo que alega la parte ejecutada, pues no es acertado afirmar que la exigibilidad de la obligación comienza cuando se tiene un titulo ejecutivo, porque precisamente éste surge como consecuencia de aquella y si bien el título se constituye en la base de ejecución para obtener el pago, dentro de sus caracteristicas, al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra la de contener una obligación expresa, clara y exigible; es decir, se impone la existencia de una obligación exigible, lo que indica que no es que a partir del título la obligación sea exigible, sino que la exigibilidad es una condición para la procedibilidad de la ejecución, que para el presente caso depende del plazo.

En esta forma, los plazos que señala la administración para la cancelación de las obligaciones provenientes de impuestos tasas o contribuciones, determinan la fecha de exigibilidad de las respectivas obligaciones a cargo del contribuyente.

En este orden de ideas, la obligación de valorización para cuya cancelación el Gobierno Municipal otorgó diferentes plazos respecto de una misma obligación, permitiendo pagar la obligación de valorización por cuotas en fechas determinadas, serán exigibles dentro del término legal de 5 años contados desde la fecha en que se hizo exigible tal como se declaró en la Resolución 4151.0.21.9368 del 26 de febrero de 2015, ejecutoriada el dia 29 de junio de 2015.

Así las cosas, se tiene que la Subdirección de Tesorería de Rentas Municipales haciendo uso de las facultades que le han sido otorgadas por la administración

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DE RENTAS

RESOLUCION No 4131.3.21. 170845 DE 2016
(Noviembre 21)

POR LA CUAL SE RESUELVEN EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.117752 DE NOVIEMBRE 17 DE 2015 EN CONTRA DE LA SEÑORA ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

los cinco (5) años siguientes a la declaratoria del vencimiento del plazo para pagar, en tal sentido, se declarará no probada la excepción de prescripción de la acción de cobro.

En mérito de lo expuesto éste Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta por la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar seguir adelante con la ejecución y proceder al embargo y remate de los bienes Inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país; así como el posterior avalúo y remate de los mismos. Limítese el embargo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional y dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes

ARTÍCULO TERCERO. - CITAR a la señora ALICIA OSORIO GONZALEZ C.C.38.969.635, con el fin de que comparezca ante este Despacho para notificarse del contenido de la esta resolución, haciéndole entrega de una copia de la misma, e infofmándole que contra ésta decisión procede el recurso de reposición ante éste Despacho, dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 834 del Estatuto Tributario. Para ello envíese las comunicaciones pertinentes a la siguiente dirección: Avenida 3 Oeste Nro. 14 - 34 Apto. 402 Edificio los Juncos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 21 días del mes de Noviembre de 2016

LUIS ALFONSO PARRA SAENZ
Subdirector de Tesorería de Rentas (E)
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyecto y Elaboro: Alejandro Zuluaga – Asistencial PS – Grupo Cartera
Reviso: Gloria Cecilia Cuellar de Quintana– Profesional Universitaria - Coordinadora -Grupo Cartera.

República de Colombia
Papel material para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca279590119
10734VH8CaBMVUCV
17-07-18

República de Colombia

Aa052153367

Ca279590128

establecer los atributos de su personalidad con como lo son sus nombres, nacionalidad, mayoría de edad y serial de identificación. que acceden a que sus cedulas de ciudadanía sean sometidas a una lectura biométrica que permite extraer del código de barras la in formación que habilita a la notaría presumir la originalidad, validez y autenticidad del documento de identidad. en caso que el compareciente presente para su identificación una contraseña que señale el tramite de duplicado, corrección o rectificación, el ciudadano afirma bajo la gravedad de juramento que el sello que certifica el estado de su trámite ha sido estampado en una oficina de la registraduria nacional del estado civil. en todo caso, los titulares de las contraseñas de expedición de la cédula de ciudadanía por primera vez o no certificadas, las cédulas de extranjería, pasaporte o visas que no pueden ser sometidas al control de captura de identificación biométrica, manifiestan que estos documentos han sido tramitados y expedidos por la entidad competente y legitimadamente constituida para ello (registraduria, consulado, embajadas, etc...) y que no ha sido adulteradas o modificada dolosamente. **Políticas de privacidad**: Los otorgantes, expresamente declaran que **no** autorizan la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografiá tomada de la notaria quince del circulo de Cali (Valle), ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, ni su dirección electrónica, ni física, ni teléfonos, salvo lo relacionado con el presente instrumento y demás gastos notariales que personalmente o por intermedio de su apoderado solicite por escrito conforme a la ley ————————————————

RECAUDOS:..$ 11.700 /

DERECHOS NOTARIALES...$ 114.600 /

IVA:...$ - 21.774 /

DECRETO 1681 DE SEPTIEMBRE 16 DE 1996, INCREMENTADA POR LA RESOLUCIÓN 0858 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2018, DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. LA PRESENTE ESCRITURA SE AUTORIZO EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL NÚMEROS Aa053058294 / Aa052153367 / = = = = = = = = = =

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

13/03/2018 10692Z1955BZ5aA5

17-07-18 107338CaQMVHCVHV

Cadena s.a.

ALICIA OSORIO GONZALEZ

C.C. No. 38'964635

T.P No. 25.308 O.S.J.

Ocupación: ABOGADA. Actividad económica:

Dirección: AVENIDA 9 Norte # 13-94.

Teléfono: 3007361637

E-mail: Alicia osorio80@yahoo.com.

Persona expuesta políticamente Decreto 1674 de 2016

SI ___ NO X Cargo:

Fecha de vinculación: Fecha de Desvinculación:

Javier Franco Silva
NOTARIO 15 DEL CIRCULO DE CALI

JAVIER FRANCO SILVA

NOTARIO QUINCE (15) DEL CIRCULO DE CALI

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Ca279590115

ES fiel PRIMERA Copia de la Escritura Pública No 1.421 de fecha.25.VII. 2018. Que se expide en 12 Hojas útiles para: ALICIA OSORIO GONZALEZ.

Santiago de cali. 30 JUL 2018

NOTARIA
Javier Franco Silva
NOTARIO 15 DEL CIRCULO DE CALI

JAVIER FRANCO SILVA
NOTARIO QUINCE DE CALI

Copia (fotocopia) tomada de su original que se expide conforme al Art. 79 del decreto 960 de 1970.

NOTA: cualquier cambio o modificación que se realice sobre estas copias sin la autorización e intervención del Notario conforme a la LEY es ilegal, y utilizarlas puede causar sanción penal

AVENIDA 4 Nrte 22 N 35 Barrio Versalles
661 88 11 / 12
info@notaria15cali.com

Ca279590115
17-07-18
10735VCVH8CaBMVC

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

El Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, en uso de sus facultades legales y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, "por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", en el Decreto No. 411.0.20.0673 del 06 de diciembre de 2016, "por el cual se adopta el manual especifico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del Municipio Santiago de Cali", en el Decreto No. 4112.010.20.0704 del 01 de noviembre de 2017 "por el cual se realiza un nombramiento ordinario en la Administración Central Municipal", en el Acuerdo No. 410 del 03 de marzo de 2017 artículo 5, en el Decreto 4112.010.20.0386 del 1° de junio de 2017 "por el cual se delega la función de cobro coactivo y la prescripción de obligaciones a favor del Municipio en el Jefe de la oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería Municipal", en el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de Febrero 28 de 2012 y el Estatuto Tributario Nacional, y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería Municipal-Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo resolvió mediante acto administrativo contenido en la resolución número 4131.032.21.12762 de diciembre 21 de 2017, el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2016, por medio del cual se resuelven las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 4131.032.21.117752 de Noviembre 17 de 2015, acto administrativo que declaro no probadas las excepciones propuestas por la Dra., ALICIA OSORIO GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635, abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional No 25.308 del C.S de la Judicatura en calidad de contribuyente del predio B006602240000.

Que la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 expedida en Cali (Valle) en su calidad de contribuyente propietaria, presentó ante la administración municipal mediante orfeo 201841730101120762 de julio 02 de 2018, SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA del acto administrativo contenido en la resolución 4131.032.21.12762 del 21 de diciembre de 2017, fecha que

entrara a observar el despacho en adelante, toda vez que el artículo 107 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012 o Procedimiento Tributario para el municipio de Santiago de Cali cita: *"Las solicitudes de revocatoria directa deberán fallarse dentro del término de un año, contado a partir de su presentación en debida forma"* acto seguido contempla el artículo 109:
Recursos equivocados. *Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya interpuesto, resolverá este último si es competente, o lo enviara a quien deba fallarlo.*

Lo anterior toda vez que dentro de las pretensiones del actor, expone en el punto primero que se declare configurado el silencio administrativo positivo frente al RECURSO DE APELACIÓN, situación que en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo no es objeto de estudio puesto que el procedimiento de cobro coactivo no contempla el recurso de apelación ni en subsidio de la reposición tal como lo establece el artículo 186 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012 que reza: *Recurso contra la resolución que decide las excepciones: En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. CONTRA DICHA RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Subdirector de Tesorería Municipal dentro el mes siguiente a su notificación, quien tendrá un (1) mes para resolver, contado a partir de su notificación.*

Que por mandato del artículo 338 de la Constitución Política de 1991, la cual otorga la facultad impositiva, en tiempos de paz, solamente al congreso, a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales, únicos organismos habilitados para imponer contribuciones fiscales y parafiscales, fijar los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas de las mismas, lo que concuerda con el artículo 150, numeral 12 de la Constitución Política de 1991, ya que fija la facultad del Congreso de decretar las contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley; de igual forma, confiere iguales atribuciones a las asambleas departamentales y a los concejos municipales. La importancia de este artículo radica en que señaló el fundamento del principio de legalidad tributaria al definir que todo tributo debía contener unos elementos mínimos para que éste fuera legal, entre los que encontramos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa, Así mismo, el artículo 317 de la Constitución Política de 1991, eleva al carácter de constitucional la contribución de valorización, en cuanto señala que "sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble".

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

De igual manera en el artículo 95 de la Carta Magna encontramos los deberes de la persona y del ciudadano; en su numeral 9 estableció "Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad", lo que le da otro sustento constitucional a la contribución de valorización que debemos realizar todos los ciudadanos para el sostenimiento del Estado".

No obstante, es allí donde se origina el término contribuyente, puesto que es deber constitucional y social que todo ciudadano deba aportar y contribuir al sostenimiento del estado.

Por otro lado, dice el artículo 2 del Estatuto Tributario Nacional, que contribuyente es todo aquel sujeto (entendida, toda persona natural o jurídica) respecto de quienes se realiza el hecho generador del tributo.

Quiere decir esto, que cualquier persona natural o jurídica que realice un hecho considerado por la Ley como generador de un Impuesto y/o Contribución, debe entonces contribuir con el pago respectivo de dicha obligación, lo cual lo convierte en contribuyente.

Que la Jurisprudencia proveniente de la Honorable Corte Constitucional ha definido el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, como un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto a la finalidad de la Jurisdicción Coactiva, esta consiste en recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para sí poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales.

Que del análisis de la presente solicitud de REVOCATORIA DIRECTA, propuesta por la Dra. Alicia Osorio González, se colige procesalmente que a la administración le ha asistido el ánimo en tanto que constituye su deber legal, dar trámite dentro de sus posibilidades sistemáticas a todas y cada una de las peticiones y requerimientos de sus contribuyentes, es un deber inherente a su función institucional, al servicio público propiamente dicho, máxime cuando de sus contribuyentes se trata, en similar sentido también al contribuyente le asiste el deber de tributar, ello es inherente a los conciudadanos, es un deber que ostenta rango superior en la Carta Política (art 95 C.P)

mas no se puede concebir una cobertura integral en la territorialidad si el ciudadano olvida o no asume su compromiso constitucional de coadyuvar al progreso del estado, progreso que las más de las veces entre tantos escenarios se ve reflejado en sus obras publicas o de infraestructura para el caso que nos ocupa, dicho de otra manera es una relación contractual civilmente hablando entre dos partes, estado y ciudadano denominado contrato bilateral, habida cuenta que representa un interés general prevaleciendo sobre un interés particular, así las cosas, costumbre contraria a derecho que en algunos casos asumen algunos ciudadanos al no ejercitar su deber de coadyuvar con el estado como de corolario se mencionó, situaciones como las enunciadas de forma precedente sientan bases para que se propague un verdadero caos del estado, pues si todos olvidan su deber de coadyuvar con la formación y progreso del mismo, difícilmente se podrán adelantar obras que vayan encaminadas en el beneficio del interés general de todos sus habitantes.

Que la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA interpuesta por el actor en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo en contra de las resoluciones que declara no probadas las excepciones como las que resuelven el recurso de reposición, se encuentran plenamente notificadas al actor, razón de ello la interposición de las excepciones y recursos de ley, en tratándose de revocatoria directa no se encuentra ajustada a derecho puesto que está figura conforme lo estipula el artículo 104 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, solo es procedente cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos de ley, caso contrario al que nos ocupa puesto que el procedimiento coactivo contempla en primera instancia la interposición de las excepciones contra el mandamiento de pago y posterior a ello la reposición, actuaciones que cumplió a cabalidad el actor, de la norma citada se infiere que es procedente la revocatoria cuando no se hubieren interpuesto los recursos de ley.

En este orden de ideas la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo considera que en lo que respecta a la revocatoria directa solicitada, las cuales se resumen en que se configure el silencio administrativo positivo frente al recurso de reposición formulado en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2016, y en consecuencia sea revocado el acto administrativo 413.032.21.12762 de diciembre 21 de 2017, es una posición que no comparte este despacho puesto que las normas del procedimiento de cobro coactivo una vez llegan a esta etapa, son gobernadas por los postulados enunciados en los artículos 171 y ss del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, y aquí el procedimiento emana de forma exegética y taxativa en lo que al cobro se refiere, en principio el acto administrativo que rige esta etapa es el mandamiento de pago, acto

que puede ser atacado mediante la proposición de excepciones que se pretendan hacer valer en el proceso (véase el artículo 182 del citado decreto) el cual nos indica cuales excepciones se propondrán contra el mismo, de otra parte la resolución mediante la cual se rechacen las excepciones propuestas nos menciona el artículo 186 del mismo decreto, que únicamente procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió el rechazo, así las cosas, no obedece a una postura arbitraria o de vulneración de los derechos fundamentales de los contribuyentes, toda vez que mal haría ya en esta etapa de cobro que la administración evadiera el procedimiento señalado para tal fin, en su consideración con estos actos administrativos le asiste todo el derecho al administrado de tomar las medidas o acciones de control, para que la Jurisdicción Contenciosa conozca de fondo los planteamientos del administrado, frente a los actos administrativos que pretenda hacer valer el contribuyente deudor, pero mal haría la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo pasar por encima de normas que en su consideración son igual de importantes que todas las demás que convergen respecto del Proceso de Cobro Administrativo Coactivo.

Que la Dra. Alicia Osorio González expresa que la solicitud de revocatoria directa contemplada en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), vulnera los siguientes derechos:

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra el
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona

Que la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo a de separarse de los planteamientos anteriormente citados por la Dra. ALICIA OSORIO GONZALEZ, toda vez que si bien es cierto es una apreciación digna de estudio y análisis profundo, no comparte este despacho los mencionados argumentos por los siguientes motivos a exponer: el proceso administrativo de cobro coactivo que tiene su origen en la obra 556 21 Megaobras, encuentra sustento en la misma carta política cuando su artículo 338 faculta a los municipios para imponer contribuciones fiscales y parafiscales, fijar los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas de las mismas, elaborar sus procesos de cobro, norma que a su vez crea el marco jurídico para la adopción de normas especiales del orden municipal como lo son el acuerdo 0178 de 2006 o Estatuto de Valorización Municipal y posterior a ello el Decreto Extraordinario 0139 de 2012, por medio del cual se establece el Procedimiento Tributario para el

municipio de Santiago de Cali, de ahí que el proceso haya surtido todas las fases en lo concerniente al debido proceso, en este orden de ideas no es contrario ni es opuesto a la ley.

En el segundo punto se habla de que no esté conforme al interés público o social, o atenten contra él, y es conveniente reiterar que el Plan de Obras General 556 denominado 21 Megaobras, se erige desde sus inicios como obras de interés y beneficio general para el municipio de Santiago de Cali, también es oportuno expresar que una vez creada la contribución dado el clamor de los habitantes, la administración amplio formas de pago, descuentos y un sin número de ayudas a sus habitantes para que coadyuvaran al impulso de las mismas, posterior a ello se crearon alivios tributarios como los denominados papayazos tributarios y aun así muchos de sus conciudadanos no se acogieron a ninguna facilidad de pago, por el contrario se emprendieron actuaciones para desestimar el carácter legal de las mismas, situación que hasta hoy en día prevalece en algunos sectores, sin embargo es de resaltar el gran compromiso y deber ciudadano con el que muchos de los deudores lograron colocarse al día con el pago de la contribución en comento.

Que la administración no ha causado un agravio en contra de la persona ALICIA OSORIO GONZALEZ, al momento de establecer parámetros legales para el cobro de la contribución de valorización de las 21 Megaobras acorde con la Constitución Política y las normas especiales que regulan la materia, no constituye la esencia o fin de la administración causar hechos que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos, el proceso establecido para tal fin se encuentra regulado en la ley, se fija el mismo procedimiento de cobro para todos los contribuyentes y no se hace de forma individualizado, salvo la asignación de la contribución y las respuestas a las peticiones recursos y excepciones que sean interpuestas por los sujetos pasivos, estas si son actuaciones que deben observarse de manera individual en lo que respecta al proceso adelantado contra cada predio. Los beneficios, descuentos, plazos etc. son actos de carácter general y no particular que siempre promueven o buscan un beneficio del bien común.

El actor ha hecho uso de los debidos recursos consagrados en el proceso administrativo de cobro coactivo a saber, excepciones contra el mandamiento de pago, recurso de reposición contra la resolución que rechaza las excepciones, así como en esta oportunidad presenta la solicitud de revocatoria directa de actuaciones ya surtidas, sin embargo menester indicar que expresa el artículo 104 del Decreto Extraordinario 0139 cuando es procedente la Revocatoria Directa y nos indica que: *"Solo procederá la*

acción de revocación directa prevista en el Código Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa".

Para el caso que nos ocupa, se observa en el sumario que la Dra. Alicia Osorio González presentó las excepciones y el recurso de reposición que consagra la norma especial coactiva, por lo tanto no estará llamada a prosperar la revocatoria directa solicitada por el actor.

La fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aun en contra de la voluntad de los administrados y los actos que queden en firme al concluir el Procedimiento Administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato, los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución de la voluntad de los interesados.

La fuerza ejecutoria de los actos administrativos es decir su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene en la forma expresada en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

"En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 [5] del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico".

En lo que respecta a la revocabilidad de los actos administrativos, la jurisprudencia ha sido generosa en manifestar que si bien es cierto es un derecho que puede solicitar el interesado, no siempre se rige como precepto universal toda vez que si el particular ha ejercido los derechos en la vía gubernativa, que para el presente caso según las

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

normas establecidas en el procedimiento de cobro coactivo contemplado en los artículos 171 y siguientes del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, como interponer las excepciones contra el mandamiento de pago, y si es el caso posterior a ello la interposición del recurso de reposición, aquí quedaría constituida la denominada vía gubernativa, así las cosas al haber hecho uso el actor de las excepciones y el recurso de ley, no tendría vocación de prosperar la revocatoria directa de los actos acusados sin perjuicio que con estas herramientas pueda acudir ante el juez contencioso administrativo en aras de obtener las pretensiones del actor.

En virtud de lo expuesto la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería Municipal

RESUELVE

Artículo Primero: NO DECLARAR la configuración del Silencio Administrativo Positivo del recurso de apelación interpuesto por la Dra. ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 portadora de la Tarjeta Profesional número 25.308 del C.S de la Judicatura, interpuesto en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2017 conforme los motivos expuestos en el presente acto administrativo.

Artículo Segundo: NO REVOCAR la resolución 4131.032.21.12762 del 21 de diciembre de 2017, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2017 solicitado por la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 expedida en Cali (Valle), abogada portadora de la Tarjeta Profesional 25.308 del C.S. de la Judicatura en calidad de propietario contribuyente del predio B006602240000.

Artículo Tercero: NOTIFICAR del presente acto administrativo a la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ de las condiciones civiles ya conocidas en calidad de contribuyente del predio B006602240000. Para ello envíese las comunicaciones pertinentes a la siguiente dirección: Avenida 2 oeste # 14-34 de Cali (Valle).

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

Artículo Cuarto: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 185 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 22 días del mes de AGOSTO de 2018.

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO
Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyectó: Francisco Mario López Casanova.- Profesional Universitario G-2.
Revisó: Alejandro Zuluaga. Contratista.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20184131032014092 1**
Fecha: **27-08-2018**
TRD: **4131.032.13.1.953.014092**
Rad. Padre: **20184173010112076 2**

ALICIA OSORIO GONZALEZ
Avenida 2 Oeste # 13 – 94 Apto 401
La Ciudad

Asunto: Citación para notificación personal de la Resolución No 4131.032.21.21717 del 22 de Agosto de 2018 por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria.

Comedidamente se le solicita comparecer al Centro de Atención al Contribuyente de la Subdirección de Tesorería Municipal, Oficina Técnica Operativa Cobro Persuasivo, ubicado en el CAM primer piso, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM. jornada continua, de lunes a viernes dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de esta citación, para efectos de surtir la notificación personal de la Resolución por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria, de conformidad con el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

Nota: Para efectos de la notificación personal deberá presentar Documento de Identificación y fotocopia del documento. Para la notificación a través de Apoderado presentar Poder legalmente conferido, Tarjeta Profesional y Documento de Identificación. Para la notificación de Representante Legal presentar Certificado de Existencia y Representación Legal y Documento de Identificación.

Cordialmente,

LIA ELEONORA CADAVID
Profesional Universitario
Oficina Técnica Operativa Cobro Coactivo
Subdirección de Tesorería Municipal

Proyectó: Miguel Alejandro Alvarez – Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA MUNICIPAL

FECHA, veintinueve (29) DE AGOSTO DE 2018 PREDIO Y/O NIT. B00660224000O

SE PRESENTÓ Alicia Osorio Gonzalez CEDULA No 38.969.635

TARJETA PROFESIONAL No N/A

EN CALIDAD DE: PROPIETARIO [X] APODERADO Y/O AUTORIZADO [ ] REPRESENTANTE LEGAL [ ] DEUDOR SOLIDARIO Y TERCERO INTERESADO [ ]

CON EL FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN No 4131.032.21 21717

PRESCRIPCION [ ] REVOCATORIA [X] RECURSO [ ] EXCEPCIONES [ ] INCUMPLIMIENTO [ ] OTROS [ ]

DE FECHA Agosto 22/2018 PROCEDE: No procede Recurso TERMINO [ ] DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION

[ ] MES SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACION

NOTIFICADO:

NOMBRE Alicia Osorio G

C.C. No 38'504635

DIRECCION AVDA 30 DE 2 # 14-3 CL

TELEFONO. 8993407 CL

CORREO ELECTRONICO alicitaosorio2007@yahoo.com.ar

NOTIFICADOR

FIRMA

Jefe Oficina Técnica Operativa De Cobro Coactivo.
Subdirección de Tesorería Municipal.

Elaboró: Contratista OTOCC - José Jairo Aguirre.

OBSERVACIONES

Esta notificación personal se surte de acuerdo a lo estipulado en los artículos 181 y 182 del Decreto 0139 de 2012, 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional y al artículo 67 de la ley 1437 de 2011.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.
SUBDIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL.

CERTIFICA QUE LA RESOLUCION No _____ DE FECHA _____

QUEDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADA

EL DIA _____ DEL MES _____ DEL AÑO _____

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20184131032014092l
Fecha: 27-08-2018
TRD: 4131.032.13.1.953.014092
Rad. Padre: 20184173010112076Z

ALICIA OSORIO GONZALEZ
Avenida 2 Oeste # 13 – 94 Apto 401
La Ciudad

Asunto: Citación para notificación personal de la Resolución No 4131.032.21.21717 del 22 de Agosto de 2018 por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria.

Comedidamente se le solicita comparecer al Centro de Atención al Contribuyente de la Subdirección de Tesorería Municipal, Oficina Técnica Operativa Cobro Persuasivo, ubicado en el CAM primer piso, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM. jornada continua, de lunes a viernes dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de esta citación, para efectos de surtir la notificación personal de la Resolución por la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria, de conformidad con el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

Nota: Para efectos de la notificación personal deberá presentar Documento de Identificación y fotocopia del documento. Para la notificación a través de Apoderado presentar Poder legalmente conferido, Tarjeta Profesional y Documento de Identificación. Para la notificación de Representante Legal presentar Certificado de Existencia y Representación Legal y Documento de Identificación.

Cordialmente,

LIA ELEONORA CADAVID
Profesional Universitario
Oficina Técnica Operativa Cobro Coactivo
Subdirección de Tesorería Municipal

Proyectó: Miguel Alejandro Alvarez – Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comodidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: http://www.cali.gov.co/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **38.969.635**
OSORIO GONZALEZ

APELLIDOS
ALICIA

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1944**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

06-JUN-1966 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-3100100-00853847-F-0038969635-20161006 0051647807G 3 19141595

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

El Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, en uso de sus facultades legales y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, "por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", en el Decreto No. 411.0.20.0673 del 06 de diciembre de 2016, "por el cual se adopta el manual especifico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del Municipio Santiago de Cali", en el Decreto No. 4112.010.20.0704 del 01 de noviembre de 2017 "por el cual se realiza un nombramiento ordinario en la Administración Central Municipal", en el Acuerdo No. 410 del 03 de marzo de 2017 artículo 5, en el Decreto 4112.010.20.0386 del 1° de junio de 2017 "por el cual se delega la función de cobro coactivo y la prescripción de obligaciones a favor del Municipio en el Jefe de la oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería Municipal", en el Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0139 de Febrero 28 de 2012 y el Estatuto Tributario Nacional, y

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Tesorería Municipal-Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo resolvió mediante acto administrativo contenido en la resolución número 4131.032.21.12762 de diciembre 21 de 2017, el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2016, por medio del cual se resuelven las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 4131.032.21.117752 de Noviembre 17 de 2015, acto administrativo que declaro no probadas las excepciones propuestas por la Dra., ALICIA OSORIO GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635, abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional No 25.308 del C.S de la Judicatura en calidad de contribuyente del predio B006602240000.

Que la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 expedida en Cali (Valle) en su calidad de contribuyente propietaria, presentó ante la administración municipal mediante orfeo 201841730101120762 de julio 02 de 2018, SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA del acto administrativo contenido en la resolución 4131.032.21.12762 del 21 de diciembre de 2017, fecha que

entrara a observar el despacho en adelante, toda vez que el artículo 107 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012 o Procedimiento Tributario para el municipio de Santiago de Cali cita: *"Las solicitudes de revocatoria directa deberán fallarse dentro del término de un año, contado a partir de su presentación en debida forma"* acto seguido contempla el artículo 109:
Recursos equivocados. *Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado recurso sin cumplir los requisitos legales para su procedencia, pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya interpuesto, resolverá este último si es competente, o lo enviara a quien deba fallarlo.*

Lo anterior toda vez que dentro de las pretensiones del actor, expone en el punto primero que se declare configurado el silencio administrativo positivo frente al RECURSO DE APELACIÓN, situación que en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo no es objeto de estudio puesto que el procedimiento de cobro coactivo no contempla el recurso de apelación ni en subsidio de la reposición tal como lo establece el artículo 186 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012 que reza: *Recurso contra la resolución que decide las excepciones: En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. CONTRA DICHA RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Subdirector de Tesorería Municipal dentro el mes siguiente a su notificación, quien tendrá un (1) mes para resolver, contado a partir de su notificación.*

Que por mandato del artículo 338 de la Constitución Política de 1991, la cual otorga la facultad impositiva, en tiempos de paz, solamente al congreso, a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales, únicos organismos habilitados para imponer contribuciones fiscales y parafiscales, fijar los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas de las mismas, lo que concuerda con el artículo 150, numeral 12 de la Constitución Política de 1991, ya que fija la facultad del Congreso de decretar las contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley; de igual forma, confiere iguales atribuciones a las asambleas departamentales y a los concejos municipales. La importancia de este artículo radica en que señaló el fundamento del principio de legalidad tributaria al definir que todo tributo debía contener unos elementos mínimos para que éste fuera legal, entre los que encontramos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa, Así mismo, el artículo 317 de la Constitución Política de 1991, eleva al carácter de constitucional la contribución de valorización, en cuanto señala que "sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble".

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

De igual manera en el artículo 95 de la Carta Magna encontramos los deberes de la persona y del ciudadano; en su numeral 9 estableció "Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad", lo que le da otro sustento constitucional a la contribución de valorización que debemos realizar todos los ciudadanos para el sostenimiento del Estado".

No obstante, es allí donde se origina el término contribuyente, puesto que es deber constitucional y social que todo ciudadano deba aportar y contribuir al sostenimiento del estado.

Por otro lado, dice el articulo 2 del Estatuto Tributario Nacional, que contribuyente es todo aquel sujeto (entendida, toda persona natural o jurídica) respecto de quienes se realiza el hecho generador del tributo.

Quiere decir esto, que cualquier persona natural o jurídica que realice un hecho considerado por la Ley como generador de un Impuesto y/o Contribución, debe entonces contribuir con el pago respectivo de dicha obligación, lo cual lo convierte en contribuyente.

Que la Jurisprudencia proveniente de la Honorable Corte Constitucional ha definido el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo, como un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto a la finalidad de la Jurisdicción Coactiva, esta consiste en recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para sí poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales.

Que del análisis de la presente solicitud de REVOCATORIA DIRECTA, propuesta por la Dra. Alicia Osorio González, se colige procesalmente que a la administración le ha asistido el ánimo en tanto que constituye su deber legal, dar trámite dentro de sus posibilidades sistemáticas a todas y cada una de las peticiones y requerimientos de sus contribuyentes, es un deber inherente a su función institucional, al servicio público propiamente dicho, máxime cuando de sus contribuyentes se trata, en similar sentido también al contribuyente le asiste el deber de tributar, ello es inherente a los conciudadanos, es un deber que ostenta rango superior en la Carta Política (art 95 C.P)

mas no se puede concebir una cobertura integral en la territorialidad si el ciudadano olvida o no asume su compromiso constitucional de coadyuvar al progreso del estado, progreso que las más de las veces entre tantos escenarios se ve reflejado en sus obras publicas o de infraestructura para el caso que nos ocupa, dicho de otra manera es una relación contractual civilmente hablando entre dos partes, estado y ciudadano denominado contrato bilateral, habida cuenta que representa un interés general prevaleciendo sobre un interés particular, así las cosas, costumbre contraria a derecho que en algunos casos asumen algunos ciudadanos al no ejercitar su deber de coadyuvar con el estado como de corolario se mencionó, situaciones como las enunciadas de forma precedente sientan bases para que se propague un verdadero caos del estado, pues si todos olvidan su deber de coadyuvar con la formación y progreso del mismo, difícilmente se podrán adelantar obras que vayan encaminadas en el beneficio del interés general de todos sus habitantes.

Que la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA interpuesta por el actor en consideración de la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo en contra de las resoluciones que declara no probadas las excepciones como las que resuelven el recurso de reposición, se encuentran plenamente notificadas al actor, razón de ello la interposición de las excepciones y recursos de ley, en tratándose de revocatoria directa no se encuentra ajustada a derecho puesto que está figura conforme lo estipula el artículo 104 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, solo es procedente cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos de ley, caso contrario al que nos ocupa puesto que el procedimiento coactivo contempla en primera instancia la interposición de las excepciones contra el mandamiento de pago y posterior a ello la reposición, actuaciones que cumplió a cabalidad el actor, de la norma citada se infiere que es procedente la revocatoria cuando no se hubieren interpuesto los recursos de ley.

En este orden de ideas la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo considera que en lo que respecta a la revocatoria directa solicitada, las cuales se resumen en que se configure el silencio administrativo positivo frente al recurso de reposición formulado en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2016, y en consecuencia sea revocado el acto administrativo 413.032.21.12762 de diciembre 21 de 2017, es una posición que no comparte este despacho puesto que las normas del procedimiento de cobro coactivo una vez llegan a esta etapa, son gobernadas por los postulados enunciados en los artículos 171 y ss del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, y aquí el procedimiento emana de forma exegética y taxativa en lo que al cobro se refiere, en principio el acto administrativo que rige esta etapa es el mandamiento de pago, acto

que puede ser atacado mediante la proposición de excepciones que se pretendan hacer valer en el proceso (véase el artículo 182 del citado decreto) el cual nos indica cuales excepciones se propondrán contra el mismo, de otra parte la resolución mediante la cual se rechacen las excepciones propuestas nos menciona el artículo 186 del mismo decreto, que únicamente procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió el rechazo, así las cosas, no obedece a una postura arbitraria o de vulneración de los derechos fundamentales de los contribuyentes, toda vez que mal haría ya en esta etapa de cobro que la administración evadiera el procedimiento señalado para tal fin, en su consideración con estos actos administrativos le asiste todo el derecho al administrado de tomar las medidas o acciones de control, para que la Jurisdicción Contenciosa conozca de fondo los planteamientos del administrado, frente a los actos administrativos que pretenda hacer valer el contribuyente deudor, pero mal haría la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo pasar por encima de normas que en su consideración son igual de importantes que todas las demás que convergen respecto del Proceso de Cobro Administrativo Coactivo.

Que la Dra. Alicia Osorio González expresa que la solicitud de revocatoria directa contemplada en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), vulnera los siguientes derechos:

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra el
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona

Que la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo a de separarse de los planteamientos anteriormente citados por la Dra. ALICIA OSORIO GONZALEZ, toda vez que si bien es cierto es una apreciación digna de estudio y análisis profundo, no comparte este despacho los mencionados argumentos por los siguientes motivos a exponer: el proceso administrativo de cobro coactivo que tiene su origen en la obra 556 21 Megaobras, encuentra sustento en la misma carta política cuando su artículo 338 faculta a los municipios para imponer contribuciones fiscales y parafiscales, fijar los sujetos activo y pasivo, los hechos y las bases gravables y las tarifas de las mismas, elaborar sus procesos de cobro, norma que a su vez crea el marco jurídico para la adopción de normas especiales del orden municipal como lo son el acuerdo 0178 de 2006 o Estatuto de Valorización Municipal y posterior a ello el Decreto Extraordinario 0139 de 2012, por medio del cual se establece el Procedimiento Tributario para el

municipio de Santiago de Cali, de ahí que el proceso haya surtido todas las fases en lo concerniente al debido proceso, en este orden de ideas no es contrario ni es opuesto a la ley.

En el segundo punto se habla de que no esté conforme al interés público o social, o atenten contra él, y es conveniente reiterar que el Plan de Obras General 556 denominado 21 Megaobras, se erige desde sus inicios como obras de interés y beneficio general para el municipio de Santiago de Cali, también es oportuno expresar que una vez creada la contribución dado el clamor de los habitantes, la administración amplio formas de pago, descuentos y un sin número de ayudas a sus habitantes para que coadyuvaran al impulso de las mismas, posterior a ello se crearon alivios tributarios como los denominados papayazos tributarios y aun así muchos de sus conciudadanos no se acogieron a ninguna facilidad de pago, por el contrario se emprendieron actuaciones para desestimar el carácter legal de las mismas, situación que hasta hoy en día prevalece en algunos sectores, sin embargo es de resaltar el gran compromiso y deber ciudadano con el que muchos de los deudores lograron colocarse al día con el pago de la contribución en comento.

Que la administración no ha causado un agravio en contra de la persona ALICIA OSORIO GONZALEZ, al momento de establecer parámetros legales para el cobro de la contribución de valorización de las 21 Megaobras acorde con la Constitución Política y las normas especiales que regulan la materia, no constituye la esencia o fin de la administración causar hechos que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos, el proceso establecido para tal fin se encuentra regulado en la ley, se fija el mismo procedimiento de cobro para todos los contribuyentes y no se hace de forma individualizado, salvo la asignación de la contribución y las respuestas a las peticiones recursos y excepciones que sean interpuestas por los sujetos pasivos, estas si son actuaciones que deben observarse de manera individual en lo que respecta al proceso adelantado contra cada predio. Los beneficios, descuentos, plazos etc. son actos de carácter general y no particular que siempre promueven o buscan un beneficio del bien común.

El actor ha hecho uso de los debidos recursos consagrados en el proceso administrativo de cobro coactivo a saber, excepciones contra el mandamiento de pago, recurso de reposición contra la resolución que rechaza las excepciones, así como en esta oportunidad presenta la solicitud de revocatoria directa de actuaciones ya surtidas, sin embargo menester indicar que expresa el artículo 104 del Decreto Extraordinario 0139 cuando es procedente la Revocatoria Directa y nos indica que: *"Solo procederá la*

acción de revocación directa prevista en el Código Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa".

Para el caso que nos ocupa, se observa en el sumario que la Dra. Alicia Osorio González presentó las excepciones y el recurso de reposición que consagra la norma especial coactiva, por lo tanto no estará llamada a prosperar la revocatoria directa solicitada por el actor.

La fuerza ejecutoria del acto administrativo está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aun en contra de la voluntad de los administrados y los actos que queden en firme al concluir el Procedimiento Administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato, los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución de la voluntad de los interesados.

La fuerza ejecutoria de los actos administrativos es decir su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene en la forma expresada en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).

"En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 [5] del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico".

En lo que respecta a la revocabilidad de los actos administrativos, la jurisprudencia ha sido generosa en manifestar que si bien es cierto es un derecho que puede solicitar el interesado, no siempre se rige como precepto universal toda vez que si el particular ha ejercido los derechos en la vía gubernativa, que para el presente caso según las

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

normas establecidas en el procedimiento de cobro coactivo contemplado en los artículos 171 y siguientes del Decreto Extraordinario 0139 de 2012, como interponer las excepciones contra el mandamiento de pago, y si es el caso posterior a ello la interposición del recurso de reposición, aquí quedaría constituida la denominada vía gubernativa, así las cosas al haber hecho uso el actor de las excepciones y el recurso de ley, no tendría vocación de prosperar la revocatoria directa de los actos acusados sin perjuicio que con estas herramientas pueda acudir ante el juez contencioso administrativo en aras de obtener las pretensiones del actor.

En virtud de lo expuesto la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo de la Subdirección de Tesorería Municipal

RESUELVE

Artículo Primero: NO DECLARAR la configuración del Silencio Administrativo Positivo del recurso de apelación interpuesto por la Dra. ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 portadora de la Tarjeta Profesional número 25.308 del C.S de la Judicatura, interpuesto en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2017 conforme los motivos expuestos en el presente acto administrativo.

Artículo Segundo: NO REVOCAR la resolución 4131.032.21.12762 del 21 de diciembre de 2017, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición en contra de la resolución 4131.3.21.170845 de noviembre 21 de 2017 solicitado por la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.969.635 expedida en Cali (Valle), abogada portadora de la Tarjeta Profesional 25.308 del C.S. de la Judicatura en calidad de propietario contribuyente del predio B006602240000.

Artículo Tercero: NOTIFICAR del presente acto administrativo a la Doctora ALICIA OSORIO GONZALEZ de las condiciones civiles ya conocidas en calidad de contribuyente del predio B006602240000. Para ello envíese las comunicaciones pertinentes a la siguiente dirección: Avenida 2 oeste # 14-34 de Cali (Valle).

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No.4131.032.21. 21717 DE 2018
(AGOSTO 22)

POR LA CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA EN CONTRA DE LA RESOLUCION 4131.032.21.12762 DE DICIEMBRE 21 DE 2018 POR LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL DE LA OBRA 556 21 MEGAOBRAS DEL PREDIO B006602240000

Artículo Cuarto: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 185 del Decreto Extraordinario 0139 de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 22 días del mes de AGOSTO de 2018.

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO
Jefe de Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo
Departamento Administrativo de Hacienda

Proyectó: Francisco Mario López Casanova.- Profesional Universitario G-2.
Revisó: Alejandro Zuluaga. Contratista.



Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 16 / 4 / 2018 16 : 54

Fecha Prog. Entrega: 17 / 4 / 2018

GUIA No. 2003833629

CÓDIGO SER: SER16765 / SER16765

REMITENTE

AV 2 NORTE 10-70 P 6

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Teléfono: 6609067 D.I./NIT: 890399011 Cod. Postal: 760045

Cd.: CALI Dpto.: VALLE

País: COLOMBIA email:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1 17/04/18 1131	
___ ___ ___ Desconocido	2 / / /	
___ ___ ___ Rehusado		
___ ___ ___ No reside	3 / / /	
___ ___ ___ No reclamado		
___ ___ ___ Dirección errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
___ ___ ___ Otro (indicar cual)	/ / /	

RECIBIA CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

GUIA No. 2003833629

FECHA Y HORA DE ENTREGA

/ / /

Observaciones en la entrega:

UNIDO SUPERTRANSPORTE

DESTINATARIO

CLO 20

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

CIUDAD. CALI

VALLE F.P.: CREDITO

NORMAL M.T.: TERRESTRE

CARRERA 62 1 - 07 B PAMPALINA

Nombre: ALICIA OSORIO GONZALEZ

Teléfono: 1111111 D.I./NIT: 0

País: COLOMBIA Cód. Postal: 760035

email:

Dice Contener: 20174173020014876 2-20184131032005 6721

Obs. para Entrega: CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL

Vr. Declarado: $ 5.000 VOL. : 0 / 0 / 0

Vr. Flete: $ 596.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1

Vr. Sobreflete: $ 0.00 No. Remisión: MIGUEL A

Vr. Total: $ 598.00 No. Sobreporte:

No Ref2: No. Factura:

Quién Recibe: No. Ref1:

DO-6-CL-4DM-F-68 V4

REMITENTE

Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C.,
Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario:
www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 360 ext 110045

Fecha: 22 / 5 / 2018 11 : 37
Fecha Prog. Entrega: 23 / 5 / 2018

CÓDIGO SER: SER16765 / SER16765

GUIA No. 2010700831

REMITENTE

AV 2 NORTE 10-70 P 6

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Teléfono: 6609097 D.I./NIT: 890399011 Cod. Postal: 760045
Cd.: CALI Dpto.: VALLE
País: COLOMBIA email:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1	
— — — Desconocido	2	
— — — Rehusado		
— — — No reside	3	
— — — No reclamado		
— — — Dirección errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
— — — Otro (indicar cual)		

RECIBIDO A SATISFACCIÓN NOMBRE Y/O SELLO QUIEN

Edificio JUNCOS Portería

RECIBIDO

DIA MES AÑO 2020

GUIA No. 2010700831

FECHA Y HORA DE ENTREGA

23 MAY 2018

Observaciones en la entrega:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Osorio

DESTINATARIO

CLO 20 T647	DOCUMENTO UNITARIO	PZ: 1
	CIUDAD: CALI	
	VALLE	F.P.: CREDITO
	NORMAL	M.T.: TERRESTRE

AVENIDA 3 OESTE 14 - 34 APTO 402

Nombre ALICIA OSORIO GONZALEZ
Teléfono: 1111111 D.I./NIT: 0
País: COLOMBIA Cód. Postal: 760045
email:

Dice Contener: 201741730200146762-201841310320056721
Obs. para Entrega: CITACION NOTIFICACION PERSONAL
Vr. Declarado: $ 5.000 VOL : 0 / 0 / 0
Vr. Flete: $ 598.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: $ 0.00 No. Remisión: DIEGO G
Vr. Total: $ 598.00 No. Sobreporte:

Quién Entrega:

DO-S-CL-IDM-F-68 V 4

PRUEBA DE ENTREGA

Ministerio de Transporte Licencia No. 000 de Marzo 9/2004, ampliada Licencia No. 1778 de Sept. 27/2013.

Servientrega S.A NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C.,
Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario:
www.servientrega.com. PBX: 7 700 200 Fax: 7 700 360 ext 110045.

Fecha: 29 / 6 / 2018 15 : 58
Fecha Prog. Entrega: 30 / 6 / 2018

GUIA No. 2012257166

CÓDIGO SER: SER16765 / SER16765

REMITENTE

AV 2 NORTE 10-70 P 6

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Teléfono: 0 D.I./NIT: 890399011 Cod. Postal: 760045
Cd.: CALI Dpto.: VALLE
País: COLOMBIA email:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1 / / /	
Desconocido	2 / / /	
Rehusado		
No reside	3 / / /	
No reclamado		
Dirección errada	FECHA DEVOLUCION A REMITENTE	
Otro (indicar cual)	/ / /	

RECIBIA CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y C.I.): 11:35

GUIA No. 2012257166

FECHA Y HORA DE ENTREGA / / /

Edificio JUNCOS Porteria RECIBIDO

Observaciones en la entrega:

DIA 03 MES 07 AN 2018 03 JUL 2018

DESTINATARIO

CLO 20 T647	DOCUMENTO UNITARIO	PZ: 1
	CIUDAD. CALI	
	VALLE	F.P.: CREDITO
	NORMAL	M.T.: TERRESTRE

AVENIDA 3 OESTE NO 14 -34 APTO 402

Nombre ALICIA OSORIO GONZALEZ
Teléfono: 1111111 D.I./NIT: 0
País: COLOMBIA Cód. Postal: 760045
email:

Dice Contener: 201741730200146762 - 201841310320102071
Obs. para Entrega: NOTIFICACION POR AVISO
Vr. Declarado: $ 5.000 VOL : 0 / 0 / 0
Vr. Flete: $ 598.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: $ 0.00 No. Remisión: MYRIAM M
Vr. Total: $ 598.00 No. Sobreporte:

Quién Entrega: 11:38 Am

DG-6-CL-IDM-F-68 V.4

PRUEBA DE ENTREGA

Servientrega S.A.NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C.,
Colombia Av Calle 6 No. 34A-11, Atención al usuario:
www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

Fecha: 28 / 8 / 2018 14 : 29
Fecha Prog. Entrega: 29 / 8 / 2018

CÓDIGO SER: SER16765 / SER16765

GUIA No. 2015011628

REMITENTE

AV 2 NORTE 10-70 P 6

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Teléfono: 0 D.I./NIT: 890399011 Cod. Postal: 760045
Cd.: CALI Dpto.: VALLE
País: COLOMBIA email:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVIO				INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1	2	3			
—	—	—	Desconocido	1 DIA / MES / AÑO / HORA	
—	—	—	Rehusado	2 DIA / MES / AÑO / HORA	
—	—	—	No reside		
—	—	—	No reclamado	3 DIA / MES / AÑO / HORA	
—	—	—	Dirección errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
—	—	—	Otro (indicar cual)	DIA / MES / AÑO / HORA	

RECIBIA CONFORMIDAD(NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y CC)

Yare Leonicio
Venecia del Rio

GUIA No. 2015011628

FECHA Y HORA DE ENTREGA
DIA / MES / AÑO / HORA

Observaciones en la entrega: PORTERIA 10:58 29 AGO 2018

Quién Entrega:

DESTINATARIO

CLO 20 T647	DOCUMENTO UNITARIO	PZ: 1	
	CIUDAD:	CALI	
	VALLE	F.P.:	CREDITO
	NORMAL	M.T.:	TERRESTRE

AVENIDA 2 OESTE 13 -94 APTO 401

Nombre ALICIA OSORIO GONZALEZ
Teléfono: 1111111 D.I./NIT: 0
País: COLOMBIA Cód. Postal: 760045
email:

Dice Contener: 201841730101120762-201841310320140921
Obs. para Entrega: CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL
Vr. Declarado: $ 5.000 VOL : 0 / 0 / 0
Vr. Flete: $ 598.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1
Vr. Sobreflete: $ 0.00 No. Remisión: MIGUEL A
Total: $ 598.00 No. Sobreporte:

DG-8-CL-IDM-F-68 V 4

PRUEBA DE ENTREGA

MC Mensajería
NIT 800162003-9

237531693

HORA ENTREGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AM X
PM X

FECHA DE GESTION 12-2016 01-2017

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
X

REMITENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAHM
PRODUCTO: **DAHM-SUBDIRECCION-TESORERIA**
DAHM-EXPRESA OBJETOS POSTALES CERTIFICADOS
DIRECCION CAM
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI PAIS: COLOMBIA
DIRECCION ELECTRONICA: www.cali.gov.co
TELEFONO: 195 NIT O CEDULA: 890399011

DESTINATARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALICIA OSORIO GONZALEZ
DIRECCION. AVENIDA 3 OESTE NRO 14-34 APTO. 402 EDIFICIO LOS JUNCOS
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI PAIS: COLOMBIA
CODIGO POSTAL: 760001
TELEFONO 0 NIT O CEDULA

DICE CONTENER: CARTA COPIA
CITACION-20164111000800632-20164131139244921-CART-ALEJANDRO ZULUAGA Si

RECIBI CONFORME
Edificio JUNCOS Porteria
RECIBIDO
NOMBRE DIA MES AÑO
CEDULA: TELEFONO: ENTREGA

FECHA Y HORA ACCPIO JUEZ ORIGEN DEMANDANTE
05/12/2016 04:19:43 p.m.
FECHA MAX ENTREGA CONS CITACION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
08-12/2016 12
PROCESO: DEMANDADO
PIEZAS PESO ZONA
1 0.25
ORDEN 1494515 RADICADO

INTENTOS DE ENTREGA

MENSAJERO
1. NOMBRE:
CEDULA:
2. NOMBRE:
CEDULA:
FECHA / / / /

MOTIVOS DE DEVOLUCION

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DESTINATARIO DESCONOCIDO
2 TRASLADO
3. DESOCUPADO
4 REHUSADO
5. DIRECCION ERRADA
6 ZONA DE ALTO RIESGO
7 DIRECCION INCOMPLETA
8 NO RECLAMADO
9 FALLECIDO
10 CERRADO NO ABRE
FECHA Y HORA DEVOLUCION / /

MENSAJERO
FECHA Y HORA DE GESTION 12/12/2016
CEDULA No: 1-1033334 HORA 1130

VR SEGURO $ 0
VR DECLARADO $ 0
VR MENSAJERIA EXPRESA $ 527
TOTAL $ 527

Señores
JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO DE CALI
E. S. D.

RADICADO No.	76001333301420220013300
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
DEMANDANTE	ANGELICA MARIA VARGAS MEJIA
DEMANDADO	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ASUNTO	CONTESTACIÓN DE DEMANDA

JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1018448075 expedida en Bogotá abogado (a) en ejercicio, portador (a) de la tarjeta profesional No. 326.858 del Consejo Superior de la Judicatura actuando en calidad de apoderado (a) sustituto (a) del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, entidad demandada dentro del proceso de la referencia por medio del presente escrito, encontrándonos dentro del término legal, procedo a presentar **CONTESTACIÓN DE DEMANDA** ante su honorable despacho, lo cual se realiza en los siguientes términos:

I. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Actuando en nombre y representación de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, según las facultades de representación judicial anteriormente anotadas, me opongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, sus declaraciones y condenas; para lo cual, previo a cumplir con la formalidad de pronunciarme respecto a éstas, se considera de especial relevancia advertir algunos aspectos de carácter general que conciernen al presente litigio, los cuales serán rigurosamente desarrollados a lo largo de la presente contestación, y que corresponden a lo siguiente:

1. La demanda se encuentra fundada en supuestos de hecho falsos e inexistentes: El demandante, cuando plantea la secuencia de los supuestos de hecho en los cuales fundamenta sus pretensiones, hace referencia a apartes normativos inexistentes. Concretamente, **el hecho tercero de la demanda** señala que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 modificó la Ley 91 de 1989, y que a partir de su entrada en vigencia, las entidades territoriales, según el demandante, deben pagar intereses de cesantías antes del 30 de enero y consignar las

cesantías en una cuenta individual del docente antes del 15 de febrero de la anualidad siguiente a la que fueron causadas. La simple lectura del tenor literal del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 permite a cualquiera evidenciar que no existe en el texto normativo mención alguna a estos aspectos, ya que la norma jamás se refiere a fechas y mucho menos a cuentas individuales de los docentes en el FOMAG. Esta norma se contrae a indicar que "las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio". En conclusión, se observa que, la forma en que se plantean los hechos de la demanda, peligrosamente intentan desviar la atención de la administración de justicia, generando confusión respecto de lo que expresamente se encuentra previsto en el artículo 57 en mención.

2. Las pretensiones de la demanda contrarían los beneficios que tienen los docentes del FOMAG: Dentro de las peticiones de la demanda, se observa que, en el numeral segundo, el apoderado solicita que los intereses de las cesantías del docente se tramiten bajo el amparo de las normas establecidas para los trabajadores particulares. Esta posición, desconoce y pasa por alto que la norma especial prevista para los docentes del FOMAG, esto es, el inciso 2, del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del FOMAG, resulta mucho más beneficiosa para la demandante en materia de liquidación de intereses, hecho que aritméticamente se comprobará en la presente contestación de demanda.

   Por tanto, el apoderado de la demandante, en procura de unos beneficios que eventualmente podrían generarse en el hipotético caso de un fallo favorable, solicita la aplicación que en demasía merma los beneficios que en materia de intereses ostenta el trabajador del sector educativo que concurre a la presente demanda.

3. Se pretende la nulidad de un acto ficto o presunto que no se configuró: El objetivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al que acude el demandante, pretende la nulidad del acto ficto o presunto que se configuró ante la ausencia de respuesta a la solicitud por escrito de la indemnización moratoria solicitada. No obstante, Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera y administradora del FOMAG, emitió respuesta a la comunicación remitida por el demandante, en la cual solicitaba la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías y sus intereses. Por tanto, es inexistente el acto administrativo (ficto en este caso) del que se pretende la nulidad, ya que no se configuraron los elementos previstos en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) para el silencio administrativo negativo. Así mismo, se deberá probar en el proceso si la petición que en el mismo sentido fue remitida al Departamento de Chocó, entidad territorial que también se encuentra vinculada en la presente relación jurídico-procesal, fue objeto de respuesta por parte del representante legal u otro funcionario.

4. Indebida interpretación de la jurisprudencia relativa a las cesantías de los docentes del FOMAG: En la sustentación del concepto de violación, el demandante reseña una serie de pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, mediante los

cuales pretende sustentar sus pretensiones. Sin embargo, es importante precisar que el alcance de la jurisprudencia no corresponde a la que le endilga el demandante, situación a la se hará referencia puntualmente en el desarrollo de la contestación de la demanda.

De acuerdo con lo anterior, procedo a pronunciarme de manera individual frente a cada una de las pretensiones de la demanda, así:

FRENTE A LAS PETICIONES

PRIMERA: Me opongo a que se declare la nulidad de un acto ficto inexistente que, según el demandante, presuntamente se configuró el día 13 de octubre de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera y administradora del FOMAG, mediante oficio No. 20210173164781 de 11-10-2021, dio respuesta a la solicitud efectuada por la demandante en donde requería el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías y sus intereses conforme a lo establecido en la Ley 50 de 1990, artículo 99. Ante esta evidencia, es claro que no se configuró el acto ficto o presunto respecto del cual el demandante solicita la nulidad.

SEGUNDA: Me opongo a que se declare que el demandante tiene derecho a que se reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, e indemnización por intereses, ya que como más adelante se demostrará en la presente defensa, las cesantías de la señora Yira Patricia Ibarguen Giran se tramitaron conforme a lo específicamente reglado en el régimen especial del magisterio, esto es, la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 039 de 1998 emitido por el Consejo Directivo del FOMAG.

FRENTE A LAS DECLARACIONES DE CONDENA

Me opongo a lo solicitado en el numeral **PRIMERO** del acápite de condenas, esto es, que se condene a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 en favor de la parte actora, en la medida en que el demandante carece de sustento fáctico, jurídico y probatorio para demostrar que el trámite de las cesantías de la demandada, para la anualidad de 2020, se llevó a cabo sin el cumplimiento de la normativa establecida para el régimen especial del magisterio que regula la materia.

Me opongo a lo solicitado en el numeral **SEGUNDO** del acápite de condenas, esto es, que se condene a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO al reconocimiento y pago de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías en favor de la parte actora, en la medida en que el demandante carece de sustento fáctico, jurídico y probatorio para demostrar que el trámite de las cesantías de la demandada, para la anualidad de 2020, se llevó a cabo sin el cumplimiento de la normativa establecida para la materia, tal como se ampliará cuando, en la presente defensa, se haga referencia a cómo se liquidan y pagan los intereses de cesantías de los docentes afiliados al FOMAG.

Me opongo a lo solicitado en el numeral **TERCERO** del acápite de condenas, esto es, que se condene a la NACION- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar ajustes con motivo de la disminución del poder adquisitivo, pues, al no ser procedente el reconocimiento de suma alguna por concepto de indemnización moratoria, la misma suerte corre la pretensión de este numeral. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado con suficientes argumentos la imposibilidad de reclamar ajustes de valores cuando lo que se pretende es un reconocimiento indemnizatorio.

Me opongo a lo solicitado en los numerales **CUARTO**, **QUINTO** y **SEXTO** del acápite de condenas, oposición que dependerá de las resultas definitivas del presente litigio en cumplimiento del derecho constitucional del debido proceso.

II. FRENTE A LOS HECHOS

PRIMERO: Es cierto, en la medida en que el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, se refiere a la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (FOMAG) como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial y sin personería jurídica.

SEGUNDO: Es parcialmente cierto, en la medida en que no es el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 el que se refiere a las cesantías a cargo del FOMAG, sino el numeral 3 del mismo artículo.

TERCERO: No es cierto, en la medida en que, tal como se indicó en las consideraciones preliminares, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se contrae a indicar que "las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio", más no hace referencia alguna a la forma o fechas en que se deben pagar los intereses de las cesantías, y mucho menos a que la consignación de cesantías deba realizarse en una cuenta individual del docente. De la simple lectura del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se puede concluir que el demandante está agregando textos que la norma que cita no contiene, lo cual peligrosamente podría confundir a la administración de justicia en el entendimiento del litigio que se está examinando.

CUARTO: No es cierto, en la medida en que las cesantías de la demandante fueron debidamente tramitadas conforme al régimen especial establecido en el inciso 2, del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998 "*Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio*" expedido por el Consejo Directivo del FOMAG. Es importante mencionar que, como más adelante se expondrá, tal como lo corroboró el Consejo de Estado en Sentencia del 24 de enero de 2019 (Expediente: 76001-23-31-000-2009-00867-01, número interno: 4854-2014) el sistema de cálculo de los intereses de las cesantías de los docentes de FOMAG es mucho más beneficioso que el de los demás trabajadores del país. Lo anterior, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el artículo primero del acuerdo se pagará **un interés anual** sobre

el saldo de las cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año (aplicando al valor acumulado de cesantía la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Bancaria haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo periodo). Debe resaltarse, que sobre el acuerdo del Consejo Directivo del FOMAG pesa una demanda de nulidad simple por inconstitucionalidad, presentada por la misma firma que apodera a la docente demandante, y que se tramita ante el Consejo de Estado (Expediente: 11001032500020210068600, sección segunda, subsección A). Por tanto, hasta tanto no exista decisión de fondo y debidamente ejecutoriada, el contenido del acuerdo permanece en el mundo jurídico con plenos efectos frente a la liquidación de los intereses de las cesantías de los docentes de FOMAG.

QUINTO: No es cierto, en la medida en que los intereses de las cesantías de la docente Yira Patricia Ibarguen Girón fueron liquidados conforme al régimen y procedimiento especial establecido en el Acuerdo No. 39 de 1998 "*Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio*" expedido por el Consejo Directivo del FOMAG (con la salvedad de acción de nulidad que se encuentra en curso y que se describió en el numeral anterior). Como se anotó, el apoderado judicial de la demandante pretende que a la docente se le aplique un esquema normativo que le resulta mucho **menos** beneficioso que el de su régimen especial.

SEXTO: No es cierto, en la medida en que mediante oficio No. 20210173164781 de 11-10-2021, Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera y administradora del FOMAG emitió respuesta a la comunicación remitida por el demandante, en la cual solicitaba la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías y sus intereses.

SÉPTIMO: Es cierto, en la medida en que el 22 de noviembre de 2021 se llevó a cabo, en la Procuraduría 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó, Chocó, audiencia de conciliación extrajudicial en donde, entre otros casos, se intentó la conciliación respecto de las pretensiones de la señora YIRA PATRICIA IBARGUEN GIRÓN relacionadas con las solicitudes realizadas en la demanda. De acuerdo con lo consignado en la constancia expedida por el despacho de la procuraduría, la conciliación fue declarada fallida por la ausencia de ánimo conciliatorio por parte de LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que, vale la pena resaltar, se sustentó en los argumentos jurídicos que retomaremos en los siguientes apartes.

OCTAVO: No corresponde a un supuesto de hecho, corresponde a la trascripción de un extracto de la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente con radicado No. 08001-23-33-0002014-00132-01.

III. EL PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo a las pretensiones y supuestos de hecho en los que se soporta el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el demandante, se puede concluir que los problemas jurídicos que debe entrar a resolver la jurisdicción contenciosa administrativa, corresponden a los siguientes:

- ¿Se configuran los presupuestos necesarios para el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata la Ley 50 de 1990 y el pago de indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías?
- ¿Cómo se garantiza el principio de inescindibilidad de la norma en el régimen especial de las cesantías de los docentes?

A efectos de que el Despacho cuente con los argumentos suficientes para desatar el presente litigio, muy respetuosamente procedemos a realizar una puntual exposición de los aspectos que, a nuestro juicio, permiten concluir que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la parte demandante, lo cual procedemos a desarrollar en los siguientes términos.

1. **Generalidades del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y sus características frente a otras figuras de administración de las cesantías de los trabajadores**

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como **una cuenta especial** de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para que sus recursos sean manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital; para tal efecto, el Presidente de la República, el Ministro de Educación Nacional y Fiduciaria La Previsora S.A. celebraron contrato de fiducia mercantil protocolizado mediante la Escritura Pública No. 0083 de 21 de junio de 1990.

Para los efectos de esta defensa del patrimonio público, es necesario que el Señor Juez tenga en cuenta que el FOMAG es un **fondo cuenta**, que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 91 de 1989 y el objeto del contrato mismo, **constituye un patrimonio autónomo** cuyos recursos son administrados por una sociedad fiduciaria (actualmente Fiduprevisora S.A.), sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por ser un fondo cuenta, no se constituye como una entidad financiera y consecuentemente, no le es permitido realizar las operaciones financieras de que trata el Estatuto Orgánico del Sector Financiero (Decreto Ley 663 de 1993), el cual referencia taxativamente las entidades que sí tienen esa posibilidad. En lo que se refiere al pago de las cesantías del personal docente afiliado al FOMAG, el artículo 15, numeral 3 de la misma ley, prevé los escenarios y la forma en que, según el periodo de vinculación del docente, se liquidan y pagan las correspondientes cesantías.

Otra de las particularidades del régimen de los docentes deviene en que en virtud del artículo 1 del Decreto 3752 de 2003, a este fondo cuenta, se deben afiliar, obligatoriamente, todos los docentes del país.

Para mayor claridad, resulta relevante resaltar las **sustanciales diferencias** que tiene el FOMAG con otros sistemas de administración de cesantías, particularmente en lo relacionado con la naturaleza jurídica, régimen especial, funcionamiento y operación, respecto de los demás regímenes de cesantías, así:

- <u>Fondos Privados de Cesantías</u>:

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero (Decreto Ley 663 de 1993) los fondos privados de cesantías corresponden a la figura de **un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados**, independiente del patrimonio de la sociedad administradora y conformado por las **cuentas individuales de éstos**, las cuales, a su vez, tienen una subcuenta de

corto y una subcuenta de largo plazo. Por su naturaleza, tienen las características de una entidad financiera, lo cual le permite realizar inversiones. En cuanto al régimen de liquidación de las cesantías y sus intereses pertenecientes a sus afiliados voluntarios, se realiza conforme a lo expresamente regulado por artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Es importante anotar, que por disposición del Decreto 1582 de 1998, artículo 2, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 **podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías**. Esta modalidad de administración, corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

- Fondo Nacional del Ahorro:

El Fondo Nacional del Ahorro se constituye como un **establecimiento público** creado mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, bajo el régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado. Está organizado como un establecimiento de crédito del orden nacional **de carácter financiero**, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

Este Fondo entidad se regula por la Ley 432 de 1998, al cual se deben afiliar obligatoriamente todos los servidores públicos y de manera excepcional, los particulares que voluntariamente lo hagan. En este sistema, también se dispuso el esquema de cuentas individuales para cada afiliado, tal como lo dispone el artículo 12, cuando se regula los intereses de las cesantías para el FNA, los cuales se abonarán a la cuenta individual de cada servidor público.

2. Fuentes de financiación de los distintos regímenes de cesantías:

Otra de las diferencias entre los diferentes regímenes de cesantías se encuentra en las fuentes de financiación de cada uno, como se plantea en el siguiente cuadro y su esquema de administración:

FONDOS PRIVADOS DE CESANTÍAS (cuentas individuales por afiliado)	FONDO NACIONAL DEL AHORRO (cuentas individuales por afiliado)	FOMAG (fondo común-unidad de caja)
Recursos con los que se conforman		
A. Las sumas que por concepto de auxilio de Cesantías consigne el empleador. B. Aportes voluntarios por los afiliados independientes. (Decreto 1063 de 1991, artículo 12, literal b) y artículo 31). C. Aportes de las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado. (Artículo 59 de la Ley 79 de 1988, el Decreto 468 de 1990 y el Decreto 4855 de 2006). D. Los aportes de las entidades públicas del sector salud, de la rama judicial o del nivel territorial. (Decreto 1582 de 1998). E. Las sumas entregadas por la nación	a) Las cesantías de los afiliados,; b) Las apropiaciones y recursos provenientes de la Nación y de otras entidades de derecho público o privado; c) Los auxilios, subvenciones, donaciones o contribuciones; d) Los recursos provenientes de los empréstitos internos y externos; e) Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y los frutos naturales o civiles de éstos; f) Los rendimientos que provengan de sus inversiones y rentas, cualquiera que sea su naturaleza; g) El producto de las operaciones de venta de activos;	El 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo. Las cuotas personales de inscripción equivalentes a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores aumentos. El aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes. El aporte de la Nación equivalente a una doceava anual, liquidada sobre los factores salariales que forman parte

a través del sistema general de participaciones. F. Las sumas entregadas por la nación y las entidades territoriales por concepto de los contratos de concurrencia. G. Los rendimientos generados por los activos que integran los portafolios del fondo. H. El producto de las operaciones de venta de activos. I. Cualquier otro ingreso que resulte a favor de los portafolios del Fondo	h) Los ahorros voluntarios de los afiliados; e i) Cualquier otro ingreso que resulte a favor del Fondo.	del rubro de servicios personales de los docentes. El 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados. El 5 por mil, de que hablan las Leyes 4 de 1966 y 33 de 1985, a cargo de los docentes, de toda nómina que les pague la Nación por servicios personales.
FONDOS PRIVADOS DE CESANTÍAS	**FONDO NACIONAL DEL AHORRO**	**FOMAG**
SUJETOS BENEFICIARIOS		
Trabajadores particulares vinculados a través de contrato de trabajo.	Trabajadores y servidores públicos. Trabajadores del sector privado que se afilien voluntariamente.	Exclusivamente y de forma obligatoria, el Personal docente.

3. Imposibilidad jurídica y física de apertura de cuentas individuales para los afiliados al FOMAG

A diferencia de lo dispuesto para los Fondos Privados de Cesantías y del Fondo Nacional del Ahorro, el esquema de manejo de las cesantías de los docentes del FOMAG tiene vedada la posibilidad de aperturar cuentas individuales para cada uno de sus afiliados. Lo anterior se explica a partir de la naturaleza y estructura de este fondo cuenta, la cual surge a partir de lo dispuesto por el propio legislador en las normas vigentes que gobiernan su funcionamiento, así:

- Al tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 91 de 1989, los recursos del FOMAG se conforman con una pluralidad de fuentes, que corresponden, entre otras, a los realizados a través de los descuentos a los afiliados y los aportes de la Nación y las entidades territoriales. Es decir, durante la vigencia presupuestal respectiva se reserva el pasivo prestacional de los docentes, incluyendo las cesantías.
- La totalidad de recursos con que se constituye el FOMAG conforman el patrimonio autónomo que se administra a través de un esquema fiduciario al que se refiere la Ley 91 de 1989. En ese sentido, los recursos se administran conforme a las indicaciones de la mencionada ley, las cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que apruebe el Consejo Directivo del FOMAG.
- La Ley 1955 de 2019, artículo 57, señala que "Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar **el principio de unidad de caja** con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, …". El principio de unidad de caja permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De lo anterior se concluye que, en primer término, en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Ahora bien, para mayor claridad del tema, el esquema descrito lo soporta un conjunto de normas que indican cómo se apropian los recursos que conforman el patrimonio autónomo del FOMAG, incluidas las cesantías y sus intereses (Ley 91 de 1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13), normas que soportan el régimen especial del Magisterio, que finalmente deben interpretarse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3752 de 2003. Es así como este procedimiento surte las siguientes fases:

- Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones.
- Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.) comunica a la entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto.
- Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET- al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-.
- En caso de que estos recursos no fueren suficientes para cubrir la deuda, la entidad territorial deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Teniendo en cuenta que el procedimiento descrito involucra los recursos de las cesantías y sus intereses, se puede concluir que **anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías**, ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el principio de unidad de caja. Esta actuación es probatoriamente demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.

Para la liquidación de las cesantías correspondientes al año 2020, que es el periodo de cesantías del cual el demandante reclama que presuntamente no se realizó la consignación, Fiduprevisora S.A. emitió el Comunicado No. 16 de 17 de diciembre de 2019, en el cual se dieron los lineamientos operativos y la fecha para presentar el reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina del año 2020. En dicha comunicación se especificó lo siguiente:

> "2. La fecha de recibo de reportes de cesantías para todas las Secretarías de Educación a nivel nacional, es hasta el 05 DE FEBRERO DE 2020. Esta fecha es improrrogable y, por tanto, el no reporte oportuno de la información a esta entidad, conllevará la no inclusión en nómina de los docentes, siendo el Ente Territorial el responsable de las contingencias que se deriven en el pago de los intereses y por la mora en el pago de las prestaciones a favor de los docentes"

Con lo hasta aquí expuesto, podemos aproximarnos a las siguientes conclusiones:

1. El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas fueron puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de cuentas individuales para cada uno de

los afiliados, configurándose así la **imposibilidad jurídica** de acudir a su creación por vía de una orden judicial, como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja expresamente dispuesto para su administración.

2. El funcionamiento mismo del fondo cuenta, que se administra bajo la figura de un fondo común, configura una **imposibilidad física** para aperturar cuentas individuales para cada uno de los más de 300.000 docentes que se encuentran afiliados al FOMAG.
4. Ante la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al FOMAG, la imposibilidad se extiende a la figura de la "consignación de cesantías". En lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.
5. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción.

3. Procesos de afiliación de los docentes al FOMAG y su diferencia respecto a las administradoras de cesantías y el Fondo Nacional del Ahorro

Hasta ahora, nos hemos referido a las diferencias sustanciales que ostentan los tres regímenes de cesantías analizados, enfatizando en su naturaleza jurídica, los recursos que los conforman y la tipología de trabajador que vinculan. En este acápite, se profundiza en el procedimiento de afiliación que se debe surtir para vincular a cada trabajador y cómo la misma normativa establece las limitantes de adhesión a cada uno de los sistemas.

- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG:

De conformidad con lo establecido por la Ley 91 de 1989, reglamentada por el Decreto 3752 de 2003, los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG. Lo anterior significa que, por un lado los docentes forzosamente deben ser afiliados al FOMAG y a través de ese fondo cuenta obtener el pago de sus prestaciones sociales y, por otra parte, sus cesantías deben ser reconocidas y pagadas de acuerdo a los procedimiento y reglamentación establecida para tales efectos. Es decir, el ordenamiento jurídico no prevé que los docentes tengan la posibilidad de elegir otro esquema o figura de administración de sus cesantías, sino que por voluntad expresa del legislador deben someterse al régimen especial previsto para el magisterio, el cual no ha sido retirado del mundo jurídico por parte de algún alto tribunal.

- Fondos Privados de Cesantías:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 50 de 1990, aquellas personas que se encuentren vinculadas en una relación laboral regida mediante contrato de trabajo, obligatoriamente deben afiliarse a una de las empresas administradoras de cesantías (AFP), cuya creación se autorizó en virtud del numeral 6 del artículo 99 de la citada ley. A diferencia de los docentes del FOMAG, los trabajadores a los que les es aplicable este esquema tienen la posibilidad de escoger libremente la entidad administradora de fondos y pensiones de cesantías a la cual desean afiliarse y, adicionalmente, tienen la potestad de trasladar sus saldos de un fondo de cesantías a otro, siempre y cuando sean de la misma naturaleza (Ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 5).

En Colombia, actualmente funcionan 4 AFP: Protección S.A., Porvenir S.A., Colfondos Pensiones y Cesantías y Old Mutual.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 432 de 1998, artículo 8, que permite a los trabajadores del sector privado su afiliación en el Fondo Nacional del Ahorro, gozando de todos los beneficios contemplados para este sistema de administración de las cesantías, con excepción de lo relacionado con el artículo 12 de la misma ley, referente al cálculo de los intereses de las cesantías.

- Fondo Nacional del Ahorro:

Por disposición expresa del artículo 5 de la Ley 432 de 1998, los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público deben afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro. Es importante anotar, que el mismo artículo previó que dicha afiliación no es aplicable al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, **ni a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado mediante la Ley 91 de 1989**. La excepción era apenas obvia, en razón a que los docentes se encuentran cobijados por un régimen especial creado mediante una norma anterior.

De lo anterior se concluye, que las cesantías de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva forzosamente deben ser administradas a través de una figura específica, en este caso, por intermedio del Fondo Nacional del Ahorro, de acuerdo a la normativa y reglamentación prevista para tales efectos.

- Conclusiones:

De las acotaciones anteriormente realizadas, en donde se citan puntualmente las normas que se refieren a la especificidad de la tipología de trabajadores que obligatoriamente se debe afiliar a cada uno de éstos, podemos concluir que el diseño que hasta la fecha se encuentra vigente corresponde a un sistema de administración de cesantías coherente, en donde, atendiendo a la claridad de su reglamentación, no habría lugar a ningún tipo de confusión respecto de su funcionamiento y las reglas que, según el tipo de trabajador, deben observarse para la liquidación y pago de las respectivas cesantías.

4. Régimen de intereses de cesantías en los distintos esquemas

Teniendo en cuenta que parte de la discusión jurídica de las pretensiones gira en torno a la oportunidad y forma en que deben pagarse los intereses de cesantías de los docentes del FOMAG, corresponde puntualizar lo relativo al régimen aplicable en cada uno de los regímenes:

- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio:

En lo que se refiere a los intereses de las cesantías de los docentes del FOMAG, encontramos que la Ley 91 de 1989, artículo 15, señala expresamente la manera en cómo se liquidan los intereses de las cesantías del personal docente, así:

> "El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya

> sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período."

Adicionalmente, el Acuerdo No. 39 de 1998 del Consejo Directivo del FOMAG, estableció el procedimiento mediante el cual se hace efectivo el mandato legal contenido en el artículo mencionado. A su vez, el artículo 4 del acuerdo que se cita, indica:

> "**ARTICULO CUARTO**: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizará el pago de los intereses en el mes de marzo, a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria que administra los recursos del Fondo a más tardar el cinco (5) de febrero de cada año, y en el mes de mayo a los docentes cuya información haya sido remitida a la Entidad Fiduciaria en el período comprendido entre el seis (6) de febrero hasta el quince (15) de marzo de cada año. En los casos en que la entidad territorial reporte la información con posterioridad a ésta fecha, la entidad fiduciaria, programará pagos posteriores, de lo cual informará al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio."

Los plazos establecidos en el acuerdo transcrito fueron expedidos y publicados por el Consejo Directivo del FOMAG en ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 91 de 1989, entre otras, la de "Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos". Bajo esa línea, la liquidación de los intereses de las cesantías los docentes de FOMAG sigue ese procedimiento. Ahora bien, la firma de abogados que representa a la docente YIRA PATRICIA IBARGUEN GIRÓN, presentó ante el Consejo de Estado el medio de control de "nulidad simple por inconstitucionalidad" del artículo 4 del Acuerdo No. 39 de 1998, al cual le fue asignado el expediente No. 11001032500020210068600 (3740-2021) y su trámite se surte ante la Sección Segunda, Subsección A, de ese alto tribunal.

Se concluye entonces que lo dispuesto por el Consejo Directivo del FOMAG en materia de intereses de cesantías tiene plena vigencia, por tanto, no puede pretender la parte demandante que por vía de las pretensiones de la presente acción judicial el juez de esta causa decrete una especie de "derogatoria tácita" del acuerdo al que se hace referencia, máxime cuando es su misma firma la que está persiguiendo la nulidad de la disposición a través de la autoridad competente para declararla.

- Fondos Privados de Cesantías:

Para la liquidación de los intereses de las cesantías de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, expresamente dispuso lo siguiente:

> "2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente."

A diferencia de los docentes afiliados al FOMAG, en el caso de los trabajadores particulares encontramos que el esquema previsto es un porcentaje anual o proporcional por fracción, en este caso el 12%, que se aplica a la suma causada en el año o en la respectiva fracción. Nótese, que a diferencia de los docentes del FOMAG, los trabajadores particulares: (i) no tienen la posibilidad de que la liquidación de los intereses de las cesantías se realice respecto del saldo acumulado de cesantías, sino por el de cada año individualmente considerado, y (ii) la tasa de interés está atada al

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12%, sin que se consideren las fluctuaciones de la economía, hecho que sí está previsto para los docentes del FOMAG, cuya tasa de interés será la certificada por la hoy Superintendencia Financiera, de acuerdo a la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

- Fondo Nacional del Ahorro:

En el caso de este fondo, la liquidación de los intereses se encuentra expresamente reglada por el artículo 12 de la Ley 432 de 1998, el cual señala lo siguiente:

> "Artículo 12. INTERESES SOBRE CESANTÍAS. El Fondo Nacional del Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, **un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real-UVR, certificada por el Banco de la República**, sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondientes al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente. **No obstante, el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue consignada cada fracción**.
>
> Para el efecto, los saldos que administre el Fondo Nacional del Ahorro por este concepto se denominarán en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con el valor de la UVR, certificado por el Banco de la República, con base en la fecha de consignación de cada una de las fracciones."

Se concluye entonces que, aún en el esquema previsto para la liquidación de los intereses de las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, tampoco se tienen en cuenta el saldo acumulado por concepto de cesantías, sino que se replica la fórmula de las AFP correspondiente al valor de la cesantía del último año. En cuanto al porcentaje, este se encuentra atado a la variación de la UVR certificada por el Banco de la República, más no a la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Aspecto importante para resaltar, es el atinente al principio de inescindibilidad de los regímenes, toda vez que, si bien los trabajadores particulares pueden vincularse al Fondo Nacional del Ahorro, el artículo 9 de la Ley 432 de 1998 establece que "Los empleadores del sector privado deberán liquidar y consignar las cesantías de sus trabajadores afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990".

Para mayor claridad, a continuación se realizan dos ejercicios aritméticos para evidenciar: (i) la rentabilidad de las cesantías calculada por cada millón de pesos en los diferentes regímenes en un rango de cinco años (2015-2022); (ii) la rentabilidad de las cesantías correspondientes al caso de la demandante Yira Patricia Ibarguen en el mismo periodo, bajo la hipótesis de que no hubiere realizado retiros parciales de cesantías.

Principio de inescindibilidad

En línea con el recuento normativo expuesto, las características de cada sistema de cesantías tiene claramente delimitada sus reglas en la legislación. Es así como para el caso de los docentes del FOMAG, la ley no dispuso la existencia de cuentas individuales en la cual se debieran consignar sus cesantías, sino que el fondo cuenta se encuentra estructurado en el principio de "unidad de caja". En todo caso, sus cesantías e intereses de cesantías se encuentran plenamente garantizados, lo cual, en últimas, cumple fielmente los presupuestos constitucionales (artículos 42 y 48) en que se sustenta el

auxilio de cesantías, esto es: (i) subvencionar las necesidades del trabajador mientras permanece cesante, y (ii) atender otros requerimientos importantes del trabajador como vivienda y educación.

El hecho de que en el sistema normativo de los docentes se prescinda de la herramienta financiera de las cuentas individuales no pone en peligro el acceso a este auxilio, por tanto, en el derecho positivo no se incorporó algún tipo de indemnización frente a una consignación tardía en una cuenta individual, pues es imposible que este hecho se de en la realidad. Bajo ese entendimiento, el Consejo de Estado advirtió que lo que sí debía protegerse era el pago oportuno del auxilio de cesantías, y para lo cual dio lugar a la sanción moratoria en la Sentencia SU-00580 de 2018.

en tanto y que, lo que sí puede darse materialmente es el pago extemporáneo de las cesantías legalmente solicitadas, frente a lo cual, es sabido que la sentencia de unificación 00580 de 2018 del Consejo de Estado sentó jurisprudencia respecto a dicha situación.

Ahora bien, el hecho que ha generado la apertura del presente debate jurídico se encuentra fincado, en parte, al contenido del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de 1998, el cual señala:

> "Sin perjuicio de los derechos convencionales, **y lo estipulado en la Ley 91 de 1989**, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: Ver Art. 3° Decreto Nacional 1919 de 2002
>
> a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
>
> b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
> (…)" (negrillas fuera del texto original)

En la extensión que esta ley realizó respecto de las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, hizo salvedad expresa a las particularidades del sistema de cesantías de los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989. La alocución legislativa no pudo ser más contundente al respecto, ya que se apoyó en la secuencia léxica "Sin perjuicio de", que quiere decir "dejando a salvo a". La misma Corte Constitucional advierte en la Sentencia SU-098 de 2018, que cuando existen controversias en la aplicación de dos normas que rijan una misma situación laboral se debe escoger la más favorable al trabajador; sin embargo, esto no se puede realizar de espaldas al principio de inescindibilidad, para lo cual reseña: "*El principio de favorabilidad como mandato constitucional debe guardar consonancia con el principio de inescindibilidad, en este sentido su armonización consiste en que una vez se elige la norma más favorable, esta debe aplicarse en su totalidad sin escindir su contenido.*".

Se pregunta entonces: ¿Cómo puede aplicarse una norma suprimiendo una frase expresamente consignada en ella? A nuestro juicio, es imposible desprenderse de la salvedad que puntualmente señala la ley respecto de lo estipulado en la Ley 91 de 1989. Una interpretación en contrario contraviene la armonía y consonancia que debe imponerse para que coexistan los dos principios en la resolución de un caso particular.

En los hechos de la presente demanda, encontramos que el apoderado de la parte demandante fuerza las normas que rigen el imperio de las cesantías de los docentes del FOMAG a decir cosas que el legislador no ha contemplado. Y, a través de una cuestionable práctica, agrega textos inexistentes al contenido del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, buscando quizás la formación de una especie de "*Lex Tertia*" que, aunque controvertida, corresponde a una figura que en el derecho penal excepcionalmente aplican los jueces en sus decisiones.

Indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG

Para robustecer su argumentación, el apoderado de la parte demandante se refiere a una serie de pronunciamientos judiciales de las altas cortes que él mismo clasifica de la siguiente manera:

- Sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional
- Sentencias del Consejo de Estado:

No.	RADICADO EXPEDIENTE	FECHA DECISIÓN	MAGISTRADO PONENTE
1	08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16)	6 de agosto de 2020	Dra. SANDRA LISETH IBARRA
2	76001-23-31-000-200900867-01, No. Interno: 4854-2014	24 de enero de 2019	Dra. SANDRA LISETH IBARRA
3	54001-23-33-000-2016-00236-01	21 de febrero de 2019	Dra. SANDRA LISETH IBARRA
4	08001-23-33-000-2014-00208-01	10 de junio de 2020	Dra. SANDRA LISETH IBARRA
5	08001-23-33-000-2014-00132-01	12 de noviembre de 2020	Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
6	08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017)	17 de junio de 2021	Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
7	08001-23-33-000-2015-00331-01	17 de junio de 2021	Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Centraremos nuestra atención en el contenido de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación de

jurisprudencia perteneciente a la tipología "interpretativas", y (ii) porque los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante, deciden casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por estar prescritas.

En su génesis, la sentencia SU-098 de 2018 tuvo su origen en la revisión que hizo la Corte Constitucional de una sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que revocó la decisión que, en primera instancia, había proferido la Sección Cuarta de la misma corporación. Es importante anotar, que el Ministerio de Educación Nacional no hizo parte, en ninguna de las instancias, de la parte pasiva de las acciones constitucionales revisadas por la Corte Constitucional, como tampoco fue integrada al trámite de la sentencia de unificación que se está referenciando. La parte accionada estuvo conformada por el municipio de Santiago de Cali, quien no había realizado la afiliación del docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las cesantías en las que el docente no estuvo afiliado al fondo.

La Corte Constitucional ordenó a la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución, esto es, en torno al derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. En cumplimiento de la anterior decisión, la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia del 24 de enero de 2019, en la cual dio cumplimiento a la Sentencia SU-098 de 2018 y en su lugar condenó, a título de restablecimiento del derecho, a que el municipio de Santiago de Cali realizara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria "prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo año". Valga aclarar, que el origen de la sanción moratoria devenía para este caso concreto del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías.

Las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demandada, ya que, en este caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías. En este caso puntual, la demandante reclama la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, como se ha venido señalando, es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

Bajo este panorama, la Corte Constitucional en la sentencia analizada cita el contenido de la Sentencia C-298 de 2006, advirtiendo que "**la existencia de regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio *per se* sin analizar previamente las particularidades de cada caso concreto**". En este caso, se probará que al caso de la docente Yira Patricia Ibarguen Girón no

le son extensibles los efectos de la sentencia de unificación (SU-098 de 2018) de la Corte Constitucional.

Con base a los elementos ampliamente analizados, principalmente lo relativo a la imposibilidad física y jurídica de efectuar consignaciones de cesantías en cuentas individuales de los docentes del FOMAG, procedemos a abordar los problemas jurídicos planteados en la demanda, con la intención de que, muy respetuosamente, el operador judicial de esta causa los considere dentro de su decisión.

- ¿Se configuran, en el caso concreto de la docente YIRA PATRICIA IBARGUEN GIRÓN, los presupuestos necesarios para el reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata la Ley 50 de 1990 y el pago de indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías?

No se configuran, en el caso de la señora YIRA PATRICIA IBARGUÉN GIRÓN, los presupuestos indicados en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para que se configure la sanción moratoria de que trata la ley.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la sanción por mora por la no consignación o consignación extemporánea de las cesantías (establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990) está atada a un hecho concreto, esto es, el acto de la "consignación de las cesantías". Como quiera que en el esquema establecido por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 3752 de 2003 aplicable a los docentes del FOMAG no se administran las cesantías a través de la creación de cuentas individuales, luego entonces no hay consignación, por tanto, no puede configurarse sanción moratoria respecto de un hecho que materialmente no puede darse. El símil a aplicarse, para el caso de los docentes, es el cálculo, liquidación y apropiación de los recursos que garantizan el pago de las cesantías e intereses a las cesantías, el cual se realiza cada año conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998.

- ¿Cómo se garantiza el principio de inescindibilidad de la norma en el régimen especial de las cesantías de los docentes?

Atendiendo a la interpretación de la Corte Constitucional en la Sentencia C-098 de 2018, encontramos que para garantizar el principio de inescindibilidad de la norma se deben atender, en su integridad, las normas que gobiernan, en este caso, el régimen especial de los docentes del FOMAG. Al aplicar esas normas, encontramos este sistema no contempla cuentas individuales para cada docentes, luego entonces no se da el hecho o acto de la consignación de las cesantías, con lo cual, no es posible extender una sanción que exclusivamente está contemplada para los casos de omisión o consignación tardía de las cesantías.

IV. EXCEPCIONES

Acorde con la argumentación que muy respetuosamente se presentó al señor(a) juez(a) en precedencia, se procede, en los términos establecidos la Ley 1437 de 2011, artículo 175, numeral 3, y el parágrafo 2 ibídem, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, el cual señala que las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, se procede a formular las siguientes excepciones previas.

1) **Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales**:

Examinada la demanda presentada ante su despacho, se observa que desde la referencia se anuncia que el medio de control incoado es el de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto ficto o presunto proferido por la administración. Es así como la demanda trae como referencia lo siguiente:

"**REFERENCIA**: Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – de Carácter Laboral – INDEMNIZACIÓN LEY 50/1990. Acto ficto" (subrayado fuera del texto original)."

Por su parte, las pretensiones especifican, sin asomo de duda, el objeto de la acción judicial, lo cual textualmente se plasmó en los siguientes términos:

"1. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado el día 13 DE OCTUBRE DE 2021, frente a la petición presentada ante el **DEPARTAMENTO DEL CHOCO-SEDCHOCO**, el día 13 DE JULIO DE 2021, …" (subrayado fuera del texto original).

Es claro entonces que el demandante persigue que el juez(a) de la presente causa declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado por la presunta no contestación de una solicitud de reconocimiento indemnizatorio presentada el día 13 de julio de 2021 ante el Departamento del Chocó.

Ahora bien, de acuerdo con las gestiones adelantadas por este ministerio para estructurar la presente contestación, se tiene que el ente territorial acusado y la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, dieron contestación a las comunicaciones remitidas por parte del apoderado de la entidad demandante, así:

- Mediante oficio No. CHO2021EE0043 de 16-09-2021, la Secretaría de Educación del Chocó remitió, con destino a Fiduprevisora S.A., un grupo de solicitudes de personal docente relacionadas la sanción moratoria e intereses a las cesantías, entre otros, el caso de la señora Yira Patricia Ibarguen Girón.
- Mediante oficio No. 20210173164781 de 11-10-2021, Fiduprevisora S.A. dio respuesta a la solicitud de indemnización moratoria por la no consignación en término de las cesantías correspondientes al año 2020 e indemnización con consignación inoportuna de los intereses a las cesantías por el mismo periodo.

Lo anterior, da cuenta de la inexistencia del acto administrativo ficto o presunto demandado en el presente proceso, si se tiene en cuenta que por voluntad expresa del artículo 83 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el silencio administrativo se configura cuando "*Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que es negativa*".

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en pronunciamientos como la sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011, proferida en el marco del radicado No. 50001-23-31-000-2005-40528-01 (0097-10), con extremada precisión aclara las consecuencias para aquellas acciones judiciales en las que se desvirtúa la ausencia de respuesta por parte de la administración, la cual no es otra que la declaratoria de ineptitud de la demanda, como a continuación se transcribe.

"En primer lugar, se advierte que el acto ficto demandado es inexistente, toda vez, que dicho fenómeno procedimental se configura al tenor de lo dispuesto en el artículo 40 del C.C.A., cuando transcurridos tres meses luego de elevada una solicitud en interés particular, la Administración no ha

notificado decisión alguna al respecto. En el caso objeto de análisis, la Entidad demandada mediante Oficio del día 2 de agosto de 2005 dio respuesta negativa a la solicitud elevada el día 1° del mismo mes y año, hecho que a todas luces demuestra que no se configuró tal ficción jurídica, ni mucho menos predica la existencia de un acto de insubsistencia o de desvinculación implícito o tácito.

Por consiguiente, se configura una ineptitud sustancial de la demanda." (negrillas fuera del texto original).

En el presente asunto, se configuran entonces todos los elementos para predicar que nos vemos frente a la ineptitud sustancial de la demanda. No obstante, advierte este ministerio que, en caso de que el juez(a) lo considere pertinente, se ordene la práctica de pruebas respectivas, lo cual se solicitará en el respectivo acápite de pruebas.

2) Inexistencia de la obligación

Cuando se analizó el problema jurídico, se hizo énfasis en la imposibilidad jurídica y material de administrar los recursos de las cesantías de los docentes del FOMAG bajo la figura de cuentas individuales, lo cual descarta, de contera, que se pueda ejecutar el acto físico de la consignación de las cesantías, hecho del cual pende la configuración de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, artículo 99.

También se realizó una breve reseña de las órdenes que se desprenden de la sentencia de unificación SU-098 de 2018, en la cual la Corte Constitucional delimitó el rango interpretativo del principio de favorabilidad para la aplicación de la normativa relacionada con las cesantías de los docentes oficiales. Respecto del principio de inescindibilidad, dijo el alto tribunal que bajo ninguna medida podía entenderse la aplicación fragmentada de las normas que gobiernan el régimen especial de los docentes; por el contrario, anota esta jurisprudencia que "*no se trata de normas excluyentes que exigen aplicar una u otra sino de disposiciones que se complementan*". Así las cosas, la interpretación que se le debe dar al caso concreto que nos trae al presente litigio debe salvaguardar el mandato expresado en la sentencia de unificación citada, es decir, bajo ninguna medida pueden dejarse de lado circunstancias legalmente reguladas como la imposibilidad de creación de cuentas individuales para las cesantías de los docentes y la misma imposibilidad de consignar sus cesantías en cuentas que la legislación no ha previsto. También se deben salvaguardar los procedimientos previstos en las normas vigentes para la liquidación de las cesantías y sus intereses, ya que una interpretación en contrario equivale a transgredir el principio de inescindibilidad y la jurisprudencia misma de la Corte Constitucional. Acto seguido, se debe verificar que para la vigencia de 2020 se hayan llevado a cabo los trámites a los que se refiere la Ley 91 de 1989, el Acuerdo No. 39 de 1998, el principio de "unidad de caja" consignado en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes. Así las cosas, encontramos probado lo siguiente:

- Fiduprevisora emitió el Comunicado No. 16 de 17 de diciembre de 2019, en el cual se dieron los lineamientos operativos y la fecha para presentar el reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina del año 2020. En dicha comunicación se especificó lo siguiente:

  "2. La fecha de recibo de reportes de cesantías para todas las Secretarías de Educación a nivel nacional, es hasta el 05 DE FEBRERO DE 2020. Esta fecha es improrrogable y, por tanto, el no reporte oportuno de la información a esta entidad, conllevará la no inclusión en nómina de los docentes, siendo el Ente Territorial el responsable de las contingencias que se deriven

en el pago de los intereses y por la mora en el pago de las prestaciones a favor de los docentes".

- Tal como consta en los comprobantes aportados por la parte demandante, los intereses de cesantías de la señora Yira Patricia Ibarguen Girón correspondientes al año 2020 fueron pagadas en el mes de marzo de 2020, cumpliendo así lo dispuesto en el Acuerdo No. 39 de 1998, artículo 4, expedido por el Consejo Directivo del FOMAG, el cual continúa teniendo plena vigencia hasta tanto la jurisdicción competente decida lo contrario.

- Las cesantías de la señora Yira Patricia Ibarguen Girón, correspondientes a la vigencia de 2020, se encuentran garantizadas desde la realización de la actividad operativa de su liquidación y, por tanto, mal podría predicarse un trámite extemporáneo que de lugar a algún tipo de indemnización.

Salta a la vista una única conclusión, la cual se encuentra acorde el criterio hermenéutico consignado en la sentencia SU-098 de 2018, y es que en el presente asunto no se configura la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, como tampoco se podrá configurar esta sanción para los docentes que se encuentren bajo los mismos supuestos de hecho aquí expresados.

Lo que se solicita en la presente demanda es un hecho de imposible cumplimiento, ya que como reiteradamente se señala en el texto del líbelo, se pretende que las cesantías de los docentes sean consignadas en una cuenta individual del docente en el FOMAG, siendo que la misma legislación previó un sistema distinto para este esquema en donde es inadmisible la administración a través de cuentas individuales. Para que esto sea posible se requeriría que el legislador desmonte el compendio de normas bajo la cual se erige la estructura del FOMAG y en su lugar disponga otro modelo que derogue el que actualmente se encuentra vigente. Así mismo, yerra el demandante cuando señala que esta obligación inicia con la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, artículo 57, siendo que esta norma jamás hace referencia a la constitución de cuentas individuales; por el contrario, ratifica el principio de unidad de caja para el pago de las prestaciones económicas de los docentes y la prestación de los servicios médico-asistenciales.

Esto conlleva a que inequívocamente nos veamos frente a la "inexistencia de la obligación", la cual respetuosamente solicitamos sea declarado como probado bajo la suficiencia argumentativa, con soporte legal y jurisprudencial, que aquí se ha consignado.

V. CONDENA EN COSTAS

Respecto de las pretensiones del demandante, se resalta que el Ministerio de Educación Nacional ha atendido más de 45.000 solicitudes de conciliación extrajudicial en donde, bajo los mismos supuestos de hecho y de derecho, se pretende la indemnización que nos trae a esta demanda y de la que ampliamente se ha expuesto su improcedencia. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 188, adicionado por el artículo 47, inciso 2, de la Ley 2080 de 2021, el cual señala "En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas **cuando se establezca que se presentó la demandan con manifiesta carencia de fundamento legal**" (negrillas fuera del texto original), se solicita respetuosamente que se condene en costas a la parte demandante y a favor de los demandados.

VI. PRUEBAS

Pruebas documentales:

Se adjuntan como pruebas documentales las siguientes:

- Comunicado No. 16 de 17 de diciembre de 2019, en el cual Fiduprevisora S.A. dio los lineamientos operativos y la fecha para presentar el reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina del año 2020.
- Oficio No. CHO2021EE0043 de 16-09-2021, mediante el cual la Secretaría de Educación del Chocó remitió, con destino a Fiduprevisora S.A., un grupo de solicitudes de personal docente relacionadas la sanción moratoria e intereses a las cesantías, entre otros, el caso de la señora Yira Patricia Ibarguen Girón.
- Oficio No. 20210173164781 de 11-10-2021, mediante el cual Fiduprevisora S.A. dio respuesta a la solicitud de indemnización moratoria por la no consignación en término de las cesantías correspondientes al año 2020 e indemnización con consignación inoportuna de los intereses a las cesantías por el mismo periodo.
- Auto admisorio de la demanda de nulidad simple por inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 4 del Acuerdo No. 39 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del FOMAG.

Muy respetuosamente se solicita al señor juez se sirva decretar las siguientes pruebas documentales:

- Requerir a la Gobernación del Chocó (Secretaría de Educación del Chocó) a efectos de que aporte las pruebas documentales que permitan evidenciar el trámite realizado respecto de la solicitud radicada por la demandante bajo el radicado No. CHO2021ER007474.

VII. NOTIFICACIONES

La entidad demandada recibe notificaciones en la Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10-03 Bogotá, y al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co

El suscrito en el correo t_jlugo@fiduprevisora.com.co

Del señor Juez,

JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO
C.C. 1.018.448.075
T.P. 326.858

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"**Defensoría del Consumidor Financiero**- Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store

Honorable:
JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO DE CALI
E. S. D.

Medio de Control:	**Nulidad y Restablecimiento Derecho**
Accionante:	**GERSON MIGUEL CORDOBA MURILLO**
Accionado:	**Nación – Ministerio de Educación – Fomag**
Radicado No.:	**76001333301420220018400**

JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando calidad de apoderado del Ministerio de Educación Nacional, -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en concordancia a sustitución del poder dada por la doctora **CATALINA CELEMIN CARDOSO**, de conformidad a las atribuciones otorgadas por medio de escritura pública Escritura Pública **No. 129 de 19 de enero de 2023**, protocolizada en la notaría 27 del círculo de Bogotá, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de las facultades a él conferidas a través de la **Resolución No. 018907 del 26 de septiembre del 2022,** expedida por el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, según lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes, por medio de la presente me permito presentar **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** para la entidad aquí demandada, a saber, la Nación Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la de la siguiente manera dentro del proceso de la referencia

:

A LOS HECHOS.

PRIMERO: NO ES UN HECHO, Es una apreciación subjetiva e interpretación normativa realizada por la parte actora, la cual no es objeto de manifestación alguna, pues no se expone ninguna situación de modo tiempo o lugar que deba ser debatida**.**

SEGUNDO: NO ES UN HECHO, Es una apreciación subjetiva e interpretación normativa realizada por la parte actora, la cual no es objeto de manifestación alguna, pues no se expone ninguna situación de modo tiempo o lugar que deba ser debatida.

TERCERO: NO ME CONSTA, me atengo a lo demostrado en el proceso.

CUARTO: ES CIERTO, según prueba documental que obra en el expediente**.**

QUINTO: NO ME CONSTA, me atengo a lo demostrado en el proceso.

SEXTO: NO ES UN HECHO, Es una apreciación subjetiva e interpretación realizada por la parte actora, la cual no es objeto de manifestación alguna, pues no se expone ninguna situación de modo tiempo o lugar que deba ser debatida.

SÉPTIMO: NO ME CONSTA, me atengo a lo demostrado en el proceso.

A LAS PRETENSIONES.

En nombre de la FICUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO con fundamento en lo que más adelante sustentaré, manifiesto que me opongo a que se declaren probadas todas y cada una de las pretensiones de declaración y de condenas, tanto principales como subsidiarias, contenidas en la demanda , por carecer de fundamentos de derecho, en consecuencia solicito respetuosamente que en la sentencia de fondo se exonere de toda responsabilidad a la entidad que represento y de igual manera solicito, que en el fallo correspondiente, se declaren probadas todas y cada una de las excepciones de mérito que propondré en el acápite respectivo.

DECLARATIVAS:

PRIMERA: ME OPONGO a que se condene a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a la declaratoria del acto ficto el cual niega el pago de la sanción moratoria en favor de la parte actora, toda vez que no existe en el presente proceso supuestos fácticos y jurídicos que logren acreditar las pretensiones que se están solicitando con el escrito de demanda, ni tampoco la existencia de un acto ficto dada la existencia de una respuesta por parte de la administración frente a la solicitud de las cesantías parciales.

SEGUNDA: ME OPONGO a que se condene a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en favor de la parte actora, toda vez que no existe en el presente proceso supuestos fácticos y jurídicos que logren acreditar los supuestos que se están solicitando con la demanda.

Con respecto a las pretensiones a título de Restablecimiento del derecho:

PRIMERA: ME OPONGO a que se condene a la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, al pago y reconocimiento de la sanción moratoria en favor de la parte actora, toda vez que no existe en el proceso, sentencia judicial que declare la existencia de la mora, así como tampoco acto administrativo en el cual ordene el pago de algún dinero. Aunado que a la misma no le asiste el derecho y reconocimiento de la sanción por el pago tardío de las cesantías, pues las mismas fueron canceladas a la docente en el término establecido

SEGUNDA: ME OPONGO, que se reconozca ajustes a valor, por cuanto la entidad que represento no debe ningún valor al demandante.

TERCERA: ME OPONGO, Si se llegare a condenar a la entidad, ésta tiene un término para realizar el pago de la sentencia y las condenas impuestas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDAMENTO DE DEFENSA.

Atendiendo a lo dicho, me permito reiterar señor Juez a través de este escrito la fundamentación de defensa que ostenta mi representada en los siguientes términos:

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67[1] contempla la educación como un derecho a la persona y un servicio público que tiene una función social.

Así, mismo la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C 506 de 2006[2] indica que:

> "*Con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, era consecuente que buscando establecer las responsabilidades en la cancelación de las prestaciones sociales de los docentes se diera claridad y unificara el régimen pensional en función del margen de configuración normativa que le asiste al legislador por la entrada en vigencia de una nueva ley, es decir, regulatoria de las situaciones futuras y bajo el respeto de las situaciones consolidadas".*

Ahora bien, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado mediante la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo tercero señala que:

> ***"Artículo 3º.-*** *Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional."*[3]

Precisando lo entrecavado es importante indicar que el correspondiente contrato de Fiducia Mercantil[4] fue suscrito por el Gobierno Nacional junto con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la cual actúa como vocera y administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO o fidecomiso.

De otro lado, se tiene de manera concreta la estipulación que la normatividad ha realizado respecto del régimen prestacional a los educadores nacionales más concretamente el pago de las cesantías a lo que tienen derecho, de la siguiente manera:

> Al respecto, el artículo 2[0] de la Ley 244 de 1995[5], establece las formas de liquidación y plazos para el pago de las cesantías a que tienen derecho los maestros:

---

[1] "*Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*"

[2] Sentencia C 506 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Silva. Corte Constitucional.

[3] Ley 91 de 1989. (Diciembre 29) Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

[4] Contrato de Fiducia Mercantil protocolizado en la escritura pública No. 83 del 21/06/1990. Suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora.

[5] Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.

"ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> *La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.*

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este."

El Decreto 1272 de 2018 «Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones», artículo 2.4.4.2.3.2.27:

Artículo 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes.

El contrato de fiducia mercantil suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S.A. (protocolizado con la Escritura Pública No. 83 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 del Círculo Notarial de Bogotá D.C.) -y sus otrosíes-, establece como obligaciones contractuales a cargo de Fiduprevisora S.A., entre otras, las señaladas en la cláusula segunda (numeral 5) del otrosí integral de fecha 22 de junio de 2017, que señala lo siguiente:

"5. Se modifica la cláusula sexta C "Obligaciones relacionadas con los pagos que deben efectuarse con cargo al fideicomiso" del otrosí del 25 de enero de 2006 la cual tendrá la siguiente redacción:

(…)
Los pagos que corresponden al Fondo, son:
a) Mesadas pensionales sus reajustes y reliquidaciones;
b) Mesada pensional adicional y las sustituciones pensionales;
c) Cesantías definitivas y cesantías definitivas a beneficiarios;
d) Cesantías parciales de acuerdo con lo establecido en la Ley y las prioridades señaladas por el Consejo Directivo;
e) Los intereses a las cesantías; y,
f) Los demás auxilios e indemnizaciones a cargo del Fondo." (negrillas fuera del texto original)

Por otro lado, no se desconoce por parte de este apoderado judicial la existencia de la Sentencia SU 336 del 18 de mayo de 2017, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Evan Humberto Escrucerìa Mayolo. Sentencia que sostuvo:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(…) Por ser un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción alguna, la Sala concluye que en aplicación de los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación sobre la naturaleza de las cesantías y a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia, a los docentes oficiales les es aplicable el régimen general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006, que contempla la posibilidad de reconocer a favor de estos la sanción por el pago tardío de las cesantías previamente reconocidas (…)

Descendiendo al caso que nos ocupa, y si la posición del despacho es la de acoger la sentencia antes mencionada, es claro indicar que la Ley 1071 de 2006[6], en su artículo 5[0], expresa,

"La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público…".

Con el anterior pronunciamiento, se puede evidenciar que no reposa dentro del expediente prueba idónea que logre demostrar que la entidad incurrió en mora del pago de las cesantías parciales, pues se estaba supeditado a que el acto administrativo quedará en firme y luego proceder a realizar dicho pago. Razón por la cual no hay lugar a reconocer ninguna de las pretensiones de la demanda.

De tal suerte que las radicaciones de solicitudes de reconocimiento de prestaciones deben ser radicadas en la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial, de conformidad con la Sociedad Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En este caso, el fondo es el que tiene la función del pago de prestaciones, sin embargo, la expedición del acto corresponde a las secretarias de educación y por otro lado se encarga a una sociedad fiduciaria de la administración de los recursos del fondo, y pagar las prestaciones sociales.

Con lo cual, será la entidad Fiduciaria quien deberá proceder con los pagos prestaciones, luego de contar con el acto administrativo emitido por la respectiva secretaria, previo el trámite legal para su concesión que compromete el reporte de todos los entes comprometidos dentro del salario del docente conforme a derecho y a la mayor brevedad posible según la disponibilidad de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, debemos precisar que el Decreto 2831 de 2005[7], consagró el procedimiento exclusivo para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin realizar discriminación alguna respecto del tipo de prestación que se tramite por dicho procedimiento, quedando entonces las cesantías sujetas a aquel y excluidas por disposición expresa las primas contenidas en el parágrafo 2 de numeral 4 del artículo 15 de la misma ley.

En tal sentido, se encuentra que existe una diferencia entre los trámites contenidos en el Decreto 2831 de 2005 y la Ley 1071 de 2006, sin embargo, en este tipo de asuntos

[6] Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[7] por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

se debe dar aplicación prevalente y preferencial al Decreto 2831 de 2005 por tratarse de una norma de carácter especial y de un procedimiento exclusivo.

Conforme a lo transcrito y aseverando lo manifestado, el pago se realiza cuando exista la disponibilidad presupuestal estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las resoluciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con la que cuente de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito, y esta sujeción, es la que precisamente influye en el pago tardío que aduce la demandante así como también en la falta de cumplimiento del ente territorial en las fechas estipuladas.

Se advierte igualmente, en estricto sensu que el principio de sostenibilidad financiera el cual es prioridad indispensable en un estado social de Derecho, teniendo en cuenta que es el eje fundamental para lograr un adecuado financiamiento del sistema del estado en genera. La corte en múltiples oportunidad ha establecido que este principio tiene como característica principal *"que permite lograr la cobertura universal"*[8], por ello y aterrizado al caso sub – examine si se llegaré a configurar a mora solicitada así como también condena en costas y/o indexación se afectaría de manera directa las garantías del estado social de derecho con el cumplimiento de deberes a sus ciudadanos, tales como inversión de esos recursos en propiedades conexas con la vida e integridad de la comunidad en general.

En tal sentido, cabe mencionar que conforme con el Acto Legislativo 03 de 2011 el Estado fortalece la normatividad referente al principio del equilibrio financiero consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, debido a que obligo a todos los órganos y ramas del poder público a orientar sus actividades dentro de un marco de sostenibilidad fiscal.

En tal sentido, el Acto Legislativo 01 de 2005, afirmo que los principios de sostenibilidad financiera, y sostenibilidad fiscal tenían un rango constitucional, lo cual implicó que cada ley que se expida con posterioridad a éste, deberá regirse por un marco de sostenibilidad de las disposiciones que allí se establezcan. Es decir, determino que las decisiones que se tomaran en vigencia de dichos actos legislativos debían fundarse en la protección de estos principios de carácter constitucional a fin de no contrariar a la carta magna, ello teniendo como horizonte los fines sociales del Estado.

Ahora bien, Respecto de la indexación de la condena es menester memorar que el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación con radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01[9] en lo relativo a la indexación de la sanción por mora, señalo expresamente la incompatibilidad entre la indexación y la sanción por mora y para el efecto es preciso traer a colación lo que el máximo órgano de cierre en lo contencioso administrativo ha dado al fenómeno de indexación:

(…) Esta figura, nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda, cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de manera que, en aplicación de principios como el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el

[8] Referencia: Expediente T-6.822.997. Acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo (hoy Juzgado Primero de Familia de Sincelejo). Magistrado ponente: CARLOS BERNAL PULIDO. Fecha: Veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

[9] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Conseja ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D. C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).

acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos. (…)

En lo atinente a la compatibilidad de la sanción por mora con la indexación, el Consejo de Estado nos dejó las siguientes enseñanzas:

> *(…) A partir de lo anterior, es posible sacar las siguientes conclusiones relativas a los fines de la sanción moratoria: i) La sanción moratoria se consagró con el fin de conminar a las entidades encargadas al pago oportuno de la prestación social del auxilio de cesantías, ya que generalmente como consecuencia de la burocracia, la tramitología era común la demora en el citado pago y, ii) en el momento de recibir el pago efectivo de la prestación social, únicamente se pagaba lo certificado por la entidad pagadora meses o años atrás, cuando el dinero había perdido su poder adquisitivo, por lo cual, la disposición buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar el retardo en el citado pago y sus consecuencias desfavorables para el trabajador.*
> *De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago, en los siguientes términos:*
> *«La indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, como ya se anunció, es una multa a cargo del empleador y a favor del empleado, establecida con el fin de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la citada Ley.172»*
> *Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito. (…)*

Más adelante concluye:

> *(…) En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo." (…) (Subrayado fuera de texto original).*

Siguiendo con la discusión, el artículo 187[10] del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo asevera que las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor lo cual no debe ser aplicable al caso en concreto en vista que eso implicaría la indexación de la sanción por mora que valga reiterar,

[10] *(…)* ***ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.*** *La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. (…)*

son incompatibles entre sí, aunado a que la mentada indexación se encuentra proscrita por vía jurisprudencial y hace mucho más gravosa la situación de la administración, pues pasa por alto que este emolumento no solo cubre la actualización monetaria sino que es superior a dicho valor.

Así las cosas, y como último planteamiento jurídico - procesal de suma relevancia para el caso que nos ocupa en pro de la defensa de mi poderdante, se tiene que la Ley 1955 de 2019[11] en su artículo 57 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el cual dispone lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.*** *Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.*
>
> *Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.*
>
> *Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.*
>
> *Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.*
>
> ***PARÁGRAFO****. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.*

Es decir que, dentro de la puntualización jurídica plasmada con antelación, vislumbra la responsabilidad y obligación de pago de sanción mora al ente territorial que de manera extemporánea expide la Resolución que otorga la cesantía.

Siendo este eje fundamental para la toma de decisión de su Honorable Despacho, pues como se entrevé para el caso objeto de Litis, el ente territorial se extralimito en expedir dicho acto administrativo a sabiendas que la normatividad otorgó el término de 15 días para su conducta, configurándose a todas luces la responsabilidad del pago de sanción por mora en el caso bajo estudio, siendo necesario el arrimo a este proceso del ente territorial para que reconozca dicho actuar y se decrete su falta a través de sentencia.

[11] *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Así como también, la misma Ley plasmó:

> ***"PARÁGRAFO TRANSITORIO.*** *Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.*
>
> *La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención."*

por ministerio de la ley se encuentran definidos los sujetos responsables del pago de la sanción por mora con sus propios recursos, esto es la Secretaría de Educación del ente territorial o Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), según se haya dado el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el trámite de solicitud y pago de las cesantías, de lo puntualizado se tiene, que toda sanción mora causada a diciembre de 2019, deberá ser cancelada con los fondos descritos y no con fondos del FOMAG para lo cual se solicita a su señoría si se prueba que se incurrió en mora de cancelación de cesantías pronunciarse en su fallo que se cargara a dicho rubro presupuestal.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FALTA DE LEGITIMIDAD POR PASIVA.

En observancia del caso concreto se evidencia que es el Ente territorial quien está llamado a responder por los pagos que corresponden a la sanción moratoria correspondiente al pago tardío de las cesantías parciales solicitadas por la docente, pues de encontrarse probada la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones de pago se dio en consecuencia del incumplimiento de los términos del ente territorial en expedir el Acto Administrativo que reconoce y liquida las cesantías de la docente oficial, esto conforme lo establece la Ley 1955 del 2019, el cual expide el Plan Nacional de Desarrollo. Es así como el artículo 57 *ibídem*, el que determina que los Fondos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO serán para el pago de las prestaciones sociales y no para el pago de las indemnizaciones que por el incumplimiento de los plazos que para este caso tenía el **Departamento del Huila.** Es así que me permito citar:

> *"**Artículo 57. Eficiencia en la Administración de los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.***
>
> *[…]*
>
> ***Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.***

Parágrafo. <u>La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.</u>

Parágrafo transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo.
[…]" (negrita y subrayado por fuera de texto).

CADUCIDAD.

Respecto del término de caducidad de las acciones contenciosas, la jurisprudencia constitucional ha sustentado su compatibilidad con el ordenamiento superior, en los siguientes términos: Atendiendo a la necesidad de organizar coherentemente diferentes instituciones procesales, el C.P.A.C.A. se encarga de fijar los términos de caducidad de las diferentes acciones contenciosas. En cada caso, es la naturaleza propia de los actos o hechos alrededor de los cuales versa la controversia jurídica, la que recomienda la fijación de un plazo más o menos largo para controvertir la conducta oficial, en desarrollo de las funciones constitucionalmente asignadas (artículo 150 C. P.), el legislador goza de libertad para configurar los procedimientos a través de los cuales se protegen los derechos ciudadanos y la integridad del ordenamiento jurídico. Resulta pertinente que, como consecuencia de esta facultad, se puedan fijar límites en el tiempo para alegar el reconocimiento de garantías o impugnar la juridicidad de ciertos actos.

PRESCRIPCIÓN.

Se propone la prescripción como medio exceptivo de la reclamación solicitada por el demandante, que pretende el pago por la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, esto de acuerdo con lo que resulte probado de conformidad con el artículo 488 del C.S.T, artículo 151 del C.P.L, artículo 41 del decreto 3135 de 1968, demás normas concordante y la Jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

EXCEPCIÓN GENÉRICA.

En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal en materia de excepciones, frente a los poderes oficiosos del juez es necesario afirmar que lo fundamental no es la relación del hecho que configuran una determinada excepción, sino la prueba de los mismos, por ende, si el juez encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerla oficiosamente.

Por lo anterior, solicito al señor juez ordenar de oficio la práctica de las pruebas pertinentes, así como declarar oficiosamente, las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Invoco como normas aplicables a la presente contestación, la Ley 91 de 1989, Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; la Ley 244 de 1995; La Ley 1071 de 2006; El artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley 2158 DE 1948.

PRUEBAS.

Solicitamos se tengan con pruebas las aportadas en debido tiempo al plenario.

DE OFICIO:

1. Solicito respetuosamente Señor Juez se oficie ala Fiduprevisora S.A., para que certifique el pago de las cesantías solicitadas al docente.

ANEXOS.

1. Sustitución de poder a mí conferido, junto con la representación Legal.
2. Escritura No. 1230 del 11 de septiembre de 2019, protocolizada en la Notaria 28 del Circulo de Bogotá D.C.

PETICIONES.

Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, respetuosamente solicito a su Honorable Despacho, que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Declarar probada las excepciones manifiestas en la presente contestación.

TERCERO. En consecuencia, ordenar el Archivo del Expediente.

CUARTO. Condenar en costas judiciales y agencias en derecho a la parte actora.

VII. NOTIFICACIONES

La entidad demandada recibe notificaciones en la Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10-03 Bogotá, y al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co y t_jlugo@fiduprevisora.com.co

Del señor(a) Juez,

JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO
C.C. No. 1.018.448.075 DE Bogotá.
T.P. No. 326.858 del C.S. de la J.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEÑORES
JUZGADO CATORCE (14) ADMINISTRATIVO DE CALI
E. S. D.

Proceso:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante:	RAQUEL ARBOLEDA FRANCO
Demandado:	NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Radicado:	76001333301420220019600

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1018448075 expedida en Bogotá abogado (a) en ejercicio, portador (a) de la tarjeta profesional No. 326.858 del Consejo Superior de la Judicatura actuando en calidad de apoderado (a) sustituto (a) del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, entidad demandada dentro del proceso de la referencia por medio del presente escrito, encontrándonos dentro del término legal, procedo a presentar **CONTESTACIÓN DE DEMANDA** ante su honorable despacho, lo cual se realiza en los siguientes términos:

DECLARACIONES Y CONDENAS

Manifiesto que me opongo a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda, sus declaraciones y condenas, por carecer de fundamentos de derecho, debiéndose absolver a LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO de todo cargo.

DECLARACIONES

PRIMERA: ME OPONGO a la declaratoria de nulidad del acto administrativo ficto configurado el dia 05 de noviembre de 2021, en cuanto negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación a la edad de 55 años y con el cumplimiento de 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente.

SEGUNDA: ME OPONGO a que se condene a la Nación -Ministerio De Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Municipio de Jamundí, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación a la demandante, equivalente al 75% del promedio mensual de salarios y la totalidad de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del status, por cuanto el demandante que no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

CONDENAS

PRIMERA: ME OPONGO a que se condene a la Nación -Ministerio De Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Municipio de Jamundí, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación a la demandante, 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado (a), es decir a partir del 21 de noviembre de 2020, por haber completado las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial, por cuanto el demandante que no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

SEGUNDA: ME OPONGO, a que se condene a la entidad que represento, dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso y tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A.). Por cuanto las condenas que se imponen a la Nación tienen un término a partir de la ejecutoria de la sentencia para su cumplimiento.

TERCERA: ME OPONGO, a que se condene a la entidad que represento, al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas, toda vez que no es procedente el reconocimiento de la prestación que llegare a originarlos.

CUARTA: ME OPONGO. a que se condene a la entidad demandada a reconocer, y pagar los intereses de moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados toda vez que no hay lugar a reconocimiento de prestación que llegare a originarlos.

QUINTA: ME OPONGO a que se ordene a la parte demandada, la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina, toda vez que no es procedente el reconocimiento de la prestación que llegare a originarlas.

SEXTA: ME OPONGO a que se ordene a la parte demandada al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las mesadas pensionales, por tratarse de sumas de tracto sucesivo, y demás emolumentos de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A. toda vez que no es procedente el reconocimiento de la prestación que llegare a originarlos.

SÉPTIMA: ME OPONGO a que se condene a la entidad que represento en costas y agencias en derecho toda vez que las mismas no son procedentes, pues la entidad ha actuado con diligencia y conforme a la ley en el caso objeto de debate.

A LOS HECHOS

A continuación, se dará respuesta a cada uno de los hechos relatados por la parte actora dentro de la demanda, en los términos siguientes:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PRIMERO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

SEGUNDO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

TERCERO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

CUARTO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

QUINTO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

SEXTO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

SEPTIMO: NO ME CONSTA. Me atengo a los soportes probatorios allegados en el proceso.

OCTAVO: NO ES UN HECHO. Es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

NOVENO: NO ES UN HECHO. Es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

DÉCIMO: NO ES UN HECHO. Es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

DÉCIMO PRIMERO: NO ES UN HECHO. Es una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora acerca de la interpretación y aplicación normativa, más no se relata una situación de modo, tiempo y lugar a la que sea procedente hacer referencia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

EL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, excluyó inicialmente a los docentes del Sistema Integral de Seguridad Social.

La normativa aplicable en materia de pensiones para los docentes estatales está consagrada en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.

Luego del proceso de nacionalización de la educación (Ley 43 de 1975), se expidió la Ley 91 de 1989 por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, con el fin de atender, entre otros aspectos, las prestaciones sociales de los docentes, en materia de pensión docente, remite a las normas del sector público nacional de la siguiente manera:

“Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados

gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional".

Posteriormente, la Ley 812 de 2003 consagró un régimen especial en su artículo 81, que definió el régimen prestacional de los docentes según su vinculación así:

(i) Para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; (ii) por el contrario, el de los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, esto es el 27 de junio de 2003, es el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

Dicho criterio fue reiterado en la adición del artículo 48 de la Constitución Política que establece:

***"ARTICULO 48**. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.*

Texto adicionado:

***Artículo 1°.** Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:*

"En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos".

*Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo **oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003**, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".*

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-189 del 12 de marzo de 2012 con ponencia del Magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reseñó que en Colombia no existe un régimen pensional especial para los docentes, sino que lo que existe es un mecanismo especial de administración de pensiones a través de un Fondo que se encarga de los asuntos pensionales de dichos empleados públicos establecido en la Ley 91 de 1989, por consiguiente, el régimen pensional que le es aplicable es el establecido en la Ley 812 de 2003, o para aquellas personas a las que se les aplica el beneficio transición, las cobija el régimen pensional anterior.

De las normas en cita se concluye entonces que el régimen aplicable está condicionado a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así[1]:

[1] Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 de veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Expediente: 68001233300020150056901 No. Interno: 0935-2017.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

Sobre el particular, en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se precisó lo siguiente:

"- Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

- Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.

- El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

- De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de las docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones "generales" de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de "especiales".

- Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 200317, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres".

APLICACIÓN LEY 71 DE 1988 – PENSIÓN POR APORTES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Antes de la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto que no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad.

Para remediar dicha situación, se expidió la Ley 71 de 1988 que previó la posibilidad de acumular los aportes realizados como servidor público y trabajador del sector privado para obtener la pensión, disponiendo en su artículo 7º:

"*Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer".*

Esta norma fue reglamentada por el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, que estatuye:

***"Artículo 1°.** Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.*

*Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de **previsión social del sector público."***

Se comprende de lo anterior que, la Ley 71 de 1988 ofrece la oportunidad a los trabajadores de obtener la pensión de jubilación, teniendo en cuenta la sumatoria de tiempos cotizados al ISS y como servidor público en las cajas de previsión de cualquier orden.

Dicho así y como lo estableció el Consejo de Estado, la pensión de jubilación por aportes de la Ley en cita, pasa a constituir una modalidad de pensión aplicable en virtud del régimen de transitoriedad pensional[2] establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, con anterioridad a la Ley 100 citada, el régimen que consagraba la opción de acumular tiempos, tanto en el sector público como en el privado, es la Ley 71 de 1988 que establece la pensión por aportes.

COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN Y EL SALARIO EN EL RÉGIMEN DOCENTE

Sobre el particular, el personal docente al servicio de entidades oficiales goza de algunos beneficios que le permiten devengar: a) la pensión gracia prevista en leyes 114 de 1993, 116 de 1928 y 37 de 1933, b) disfrutar simultáneamente de pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación, c) compatibilidad de éstas con el salario recibido por los servicios docentes que pueden continuar prestando hasta la edad de retiro forzoso, entre otros privilegios, solo que estos no se extienden a todos los docentes.

[2] Consejo de Estado – sentencia del 19 de febrero de 2019 – C.P. Gustavo Eduardo Gómez Araguren – Rad. 25000232500020070061201 – Rad. Interna: 2302-2013

Sobre el particular el ordinal 2 literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 1989, dispone:

"Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]".

A su turno, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en su inciso 4 señala:

"*El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989,* ***y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.*** *El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial". (Negrillas del Juzgado).*

Por su parte, como se indicó, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 estableció que, a los docentes nacionales vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público. Mientras que, para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectuará de conformidad con el régimen prestacional del que han venido gozando en cada entidad territorial. En esos términos, el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional y, por ello, las disposiciones que regulan las pensiones son las contenidas en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Todo lo anterior, en armonía con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 que establece que el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, implica que los docentes pueden percibir la pensión de jubilación y el salario. Por consiguiente, están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en tanto que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Así mismo, la ley permite la compatibilidad de las pensiones gracia y ordinaria.

Así lo ratifica la Sección Segunda del Consejo de Estado[3], cuando frente al tema sostuvo lo siguiente:

"*Conclusión inequívoca de todo lo anterior es que la legislación positiva preserva incólume la compatibilidad entre pensión de jubilación y sueldo de los empleados docentes, inclusive para los pensionados con posterioridad la vigencia de la Lay 4ª de 1992 conforme lo ha estimado esta Corporación".*

En consecuencia, se concluye de manera general que, la posibilidad de erogar dos erogaciones con cargo al tesoro público, es exclusiva del sector docente, que acorde con las normas expuestos y bajo algunas salvedades, tienen la posibilidad de percibir la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario siempre que el docente no tenga la edad de retiro forzoso y tenga aptitud física y mental para ejercer el cargo.

[3] Consejo de Estado – Sección Segunda – sentencia del 20 de octubre de 2014 - Rad: 68001-23-31-000-2011-00276-01(4268-13) – C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EXCEPCIONES PREVIAS

- **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN O COBRO DE LO NO DEBIDO**

En consideración a que, la Entidad que represento no ha actuado con el fin de atentar en contra los derechos laborales de la demandante, por el contrario, los mismos se encuentran debidamente satisfechos y así como tampoco se han violado las disposiciones incoadas por la parte actora, no puede alegarse error o inaplicación de la ley, por lo que no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes teniendo en cuenta que no tiene derecho a la misma en razón a la fecha de vinculación y la perdida de continuidad de la relación laboral con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

- **LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO**

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el acápite de fundamentos de derecho, se ostenta la presunción de legalidad con la que cuentan todos los actos administrativos, pues la parte actora no demostró que dicha resolución carezca de dicha legalidad pues:

- Fue expedido por la autoridad competente
- Su expedición resuelve de manera particular una solicitud del docente
- Se ajusta a la ley
- Fue notificado de manera correcta a la persona interesada

DE LA CONDENA EN COSTAS

De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ha de remitir, el juzgador, a las disposiciones normativas del Código General del Proceso, para decidir sobre la imposición de condena en costas.

> ***ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS.*** *Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.*

Es así, como el artículo citado remite de manera expresa al Estatuto Procesal que será aplicable, el cual corresponde a la Ley 1564 de 2012.

> ***ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS****. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*
>
> *[…]*
>
> *8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. (Negrita y subrayado fuera del texto)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[…]

Así las cosas, el artículo 365 del Código General del Proceso, y la jurisprudencia aplicable al caso que en adelante se expondrá, establecen que las costas deben ser debidamente demostradas.

Entonces, de conformidad con las leyes citadas y lo actuado en el proceso, no procede la condena en costas, las cuales se integran por la agencias en derecho; además, no hay lugar a condena en costas cuando en el expediente se pruebe de manera objetiva su causación, en consecuencia y en ausencia de su comprobación no procede entonces la condena en costas por cuanto los argumentos de defensa de la parte demandante fueron eminentemente jurídicos, tal como se observa en el libelo del expediente del proceso recurrido.

El Consejo de Estado ha señalado de manera pacífica que la condena en costas no es objetiva, pues según la Sección Segunda de dicha Corporación, sostiene que se debe tener en cuenta la actuación de la parte que apodero; en ese sentido, sobre la actuación de FOMAG y la condena en costas en casos de solicitud de prestaciones económicas de los trabajadores del magisterio debemos recordar lo señalado por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

> *«En cuanto a las costas, debe reiterar la Sala lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artícul188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.*
>
> *En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada»*[4]

Es así como el pronunciamiento del Consejo de Estado, se demuestra que la condena en costas no es objetiva, sino que debe entonces el Juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto de sus actuaciones procesales. Como se evidencia en el expediente EL DESPACHO NO PRESENTÓ PRUEBAS O FUNDAMENTO ALGUNO sobre la ocurrencia de alguna actuación anómala por parte de la demandada la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG, que desvirtúa la presunción de buena fe.

Ante la falta del cumplimiento del requisito procesal para realizar la respectiva condena en costas, la misma no procede, pues en el curso del proceso se ha actuado de buena fe conforme a la jurisprudencia y los principios constitucionales.

[4] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia 0476 de 2017. M.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **GENERICA**

Solicito a su Señoría que, si en el transcurso del trámite procesal resultan probados hechos que configuren una excepción previa, sea declarada de oficio al momento de proferir fallo, tal y como lo prevé el numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

CASO CONCRETO

Con fundamento en la Jurisprudencia y Normatividad antes transcrita y teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante, y que la misma se vinculó como docente en propiedad a partir del año 2015, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la ya señalada Ley 812 de 2003, sus derechos pensionales son los del régimen de prima media con prestación definida señalados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Así las cosas, las pretensiones de la demanda tendientes al reconocimiento de una pensión por aportes según las previsiones de la Ley 71 de 1988 no están llamadas a prosperar, pues el FOMAG no es una entidad de previsión social como lo contempla la norma y, en todo caso, ella no es aplicable dada la fecha de vinculación de la actora en el sector docente oficial, que ubica su situación pensional bajo el régimen de la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PETICIONES

Al tenor de las excepciones anteriormente planteadas, comedidamente solicito a Ud., que previo el trámite correspondiente, se efectúen las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO. - Declarar probadas las excepciones propuestas.
SEGUNDO. - En consecuencia, dar por terminado el proceso.
TERCERO. - Si no ocurriere lo anterior, denegar las pretensiones de la demanda
CUARTO. - Abstenerse de condenar en costas a la entidad demandada.

MEDIOS DE PRUEBA

DOCUMENTALES

Las aportadas con la demanda

ANEXOS

- Poder especial debidamente constituido.
- Sustitución del antes referido poder.

NOTIFICACIONES

La entidad demandada recibe notificaciones en la Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10-03 Bogotá, y a los correos electrónicos: procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co, t_eorduz@fiduprevisora.com.co

Del señor(a) Magistrado,



JULIAN ERNESTO LUGO ROSERO
CC. No. 1.018.448.075 de Bogotá
T.P. No. 326.858 del C.S.J.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA